TRASLADO CONTESTACIÓN DE LA DEMANDA - EXCEPCIONES

FECHA: 14 DE DICIEMBFRE DE 2020.

HORA: 08: 00 AM.

MAGISTRADO PONENTE: *DR LUIS MIGUEL VILLALOBOS ALVAREZ.*
RADICACIÓN: *13-001-23-33-000-2019-00316-00.*
CLASE DE ACCIÓN: *REPARACION DIRECTA.*
DEMANDANTE: *ELOISA TORRES DE GONZALEZ.*
DEMANDADO: *NACION – MINISTERIO DEL INTERIOR Y OTROS.*
ESCRITO DE TRASLADO: *DE LA CONTESTACIÓN Y EXCEPCIONES DE LA DEMANDA, PRESENTADA POR LA PARTE DEMANDADA MINISTERIO DE DEFENSA; MINISTERIO DEL INTERIOR; NACION – MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL – EJERCITO NACIONAL; GOBERNACION DE BOLIVAR.*
OBJETO: *TRASLADO CONTESTACIÓN Y EXCEPCIONES*

La anterior contestación - excepciones de la demanda PRESENTADA POR LA PARTE DEMANDADA MINISTERIO DE DEFENSA; MINISTERIO DEL INTERIOR; NACION – MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL – EJERCITO NACIONAL; GOBERNACION DE BOLIVAR; Se le da traslado legal por el término de tres (3) días hábiles, de conformidad a lo establecido en el artículo 175 de la Ley 1437 de 2011, Hoy, Catorce (14) de Diciembre del Dos Mil Veinte (2020) a las 8:00 am.

EMPIEZA EL TRASLADO: Quince (15) DE DICIEMBRE DEL DOS MIL VEINTE (2020), A LAS 08:00 AM.

JUAN CARLOS GALVIS BARRIOS
SECRETARIO GENERAL

VENCE EL TRASLADO: Dieciocho (18) DE DICIEMBRE DEL DOS MIL VEINTE (2020), A LAS 05:00 PM.

JUAN CARLOS GALVIS BARRIOS
SECRETARIO GENERAL

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
POLICIA NACIONAL
SECRETARIA GENERAL
DEFENSA JUDICIAL SEDE BOLIVAR

TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DE BOLIVAR
SECRETARIA GENERAL
HOY 20 ENE 2020 SE RECIBE MEMORIAL X
EXPEDIENTE —CON— CUADERNO(S) Y 24 FOLIO(S).
CONSTACIA DE LA IMPOSIBILIDAD DE USAR EL MEDIO OFICIAL DE
RECIBIR A FALTA DE SISTEMA X LUZ INSUMO

Señores
TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DE BOLIVAR
Doctor
M.P LUIS MIGUEL VILLALOBOS.
E. S. D.

Ref.: **CONTESTACIÓN DEMANDA**
EXPEDIENTE No. 13001-23-33-000-**2019-00316**-00
ACTOR: ELOISA TORRES DE GONZALEZ Y OTROS.
DEMANDADO: NACIÓN - MIN DEFENSA - POLICÍA NACIONAL Y OTROS.
MEDIO DE CONTROL: REPARACIÓN DIRECTA

EDWIN ALEXANDER PATIÑO INFANTE, identificado como aparece al pie de mi correspondiente firma, portador de la tarjeta profesional No.294.368 del C. S. de la Judicatura, en mi condición de apoderado especial de la **NACIÓN-MINISTERIO DE DEFENSA-POLICÍA NACIONAL**, según poder que adjunto a la presente, otorgado por el Comandante de la Policía Metropolitana de Cartagena de Indias, señor Brigadier General **HENRY ARMANDO SANABRIA CELY;** dentro del término legal fijado por el artículo 172 del CPACA, en concordancia con los artículos 199 y 200 de la normatividad ibídem, me permito dar contestación a la demanda en el proceso de la referencia.

HECHOS FUNDAMENTO DE LAS PRETENSIONES

Respecto a los hechos, nos pronunciamos de la siguiente manera:

HECHOS GENERALES CONSTITUTIVOS DE LA IMPUTACION DE LA RESPONSABILIDAD:

El apoderado se limita a hacer apreciaciones conceptuales subjetivas del fenómeno de violencia en la región de los Montes de María, sin que explique su incidencia y efectos en los demandantes; abrigando la titulación del ítem referido, es decir que hace un recuento de sucesos en diferentes fechas y lugares sin que se aporte al proceso, investigaciones de carácter penal de tal connotación, en la que se encuentre definida la responsabilidad penal frente a una persona en particular o grupo al margen de la ley, le sea atribuible tal hecho. De igual forma no se desprende la relación de estas circunstancias fácticas con el presunto desaparecimiento forzado que aducen las víctimas, como quiera que no se evidencia la fecha y lugares de donde fueron desplazamientos y hechos narrados, le corresponde a la parte actora probar la conexidad que existe entre estos hechos y el desplazamiento. Le corresponde al extremo activo de la Litis probar lo que pretende en virtud del principio incumbiprobatio, que en nuestra legislación se encuentra consagrado en el Artículo 167 del C. G.P., el cual consagra la carga de la prueba de la siguiente manera: "**Le incumbe a las partes probar el supuesto de hecho de las normas que consagran el efecto jurídico que ellas persiguen (...)".**

COMPOSICION DE LOS NUCLEOS FAMILIARES DEMANDANTES:

Se observa además en el escrito de demanda, la identificación 11 grupos de familias presuntamente victimas del flagelo del desplazamiento, sin que se establezca la fundamentación fáctica y cronológica de cada caso en particular, a efectos de poder ser controvertidos.

DE LOS HECHOS VICTIMIZANTES:

DEL HECHO UNO AL TRES: No me consta que los señores Eloísa Torres de González, Trifon González Torres y sus hijos vivieran en una vivienda de su propiedad en el municipio de María la Baja como tampoco se tiene conocimiento de las relaciones personales, sociales y afectivas, en tal sentido me atengo a lo resuelto en el presente medio de control.

DEL HECHO CUATRO AL HECHO OCHO: No se tiene conocimiento de lo manifestado en el presente punto, con la demanda no se acompaña prueba que determine indiscutiblemente que los hechos se desarrollaron como los describe el libelista y que a su vez sean atribuibles al servicio de policía; corresponde al extremo activo de la litis probar lo que pretende en virtud del principio incumbiprobatio, que en nuestra legislación se encuentra consagrado en el Artículo 167 del C.G.P. el cual consagra la carga de la prueba de la siguiente manera: **"Le incumbe a las partes probar el supuesto de hecho de las normas que consagran el efecto jurídico que ellas persiguen (...)".**

DEL HECHO NUEVE AL HECHO VEINTIUNO: No me constan las circunstancias de tiempo, modo y lugar en que se produjeron las muertes de los señores GUATAVO GONZALEZ, VICENTE GONZALEZ TORRES y TRIFON GONZALEZ TORRES, presuntamente el día 24 de mayo de 1997, en el Municipio de María la Baja – Bolívar. Es de resaltar que con la demanda no fue aportada prueba que permita corroborarlo o sustentar lo depuesto, en tal sentido me atengo a lo resuelto en el presente medio de control. A hora téngase presente que según el mismo relato de los actores, las muertes fueron causadas por grupos al margen de la ley, acontecer que evidencia que a la Policía Nacional no se le puede imputar responsabilidad por las mismas, como quiera que no tuvo participación activa o pasiva en los hechos que las produjeron. No es menos cierto, que la circunstancia que las muertes fueren causadas por personas ajenas a la actividad que ejecuta esta entidad demandada, actualiza la causal de exoneración denominada Hecho Exclusivo y Determínate de un tercero, que impide efectuar un juicio de reproche.

DEL HECHO VEINTIDOS AL HECHO VEINTICUATRO: No me consta que la familia GONZALEZ TORRES, la reputación y admiración y asiento además que realizara una actividad laboral de agricultura pesca y ganadería en los Montes de María, jurisdicción del municipio María la Baja y Arjona, como tampoco que prestaran servicios fluviales con la demanda no se acompaña prueba de su presunta actividad laboral, razón por la cual deberá probarse.

DEL HECHO VEINTICINCO AL VEINTISEIS: No me constan las apreciaciones realizadas por la parte de mandante en estos hechos, por lo que me abstengo de hacer algún pronunciamiento. Corresponderá a la parte actora probarlo en los términos del artículo 167 del Código General del Proceso. "Incumbe a las partes probar el supuesto de hecho de las normas que consagran el efecto jurídico que ellas persiguen."(...) .

DEL HECHO VEINTISEITE AL HECHO TREINTA: No me consta que la señora Eloísa Torres y su compañero, donde ejercieran la actividad agropecuaria, además que abandonaran inmuebles cultivos, animales y bienes, además que generara ingresos en el equivalente a ($4.000.000) promedio mensuales, con la demanda no se aportaron pruebas de las cuales se pueda establecer efectivamente su actividad e ingresos, deberá probarlo la parte actora.

DEL HECHO TREINTA Y UNO AL HECHO TREINTA Y CUATRO: No me constan los presuntos padecimientos de los demandantes, con ocasión a la muerte de los señores GUATAVO GONZALEZ, VICENTE GONZALEZ TORRES y TRIFON GONZALEZ TORRES y que de ese dolor falleciera el señor TRIFON el día 9 de abril de 2017, deberá probarse. No existe al interior del proceso prueba de la cual se infiera lo dicho por el libelista.

DEL HECHO TREINTA Y CINCO AL HECHO TREINTA Y SEIS: No se tiene conocimiento sobre lo manifestado en el presente punto, me atengo a lo que resulte demostrado en el transcurrir del presente medio de control.

DEL HECHO TREINTA Y SIETE AL HECHO CINCUENTA: No me consta, El apoderado demandante hace una relación del núcleo familiar de TRIFON GONZALEZ TORRES mencionando una esposa, compañera e hijos, donde ejerciera la actividad de la ganadería agricultura y pescador, la cual generara ingresos en el equivalente a ($300.000) mensuales, además que gozaba de la reputación y admiración del Municipio de María la Baja anotando también presuntos padecimientos de los demandantes, con ocasión a la muerte de TRIFON GONZALEZ TORRES y que de ese dolor falleciera Eduard González Puello (hijo). Tampoco se tiene conocimiento que tenía hogar en María la Baja con Estela Puello Parra y en el Corregimiento de Correa con Naibis del Carmen Saldarriaga. De igual forma que tenía sembrado producción de cultivos, como tampoco se tiene conocimiento de los presuntos padecimientos de los demandantes.

Le corresponde al extremo activo de la Litis probar lo que pretende en virtud del principio incumbiprobatio, que en nuestra legislación se encuentra consagrado en el Artículo 167 del C. G.P., el cual consagra la carga de la prueba de la siguiente manera: ***"Le incumbe a las partes probar el supuesto de hecho de las normas que consagran el efecto jurídico que ellas persiguen (...)".***

DEL HECHO CIENCENTA Y UNO AL HECHO CINCUENTA Y OCHO: No me consta, El apoderado demandante hace una relación del núcleo familiar de CAMEN MARIA GONZALEZ TORRES (hermana) de los señores González Torres, Se desprende de este ítem la narración de diferentes hechos, de las cuales a mi prohijada no le constan las circunstancias de tiempo, modo y lugar en que se produjeron los mismos. Es de resaltar que con la demanda no fue aportada prueba que permita corroborarlo o sustentar lo depuesto. Se insiste que de las pruebas arrimadas con la demanda no se evidencia la existencia de los requisitos que exige la jurisprudencia del Honorable Consejo de Estado en relación a la responsabilidad del Estado por acción u omisión, por ello la afirmación, no tiene sustento probatorio y mucho menos jurídico.

DEL HECHO CINCUENTA Y NUEVE AL HECHO SESENTA Y SIETE: No me consta, El apoderado demandante hace una relación del núcleo familiar de LISANDRO GONZALEZ TORRES (hermano) de los señores González Torres, donde anuncia que era comerciante de cultivos de yuca, plátano y maíz, la cual generara ingresos en el equivalente a Dos Millones de pesos mensuales, también presuntos padecimientos de los demandantes, con ocasión a ello se acabó su hogar. De igual forma que tenía sembrado producción de cultivos, como tampoco se tiene conocimiento de los presuntos padecimientos de los demandantes. Le corresponde al extremo activo de la Litis probar lo que pretende en virtud del principio incumbiprobatio, que en nuestra legislación se encuentra consagrado en el Artículo 167 del C. G.P., el cual consagra la carga de la prueba de la siguiente manera: ***"Le incumbe a las partes probar el supuesto de hecho de las normas que consagran el efecto jurídico que ellas persiguen (...)".***

DEL HECHO SESENTA Y OCHO AL HECHO SETENTA Y SIETE: No me consta, El apoderado demandante hace una relación del núcleo familiar de EULALIA GONZALEZ DE VASQUEZ donde se limita el libelista a hacer apreciaciones subjetivas, por lo tanto me atengo de hacer algún pronunciamiento. Corresponderá a la parte actora probarlo en los términos del artículo 167 del Código General del Proceso. "Incumbe a las partes probar el supuesto de hecho de las normas que consagran el efecto jurídico que ellas persiguen."(...) .

DEL HECHO SETENTA Y OCHO AL HECHO OCHENTA Y SEIS: No me consta, El apoderado demandante hace una relación del núcleo familiar de CANDELARIA GONZALEZ TORRES (hermana) de los señores González Torres Se desprende de este ítem la narración de

diferentes hechos, de las cuales a mi prohijada no le constan las circunstancias de tiempo, modo y lugar en que se produjeron los mismos. Es de resaltar que con la demanda no fue aportada prueba que permita corroborarlo o sustentar lo depuesto. Se insiste que de las pruebas arrimadas con la demanda no se evidencia la existencia de los requisitos que exige la jurisprudencia del Honorable Consejo de Estado en relación a la responsabilidad del Estado por acción u omisión, por ello la afirmación, no tiene sustento probatorio y mucho menos jurídico.

DEL HECHO OCHENTA Y SIETE AL HECHO NOVENTA Y CUATRO: No me consta, El apoderado demandante hace una relación del núcleo familiar de ALEIDA MARIA GONZALEZ TORRES (hermana) de los señores González Torres No me consta el contexto factico en que describen los hechos expuestos en la demanda por lo que me abstengo de hacer algún pronunciamiento, por cuanto no se ha demostrado, Corresponderá a la parte actora probarlo en los términos del artículo 167 del Código General del Proceso. **"Incumbe a las partes probar el supuesto de hecho de las normas que consagran el efecto jurídico que ellas persiguen."(...) .**

DEL HECHO NOVENTA Y CINCO LA HECHO CIENTOTRES: No me consta, El apoderado demandante hace una relación del núcleo familiar de ALCIRA GONZALEZ al igual No me consta los perjuicios alegados por la parte demandante, como tampoco que se encuentren registrados en el registro único de población desplazada, es de resaltar que con la demanda no fue aportada prueba que permita corroborarlo o sustentar lo depuesto, en tal sentido me atengo a lo resuelto en el presente medio de control, máxime cuando no se aporta certificado a efectos de dar veracidad a la información anotada, en tal sentido me atengo a lo resuelto en el presente medio de control.

DEL HECHO CIENTO CUATRO AL HECHO CIENTO ONCE: No me consta El apoderado demandante hace una relación del núcleo familiar de JESUS GONZALEZ TORRES realizando una serie de apreciaciones de carácter general y subjetivo, razón por la cual deberá probarse. Así las cosas me abstengo de hacer algún pronunciamiento por cuanto no se ha demostrado la omisión de los deberes constitucionales de protección de la población, en lo que respecta a la Policía Nacional.

DEL HECHO CIENTO DOCE AL HECHO CIENTO VEINTE: No me consta El apoderado demandante hace una relación del núcleo familiar de VILMA RAFAELA GONZALEZ TORRES el libelista hace enuncia varios hechos de carácter general y subjetivo, No me consta los perjuicios alegados por la parte demandante, máxime cuando no se aporta certificado a efectos de dar veracidad a la información anotada razón por la cual deberá probarse. Así las cosas me abstengo de hacer algún pronunciamiento.

Es de resaltar que con la demanda no se acompaña prueba que determine indiscutiblemente que los hechos se desarrollaron como los describe el libelista y que a su vez sean atribuibles al servicio de policía; corresponde al extremo activo de la litis probar lo que pretende en virtud del principio incumbiprobatio, que en nuestra legislación se encuentra consagrado en el Artículo 167 del C. G.P., el cual consagra la carga de la prueba de la siguiente manera: **"Le incumbe a las partes probar el supuesto de hecho de las normas que consagran el efecto jurídico que ellas persiguen (...)".**

PRETENSIONES DE LA DEMANDA

Solicito que se despachen negativamente las pretensiones de la demanda, en razón de que todas estas constituyen meras apreciaciones subjetivas de la parte actora, además considero que no se estructuran en el sub-judice los presupuestos para responsabilizar Administrativamente a la entidad que represento ya que la actuación que dio origen al perjuicio cuyo resarcimiento se reclama no es administrativa ni vincula mucho menos el proceder de la Administración. Rechazo la solicitud de **PERJUICIOS POR EL HECHO DEL**

HOMICIDIO Y DESPLAZAMIENTO FORZADO para los demandantes, porque este de antemano no ha demostrado su calidad de desplazados ni la causación de este tipo de perjuicios.

Me opongo a la solicitud de perjuicios denominados "la afectación o vulneración relevante de bienes o derechos convencional y constitucionalmente amparados", los cuales proceden cuando se encuentre debidamente acreditados en el proceso y haya un pronunciamiento expreso de responsabilidad del Estado– situación que no se presenta en el presente caso – y se concretan principalmente en medidas de reparación integral de contenido no pecuniario.

El Consejo de Estado, en sentencias de fecha 15 de agosto y 18 de octubre de 2007 -rad. 2002-00004-01(AG) y 2001-00029-01(AG)- la Sección Tercera, abandonó el termino de daño en la vida en relación, cambiando su denominación y lo denominó "alteración grave a las condiciones de existencia", la cual se acredita respecto de las condiciones de existencia previas, con las características de ser graves, drásticas y extraordinarias. Posteriormente las providencias de 14 de septiembre de 2011 – rad. 19.031 y 38.222, sistematizaron la tipología de los daños inmateriales, así: i) perjuicio moral; ii) daño a la salud (perjuicio fisiológico o biológico), cuando se deriva de una lesión corporal y iii) daños a bienes constitucionales.

En sentencia de unificación fechada 28 de agosto de 2014, el Consejo de Estado determinó una nueva tipología de daño, denominada "la afectación o vulneración relevante de bienes o derechos convencional y constitucionalmente amparados": **"Procederá siempre y cuando, se encuentre acreditada dentro del proceso su concreción y se precise su reparación integral. Se privilegia la compensación a través de medidas reparatorias no indemnizatorias a favor de la víctima directa y a su núcleo familiar más cercano, esto es, cónyuge o compañero(a) y los parientes hasta el 1° de consanguinidad o civil, en atención a las relaciones de solidaridad y afecto que se da lugar a inferir la relación de parentesco. Debe entenderse comprendida la relación familiar biológica, la civil derivada de la adopción y aquellas denominadas "de crianza". Las medidas de reparación integral operarán teniendo en cuenta la relevancia del caso y la gravedad de los hechos, todo con el propósito de reconocer la dignidad de las víctimas, reprobar las violaciones a los derechos humanos y concretar la garantía de verdad, justicia, reparación, no repetición y las demás definidas por el derecho internacional. Para el efecto el juez, de manera oficiosa o a solicitud de parte, decretará las medidas que considere necesarias o coherentes con la magnitud de los hechos probados (Artículo 8.1 y 63.1 de la Convención Interamericana de Derechos Humanos)".** Inclusive el Consejo de Estado en dicha sentencia de unificación, ha sido enfático que no es procedente la doble indemnización del daño:**" (...) En aras de evitar una doble reparación, el juez deberá verificar ex ante: (a) que se trate de una vulneración o afectación relevante de un bien o derecho constitucional o convencional; (b) que sea antijurídica; (c) que en caso de ordenarse una indemnización excepcional, no esté comprendida dentro de los perjuicios materiales e inmateriales ya reconocidos, y (d) que las medidas de reparación sean correlativas, oportunas, pertinentes y adecuadas al daño generado".**

Igualmente me opongo a la solicitud de **PERJUICIOS MATERIALES** en la modalidad de **DAÑO EMERGENTE**, toda vez que no se encuentra demostrado que los actores con anterioridad a los hechos de la demanda, fueran dueños de bienes materiales, animales y cultivos, al momento del desplazamiento. Sumado a lo anterior no se ha demostrado las propiedades de los inmuebles que se afirma pertenece a los actores, pues para ello se requiere la copia tanto del título de título de tradición del dominio como de la inscripción de dichos bienes en la Oficina de Instrumentos Públicos, donde se encuentren registrados los mismos.

La propiedad sobre bienes inmuebles se acredita demostrando el título y el modo; el primero de ellos está constituido por cualquiera de las fuentes que constituyen las

obligaciones, mientras que el segundo lo será cualquiera de las formas que taxativamente ha precisado el legislador según lo dispuesto por el artículo 673 del Código Civil.
El artículo 756 del mismo ordenamiento jurídico dispone que "se efectuará la tradición del dominio de los bienes raíces por la inscripción del título en la Oficina de Registro de Instrumentos Públicos". En armonía con esta disposición, el artículo 2 del decreto 1250 de 1970, señala que están sujetos a registro todo "acto, contrato, providencia judicial, administrativa o arbitral que implique constitución, declaración, aclaración, adjudicación, modificación, limitación, gravamen, medida cautelar, traslación o extinción del dominio u otro derecho real principal o accesorio sobre bienes raíces, salvo la cesión del crédito hipotecario o prendario".

Queda claro, entonces, que la tradición de los derechos reales constituidos sobre bienes inmuebles se realiza mediante la inscripción del título en la oficina de registro de instrumentos públicos; es decir, la propiedad de un bien de esa naturaleza se acredita, entre otros, con la escritura pública de compraventa y con la inscripción de ésta en la oficina de instrumentos públicos del lugar del inmueble. Faltando cualquiera de estos dos elementos, se entenderá que la propiedad no se encuentra acreditada. Dicho de otro modo, una persona es propietaria de derechos reales cuando tiene título y modo, esto es, cuando acredita, entre otros, la escritura pública de compra venta y la inscripción en el registro inmobiliario. De tal manera los demandantes no aportaron el respectivo certificado de libertad y tradición de los bienes inmuebles de los cuales se aducen ser propietarios, y de los cuales se fundamentan las pretensiones indemnizatorias, por lo cual no ha demostrado su legitimidad en la causa por activa, al no probarse en debida forma la propiedad alegada.

Solicito también sean negado los **PERJUICIOS MORALES** derivados de los **HECHOS DE HOMICIDIOS** anotados en la demanda por estar inmersos en el fenómeno de la caducidad la cual será presentada como excepción en lo que respecta a este tipo de perjuicio. Por todo lo anteriormente expuesto, solicito respetuosamente a su señoría se nieguen las pretensiones de la demanda.

RAZONES DE DEFENSA

Mediante la presente demanda, se solicita que se declare a la Nación Colombiana-Ministerio del Interior- Departamento Administrativo de la Presidencia de la Republica-Ministerio de Defensa- Armada Nacional- Ejército Nacional - Policía Nacional y el Departamento de Bolívar, son administrativa y patrimonialmente responsable por los daños materiales e inmateriales causados por falla en el servicio con ocasión al asesinato de GUSTAVO GONZALEZ TORRES, VICENTE GONZALEZ TORRES, TIFON GONZALEZ TORRES y El Desplazamiento forzado según relato del demandante se presenta por amenazas en contra de sus vida por los grupos al margen de la ley.

En casos como el presente donde se discute la responsabilidad del Estado por omisión de protección, se analizan bajo el régimen de falla del servicio y no bajo el criterio de daño antijurídico, porque pese haber un daño antijurídico que podría atribuírsele al Estado, por el incumplimiento de su obligación general de proteger la vida, honra y bienes de todos los habitantes del territorio nacional, solo estará obligado a indemnizar si el hecho omisivo logra imputársele a título de falla del servicio.

En este orden de ideas, de acuerdo al acervo probatorio y las circunstancias fácticas descritas por el apoderado de la parte demandante, en lo que respecta a la institución Policial no le asiste responsabilidad administrativa por cuanto el hecho dañoso no provino de una actuación u omisión de la entidad convocada. No existe prueba que permita determinar que el desplazamiento forzado sufrido por el actor proviniera de un mal funcionamiento de la entidad accionada, notando que ello emana del actuar delincuencial de los grupos armados al margen de la ley (**AUTODEFENSAS UNIDAD DE**

COLOMBIA - AUC), configurándose así los presupuestos del eximente de responsabilidad patrimonial **HECHO EXCLUSIVO Y DETERMINANTE DE UN TERCERO.**

En el caso en concreto, se dan los presupuestos necesarios para que proceda admitir la configuración de este eximente de responsabilidad, cuales son:

- La **irresistibilidad,** como elemento de la causa extraña, la misma consiste en la imposibilidad del obligado a determinado comportamiento o actividad para desplegarlo o para llevarla a cabo; en otros términos, el daño debe resultar inevitable para que pueda sostenerse la ocurrencia de una causa extraña, teniendo en cuenta que lo irresistible o inevitable deben ser los efectos del fenómeno y no el fenómeno mismo, *"la imposibilidad de ejecución debe interpretarse de una manera humana y teniendo en cuenta todas las circunstancias: basta que la imposibilidad sea normalmente insuperable teniendo en cuenta las condiciones de la vida"*[1].

- La **exterioridad de la causa extraña,** es el rasgo característico que se basa en determinar que el hecho no puede ser imputable a la entidad demandada, teniendo en cuenta que la causa del daño lo originó un evento externo o exterior a su actividad. *"La exterioridad que se exige de la causa del daño para que pueda ser considerada extraña a la entidad demandada es una exterioridad jurídica, en el sentido de que ha de tratarse de un suceso o acaecimiento por el cual no tenga el deber jurídico de responder la accionada"*[2].

- La **imprevisibilidad,** suele entenderse como aquella circunstancia respecto de la cual *"no sea posible contemplar por anticipado su ocurrencia"*[3], entendido en el caso en que el agente causante del daño no le haya resultado imaginable el hecho. Se debe tener en cuenta que en cualquier caso, que se catalogue el hecho como imprevisible, se excluye la posibilidad de una concurrencia de culpas, por lo tanto culpa e imprevisibilidad, en un mismo supuesto fáctico, se excluyen tajantemente.

  Así pues, resulta mucho más razonable entender por imprevisible aquello que, pese a que pueda haber sido imaginado con anticipación, resulta súbito o repentino o aquello que no obstante la diligencia y cuidado que se tuvo para evitarlo, de todas maneras acaeció, con independencia de que hubiese sido mentalmente figurado, o no, previamente a su ocurrencia.

  Dada las condiciones de imprevisibilidad de la acción terrorista es evidente que las autoridades policiales y demás organismos de inteligencia no tuvieron la oportunidad de haber previsto los hechos, ni mucho menos de prepararse oportuna y adecuadamente para repelerlo, en el entendido que los hechos de desplazamiento forzado tratan de situaciones que escapan del control de las autoridades públicas, a quienes no se les puede exigir que cumplan con su deber de protección a la comunidad donde ejerce su jurisdicción cuando las circunstancias de modo, tiempo y lugar son en todo sentido imprevisibles e irresistibles.

- **Hecho de un tercero,** exonerará de responsabilidad a la administración sólo cuando sea causa exclusiva del daño, es decir, cuando éste se produzca sin ninguna relación con la actividad administrativa, tal como lo expresó el Consejero de Estado Hernán Andrade Rincón, en el salvamento de voto de la sentencia del 12 de marzo de 2015, en el proceso número 52001233100020010034101, demandante: Pablo Ancízar Cerón y otros, al afirmar que: *"Por ende, los daños que deben ser indemnizados por el Estado deben provenir de situaciones en donde se encuentre plenamente probado el nexo de causalidad existente*

---

[1] Nota original en la sentencia Citada: ROBERT, André, Les responsabilites, Bruselas, 1981, p. 1039, citado por TAMAYO JARAMILLO, Javier, Tratado de responsabilidad civil, cit., p. 19.

[2] Consejo de Estado, sentencia del 26 de marzo de 2008, Expediente No. 16.530.

[3] Nota original en la sentencia Citada: Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación Civil, sentencia del 20 noviembre de 1989, Jurisprudencia y Doctrina, tomo XIX, Bogotá, Legis, p. 8.

entre su propia acción u omisión en respuesta a una situación concreta y el daño que con dicha conducta se generó al administrado; así en todo caso los perjuicios originados por hechos de un tercero no tienen por qué ser asumidos por el Estado y, por tanto, no pueden ser fuente de responsabilidad estatal."

El Consejo de Estado y la Corte Constitucional, han dispuesto también en el tema relativo al desplazamiento forzado una serie de criterios que exoneran de responsabilidad a las entidades demandadas, así:

- En Sentencia del 12 de febrero de 2014[4], la sala plena resolvió el problema jurídico de declarar la responsabilidad del Estado, por los hechos acaecidos, el 04 de mayo de 1998 en el Municipio de Mapiripán, corregimiento de Puerto Alvira (Meta), donde un grupo paramilitar asesinó a más de 30 personas y desapareció otras 40 personas, lo que originó el desplazamiento de los demandantes en ese proceso. Se indicó por parte de esta Alta Corporación, que no existe una posición de garante institucional en abstracto, ya que el daño antijurídico debe estar siempre sustentado en el caudal probatorio que obra en cada caso en concreto, es decir la decisión judicial debe estar ceñida estrictamente al daño y la imputación jurídica fáctica probada dentro del proceso.

  Es de resaltar en este pronunciamiento que el Consejo de Estado, reconoce que el Estado tiene obligaciones positivas y deberes normativos, frente a la protección de derechos humanos de las víctimas del conflicto armado interno, pero que esto no debe ser motivo por si solo para tener que imputarse la responsabilidad al Estado sin el sustento probatorio suficiente.

- En sentencia del 21 de febrero de 2011[5] el Consejo de Estado confirmó la sentencia de primera instancia del 10 de febrero de 2005 de la Sala de Descongestión del Tribunal Administrativo del Meta, negando las pretensiones de la demanda y fallando a favor de la Policía Nacional, fundamentando su decisión en que no se encontró demostrada la materialidad del hecho causante del daño, tampoco se encontró material probatorio que acreditara que los demandantes fueron constreñidos por grupos al margen de la ley a abandonar sus propiedades y el lugar de su residencia en la Inspección La Cooperativa, en jurisdicción del municipio de Mapiripán (Meta), como consecuencia de la incursión armada del 28 de diciembre de 1999 por un grupo paramilitar.

  Adicionalmente esta providencia, menciona las condiciones por las cuales podría estar pasando la persona víctima del desplazamiento forzado, porque no todas las personas que avoquen esta condición estarían en estado de vulnerabilidad, exclusión o marginalidad[6].

  Entendida la **vulnerabilidad** como aquella situación que sin ser elegida por el individuo, le impide acceder a aquellas garantías mínimas que le permiten la realización de sus derechos económicos, sociales y culturales y, en este orden, la adopción de un proyecto de vida; la exclusión como la ruptura de los vínculos que unen a una persona a su comunidad de origen; y, la marginalidad como aquélla situación en la que se encuentra un individuo que hace parte de un nuevo escenario en el que no pertenece al grupo de beneficiarios directos de los intercambios regulares y del reconocimiento social.

- En Sentencia T-339/03, la Sala Séptima de Revisión de la Corte Constitucional denegó las pretensiones de la señora María de Jesús Guarín de Vásquez, en la Acción de Tutela que interpuso en contra de la Red de Solidaridad y el INCORA, al no encontrar acreditada la condición de desplazada de la accionante, debido a que las pruebas existentes no

[4] Radicado No. 50001231500020000015001 (Exp.32476), actor: Dagoberto Suárez Tovar y Otros. MP. Jaime Orlando Santofimio
[5] Radicación 50001233100020010017101 (31093), actor: Gustavo Mendoza Sanchéz y otros MP. Jaime Orlando Santofimio.
[6] Corte Constitucional, sentencia T-585 de 2006. Corte Interamericana de Derechos Humanos. Caso Masacre de Mapiripán contra Colombia, nota 8, párraf.175

demostraban ni su calidad de desplazada del predio, ni el incumplimiento de las autoridades. Según las pruebas solicitadas por la Alta Corporación y las que obraban en el proceso, no existió violación a los derechos fundamentales de la demandante, en atención a que las pretensiones de la demanda de tutela eran abiertamente contradictorias, de una parte, y de otra, permitían concluir que la actora abandonó por voluntad propia el lugar, sin la existencia de un elemento de coacción y sin presentarse algún incumplimiento por parte del Estado, como fue alegado.

Ahora, en cuanto a los daños sufridos por víctimas de hechos violentos cometidos por terceros, como es el caso bajo estudio, ha considerado el Honorable Consejo de Estado, que ellos son imputables al Estado cuando en la producción del hecho intervino la administración, a través de una acción u omisión constitutivas de falla del servicio, como en los eventos en los cuales el hecho se produce con la complicidad de miembros activos del Estado, o cuando la persona contra quien iba dirigido el acto había solicitado protección a las autoridades y éstas no se la brindaron, o porque en razón de las especiales circunstancias que se vivían en el momento, el hecho era previsible y no se realizó ninguna actuación dirigida a su protección.

En la Sentencia del CONSEJO DE ESTADO CONSEJERO PONENTE: ENRIQUE GIL BOTERO Bogotá D.C., treinta (30) de enero de dos mil trece (2013). Radicación: 05001-23-31-000-1996-01167-01 Expediente: 24.631 Demandante: Ángel David Holguín y otros Demandado: Ministerio de Defensa Nacional – Policía Nacional.

En la sentencia se cita al profesor Rivero de la siguiente manera: "*el juez para decidir, en cada caso, si hay o no falla del servicio, se pregunta aquello que podríamos, en cada caso, esperar del servicio, teniendo en cuenta la dificultad más o menos grande la misión, las circunstancias de tiempo (períodos de paz o momentos de crisis), de lugar, de recursos sobre los cuales disponía el servicio público en personal y material, etc. De lo anterior resulta que la noción de falla del servicio tiene un carácter relativo, pudiendo el mismo hecho, según las circunstancias, ser reputado de culposo o no culposo*"[7] Continúa la sala expresando que: "***Lo anterior ha sido denominado por la jurisprudencia del Consejo de Estado como "el principio de la relatividad de la falla en el servicio***"[8]. Principio este, que evita que la responsabilidad de la administración, cimentada en el título de imputación subjetivo o común –denominado "falla en el servicio"- torne las obligaciones del Estado, ya sean las derivadas de manera explícita de una norma constitucional, legal, o reglamentaria, o del principio establecido en el artículo 2° de la Constitución Política, en obligaciones de resultado. Sobre el particular se ha dicho[9]: *No obstante, cabe señalar que la Sala ha considerado que a pesar de que es deber del Estado brindar protección a todas las personas residentes en el país, no le son imputables todos los daños a la vida o a los bienes de las personas causados por terceros, porque las obligaciones del Estado son relativas*[10]*, en tanto limitadas por las capacidades que en cada caso concreto se establezcan, dado que "nadie está obligado a lo imposible"*[11]*. Aunque, se destaca que*

---

[7] Jean Rivero, Droit Administratif, Précis Dalloz, Paris, décima edición, 1983, p. 286 (Tomado de: "La noción de falla del servicio como violación de un contenido obligacional a cargo de una persona pública en el derecho colombiano y el derecho francés", HENAO Juan Carlos.

8 Sección Tercera, 3 de febrero de 2000, ponente: Hernández Enriquez, expediente 14787.

9 Consejera Ponente: RUTH STELLA CORREA PALACIO, Bogotá, D.C., veintisiete (27) de abril de dos mil once (2011), Radicación número: 17001-23-31-000-1995-05004-01 (20368)

[10] Precisión realizada por la Sala en providencia de 10 de agosto de 2000, exp. 11.585.

[11] Así, por ejemplo, en sentencia de 11 de octubre de 1990, exp. 5737, dijo la Sala "Es cierto que en los términos del artículo 16 de la Constitución Política las autoridades están instituidas para proteger a todas las personas residentes en Colombia, en su vida, honra y bienes y que a partir de este texto se fundamente la responsabilidad del Estado, pero también lo es que esa responsabilidad no resulta automáticamente declarada cada vez que una persona es afectada en tales bienes pues la determinación de la falla que se presente en el cumplimiento de tal obligación depende en cada caso de la apreciación a que llegue el juzgador acerca de las circunstancias de tiempo, modo y lugar, como se hubieren sucedido los hechos así como de los recursos con que contaba la administración para prestar el servicio, para que pueda deducir que la falla se presentó y que ella no tiene justificación alguna, todo dentro de la idea de que "nadie es obligado a lo imposible". Así lo ha reconocido en varias oportunidades esta Sala y al efecto puede citarse la sentencia del 7 de diciembre de 1.977 en donde dijo: "Hay responsabilidad en los casos en que la falta o falla administrativa es el resultado de omisiones actuaciones, extralimitaciones en los servicios que el Estado está en capacidad de prestar a los asociados, mas no en los casos en que la falta tiene su

esta misma Corporación en providencias posteriores ha aclarado que la relatividad de las obligaciones del Estado no excusa su incumplimiento, sino que debe indagarse en cada caso si en efecto fue imposible cumplir aquéllas que en relación con el caso concreto le correspondían[12].

Sigue la sala al respecto y trae a colación otro precedente[13], se dijo: "Desconocer tales circunstancias implicaría dejar de lado de la relatividad de la falla del servicio[14], es decir no tener en cuenta la conducta de la administración, en atención a las circunstancias de tiempo, modo, lugar, medios, personal e infraestructura del servicio...". "***La obligación sólo existe en la medida en que los servicios disponen de los medios para hacer frente al contenido obligacional. La amplitud de éste es proporcional a la importancia de los medios. En ausencia de medios, la administración no comete falta alguna***"[15], porque, precisamente, "la toma en cuenta de los medios del servicio lleva a una restricción de las obligaciones (y es) una condición de existencia de las mismas"[16]. En sentencia más reciente, el **Consejo de Estado de 14 de Mayo de 2014, Exp. 199712782**, consideró:"**que el hecho por el cual se demanda, no resulta imputable a la Policía Nacional, pues si bien los deberes de protección y vigilancia son irrenunciables y obligatorios para el Estado, esto no implica que fuera omnisciente ni omnipresente para efecto de advertir el ataque del que se derivan los perjuicios que alega el actor.**

Y Finalmente en la Sentencia de Unificación de la Corte Constitucional SU-254 de 2013, trae a colación la jurisprudencia del Consejo de Estado, referente a la falla de servicio por omisión, dada en la Sentencia SI 00004-01 de 2007 S3, Acción de Grupo por el desplazamiento del corregimiento de Filo Gringo: "*En relación con la responsabilidad del Estado por omisión, ha considerado la Sala que para la prosperidad de la demanda es necesario que se encuentren acreditados los siguientes requisitos:* ***a)*** *la existencia de una obligación legal o reglamentaria a cargo de la entidad demandada de realizar la acción con la cual se habrían evitado los perjuicios;* ***b)*** *la omisión de poner en funcionamiento los recursos de que se dispone para el adecuado cumplimiento del deber legal, atendidas las*

causa en la imposibilidad absoluta por parte de los entes estatales de prestar un determinado servicio". (Exp. N° 1564, Actor: Flota La Macarena, Anales, Segundo Semestre 1.977, pág. 605). Si bien es cierto que en esta materia el juez de la administración debe tener en cuenta que "la pobreza [del Estado] no lo excusa de sus obligaciones", ello no quiere decir que en cada caso concreto no deba tener en cuenta por ejemplo, las disponibilidades con que pueda disponer el ente demandado para cumplir con las funciones que le correspondan, como sería en eventos como de sub - lite, la consideración de la imposibilidad de tener fuerza policial disponible en forma más o menos permanente en cada una de las cuadras en que están divididas las avenidas, calles y carreras de una ciudad como Bogotá y con mayor razón cuando una parte importante de aquella tiene que ser destacada en un lugar donde se estén desarrollando desórdenes o tumultos. Con esto, naturalmente no se quiere significar que la apreciación del juez sobre las anotadas circunstancias de tiempo, modo y lugar deba ser benigna (por el contrario, debe ser rigurosa), pero sin olvidar la máxima expuesta acerca de la no obligatoriedad a lo imposible y teniendo siempre presente que dicha máxima jamás debería utilizarse para justificar una indefensión de la administración al deber de protección a la vida de los ciudadanos, valor fundamental de un Estado de Derecho".

[12] En sentencia de 14 de mayo de 1998, exp. 12.175, dijo la Sala: "...si bien es cierto esta corporación ha sostenido que dentro de la filosofía del Estado social de derecho no es posible responsabilizar al Estado Colombiano por todo tipo de falencias que las circunstancias de pobreza del país evidencian en multitud de casos "pues el juez tiene que ser consciente de la realidad social en que vive, y no dejarse deslumbrar por el universo que tienen las palabras o conceptos políticos o jurídicos", de allí no puede seguirse, como corolario obligado, que los daños que padecen los ciudadanos por vivir expuestos a situaciones de peligro permanente hayan de quedar siempre librados a la suerte de cada cual. En efecto, las implicaciones y el grado de compromiso que el Estado constitucional contemporáneo exige para todas las autoridades públicas supone un análisis de cada caso concreto en procura de indagar si la denominada falla del servicio relativa, libera a éstas de su eventual responsabilidad. Dicho en otros términos, no es aceptable que frente a situaciones concretas de peligro para los ciudadanos, estudiadas y diagnosticadas de vieja data, pueda invocarse una suerte de exoneración general por la tan socorrida, como real, deficiencia presupuestal".

[13] Consejero Ponente: Enrique Gil Botero, Bogotá, D.C., veintiocho (28) de abril de dos mil diez (2010), expediente: 17.172.

[14] El concepto fue esbozado y desarrollado por el profesor Jean Rivero en los siguientes términos: "El juez, para apreciarla [se alude a la falla del servicio], no se refiere a una norma abstracta; para decidir, en cada especie, si hay falta o no, él se pregunta, lo que en ese caso debía esperarse del servicio, teniendo en cuenta de la dificultad más o menos grande de su misión, de las circunstancias de tiempo (períodos de paz, o momentos de crisis), de lugar, de los recursos de que disponía el servicio en personal y en material, etc.
"De ello resulta que la noción de falla del servicio tiene un carácter relativo, pudiendo el mismo hecho, según las circunstancias, ser reputado como culposo o como no culposo." RIVERO, Jean, *Derecho Administrativo*, 1984, traducción de la 9ª edición, Caracas, pág. 304 y 305.

[15] C. Gour, Faute du service, precitado, n° 282.

[16] Laurent Richter, La faute du service..., precitado, p.49

circunstancias particulares del caso; ***c)*** *un daño antijurídico, y* ***d)*** *la relación causal entre la omisión y el daño. Frente a este último aspecto, la Sala, con apoyo en la doctrina, que a su vez se inspiró en la distinción realizada en el derecho penal entre delitos por omisión pura y de comisión por omisión, precisó* ***que en este tipo de eventos lo decisivo no es la existencia efectiva de una relación causal entre la omisión y el resultado, sino la omisión de la conducta debida, que de haberse realizado habría interrumpido el proceso causal impidiendo la producción de la lesión. De acuerdo con la jurisprudencia de la Sala, para que pueda considerarse que el Estado es responsable por omisión, en los eventos en los cuales se le imputa el daño por falta de protección, se requiere previo requerimiento a la autoridad, pero en relación a ese requerimiento no se exige ninguna formalidad, porque todo dependerá de las circunstancias particulares del caso. Es más, ni siquiera se precisa de un requerimiento previo cuando la situación de amenaza es conocida por dicha autorida****d.*" (Negrilla fuera de texto).

En este orden de ideas, debe tenerse en cuenta que si bien existe una protección por parte de la Policía Nacional de manera general, para toda la población y municipios del País, no se puede inferir la inminencia de un ataque, desplazamiento o cualquier acción de tal envergadura; pues ellas están supeditadas a los factores sorpresivos e impredecibles; en ese entendido, si bien los deberes del estado que son irrenunciables y obligatorios no significan que sea por principio omniscientes, omnipresentes ni omnipotente para que responda indefectiblemente y bajo toda circunstancia, bien sea dicho, " ***nadie está obligado a lo imposible***".

Es así como se puede observar, que tanto en materia disciplinaria como penal, ninguno de los miembros de la Policía Nacional que para la época se desempeñaban en los cargos de comando han sido investigados por los hechos en comento, contra ellos no pesa medida de aseguramiento, sindicación o sanción disciplinaria que los comprometa como autores, participes bien sea por acción o por omisión en el desplazamiento forzado de las hoy víctimas.

Pues en el ***sub examine***, las muertes de los señores González Torres y los hechos violentos que se causaron en el municipio de María la Baja del Departamento de Bolívar que dieron lugar al desplazamiento forzado de los hoy demandantes, fueron cometidos por terceros (miembros de las Autodefensa Unidas de Colombia - AUC), según el relato del demandante, por tal no deben ser imputables a la Policía Nacional, por cuanto en su producción no intervinieron miembros de la misma; así como tampoco está probado que el hecho se produjo con la complicidad de miembros del Estado; ni está demostrado que algún miembro de la comunidad hubiera solicitado protección a las autoridades y éstas no se la brindaron.

En lo concerniente a que la parte actora considera que los hechos eran previsibles; es de anotar que dadas las circunstancias de orden público en todo el territorio Nacional, en este caso particular, lo previsible se torna imprevisible, porque, la Fuerzas Pública no tenían la certeza del lugar exacto donde iba a atacar el enemigo, ya que la misma crisis de orden público no permitía saber con claridad que sector podía ser arremetido por los grupos ilegales; y tanto fue así, que fueron varios corregimientos o comunidades tomadas por la Guerrilla y las Autodefensas Unidas de Colombia, casi simultáneamente.

En síntesis, se puede afirmar que en el caso en concreto, hasta este estadio procesal no se evidencia prueba que acredite ninguno de los requisitos que exige la jurisprudencia del Honorable Consejo de Estado en relación a la responsabilidad del Estado por omisión, para conceder la reparación integral, como quiera que con la demanda no se aporta prueba que haya puesto en conocimiento previamente que existía un riesgo antes de los hechos que produjeron las muertes y el presunto desplazamiento forzado; y los hechos que lo originaron; circunstancias que tampoco es clara en la narración de los hechos de la demanda; lo cual no le deja al despacho ningún margen de interpretación en cuanto de

las causas o el hecho victimizaste por lo que se deben negar las pretensiones de la demanda.

PRUEBA DE LA CALIDAD DE DESPLAZADO

Encontramos que el artículo 60, parágrafo 2, de la Ley 1448 de 2011[17], define el desplazamiento forzado, así: ***"se entenderá que es víctima de desplazamiento forzado toda persona que se ha visto forzada a migrar dentro de territorio nacional, abandonando su localidad de residencia o actividades económicas habituales, porque su vida, su integridad física, su seguridad o libertas personales han sido vulneradas o se encuentran directamente amenazas con ocasión de violaciones a las que se refiere el artículo 3[18] de la presente Ley"***

En este sentido, es imperativo contar con la condición de víctimas de desplazamiento forzado, aspecto que tiene una regulación normativa definida por el legislador, esto implica que para conseguir u obtener este estatus, necesariamente debe cumplirse con los requisitos exigidos para el efecto y agotar el procedimiento pertinente donde la autoridad en uso de sus facultades legales, confiera esta condición a la persona interesada. Para lo cual existen dos mecanismos legales para que las personas puedan obtener el reconocimiento a la categoría de víctimas de desplazamiento forzado a saber:

1. El procedimiento establecido en la ley 387 de 1997 reglamentada por el Decreto 2569 de 2000, en el cual la persona interesada debe presentar declaración específicamente ante la autoridad, de modo, tiempo y lugar en que sucedieron los hechos que originaron su desplazamiento, indicando además los bienes, propiedades y su ubicación que tuvo que dejar abandonado a raíz del desplazamiento. Dicha declaración debería ser remitida a la Dirección de Derechos Humanos del Ministerio del Interior, para efectos de ser valorada y verificada determinándose la viabilidad o no de incluirse a la persona en el Registro Único de Población Desplazada, decisión que en caso de ser negada era susceptible de ser impugnada a través de los recursos de reposición y apelación contenidos en el Decreto 01 de 1984 C.C.A.

2.Por su parte, la Ley 1448 de 2011, establece un mecanismo similar al expuesto en el anterior numeral solamente diferenciándose en cuanto a la autoridad competente para administrar la base de datos para administrar el Registro Único de Víctimas, complementado por la circunstancia de señalar que si existían personas que habían realizado el procedimiento con base en lo establecido en la Ley 387 de 1997 y su decreto reglamentario, no era necesario efectuar nuevamente esta solicitud para evitar casos de re victimización.

Resumiendo, la declaración de desplazado y su reconocimiento, debe hacerse ante la Procuraduría General de la Nación, la Defensoría del Pueblo, las personerías municipales o distritales o cualquier despacho judicial, y a su vez solicitar que se remita para su inscripción a la Dirección General para los Derechos Humanos del Ministerio del Interior o a la oficina que ésta designe a nivel departamental, distrital o municipal copia de la declaración de los hechos de que trata el numeral anterior.[19]

En la declaración deberá presentarse por la persona interesada, dentro del año siguiente a la ocurrencia de los hechos que dieron origen al desplazamiento, además de ser clara y concisa, deberá contener:

- Hechos y circunstancias que han determinado su condición de desplazado.

[17] Por la cual se dictan medidas de atención, asistencia y reparación integral a las víctimas del conflicto armado interno y se dictan otras disposiciones.
[18] Víctimas. Se consideran víctimas, para los efectos de esta ley, aquellas personas que individual o colectivamente hayan sufrido un daño por hechos ocurridos a partir del 1° de enero de 1985, como consecuencia de infracciones al Derecho Internacional Humanitario o de violaciones graves y manifiestas a las normas internacionales de Derechos Humanos, ocurridas con ocasión del conflicto armado interno.
[19] Ibídem.

- Lugar del que se desplazó o al que se ha visto impelido desplazarse.
- profesión u oficio.
- Actividad económica que realizaba.
- Bienes y recursos patrimoniales que poseía antes del desplazamiento.
- Razones para escoger el lugar actual de asentamiento.

No obstante, la conclusión que se deriva como consecuencia del análisis de estos dos mecanismos legales para adquirir la condición de víctima, es que necesariamente la normatividad aplicable es clara en definir qué tal categoría no se obtiene por la sola inscripción en el registro, ya que como lo ha ratificado el Honorable Consejo de Estado en reiteradas jurisprudencias, es que la condición de víctima de desplazamiento, es una condición fáctica y no una calidad jurídica, es decir, que debe existir toda una valoración de las circunstancias de modo tiempo y lugar expuestas por el interesado que permitan establecer si efectivamente esta persona ha sufrido una serie de afectación que le han originado el abandono del lugar donde residía. Otra consideración que se desprende del estudio de los dos procedimientos legales antes relacionados, es que para ostentar la calidad de víctima necesariamente debe mediar un acto administrativo que acredite esta condición, el cual en caso de no atender favorablemente la solicitud de inscripción en el registro, es susceptibles de los recursos respectivos contenidos actualmente en la Ley 1437 de 2011 (C.P.C.A.).

NECESIDAD DE PROBAR LA CALIDAD DE DESPLAZADO PARA LA PROSPERIDAD DE LAS PRETENSIONES INDEMNIZATORIAS POR DESPLAZAMIENTO FORZADO

La Corte Constitucional decretó el estado de cosas inconstitucional en relación a los derechos de las personas en situación de desplazamiento en la sentencia T-025 de 2004, en reciente providencia de unificación SU-254 de 2013, el Alto tribunal resolvió acumular 40 acciones de tutela que solicitaban la indemnización por desplazamiento forzado con el fin de proteger el derecho a la reparación de quienes presentaron las tutelas y a todas las víctimas de desplazamiento. En esta decisión de la Corte desarrolla el derecho a la indemnización administrativa, como parte de las medidas de reparación que deben recibir las víctimas de desplazamiento forzado, para lo cual es necesario solicitar que se oficie a la Unidad para la Atención y Reparación Integral a las Víctimas, con el fin de verificar si los demandantes en estos casos, han sido indemnizados por vía administrativa.

Uno de los aspectos más relevantes de la sentencia SU-254 de 2013, es el término de caducidad para interponer nuevos procesos judiciales que se adelanten ante la jurisdicción contencioso administrativa, que sólo pueden computarse a partir de la ejecutoria del fallo en mención y no se pueden tener en cuenta transcursos de tiempo anteriores, en atención a su condición de sujetos de especial protección constitucional. Es importante resaltar, que aunque la sentencia interpone un nuevo término de caducidad, para el caso de desplazamiento forzado el daño debe ser probado y que aún cuente con la condición de desplazado, ya que una de sus características es que sea prolongado en el tiempo. Si bien el artículo 140 del C.P.A.C.A., establece que en los términos del artículo 90 de la Constitución Política, la persona interesada podrá demandar directamente la reparación del daño antijurídico, producido por acción u omisión de los agentes del Estado, debe tenerse en cuenta que los actores deben demostrar su interés para actuar en la causa, circunstancia que no se ha presentado hasta esta instancia procesal. En este aspecto es importante recordar que el Consejo de Estado ha sido enfático en afirmar que el daño para que pueda ser reparado debe ser cierto; esto es, no un daño genérico o hipotético sino uno específico, cierto: el que sufre una persona en su patrimonio. De modo que el daño es el primer elemento de la responsabilidad y de no estar presente torna inoficioso el estudio de la misma, por más que exista una falla del servicio. La razón de ser de esta lógica en simple: si una persona no ha sido dañada no tiene porqué ser favorecida con una condena que no correspondería sino que iría a enriquecerla sin justa causa. El daño es la causa de la

reparación, y la reparación es la finalidad última de la responsabilidad civil. Estudiarlo en primer término es dar prevalecía a lo esencial a la figura de la responsabilidad.

Al decir del tratadista JUAN CARLOS HENAO en su libro El daño: ***"no se trata de una necedad intelectual ni de un juego de palabras y conceptos. Se trata de tomar posición con respecto a la manera como se debe estudiar la responsabilidad civil: primero se ha de estudiar el daño, luego la imputación y, finalmente, la justificación del porqué se debe reparar, esto es, el fundamento. Si, como en el caso precitado se estudia en primer término la falla en el servicio, se trastoca la lógica misma de la responsabilidad civil porque es claro que aún sin aquella esta puede existir. Diferente ocurre con el daño: su ausencia – no la de la falla del servicio – implica la inexistencia de la responsabilidad. Es por ello que estudiar dicha falla en primer término supone dar trascendencia y merecida a la misma, que no es un elemento inmanente de la responsabilidad, como si lo es el daño. La prevalecida que se ha dado históricamente a la noción del falla en el servicio o de culpa en el derecho privado es la que en ocasiones ha impedido indemnizar ciertos daños, porque la indagación primera se hace hacia el autor del daño y no hacia la víctima del mismo".***

De tal manera, que lo importante en este proceso, que se pretende obtener la indemnización por el hecho ocurrido en el día 24 de mayo de 1997 que dio lugar al presunto desplazamiento de los hoy demandantes del municipio María la Baja del Departamento de Bolívar, es demostrar que con anterioridad a los hechos que dieron origen al desplazamiento, él era residente en dicho lugar y que por ello se vio obligado a abandonar la localidad. Por consiguiente la prueba del desplazamiento es diferente de la causa que dio origen al mismo, y la calidad de desplazado debe estar acreditada para cada demandante, por cuanto la condición de desplazado, es una situación fáctica no una calidad jurídica, que se pruebe con la inscripción en una lista oficial de desplazados o por el simple hecho de recibir ayuda humanitaria por parte del Estado.

Al respecto, se trae a colación la sentencia del Consejo de Estado, proferida dentro de la Acción de Grupo por la masacre de La Algabarra, de fecha Bogotá veintiséis (26) de dos mil seis (2006), Radicación número: 25000-23-26-000-2001-00213-01(AG), Actor: JESUS EMEL JAIME VACCA Y OTROS, Demandado: NACION-MINISTERIO DE DEFENSA Y OTROS.***"A este respecto, debe señalarse, en primer lugar, que el artículo 1 de la ley 387 de 1997, "por la cual se adoptan medidas para la prevención del desplazamiento forzado; la atención, protección, consolidación y estabilización socioeconómica de los desplazados internos por la violencia en la República", determina quién es desplazado. A propósito de esta definición, debe tenerse en cuenta la distinción que hace el Código Civil entre residencia y domicilio, la primera designa una situación fáctica: "es el lugar donde una persona, de hecho, habita", en tanto que el segundo es una situación jurídica "consiste en la residencia acompañada, real o presuntivamente del ánimo de permanecer en ella" (art. 76). El domicilio civil o vecindad se determina con referencia al "lugar donde un individuo está de asiento, o donde ejerce habitualmente su profesión u oficio". Para determinar cuál es el sitio donde una persona ejerce habitualmente su actividad económica, o constituye "el asiento principal de sus negocios", pueden tenerse en cuenta, como lo ha señalado la Corporación en asuntos de naturaleza tributaria: "la voluntad exteriorizada del sujeto pasivo de la obligación, apoyada en datos objetivos y elementos de juicio como la permanencia, la intencionalidad, el hecho de realizar su actividad económica en ese territorio, tener allí centralizada la gestión administrativa y la gestión de los negocios, y en general todos los aspectos que reflejan el domicilio económico y empresarial principal, que en ocasiones puede coincidir con el privado, en el cual la persona posee su vivienda, se halla domiciliada con su familia, etc.". De tal manera que sólo tendrán la calidad de desplazados, de acuerdo con la ley 387 de 1997 y las normas y desarrollos jurisprudenciales sobre los conceptos de residencia y actividad económica habitual, quienes demuestren que para el 29 de mayo de 1999 habitaban en el corregimiento de La Gabarra o desempeñaran allí de manera habitual y no meramente ocasional su actividad económica, y se vieron forzadas a migrar, como consecuencia de la incursión paramilitar que se produjo***

en ese municipio desde el 29 de mayo de 1999. En la demanda se suministraron los criterios para identificar al grupo de personas afectadas. Se afirmó en la misma que el grupo estaba integrado por las personas que para el 29 de mayo de 1999 tenían su domicilio o residencia en el corregimiento especial de La Gabarra, del municipio de Tibú, Norte de Santander y "que fueron compelidos a desplazarse forzadamente con ocasión de una cruenta incursión de un grupo ilegal armado, la que comenzó a ejecutarse en el adiado ya nombrado"

De acuerdo con la jurisprudencia del Consejo de Estado atrás anotada, que fue ratificada, por esa misma Corporación en la Acción de Grupo No. 0004-01 de 2007, por el Desplazamiento en el corregimiento de Filo Gringo, la condición de desplazado se adquiere o constituye a partir de un presupuesto fáctico: que es el hecho mismo del desplazamiento forzoso. Por ende, el listado de víctimas de desplazamiento forzado, es un requisito meramente declarativo, no constitutivo de la condición de víctima, en donde a través de un trámite de carácter administrativo se declara la condición de desplazado, a efectos que las víctimas puedan acceder a beneficios legales y los diferentes mecanismos de protección de derechos con carácter específico, prevalente y diferencial para esta clase de población.

Sobre el particular, se trae a colación, la determinado en sentencia SI 00213-01 de 2006 S3, Acción de grupo adelantada por el desplazamiento causado por la toma del corregimiento La Gabarra del municipio de Tibú, citada a su vez en la sentencia de unificación SU254-13 de la Corte Constitucional: ***"En cuanto al origen de la reparación de perjuicios dentro de la acción de grupo, ha aclarado el Consejo de Estado que ésta puede tener origen en la vulneración de derechos de cualquier naturaleza y no necesariamente de derechos colectivos. A este respecto, ha sostenido que la acción de grupo, cuando se entabla para obtener la indemnización por causa del desplazamiento forzado, se encuentra orientada "a obtener la indemnización de los perjuicios individuales que sufrieron los integrantes del grupo como consecuencia del desplazamiento a que fueron forzados por hechos imputables a la entidad demandada".[20] Así mismo, ha afirmado que en el caso del desplazamiento forzado y por tratarse de una acción indemnizatoria, la acción de grupo en estos eventos tiene una clara semejanza con la acción de reparación directa, en razón a que ambas se tramitan a través de procesos dirigidos a demostrar la responsabilidad a partir de los elementos estructuradores de la misma, tales como: la calidad que se predica de los miembros del grupo afectado y en cuya condición reclaman indemnización, la existencia del daño, su antijuridicidad, su proveniencia de una causa común y, por último, su imputabilidad al demandado.*** De acuerdo a lo anteriormente expuesto, con la demanda no se aporta ninguna prueba que los demandantes antes de la ocurrencia de los hechos que dieron motivo al desplazamiento forzado del Municipio de María la Baja – Departamento de Bolívar, fuera residente, así como tampoco de su calidad de desplazado.

PRUEBA PARA DECLARAR RESPONSABILIDAD.

En los términos del artículo 167 del Código General del Proceso, indica que: "***Incumbe a las partes probar el supuesto de hecho de las normas que consagran el efecto jurídico que ellas persiguen.***" Las decisiones judiciales encuentran su fundamento tanto en el marco legal como en las pruebas arrimadas al proceso, el medio de Control de Reparación Directa, está encaminado a declarar la responsabilidad del Estado frente a sus acciones u omisiones, situación que debe probarse plenamente dentro del proceso, por los distintos medios permitidos y legalmente allegados al expediente. La responsabilidad estatal no puede mirarse en un solo hecho de impartir una orden o un actuar, y cuando en su ejecución trae como consecuencia funesta para sus agentes o particulares, es indudable que los interesados tienen el deber legal de demostrar con meridiana claridad, cual fue la acción u omisión en que se basa la responsabilidad que se le imputa, no basta en hacer

[20] Sentencia SI 00213-01 de 2006 S3, Acción de grupo adelantada por el desplazamiento causado por la toma del corregimiento La Gabarra del municipio de Tibú.

meras anunciaciones o pronunciamientos al respecto, si no aportar los elementos probatorios necesarios para establecer la responsabilidad de la demandada.

EXCEPCIONES

1. CADUCIDAD DE LA ACCIÓN FRENTE A LAS MUERTES

El artículo 164 literal i) del C.P.A.C.A., que a la letra dice: ***"Cuando se pretenda la reparación directa, la demanda deberá presentarse dentro del término de dos (02) años, contados a partir de la ocurrencia de la acción u omisión causante del daño, o de cuando el demandante tuvo o debió tener conocimiento del mismo si fue en fecha posterior y siempre que se pruebe la imposibilidad de haberlo conocido en la fecha de su ocurrencia"***. El accionante manifiesta que el día 24 de mayo de 1997 un grupo de paramilitares acabaron con la vida de los señores GUSTAVO GONZALEZ, VICENTE GONZALEZ TORRES Y TRIFON GONZALEZ TORRES, en el municipio de María la Baja – Bolívar, así las cosas el termino para interponer el medio de control de Reparación Directa para la búsqueda del reconocimiento y pago de perjuicios por dichas muertes inicio a contabilizarse a partir del día 24 de mayo de 1997. Dicho lo anterior, y como quiera que la demanda fue presentada el día 17 de junio de 2019, es claro que el fenómeno de la caducidad de la acción opero en el presente asunto, pues ha trascurrido el termino de 21 años desde el acaecimiento de las muertes y la presentación de la demandan. En atención de lo antes mencionado, el medio de control impetrado por estos hechos se encuentra afectado por el fenómeno de caducidad y por haberse presentado por fuera del término establecido por ley.

2. HECHO DE UN TERCERO

El suscrito apoderado hace consistir esta excepción en una Acción Exclusiva y Determinante de Grupos al margen de la Ley, toda vez que el hecho que generó las muertes de los señores GUSTAVO GONZALEZ, VICENTE GONZALEZ TORRES Y TRIFON GONZALEZ TORRES y el presunto desplazamiento forzado de los hoy demandantes bcuando vivían en el Municipio de María la Baja – Departamento de Bolívar para el 24 de mayo de 1997; según el propio relato de la demanda, fue realizado por los grupo al margen de la Ley denominados **(AUTODEFENSAS UNIDAD DE COLOMBIA - AUC)**, que de comprobarse generaría una causal de exoneración de la responsabilidad de la Institución que represento.

3. FALTA DE LEGITIMACIÓN EN LA CAUSA POR PASIVA.

Por cuanto las actuaciones que originaron la presente acción no fueron ejecutadas por la Institución que represento y por tal consideración no se ve comprometida la responsabilidad de la Nación – Ministerio de Defensa – Policía Nacional. En el caso concreto, para nuestra Institución, no está dada la responsabilidad objetiva, y mucho menos subjetiva, en los hechos que aquí se demandan, toda vez que no existió en ningún momento falla en el servicio, hecho u operación administrativa, que diera lugar a las muertes de los señores GUSTAVO GONZALEZ, VICENTE GONZALEZ TORRES Y TRIFON GONZALEZ TORRES y el desplazamiento forzado de los demandantes para el día 24 de mayo de 1997.

PRUEBAS

DOCUMENTALES QUE SE REQUIERE SE ANEXEN:

A) A la Registraduria Nacional del Estado Civil, ubicada en la ciudad de Bogotá, Av. Calle 26 # 51-50- CAN, para que alleguen al proceso Registro Civil de Nacimiento de los accionantes de este proceso y en el evento que reporte como fallecido

remitir el respectivo Registro Civil de Defunción. Lo anterior se requiere con el objeto de evitar que se repitan situaciones como las que actualmente se presentan con la demanda fallada por la Corte Interamericana de Derechos Humanos, caso bien conocido como "MASACRE DE MAPIRIPAN", en donde algunas de las personas que figuran como victimas dentro del proceso, fallecieron con anterioridad a la ocurrencia de los hechos o no pertenecen a ese grupo de afectados, es decir, el número de víctimas es muy inferior al que se registra en la respectiva demanda.

B) A la Superintendencia de Notariado y Registro, ubicada en la Calle 26 No. 13 de la ciudad de Bogotá, para que certifique si a nombre de los accionantes, figuran registros de inmuebles a su nombre con anterioridad al día 24 de mayo de 1997. Lo anterior tiene la finalidad de verificar si el demandante, era propietario de viviendas o de bienes inmuebles en el Municipio de María a Baja – Depto. de Bolívar, acontecer que daría indicio que habitaba en el corregimiento de donde manifiesta fue desplazado forzosamente.

C) Que se Oficie a la Personería del Municipio de María la Baja – Depto. Bolívar, ubicado en el casco urbano de dicha municipalidad, para que certifique si tiene un listado de desplazados en esa jurisdicción para el año 1997, más concretamente del municipio María la Baja. En caso positivo, enviar la lista de desplazados por tales hechos.

D) Que se oficie al archivo de la Policía Nacional – Departamento de Policía Bolívar para que con destino a este proceso remita copia de todos los antecedentes policivos, como informes, minutas, órdenes de operaciones policiales, poligramas Etc. en ocasión a las muertes de los señores GUSTAVO GONZALEZ, VICENTE GONZALEZ TORRES Y TRIFON GONZALEZ TORRES, causadas el día 24 de mayo de 1997 en el Municipio de María la Baja -Bolívar y por el desplazamiento forzado sufrido por los demandantes, por parte del Grupo al Margen de la Ley (AUC), cuando vivía en el Municipio de María la Baja - Departamento de Bolívar, lo anterior tiene como objeto determinar la existencia del hecho y la participación de la Policía Nacional en el mismo.

E) Que se oficie a la Fiscalía General de La Nación seccional Bolívar para que con destino a este proceso y bajo los apremios legales, remitan copia de la Investigación Penal que se adelantó por las muertes de los señores GUSTAVO GONZALEZ, VICENTE GONZALEZ TORRES Y TRIFON GONZALEZ TORRES, causadas el día 24 de mayo de 1997 en el Municipio de María la Baja -Bolívar y por el desplazamiento forzado sufrido por los demandantes, por parte del Grupo al Margen de la Ley (AUC), cuando vivían en el Municipio de María la Baja - Departamento de Bolívar, lo anterior tiene como objeto determinar la existencia del hecho y la participación de la Policía Nacional en el mismo.

ANEXOS

1. Poder otorgado para el asunto.
2. Fotocopia resolución No. 2052 del 27 de mayo de 2007.
3. Fotocopia Decreto 065 del 21 de enero de 2019.

DOMICILIO Y NOTIFICACIONES

La parte demandada y su representante legal tienen su domicilio en la ciudad de Bogotá D.C. en la trasversal 45 N° 40-11 CAN edificio Policía Nacional y en la Av. el dorado Cra. 54 Can edificio Ministerio de Defensa. El delegado por el señor Ministro de Defensa para notificarse de esta clase de demandas y otorgar el correspondiente poder es el comandante de la Policía de la metropolitana de Cartagena de indias, según las

competencias otorgadas por la resolución 2052, quien tiene su domicilio en el comando de dicha fuerza en la carrera 7ª Nº 23-96, de esta ciudad. El apoderado de la Policía Nacional en la secretaria de ese honorable despacho.

Igualmente se recibirán notificaciones electrónicas en la siguiente dirección: debol.notificacion@policia.gov.co

Atentamente

EDWIN ALEXANDER PATIÑO INFANTE
Apoderado Policía Nacional
C. C. No.1.039.685.230 de Puerto Berrio/ Antioquia
T. P. No.294.368 del C. S. de la Judicatura

I. Otorgamiento de Poder.

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
POLICIA NACIONAL
SECRETARIA GENERAL
DEFENSA JUDICIAL SEDE BOLIVAR

Doctor:
M.P LUIS MIGUEL VILLALOBOS ALVAREZ
TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DE BOLIVAR
E. S. D.

REF.: OTORGAMIENTO DE PODER
EXPEDIENTE No. 13-001-23-33-000-**2019-00316**-00
ACTOR: ELOISA TORRES DE GONZALEZ Y OTROS.
DEMANDADO: NACIÓN – MIN DEFENSA – POLICÍA NACIONAL.
MEDIO DE CONTROL: REPARACIÓN DIRECTA.

HENRY ARMANDO SANABRIA CELY, persona mayor de edad, domiciliado y residente en la Ciudad de Cartagena, Departamento de Bolívar, identificado con la cédula de ciudadanía No. 79´612.268 expedida en Bogotá. en mi calidad de representante Judicial y Administrativo Delegado, como Comandante de la Policía Metropolitana de Cartagena de Indias, de conformidad con el Decreto No 065 del 21 de enero de 2019, emanado de la Presidencia de la República de Colombia y facultado por la Resolución No. 2052 del 29 de mayo de 2007, por medio del presente escrito manifiesto al señor Juez, que confiero **PODER ESPECIAL AMPLIO Y SUFICIENTE** al abogado **EDWIN ALEXANDER PATIÑO INFANTE,** identificado con cédula de ciudadanía No. 1.039´685.230 de Puerto Berrio /Antioquia y tarjeta profesional 294.368 del Consejo Superior de la Judicatura, para que como apoderado de la **NACIÓN-MINISTERIO DE DEFENSA-POLICÍA NACIONAL**, atienda y lleve este proceso hasta su culminación, de conformidad y para los efectos del Artículo 160 del C.P.A.C.A.

El apoderado queda facultado para ejercer todas las actuaciones necesarias para la defensa de los intereses de la Nación, conciliar total o parcialmente las pretensiones de la demanda de acuerdo con los parámetros del Comité de Conciliación y de Defensa Judicial del Ministerio de Defensa y la Policía Nacional, así mismo **SUSTITUIR Y REASUMIR** el presente poder.

Sírvase reconocer personaría en los términos para los efectos señalados en la Ley.

Atentamente;

Brigadier general **HENRY ARMANDO SANABRIA CELY**
Comandante Policía Metropolitana de Cartagena de Indias
C.C. No. 79´612.268 de Bogotá.

JUZGADO 111 DE INSTRUCCION PENAL MILITAR
Presentado personalmente por su signatario, Henry Armando Sanabria
79.612.768 quien se identificó por su C. C. Nº
Expedida en Bogotá D.C.
Cartagena 20 de 2019
El Secretario

Acepto

EDWIN ALEXANDER PATIÑO INFANTE
C.C. Nº 1.039´685.230 de Puerto Berrio /Antioquia
T.P. 294.368 del C.S. de la J

Barrió Manga, Calle Real Nro.24-03
mecar.grune@policia.gov.co

INSPIRADOS EN USTED

No. GP 135 – 1 No. SC 6545 – 1 SA-CER131464 No. CO – SC 6545 – 1

20
7216

REPÚBLICA DE COLOMBIA

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL

RESOLUCION NÚMERO 2052 DE 2007

(29 MAYO 2007)

"Por la cual se adiciona el artículo 2 de la Resolución No. 3969 del 30 de noviembre de 2006".

EL MINISTRO DE DEFENSA NACIONAL

En uso de sus facultades constitucionales y legales y en particular las conferidas por el artículo 211 de la Constitución Política, los artículos 9 de la Ley 489 de 1998, 8 numeral 2 del Decreto 1512 de 2000, 1 del Decreto 049 de 2003, 23 de la Ley 446 de 1998, 149 del Código Contencioso Administrativo y 64 del Código de Procedimiento Civil, y

CONSIDERANDO:

Que mediante el articulo 2 de la Resolución No. 3969 del 30 de noviembre de 2006, se delegó la función de notificarse de las demandas, acciones de tutela, acciones populares, acciones de grupo y de cumplimiento que contra la Nación – Ministerio de Defensa – Policía Nacional, cursen en los Tribunales o Juzgados del país, así como la de notificarse de las demandas en la jurisdicción ordinaria (asuntos civiles, penales y laborales) y procesos que cursen ante las diferentes autoridades administrativas; en los Comandantes de las Policías Metropolitanas y de Departamentos de Policía.

Que el Decreto 4222 del 23 de noviembre de 2006 "Por el cual se modifica parcialmente la estructura del Ministerio de Defensa Nacional y se dictan otras disposiciones", en su artículo 2 numeral 8 facultó al Director General de la Policía Nacional de Colombia, para expedir las resoluciones, manuales y demás actos administrativos necesarios para administrar la Policía Nacional en todo el territorio nacional.

Que, mediante Resolución No. 00916 del 27 de marzo de 2007, el Director General de la Policía Nacional de Colombia, creó la Policía Metropolitana de Cartagena de Indias, con la misión de contribuir a la satisfacción de las necesidades de seguridad y tranquilidad públicas, mediante un efectivo servicio, fundamentado en la prevención, investigación y control de delitos y contravenciones, generando una cultura de solidaridad que permita el mantenimiento de las condiciones necesarias para que los habitantes dentro de la jurisdicción de esta unidad, puedan ejercer sus derechos y libertades públicas.

081475

REPÚBLICA DE COLOMBIA

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL

DECRETO NÚMERO 065 DE 2019

21 ENE 2019

Por el cual se traslada a unos Oficiales Generales de la Policía Nacional

EL PRESIDENTE DE LA REPÚBLICA DE COLOMBIA

En ejercicio de sus facultades constitucionales y legales, en especial la que le confiere el artículo 42 numeral 1, literal a) del Decreto Ley 1791 de 2000,

D E C R E T A:

Artículo 1. Trasládese a los Oficiales Generales de la Policía Nacional que se relacionan a continuación, a partir de la comunicación del presente acto administrativo, a las unidades que en cada caso se indica, así:

Mayor General MORENO MALDONADO GUSTAVO ALBERTO, identificado con la cédula de ciudadanía No. 10.115.494, de la Dirección de Carabineros y Seguridad Rural a la Subdirección General, como Subdirector General.

Mayor General SALAMANCA RAMÍREZ WILLIAM RENE, identificado con la cédula de ciudadanía No. 6.770.835, de la Dirección de Tránsito y Transporte a la Dirección de Seguridad Ciudadana, como Director.

Mayor General VARGAS VALENCIA JORGE LUIS, identificado con la cédula de ciudadanía No. 79.242.018, de la Dirección de Investigación Criminal e INTERPOL a la Inspección General, como Inspector General.

Mayor General PICO MALAVER ALVARO, identificado con la cédula de ciudadanía No. 91.239.653, de la Subdirección General - Unidad Policial para la Edificación de la Paz a la Dirección de Talento Humano, como Director.

Brigadier General LONDOÑO PORTELA GONZALO RICARDO, identificado con la cédula de ciudadanía No. 79.421.689, de la Dirección Nacional de Escuelas a la Dirección de Investigación Criminal e INTERPOL, como Director.

Brigadier General RODRIGUEZ CORTES CARLOS ERNESTO, identificado con la cédula de ciudadanía No. 3.055.540, de la Región de Policía No. 6 a la Dirección de Tránsito y Transporte, como Director.

Brigadier General LOPEZ CRUZ FABIO HERNAN, identificado con la cédula de ciudadanía No. 11.313.701, de la Región de Policía No. 4 a la Dirección de Carabineros y Seguridad Rural, como Director.

Brigadier General CASTRILLON LARA RAMIRO, identificado con la cédula de ciudadanía No. 12.121.870, de la Región de Policía No. 7 a la Región de Policía No. 5, como Comandante.

Brigadier General CARDENAS LEONEL FABIAN LAURENCE, identificado con la cédula de ciudadanía No. 93.375.319, de la Dirección Antinarcóticos a la Región de Policía No. 4, como Comandante.

Brigadier General GONZALEZ BEDOYA JULIO CESAR, identificado con la cédula de ciudadanía No. 79.464.114, de la Dirección de Protección y Servicios Especiales a la Región de Policía No. 7, como Comandante.

Vo.Bo. COORDINADORA GRUPO NEGOCIOS GENERALES
Revisó: ABOGADO GRUPO NEGOCIOS GENERALES

Vo.Bo.: SECRETARIO GENERAL(E)
Vo.Bo.: DIRECTORA ASUNTOS LEGALES (E)

23
1279

Continuación del Decreto. "Por el cual se traslada a unos Oficiales Generales de la Policía Nacional". Encabeza el señor Mayor General MORENO MALDONADO GUSTAVO ALBERTO y otros.

Brigadier General POVEDA ZAPATA LUIS HUMBERTO, identificado con la cédula de ciudadanía No. 10.126.291, de la Policía Metropolitana de Cartagena de Indias a la Dirección de Protección y Servicios Especiales, como Director.

Brigadier General LIBREROS MORALES JUAN ALBERTO, identificado con la cédula de ciudadanía No. 75.055.473, de la Región de Policía No. 5 a la Dirección Nacional de Escuelas, como Director.

Brigadier General GOMEZ HEREDIA OSCAR ANTONIO, identificado con la cédula de ciudadanía No. 74.280.384, de la Policía Metropolitana del Valle de Aburrá a la Región de Policía No. 6, como Comandante.

Brigadier General TIBADUIZA NIÑO FREDY ALBERTO, identificado con la cédula de ciudadanía No. 7.224.552, de la Región de Policía No. 4 - Comando Especial Pacifico Sur a la Región de Policía No. 3, como Comandante.

Brigadier General SANABRIA CELY HENRY ARMANDO, identificado con la cédula de ciudadanía No. 79.612.268, de la Dirección de Sanidad a la Policía Metropolitana de Cartagena de Indias, como Comandante.

Brigadier General CAMACHO JIMENEZ ELIECER, identificado con la cédula de ciudadanía No. 11.435.109, de la Región de Policía No. 1 a la Policía Metropolitana del Valle de Aburrá, como Comandante.

Brigadier General KURE PARRA JULIETTE GIOMAR, identificada con la cédula de ciudadanía No. 39.566.177, de la Escuela de Cadetes de Policía "General Francisco de Paula Santander" a la Dirección de Sanidad, como Directora.

Brigadier General ALARCON CAMPOS RICARDO AUGUSTO, identificado con la cédula de ciudadanía No. 79.347.684, de la Policía Metropolitana de Bogotá a la Región de Policía No. 4 - Comando Especial Pacifico Sur.

Artículo 2. Por intermedio de la Dirección de Talento Humano de la Policía Nacional comunicar el presente acto administrativo.

Artículo 3. El presente Decreto rige a partir de la fecha de su expedición. 21 ENE 2019

COMUNÍQUESE Y CÚMPLASE.
Dado en Bogotá D.C., a los,

EL MINISTRO DE DEFENSA NACIONAL,

GUILLERMO BOTERO NIETO

Vo.Bo. COORDINADORA GRUPO NEGOCIOS GENERALES
Revisó: ABOGADO GRUPO NEGOCIOS GENERALES

Vo.Bo.: SECRETARIO GENERAL(E)
Vo.Bo.: DIRECTORA ASUNTOS LEGALES (E)

24
7220

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
POLICÍA NACIONAL
DEPARTAMENTO DE POLICIA BOLIVAR
UNIDAD DE DEFENSA JUDICIAL DEBOL

ACREDITADO ONAC
ORGANISMO NACIONAL DE ACREDITACIÓN DE COLOMBIA
CEA-4.1 - 10 V-01
16-ECD-003

COAGE - UNDEJ - 3.1

Cartagena, 16 de enero de 2020

Intendente Jefe
JOSE LUIS NIETO OROZCO
Responsable Archivo
Manzana 3 Lote 49 Urbanización Bajo Miranda
Turbaco

Demandante	ELOISA TORRES DE GONZALEZ Y OTROS
Medio de Control	REPARACION DIRECTA
N° Radicado	13001-3333-000-**2019-00316**-00
Demandado	NACION- MIN.DEFENSA- POLICIA NACIONAL

Asunto: solicitud antecedentes para ser aportado a proceso judicial.

De manera atenta solicito al señor Intendente Jefe, su valiosa colaboración el sentido de ordenar a quien corresponda, enviar con destino a esta Unidad de Defensa Judicial, todos los antecedentes *(copia de libros, poligramas informes etc.)* relacionados con los hechos que más adelante se relacionan así:

RESUMEN HECHOS: *el día 24 de mayo de 1997, siendo las 10 de la noche cuando un grupo de 30 hombres fuertemente armados, (paramilitares), llegaron a la casa de SU hijo VICENTE GONZALEZ TORRES, donde funcionaba una cantina familiar, y procedieron a golpearlo y a amenazarlo Que seguido de esto llegaron hasta la vivienda de su otro hijo Gustavo GONZALEZ, a quien golpearon y le destruyeron un motor fuera de borda que se encontraba en la sala de la vivienda, amenazándolo con matarlo que otra parte del grupo armado se dirigió a la casa de TRIPÓN GONZALEZ, procedieron a llevárselos amarrados y en un sector apartado y los asesinaron.*

Lo anterior se requiere en el menor tiempo posible para que obre como prueba documental dentro del proceso en referencia que cursa contra la Policía Nacional en el Tribunal Administrativo de Bolívar.

Atentamente,

FIRMA DIGITAL

Firmado digitalmente por:
Nombre: Mauricio Guerrero Pautt
Grado: Capitan
Cargo: Jefe Unidad Defensa Judicial
Cédula: 1128047900
Dependencia: Unidad De Defensa Judicial Debol
Unidad: Departamento De Policia Bolivar
Correo: mauricio.guerrero1205@correo.policia.gov.co
16/01/2020 17:39:50

Anexo: No

Calle Real 24 - 03 Barrio Manga
Teléfono: (5) 6609119 ext. 2031
mecar.grune@policia.gov.co
www.policia.gov.co

INFORMACIÓN PÚBLICA

7227

El futuro es de todos | Mininterior

TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DE BOLIVAR
SECRETARIA GENERAL
HOY 21 ENE 2020 SE RECIBE MEMORIAL X
EXPEDIENTE CON CUADERNO(S) Y 21 FOLIO(S).
CONSTACIA DE LA IMPOSIBILIDAD DE USAR EL MEDIO OFICIAL DE
RECIBIR A FALTA DE SISTEMA X LUZ INSUMO 921MM.

Al responder cite este número:
OFI19-57685-OAJ-1400

Bogotá D.C. martes, 31 de diciembre de 2019

Doctor
LUIS MIGUEL VILLALOBOS ALVAREZ
Magistrado Ponente
TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DE BOLIVAR
Centro Avenida Venezuela, calle 33 No. 8-25 Edificio Nacional. Piso 1
Cartagena-Bolívar

REF.: Expediente No.13- 001- 23-33-000 -2019-00316-00
Actor: **ELOISA TORRES DE GONZALEZ Y OTROS**
Medio de Control: Reparación Directa
Contra: La Nación Ministerio del Interior –Ministerio de Defensa Nacional Policía Nacional –Ejército Nacional-Armada Nacional-

DORA CECILIA ORTIZ DICELIS, mayor de edad, vecina de Bogotá, D. C. identificada con Cédula de Ciudadanía No. 41.593.983 de Bogotá, con Tarjeta Profesional No. 31.777 del Consejo Superior de la Judicatura, obrando conforme al poder otorgado por la doctora Sandra Jeannette Faura Vargas, Jefe de la Oficina Asesora Jurídica del Ministerio del Interior, de acuerdo con las funciones delegadas mediante Resolución No. 1735 del 11 de agosto de 2011, en los términos y para los fines allí expresados, el cual acompaño y expresamente acepto, comparezco ante ustedes, dentro del término legal, dando contestación a la demanda de la referencia en los siguientes términos:

A LAS PRETENSIONES DE LA DEMANDA

Me **OPONGO** a todas y cada una de las pretensiones del libelo de la demanda, por cuanto no existen fundamentos de hecho ni de derecho que sirvan de sustento a las mismas, como se demostrara dentro de este proceso.

Igualmente, me opongo a que se condene a la Nación – Ministerio del Interior a pagar a título de perjuicios morales y materiales y demás pedimentos de la demanda que afecten a la entidad que represento.

PROPOSICIÓN DE EXCEPCIONES

De conformidad con lo normado en el artículo 175 de la Ley 1437 de 2011, respetuosamente propongo al Despacho, las siguientes *excepciones*:

De manera principal: Falta de legitimación en la causa por pasiva

Por cuanto no está dentro de las funciones del Ministerio del Interior, el control directo del orden público, esa función le corresponde por disposición constitucional y legal (decreto 2012 de 2000) al Ministerio de Defensa-Ejército Nacional-Armada Nacional y a la Policía Nacional, entidades constituidas para tal efecto.

1/21

El Decreto 2893 de 2011 mediante la cual en su artículo 1º establece como objetivos del Ministerio del Interior, los siguientes:

" El Ministerio del Interior tendrá como objetivo dentro del marco de sus competencias y de la ley formular, adoptar, dirigir, coordinar y ejecutar la política pública, planes, programas y proyectos en materia de derechos humanos, derecho internacional humanitario, integración de la Nación con las entidades territoriales, seguridad y convivencia ciudadana, asuntos étnicos, población LGBTI, población vulnerable, democracia, participación ciudadana, acción comunal, la libertad de cultos y el derecho individual a profesar una religión o credo, consulta previa y derecho de autor y derechos conexos, la cual se desarrollará a través de la institucionalidad que comprende el Sector Administrativo.

Igualmente, el Ministerio del Interior coordinará las relaciones entre la Rama Ejecutiva y la Rama Legislativa, para el desarrollo de la Agenda Legislativa del Gobierno Nacional."...

A su vez el artículo 5º ibídem determina las funciones. El Ministerio del Interior, además de las funciones determinadas en la Constitución Política y el artículo 59 de la ley 489 de 1998, tendrá las siguientes:

"... 5. Dirigir y promover las políticas tendientes a la prevención de factores que atenten contra el orden público interno, así como tomar las medidas para su preservación, en coordinación con el Ministerio de Defensa Nacional, las autoridades departamentales y locales en lo que a estos corresponda..."

Se desprende de lo anterior que el Ministerio del Interior, en tal sentido, ejerce la función de dirección y coordinación con las autoridades departamentales y municipales, sobre el control del orden público; **pero el control del mismo, en estricto sentido, se lleva a cabo, a través del Ministerio de Defensa Nacional y sus organismos adscritos.**

Ahora bien, las políticas relacionadas con el orden público son ejercidas y planteadas por el Ministerio del Interior, de manera general, es decir, una política de carácter nacional, sin entrar a decidir sobre los casos particulares que se presenten, ya que éstos son de conocimiento directo de las autoridades locales o seccionales, según sea el caso.

La materia objeto de esta demanda escapa a la esfera de competencia del Ministerio del Interior, de conformidad con las normas que regulan su accionar, circunstancia que desvirtúa el factor imputabilidad como presupuesto necesario para predicar el instituto de la responsabilidad por parte del Ministerio del Interior.

Lo anterior por cuanto el artículo 4o del decreto 2012 de 2000 establece dentro de los objetivos primordiales del Ministerio de Defensa Nacional: la formulación y adopción de las políticas, planes generales, programas y proyectos del Sector Administrativo Defensa Nacional, para la defensa de la soberanía, la independencia y la integridad territorial, así como para el mantenimiento del orden constitucional y la garantía de la convivencia democrática.

A su vez el artículo 5º ibídem determina que el Ministerio de Defensa Nacional tendrá, además de las funciones que establece el artículo 59 de la Ley 489 de 1998, las siguientes:

"1. Participar en la definición, desarrollo y ejecución de las políticas de defensa y seguridad nacionales, para garantizar la soberanía nacional, la independencia, la integridad territorial y el orden constitucional, el mantenimiento de las condiciones necesarias para el ejercicio y el derecho de libertades públicas, y para asegurar que los habitantes de Colombia convivan en paz..."

El Ministerio de Interior no puede ser centro de imputación jurídica y fáctica dentro de la presente demanda, puesto que de una lectura simple se concluye que este Ministerio no ocasionó el supuesto hecho dañoso, como quiera que las actuaciones a que se refiere el solicitante no fueron producidas por el Ministerio del Interior configurándose la falta de legitimación material en la causa por pasiva.

Sobre la falta de legitimación material en la causa por pasiva, presupuesto necesario de la sentencia favorable, ha dicho lo siguiente el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera, Sentencia del treinta y uno (31) de octubre de dos mil siete (2007), Consejero Ponente Mauricio Fajardo Gómez, Radicación 11001032600019971350300; citando una Sentencia del veintidós (22) de noviembre de dos mil uno (2001), Consejera ponente Dra., María Elena Giraldo Gómez, expediente 13.356, de la propia Sección Tercera:

"La legitimación material en la causa, activa y pasiva, es una condición anterior y necesaria entre otras, para dictar sentencia de mérito favorable al demandante o al demandado. Nótese que el estar legitimado en la causa materialmente por activa o por pasiva, por sí solo, no otorga el derecho a ganar; si la falta recae en el demandante el demandado tiene derecho a ser absuelto pero no porque él haya probado un hecho nuevo que enerve el contenido material de las pretensiones sino porque quien lo atacó no es la persona que frente a la ley tiene el interés sustantivo para hacerlo -no el procesal-; si la falta de legitimación en la causa es del demandado, de una parte al demandante se le negarán las pretensiones no porque los hechos en que se sustenten no le den el derecho sino porque a quien se las atribuyó no es el sujeto que debe responder; por eso, de otra parte, el demandado debe ser absuelto, situación que se logra con la denegación de las súplicas del demandante".

El control del orden público y la función de proteger a todas las personas residentes en Colombia en su vida, honra, bienes, creencias y demás derechos y libertades le corresponde a los organismos de seguridad del Estado y **NO** al Ministerio del Interior.

Como quiera que los hechos sustento de las pretensiones incoadas en la presente demanda de reparación directa tienen como fundamento la presunta actuación irregular de otras entidades, por imperativo constitucional y legal, en esta materia al Ministerio del Interior no le asiste competencia alguna, de conformidad con el Decreto 2893 de 2011.

FUNDAMENTO LEGAL PARA PROPONER LA EXCEPCION

El Ministerio del Interior propone la Excepción de Falta de Legitimación Material en la Causa por Pasiva, de conformidad con lo establecido en el Decreto 2893 de 2011 y el artículo 159 del C. P.A.C.A. que taxativamente establece:

"Capacidad y representación. Las entidades públicas, los particulares que cumplen funciones públicas y los demás sujetos de derecho que de acuerdo con la ley tengan capacidad para comparecer al proceso, podrán obrar como demandantes, demandados o intervinientes en los procesos contencioso administrativos, por medio de sus representantes, debidamente acreditados.

La entidad, órgano u organismo estatal estará representada para efectos judiciales, por el ministro, director de departamento administrativo, superintendente, Registrador Nacional del Estado Civil, Procurador General de la Nación, Contralor General de la República o Fiscal General de la Nación o por la persona de mayor jerarquía en la entidad que expidió el acto o produjo el hecho," razón por la cual en el presente caso el Ministerio del Interior no es la entidad que debe comparecer al proceso, por cuanto como se dijo antes no está dentro de sus funciones el control directo del orden público, esa función le corresponde por disposición constitucional y legal al Ministerio de Defensa-Ejército Nacional-Armada Nacional y a la Policía Nacional, entidades constituidas para tal efecto.

El objeto de la presente demanda tiene que ver exclusivamente con funciones de las entidades de derecho público antes mencionadas.

En consonancia con la norma citada, no compete al Ministerio del Interior, funciones que no le han sido asignadas por la normatividad legal y en consecuencia no se le puede imputar responsabilidad por actuaciones que no ha realizado, por no ser de su competencia.

De lo expuesto anteriormente y con las consideraciones citadas, se deduce que el Ministerio del Interior, no es sujeto pasivo dentro de esta demanda, por lo tanto se configura la **FALTA DE LEGITIMACION MATERIAL EN LA CAUSA POR PASIVA,** razón por la cual este Ministerio debe ser absuelto en el presente proceso.

JURISPRUDENCIA

Con relación a la falta de legitimación material en la causa por pasiva el Consejo de Estado, Sala de Contencioso Administrativo, Sección Tercera, en sentencia de unificación de jurisprudencia del 25 de septiembre de 2013 radicación 25000232600019971393001. Expediente 19.933, Actor: Consorcio Glonmarex. Demandado: Consejo Superior de la Judicatura-Dirección Ejecutiva de Administración Judicial, determinó:

"... Por su parte, la legitimación material en la causa alude a la participación real de la(s) persona(s) demandante(s) y/o demandada(s) en los hechos que originaron el respectivo litigio, independientemente de que dicha(s) persona(s) haya(n), o no, demandado o sido demandada(s). De ahí que la falta de legitimación material en la causa, por activa o por pasiva, no enerve la pretensión procesal en su contenido, como sí lo hace una excepción de fondo, pues, como lo ha precisado la Sala,

« La excepción de fondo se caracteriza por la potencialidad que tiene, si se prueba el hecho modificativo o extintivo de la pretensión procesal que propone el demandado o advierte el juzgador (art. 164 C.C.A) para extinguir parcial o totalmente la súplica procesal.

La excepción de fondo supone, en principio, el previo derecho del demandante que a posteriori se recorta por un hecho nuevo y probado —modificativo o extintivo del derecho constitutivo del demandante— que tumba la prosperidad total o parcial de la pretensión, como ya se dijo.

La legitimación material en la causa activa y pasiva, es una condición anterior y necesaria, entre otras, para dictar sentencia de mérito favorable, al demandante o al demandado» (subrayado fuera de texto)[1].

Lo anterior lleva a concluir que un sujeto procesal que se encuentra legitimado de hecho en la causa no necesariamente concurrirá, al mismo tiempo, legitimación material, pues ésta solamente es predicable respecto de quienes participaron realmente en los hechos que han dado lugar a la instauración de la demanda. En consecuencia, el análisis sobre la legitimación material en la causa se contrae a dilucidar si existe, o no, relación real de la parte demandada o de la demandante con la pretensión que ésta fórmula o la defensa que aquélla propone, pues la existencia de tal relación constituye condición anterior y necesaria para dictar sentencia de mérito favorable a una o a otra[2]*. De manera ilustrativa, así lo ha explicado la Sección Tercera:*

La legitimación ad causam material alude a la participación real de las personas, por regla general, en el hecho origen de la formulación de la demanda, independientemente de que haya demandado o no, o de que haya sido demandado o no. Ejemplo:

- A, Administración, lesiona a B. A y B, están legitimados materialmente; pero si

- A demanda a C, sólo estará legitimado materialmente A; además si D demanda a B, sólo estará legitimado materialmente B, lesionado. Si D demanda a C, ninguno está legitimado materialmente.

Pero en todos esos casos todos están legitimados de hecho; y sólo están legitimados materialmente, quienes participaron realmente en la causa que dio origen a la formulación de la demanda»[3].

---

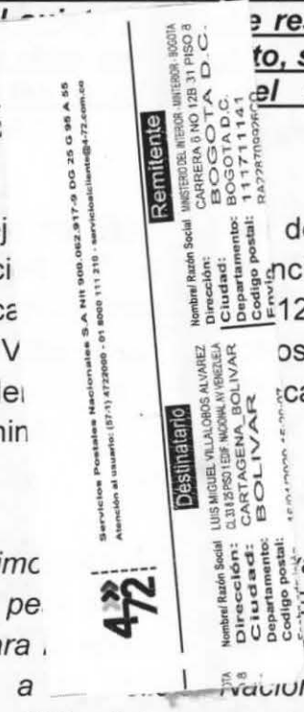
[1] Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera, sentencia del veinte (20) de septiembre de dos mil uno (2001); Consejera ponente: María Elena Giraldo Gómez; Radicación: 10973.

[2] Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera, sentencia de diecisiete (17) de junio de dos mil cuatro (2004); Consejera ponente: María Elena Giraldo Gómez; Radicación número: 76001-23-31-000-1993-0090-01(14452).

[3] Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera, sentencia del quince (15) de junio de dos mil (2000); Consejera ponente: María Elena Giraldo Gómez; Radicación número: 10171.

En similar sentido y complementando lo anteriormente expuesto, se ha afirmado lo siguiente:

> *"La legitimación material en la causa, activa y pasiva, es una condición anterior y necesaria entre otras, para dictar sentencia de mérito favorable al demandante o al demandado. Nótese que el estar legitimado en la causa materialmente por activa o por pasiva, por sí solo, no otorga el derecho a ganar; si la falta recae en el demandante el demandado tiene derecho a ser absuelto pero no porque él haya probado un hecho nuevo que enerve el contenido material de las pretensiones sino porque quien lo atacó no es la persona que frente a la ley tiene el interés sustantivo para hacerlo -no el procesal-; **si la falta de legitimación en la causa es del demandado, de una parte al demandante se le negarán las pretensiones no porque los hechos en que se sustenten no le den el derecho sino porque a quien se las atribuyó no es el [illegible] responder; por eso, de otra parte, el demandad[illegible]to, situación que se logra con la denegación de [illegible] demandante**"*[4] (negrilla y subrayado fuera de te[illegible]



De igual manera el Consej[illegible] de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera, Subsecci[illegible]ncia del 1º de febrero de 2016, proferida dentro del radica[illegible]123310002005-01497-01 (48842). Actor: Silvio Vásquez V[illegible]os. Demandado: Departamento Administrativo de la Presider[illegible]ca y Otros. C. P. JAIME Orlando Santofimio Gamboa, determin[illegible]

(…)

"90 La responsabilidad patrimo[illegible]a no es atribuible al Ministerio del Interior y de Justicia ya que pe[illegible]stado como estructura compleja, dentro de sus funciones para [illegible]chos se establecía solamente la de "Impartir instrucciones a [illegible]acional para la conservación y el restablecimiento del orden público interno en aquellos asuntos cuya dirección no corresponda al Ministro de Defensa Nacional". Se trata de una entidad cuya acción u omisión debe ser considerada por virtud de la vocación política en la que se sustenta, sin perjuicio de lo cual se exhorta respetuosamente para que en los procesos electorales realice el acompañamiento y convoque a las formaciones políticas para determinar con las fuerzas y cuerpos de seguridad todas las medidas de seguridad y protección necesarias para tutelar eficazmente los derechos políticos consagrados en el artículo 23 de la Convención Americana de Derechos Humanos y 40 de la Constitución Política.(…)"

De lo anteriormente expuesto, se infiere que al Ministerio del Interior no le asiste legitimidad para actuar válidamente en la presente demanda, puesto que en los términos señalados, el centro de imputación recae como se dijo antes en los Organismos de Seguridad del Estado y **NO** en el Ministerio del Interior.

---

[4] Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera, sentencia del veintidós (22) de noviembre de dos mil uno (2001); Consejera ponente: María Elena Giraldo Gómez; Expediente 13.356. Puede verse, en la misma dirección, Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera, sentencia de veintisiete (27) de abril de dos mil seis (2006); Consejero ponente: Ramiro Saavedra Becerra; Radicación número: 66001-23-31-000-1996-03263-01(15.352).

De manera autónoma por imperativo constitucional y legal, es necesario señalar que la materia objeto de la presente demanda escapa a la competencia del Ministerio del Interior en los términos del Decreto 2893 de 2011.

El objeto de la presente demanda tiene que ver exclusivamente con funciones de las entidades de derecho público antes mencionadas.

En consonancia con la norma citada, no compete al Ministerio del Interior, funciones que no le han sido asignadas por la normatividad legal y en consecuencia no se le puede imputar responsabilidad por actuaciones que no ha realizado, por no ser de su competencia.

De lo expuesto anteriormente y con las consideraciones citadas, se deduce que el Ministerio del Interior, no es sujeto pasivo dentro de esta demanda, por lo tanto se configura la FALTA DE LEGITIMACION MATERIAL EN LA CAUSA POR PASIVA, razón por la cual este Ministerio debe ser absuelto en el presente proceso.

De manera principal: Caducidad del medio de control de reparación directa:

De conformidad con lo previsto en el artículo 164 literal i) del C.P.A.C.A., el término para la presentación de la demanda de reparación directa, corre de la siguiente manera:

> *"Artículo 164. Oportunidad para presentar la demanda. La demanda deberá ser presentada:*
>
> *(...) i) Cuando se pretenda la reparación directa, la demanda deberá presentarse dentro del término de dos (2) años, contados a partir del día siguiente al de la ocurrencia de la acción u omisión causante del daño, o de cuando el demandante tuvo o debió tener conocimiento del mismo si fue en fecha posterior y siempre que pruebe la imposibilidad de haberlo conocido en la fecha de su ocurrencia.*
>
> *Sin embargo, el término para formular la pretensión de reparación directa derivada del delito de desaparición forzada, se contará a partir de la fecha en que aparezca la víctima o en su defecto desde la ejecutoria del fallo definitivo adoptado en el proceso penal, sin perjuicio de que la demanda con tal pretensión pueda intentarse desde el momento en que ocurrieron los hechos que dieron lugar a la desaparición; (...)".*

El término de caducidad debe contarse de conformidad al inciso primero del artículo 164, numeral i), el cual establece que la demanda de reparación directa deberá presentarse dentro del término de (2) años, contados a partir del día siguiente al de la ocurrencia de la acción u omisión causante del daño.

Existe caducidad del medio de control de reparación directa de acuerdo a lo establecido en el artículo 164 del C.P.A.C.A. **por cuanto los hechos según la demanda ocurrieron en el año 1997 y la demanda fue presentada el 17 de junio de 2019, la cual fue admitida el 31 de julio de 2019, por el Tribunal Administrativo de Bolívar,** cuando ya habían transcurrido más de los dos (2) años previstos en la ley para interponer el medio de control de reparación directa.

CON RELACIÓN A LA CADUCIDAD DEL MEDIO DEL CONTROL DE REPARACIÓN DIRECTA POR DESPLAZAMIENTO FORZADO, LA CORTE CONSTITUCIONAL EN SENTENCIA SU-254 DE 2003, determinó "*... que para efectos de la caducidad de futuros procesos judiciales ante la jurisdicción de lo contencioso administrativo, los términos para la población desplazada sólo podrán computarse a partir de la ejecutoria del presente fallo y no se han de tener en cuenta transcursos de tiempo anteriores, por tratarse de sujetos de especial protección constitucional, en atención a sus circunstancias de vulnerabilidad y debilidad manifiesta...*"

La mencionada Corporación mediante auto No. 137 del 15 de mayo de 2014, estableció que la fecha de notificación de la mencionada sentencia es el 19 de mayo de 2013, que a partir del día siguiente, esto es el 20 de mayo de 2013, se debe contar el término de los dos (2) años para ejercer el medio de control de reparación directa o de grupo. Es decir, que en el presente caso existe caducidad del medio de control de reparación directa, tal como lo estableció la Corte Constitucional, por cuanto el término se venció el día 20 de mayo de 2015.

Además, el Consejo de Estado-Sala Plena en sentencia del noviembre 21 de 1.991 dijo: La jurisprudencia ha determinado para el cómputo del término de caducidad que:

"La caducidad, ha dicho la doctrina y la jurisprudencia, es una institución jurídica que limita en el tiempo el ejercicio de una acción, independientemente de consideraciones que no sean el solo transcurso del tiempo. Su verificación es simple, pues el término ni se interrumpe ni se prorroga y es la ley la que al señalar el término y el momento de su iniciación, indica el término final invariable o dies fatalis..."

"... Para que se dé el fenómeno jurídico de la caducidad, sólo bastan dos supuestos: el transcurso del tiempo y el no ejercicio de la acción. .."

IMPOSIBILIDAD DE IMPUTARLE HECHOS DAÑOSOS AL MINISTERIO DEL INTERIOR POR FALTA DE NEXO CAUSAL:

1. Uno de los elementos esenciales para que surja la responsabilidad administrativa es la existencia del nexo causal, es decir, el vínculo que debe existir entre hecho y daño antijurídico.

2. La explicación del vínculo causal en el sentido de determinar dentro de todas las posibles ¿cuál fue la causa eficiente que produjo un daño antijurídico?, ha sido dilucidada reiterativamente por doctrina y jurisprudencia mediante la aplicación de la Teoría de la Causalidad Adecuada, la cual básicamente sostiene que hay que precisar aquellas que sean realmente determinantes en la producción del resultado dañoso porque, solo quienes hayan originado esas causas determinantes, comprometen su responsabilidad.

3. Sobre la teoría de la causalidad adecuada ha dicho el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera, Consejera Ponente Dra., María Elena Giraldo Gómez, en sentencia del 17 de junio de 2004, radicación número 44001-23-31-000-1996-0825-01 (15183), actor Elmer Francisco Vanegas Palmezano y Otros, demandado Nación – Ministerio de Defensa – Policía Nacional:

> *"... Para que surja el deber de indemnizar con fundamento en el régimen de responsabilidad patrimonial previsto en el artículo 90 constitucional, ... , no es suficiente que el demandante haya sufrido un daño cierto, determinado o determinable y antijurídico y que contra quien se dirige la imputación haya incurrido en alguna conducta de irregularidad constitutiva de falla de aquellas alegadas por el actor, porque es necesario además que se demuestre que el daño se produjo como consecuencia de la falla de la Administración, nexo causal que para efectos de esta declaratoria no debe ser visto desde el punto de vista de la causalidad física perteneciente al mundo de los fenómenos naturales, sino desde el punto de vista jurídico, entendido como el estudio de la eficiencia de la conducta estatal en la causación de un daño desde el deber ser que prevé la norma para el Estado en relación con el administrado...".*

4. Aterrizando las anteriores ideas al caso en cuestión, podemos observar que en la presente controversia no existe relación real entre el Ministerio del Interior y las causas objetivas determinantes en la producción de los eventuales hechos dañosos que aducen los demandantes, toda vez que éstos fueron realizados por terceros ajenos a la administración sin que se vislumbre prueba idónea que demuestre que dentro de las funciones del Ministerio del Interior están las de protección de la vida, honra y bienes de los habitantes residentes en Colombia.

5. En efecto, las causas determinantes en la producción de un hecho dañoso (desplazamiento), que eventualmente pudieran haber ocasionado perjuicios a los demandantes, objetivamente se refieren a conductas realizadas por un grupo armado al margen de la ley en contra de la población civil, sin que en voces del apoderado de la parte actora haya existido la debida protección y vigilancia por parte de la fuerza pública y demás autoridades demandadas que, entratándose del Ministerio del Interior y como quedó explicado anteriormente no tiene competencia alguna de prestar seguridad a los ciudadanos residentes en Colombia, razón suficiente para entender que no se le puede imputar a esta cartera ministerial la realización de ningún hecho u omisión dañosos y, en consecuencia, acreditarle debidamente el nexo causal indispensable para imputarle responsabilidad, toda vez que la entidad no participó, contribuyó o realizó, directa ni indirectamente, los hechos positivos ni las supuestas omisiones eficientes materia del litigio y, por tanto, en cuanto a la entidad respecta, se impone su completa y total absolución.

El Ministerio de Interior no puede ser centro de imputación jurídica y fáctica dentro de la presente demanda, puesto que de una lectura simple se concluye que este Ministerio no ocasionó el supuesto hecho dañoso, como quiera que el orden público y la protección a la vida, honra y bienes de los ciudadanos como se dijo antes, le corresponde a los organismos creados para cumplir esa función.

1.- El Ministerio del Interior, no puede ser condenado en este asunto porque no existe relación real entre la entidad y las pretensiones que en su contra formulan los demandantes, configurándose así la denominada FALTA DE LEGITIMACION MATERIAL EN LA CAUSA POR PASIVA como condición anterior necesaria que permitiría dictar sentencia de mérito desfavorable a los intereses de la entidad por mi representada.

2.- Según se puede apreciar en la demanda, los fundamentos concretos de hecho que expone la parte actora como sustento de sus pretensiones tienen que ver en esencia con funciones de los organismos de seguridad del Estado antes relacionados, situación fáctica que recae en los linderos de la mencionada entidad y no en el Ministerio del Interior.

3.- El artículo 159 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo, establece que en los procesos contencioso administrativos, *"la entidad, órgano u organismo estatal estará representada para efectos judiciales, por el ministro, director de departamento administrativo, superintendente, Registrador Nacional del Estad o Civil, Procurador General de la Nación, Contralor General de la República o Fiscal General de la Nación o por la persona de mayor jerarquía en la entidad que expidió el acto o produjo el hecho,"* en este caso por el señor Ministro de Defensa –Ejército Nacional y por el Director General de la Policía Nacional.

4.- Teniendo en cuenta que el Ministerio del Interior, no tiene asignada dentro de sus competencias legales ninguna atribución relacionada con las que tiene el Ministerio de Defensa, el Ejército Nacional y la Policía Nacional, de conformidad con el artículo 159 del CPACA, en sana lógica jurídica se impone la absolución del Ministerio del Interior por cuanto no fue la autoridad que intervino material y sustancialmente en los hechos que, eventualmente, pudieron haber causado daños y perjuicios a la demandante.

Igualmente, el H. Consejo de Estado, con respecto a la protección que deben brindar las autoridades a todas las personas en su vida, honra y bienes mediante Sentencia de octubre 11 de 1990. (Gaceta Jurisprudencial No. 19, septiembre de 1994. Editorial Leyer, pág. 75-76, manifestó:

> *"Es cierto que en los términos del artículo 16 de la Constitución Política las autoridades están instituidas para proteger a todas las personas residentes en Colombia, en su vida, honra y bienes, y que a partir de este texto se fundamenta la responsabilidad del Estado, pero también lo es que esa responsabilidad no resulta automáticamente declarada cada vez que una persona es afectada en tales bienes, pues la determinación de la falla que se presente en el cumplimiento de tal obligación a que llegue el juzgador acerca de las circunstancias de tiempo, como se hubieren sucedido los hechos, así como a los recursos con que contaba la administración para prestar el servicio para que pueda deducir que la falla se presentó y que ella no tiene justificación alguna, todo dentro de la idea de que nadie es obligado a lo imposible".*

Lo anterior demuestra que el Estado, en cumplimiento de sus fines esenciales consagrados en la Carta Magna, no pretende castigar ni imponer pesadas cargas a los ciudadanos, sino salvaguardar en todo momento la armonía, el orden social y jurídico y el bienestar ciudadano de la comunidad nacional.

Un pronunciamiento más reciente frente a la responsabilidad del Estado se ha plasmado en la sentencia de abril 26 de 2001, Expediente 12537, C.P. Dr. Germán Rodríguez Villamizar, en la cual se expresó:

> *"Además, considera la Sala que admitir la tesis expuesta en la demanda, de acuerdo con la cual, en todos los eventos en que una persona resulte perjudicada por razón de la comisión de un ilícito, debe el Estado indemnizar a la víctima, es desconocer la realidad propia del país, ya que la obligación de protección que la Carta le asigna a aquél respecto de los habitantes del territorio nacional, no tiene el carácter de absoluta y, por el contrario, debe entenderse circunscrita a las limitaciones propias de un Estado en las condiciones socio-económicas que afronta Colombia."*

La Constitución Política establece como obligación del Estado, la de preservar el derecho a la integridad de los ciudadanos; ésta es perentoria, pero dentro del marco lógico debe tenerse en cuenta la conducta humana que en no pocas oportunidades escapa al control del Estado.

Con Relación al desplazamiento forzado, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera, en sentencia del 26 de enero de 2006 dentro del proceso radicado con el No. AG-25000232600020010021 3-01 actor: Jesús Emel Jaime Vacca y Otros contra la Nación Ministerio de Defensa Nacional – Policía Nacional, consejera ponente doctora Ruth Stella Correa Palacio, determinó:

"…Como ya se señaló, la razón de ser de las autoridades públicas no es otra que la de proteger a todas la personas residentes en Colombia en su vida, honra, bienes, creencias y demás derechos y libertades (art. 2 C.P.), obligaciones que en relación con los miembros de la Fuerza Pública establecen específicamente los artículos 217 y 218 ibídem, que señalan que a las Fuerzas Militares corresponde, entre otras funciones, la defensa de la soberanía del Estado y a la Policía Nacional el mantenimiento de las condiciones necesarias para el ejercicio de los derechos y libertades públicas y para asegurar que los habitantes de Colombia convivan en paz.

La soberanía del Estado y el orden público fueron desconocidos por el grupo de autodefensas que llegó al corregimiento La Gabarra el 29 de mayo de 1999, pero las autoridades públicas no ejercieron eficazmente sus deberes de protección a la vida y demás derechos fundamentales de la población de ese corregimiento…

Las acciones y omisiones en las cuales incurrieron las autoridades públicas, que fundamentaron la imputabilidad del daño al Estado, consistieron en (i) no haber realizado ninguna actuación tendiente a impedir la incursión, a a pesar de haber tenido conocimiento previo de que se iba a producir, (ii) no haber dotado al corregimiento La Gabarra de estación de Policía, la cual había sido retirada desde

el 25 de agosto de 1998, (iii) haber adelantado acciones militares ineficaces con ocasión de la incursión paramilitar en el corregimiento La Gabarra, (iv) la mirada impasible de las autoridades ante la llegada del numeroso grupo de paramilitares en su paso por sitios donde se hallaban instalados los comandos de esos cuerpos armados, y (v) la colaboración que, según la investigación disciplinaria que adelantó Procuraduría Delegada para la Defensa de los Derechos Humanos, le prestó al grupo paramilitar el Capitán de la Policía Nacional Luis Alexander Gutiérrez Castro, quien para la época de los hechos se desempeñaba como Comandante del Quinto Distrito de Tibú, Norte de Santander..." (subrayado fuera de texto).

De igual manera, la mencionada Corporación en sentencia del 15 de agosto de 2007, proferida dentro del proceso 19001233100020030038 5-01 Consejero Ponente doctor Mauricio Fajardo Gómez, Acción de Grupo instaurada por Antonio María Ordoñez Sandoval y Otros, contra la Nación Ministerio de Defensa- Ejército Nacional, reiteró la jurisprudencia anterior relacionada el tema del desplazamiento y dijo:

"... De otra parte, las circunstancias que rodearon los hechos acaecidos en la región del Naya en el mes de abril de 2001, llevan a la Sala a concluir que si la parte demandada hubiese puesto efectivamente en funcionamiento todos los recursos humanos y técnicos de los cuales dispone para atender en forma adecuada y oportuna las correspondientes obligaciones legales, tales hechos seguramente no hubiesen ocurrido o, por lo menos, no en la magnitud que determinó el desplazamiento masivo que dio origen a esta acción.

En efecto, si bien de conformidad con el acervo probatorio se tiene que no aparece prueba alguna de la cual se pueda inferir la participación directa y activa de miembros de la fuerza pública en la incursión armada, sí se encuentra debidamente acreditado que dicha incursión no fue sorpresiva; por el contrario, estaba anunciada y, en consecuencia, el conocimiento previo por parte de las autoridades permitía y exigía haber tomado las medidas correspondientes; pese a lo anterior, las autoridades militares no adoptaron medida alguna suficientemente eficaz para impedir que se produjeran los sucesos anunciados; no fue un evento instantáneo, sino que se prolongó en el tiempo y durante varios días; no se trató de un asunto imperceptible y de poca monta, sino de una macabra incursión perpetrada por un numerosísimo grupo de aproximadamente "500 hombres vistiendo prendas de uso privativo de las fuerzas armadas, portando armas de fuego de corto y largo alcance"; sus consecuencias fueron mayúsculas, se trató de una verdadera masacre que, desde luego, trajo como efecto el desplazamiento masivo del grupo demandante; en fin, la situación de total desprotección en que se encontraba la región para la época de los dolorosos acontecimientos, unida a todo lo expuesto, fuerza concluir que tales hechos se hubieran podido evitar, es decir, la entidad demandada hubiera podido efectivamente interrumpir el proceso causal..." (subrayado fuera de texto).

De conformidad con los presupuestos fácticos y las pretensiones invocadas por la parte actora, ha de señalarse en primer término que el Ministerio del Interior no es la entidad competente para atender la materia objeto de esta demanda ni para reconocer prestación económica alguna, por cuanto la política de Gobierno

Nacional en lo atinente al control del orden público recae de manera privativa en los Organismos de Seguridad del Estado.

Para poder imputar responsabilidad a un ente público debe preverse que éste tenga la titularidad del servicio o de la actividad desarrollada por sus funcionarios y de otra parte, que la entidad esté en la posibilidad fáctica de atender la solicitud.

Por las características de tiempo, modo y lugar que informan la ocurrencia de los hechos, en el presente asunto no se configuran los requisitos que legal y jurisprudencialmente harían procedente una condena en contra del Ministerio del Interior por falla del servicio en la prestación de seguridad y protección a la vida, honra y bienes de las personas.

En conclusión, teniendo en cuenta la separación de funciones que caracteriza a los diferentes órganos y servidores de la administración pública, tal y como lo señala el artículo 113 de la Carta Política en concordancia con lo dispuesto en los artículos 121 y 123 ibídem y en la Ley 489 de 1998, en sana lógica jurídica se impone la absolución del Ministerio del Interior en tanto y por cuanto esta no es la entidad que tiene a su cargo las funciones de protección de la vida, honra y bienes de los habitantes residentes en Colombia, atribuciones que están en cabeza del Ministerio de Defensa a través de sus organismos adscritos.

Por lo anteriormente expuesto, y dado que sobre estos puntos ya se expuso en el capítulo de razones de la defensa y la legislación vigente sobre el tema objeto de esta controversia, solicito al señor Juez, negar las pretensiones de la demanda en lo que tiene que ver con el Ministerio del Interior, por cuanto no es de su competencia atender los hechos narrados en la misma, éstos le corresponden por disposición legal a los Organismos de Seguridad del Estado.

PRUEBAS

Solicito al señor Magistrado se decrete y tenga como prueba la siguiente:

DOCUMENTALES A SOLICITAR:

Se oficie a la UNIDAD DE ATENCIÓN Y REPARACIÓN INTEGRAL A LAS VÍCTIMAS-UARIV- ubicada en la Calle 16 No. 6-66 teléfono 7965150 en la ciudad de Bogotá, D. C., para que envíe al presente proceso la información sobre si el demandante fue beneficiado con indemnización administrativa, en el marco de la Ley 1448 de 2011:

ELOISA TORRES DE GONZALEZ	C.C. 22.766.932
CARMEN MARIA GONZALEZ DE JULIO	C.C. 22.971.273
LISANDRO GONZALEZ DE TORRES	C.C. 9.077.613
EULALIA GONZALEZ DE VASQUEZ	C.C. 33.149.290
CANDELARIA GONZALEZ TORRES	C.C. 22.969.084

ALCIRA GONZALEZ TORRES	C.C. 22.969.076
JESUS GONZALEZ TORRES	C.C. 9.330.48
VILMA RAFAELA GONZALEZ TORRES	C.C. 9.33065
ESTELA DEL CARMEN PUELLO	C. C. 22.969.111
EDER FABIAN GONZALEZ PUELLO	C.C. 1.044.928.307
NORELYS GONZALEZ PUELLO	C.C. 1.131.494.07
NAYIBE DEL CARMEN SALDARRIAGA PEREIRA	C.C. 45.366.495
NAIDA MODESTA GONZALEZ SALDARRIAGA	C.C. 1.049.934.368
JORGE LEONRDO GONZALEZ SALDARRIAGA	C.C. 1.049.937.586
YENIFER JUDITH GONZALEZ SALDARRIAGA	C.C. 1.049.940.120
RONAL JULIO GONZALEZ	C.C. 933.073
RENET JULIO GONZALEZ	C.C. 933.083
ALEJANDRA JULIO GONZALEZ	C.C. 45369626
ROBERTO JULIO GONZALEZ	C.C. 73580797
ERIBERTO JULIO GONZALEZ	C.C. 9.156.838
YEIMIS ELOISA GONZALEZ CANAVAL	C.C. 1047399715
JEISON GONZALEZ CANAVAL	C.C.
DAINER GONZALEZ RAMOS	C.C.
ELKIN DANIEL GONZALEZ RAMOS	C.C.
JHONY ANTONIO GONZALEZ RAMOS	C.C
ELOISA MARIA GONZALEZ RAMOS	C.C.
ERIC VASQUEZ GONZALEZ	C.C. 7314616
INAURIS VASQUEZ GONZALEZ	C.C .45756928
YINA VASQUEZ GONZALEZ	C.C. 45692818
GABINO VASQUEZ GONZALEZ	C.C. 9099805
MAIKER DIAZ GONZALEZ	C.C.9159467
YOLIMA DIAZ GONZALEZ	C.C.45370310
YAQUELIN DIAZ GONZALEZ	C.C.52402004
GUSTAVO DIAZ GONZALEZ	C.C.9157695
YAJAIRO DIAZ GONZALEZ	C.C. 45369269

OSCAR PEREIRA GONZALEZ	C.C. 73183425
YARIMA MODESTA PEREIRA	C.C. 45524294
RUBIELA PEREIA GONZALEZ	C.C. 32908341
MARCOS PEREIRA	C.C. 8870733
ALFREDO ACEVEDO OLIVO	C.C. 73071503
KARINA MARGARITRA ACEVEDO GONZALEZ	C.C 1128050777
DIANA MARCELA ACEVEDO GONZALEZ	C.C. 1143329068
CARLOS ALFREDO ACEVEDO GONZALEZ	C.C. 114336984
JESUS GONZALEZ NARVAEZ	C.C. 1128054183
YULIS GONZALEZ SALAS	C.C. 1128062316
ELOISA ROSA GONZALEZ	C.C. 1143377066
ALMEIDE ANTONIO MARIMON NARVAEZ	C.C. 933065
ALMEIDER MANUEL MARIMON GONZALEZ	C.C. 1143348777
CRISTIAN DAVI MARIMON GONZALEZ	C.C. 1047416737
KATIA PAULA MARIMON GONZALEZ	C.C. 1143366776

Lo anterior, para efectos del principio de prohibición de doble reparación económica previsto en el artículo 20 de la Ley 1448 de 2011 y 14 de la Ley 288 de 1996, considerando además los ingentes esfuerzos del Estado en materia de atención, asistencia y reparación integral al universo de víctimas, si este avanza a fase contenciosa se pedirá como prueba precisar qué ha recibido la víctima en virtud de los programas administrativos de reparación implementados por el Estado en virtud de lo dispuesto en las Leyes 418 de 1997 y normas complementarias y particularmente a partir de la Ley 1448 de 2011.

Esto teniendo en cuenta además la sentencia del 20 de noviembre de 2013 proferida por la CIDH CASO DE LAS COMUNIDADES AFRODESCENDIENTES DESPLAZADAS DE LA CUENCA DEL RIO CACARICA (OPERACIÓN GENESIS) VS. COLOMBIA, párr.469 a 476 y punto resolutivo 18.

NOTIFICACIONES

Las recibiré en el Ministerio del Interior, ubicada en la Calle 12B No. 8-46 en Bogotá D. C. P.B. X. No. 2427400 extensión 3004 fax 5998167 correo electrónico: notificacionesjudiciales@mininterior.gov.co

ANEXOS

1. Poder para actuar

2. Copia auténtica de la resolución No. 1735 del 11 de agosto de 2011 por la cual el Ministerio del Interior, delega al Jefe de la Oficina Asesora Jurídica para que se notifiqué y otorgue poder a los abogados de planta de este Ministerio en los procesos instaurados contra la Nación-Ministerio del Interior.

3. Copia de la resolución de nombramiento y acta de posesión, donde consta que en el momento de otorgar el poder la doctora Sandra Jeannette Faura Vargas es el Jefe de la oficina Asesora Jurídica del Ministerio del Interior.

Solicito al señor Magistrado Ponente, se me reconozca personería para actuar en nombre y representación de la Nación - Ministerio del Interior.

Del señor Magistrado Ponente,

DORA CECILIA ORTIZ DICELIS
C.C. No. 41.593.983 de Bogotá.
T.P. No. 31.777 del C.S.J.

1251

El futuro es de todos | Mininterior

Doctor
Luis Miguel Villalobos Alvarez
Magistrado Ponente
Tribunal Administrativo de Bolívar
Cartagena-Bolívar

REF: Radicado No. 13-001-23-33-000-2019-00316-00
Actor: Eloisa Torres de González y Otros
Medio de control: Reparación Directa
Contra: La Nación-Ministerio del Interior- Mindefensa-Ejército Nacional-Armada Nacional- Policía Nacional

Sandra Jeannette Faura Vargas, identificada con la cédula de ciudadanía No. 51.768.343, en mi condición de Jefe de la Oficina Asesora Jurídica del Ministerio del Interior, según Resolución No. 1393 del 31 de agosto de 2018 y acta de posesión del 3 de septiembre del año en curso, en ejercicio de las funciones de representación judicial delegada por el señor Ministro del Interior, mediante Resolución No. 1735 del 11 de agosto de 2011, manifiesto que confiero poder especial, amplio y suficiente a la doctora Dora Cecilia Ortiz Dicelis, identificada con la cédula de ciudadanía No. 41.593.983 de Bogotá y Tarjeta Profesional No. 31777 del C.S.J., para que represente a la Nación Ministerio del Interior, dentro del trámite de la referencia ante su despacho.

La apoderada queda facultada para realizar las actuaciones conforme a los artículos 75 y 77 del Código General del Proceso y, particularmente, las de sustituir, reasumir y conciliar, de conformidad con la decisión adoptada por el Comité de Conciliación y Defensa Judicial del Ministerio del Interior. Ruego a usted reconocerle personería.

Sandra Jeannette Faura Vargas

Acepto:

Dora Cecilia Ortiz Dicelis
C.C. No. 41.593.983
T.P. No. 31.777 del C.S.J.

CENTRO DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS JURISDICCIONALES PARA LOS JUZGADOS CIVILES, LABORALES Y DE FAMILIA
DILIGENCIA DE PRESENTACIÓN PERSONAL
Sandra Jeannette Faura Vargas
quien se identificó con C.C. No. 51.768.343
T.P. No. ____ Bogotá D.C.

CENTRO DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS JURISDICCIONALES PARA LOS JUZGADOS CIVILES, LABORALES Y DE FAMILIA
DILIGENCIA DE PRESENTACIÓN PERSONAL
Dora Cecilia Ortiz Dicelis
quien se identificó con C.C. No. 41.593.983
T.P. No. 31777 Bogotá D.C.

República de Colombia

Libertad y Orden

MINISTERIO DEL INTERIOR

RESOLUCIÓN NÚMERO 1735 DE 11 AGO 2011

Por la cual se delega la representación judicial del Ministerio del Interior y se dictan otras disposiciones

EL MINISTRO DEL INTERIOR

En uso de sus facultades legales, en especial las que le confiere el articulo 9° de la Ley 489 de 1998 y el decreto 2893 de 2011

CONSIDERANDO:

Que el Decreto 2893 de 2011 *"por el cual se modifican los objetivos, la estructura del Ministerio del Interior y se integra el Sector Administrativo del Interior"* dispone en su artículo 10, que son funciones de la Oficina Asesora Jurídica: *"4. Representar judicial y extrajudicialmente al Ministerio en los procesos y actuaciones que se instauren en su contra o que éste deba promover, mediante poder o delegación, y supervisar el trámite de los mismos"* y *"5. Dirigir y coordinar las actividades relacionadas con el proceso de jurisdicción coactiva del Ministerio y del Fondo para la Participación y el Fortalecimiento de la Democracia"*.

Que en desarrollo de los principios de economía y celeridad, para hacer más ágil la actuación del Ministerio del Interior y del Fondo para la Participación y el Fortalecimiento de la Democracia ante las instancias judiciales, así como en el cobro de los créditos exigibles a favor de las referidas entidades, se hace necesario delegar la facultad de adelantar algunas actividades.

Que por las razones expuestas,

RESUELVE:

ARTÍCULO 1. Delegar en el Jefe de la Oficina Asesora Jurídica, código 1045, grado 16, de la Planta Global, la representación judicial en los procesos en que deba actuar la Nación – Ministerio del Interior y del Fondo para la Participación y el Fortalecimiento de la Democracia.

ARTÍCULO 2. La delegación a que hace referencia el artículo anterior comprende todas las facultades que se requieran para el correcto ejercicio de la representación judicial, como son, entre otras, otorgar poderes a abogados, notificarse, presentar memoriales y/o recursos, conciliar prejudicial y judicialmente en los procesos a que haya lugar, de conformidad con las normas que rigen la conciliación en materia administrativa, especialmente las leyes 23 de 1991, 446 de 1998, 640 de 2000 y 1285 de 2009 y las normas que las reglamenten, modifiquen

Es fiel copia tomada en los Archivos de este Ministerio

o sustituyan, y en general todas las actuaciones requeridas para el cabal cumplimiento de las funciones delegadas.

ARTÍCULO 3. Delegar en el Jefe de la Oficina Asesora Jurídica, código 1045, grado 16, de la Planta Global, el ejercicio de la jurisdicción coactiva para hacer efectivos los créditos exigibles a favor de la Nación – Ministerio del Interior y del Fondo para la Participación y el Fortalecimiento de la Democracia

ARTÍCULO 4. VIGENCIA y DEROGATORIAS. La presente resolución rige a partir de su fecha de expedición y deroga las disposiciones que le sean contrarias.

COMUNÍQUESE Y CÚMPLASE
Dada en Bogotá D.C. a los 11 AGO 2011

GERMÁN VARGAS LLERAS
Ministro del Interior

Revisaron: Diana M. Barrera C – Baudilio Peñaranda - Alfonso Cajiao Cabrera
Aprobó: Luis Felipe Henao Cardona

MINISTERIO DEL INTERIOR
SECRETARÍA GENERAL
Es copia del ... que reposa en
los Archivos ... de este Ministerio

REPUBLICA DE COLOMBIA

MININTERIOR TODOS POR UN NUEVO PAÍS

MINISTERIO DEL INTERIOR

RESOLUCIÓN NÚMERO (1393) DE 31 AGO 2018

Por la cual se efectúa un nombramiento en la planta de personal del Ministerio

LA MINISTRA DEL INTERIOR

en uso de sus facultades legales y reglamentarias, en especial las conferidas por los artículos 2.2.5.1.1 del Decreto 1083 de 2015 y 1º del Decreto 1338 de 2015, en concordancia con los artículos 23 de la Ley 909 de 2004 y 6º del Decreto 2893 de 2011, y

C O N S I D E R A N D O :

Que con fundamento en la revisión de la documentación de la hoja de vida de la doctora SANDRA JEANNETTE FAURA VARGAS, la Subdirectora de Gestión Humana, certificó que reúne los requisitos exigidos para ejercer el cargo de Jefe de Oficina Asesora de Jurídica, código 1045, grado 16 de la planta global, ubicado en la Oficina Asesora Jurídica, de conformidad con las normas legales vigentes y con el Manual Especifico de Funciones, Requisitos y Competencias Laborales.

Que por lo expuesto anteriormente, este Despacho

R E S U E L V E :

Artículo 1. *Nombramiento.* Nómbrese con carácter ordinario a la doctora SANDRA JEANNETTE FAURA VARGAS, identificada con cédula de ciudadanía No. 51.768.343, en el cargo de Jefe de Oficina Asesora de Jurídica, código 1045, grado 16 de la planta global, ubicado en la Oficina Asesora Jurídica.

Artículo 2. *Vigencia.* La presente resolución rige a partir de la fecha de su expedición.

COMUNÍQUESE Y CÚMPLASE
Dada en Bogotá, D.C., a los 31 AGO 2018

MINISTERIO DEL INTERIOR
SECRETARÍA GENERAL
Es copia del Original que reposa en los Archivos de este Ministerio

NANCY PATRICIA GUTIÉRREZ CASTAÑEDA

Elaboró: Sugeiry Zambrano SGH
Revisó: María Angela Acosta Illera, Subdirectora de Gestión Humana
Aprobó: Luz Helena Mejía Perdigon, Secretaria General

MININTERIOR

TODOS POR UN NUEVO PAÍS

ACTA DE POSESION

Bogotá D.C., 03 SET 2018

Se presentó en el Despacho de la Secretaria General del Ministerio del Interior, la doctora SANDRA JEANNETTE FAURA VARGAS, identificada con cédula de ciudadanía No. 51.768.343, con el fin de tomar posesión del cargo de Jefe de Oficina Asesora de Jurídica, código 1045, grado 16 de la planta global, ubicado en la Oficina Asesora Jurídica, con una asignación básica mensual de $8,766 680, para el cual se nombró con carácter ordinario mediante Resolución No. 1393

Manifestó bajo la gravedad del juramento no estar incursa en causal alguna de inhabilidad general o especial, de incompatibilidad o prohibición alguna establecidas en las disposiciones vigentes, para el desempeño de empleos públicos.

Acreditó los requisitos para el ejercicio del cargo y prestó juramento de cumplir y defender la Constitución Política de Colombia y desempeñar los deberes que le incumben.

SANDRA JEANNETTE FAURA VARGAS
Posesionada

LUZ HELENA MEJIA PERDIGON
Quien da Posesión

MINISTERIO DEL INTERIOR
SECRETARIA GENERAL
Es copia del Original que reposa en los Archivos de este Ministerio

Elaboró: Zuleyma Zambrano
Revisó: María Isabel Palacios Rodríguez, Subdirectora de Gestión Humana
Revisó y Aprobó: Luz Helena Mejía Perdigón, Secretaria General

Rama Judicial
Consejo Superior de la Judicatura
República de Colombia

TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DE BOLÍVAR
OFICIO

SIGCMA

Al contestar por favor cite:
RADICADO NRO: 000-2019-00316-00
OFICIO No 0332/2020-LMVA

Cartagena de Indias D. T. y C., Veintidós (22) de Enero de Dos Mil Veinte (2020).

DOCTOR:
EDER HUMBERTO OMAÑA MALDONADO
PROCURADOR JUDICIAL 22
La Matuna, Edificio Caja Agraria 2° Piso
La Ciudad

Asunto: **REMISIÓN DEMANDA Y ANEXOS**

Medio de control	**REPARACION DIRECTA**
Radicado	**13-001-23-33-000-2019-00316-00.**
Demandante	**ELOISA TORRES GONZALEZ Y OTROS.**
Demandado	**NACION – MINISTERIO DEL INTERIOR Y OTROS.**
Magistrado Ponente	**LUIS MIGUEL VILLALOBOS ÁLVAREZ.**

Cordial Saludo,

De conformidad con lo establecido en el artículo 612 del Código General del Proceso, que modifica el artículo 199 de la Ley 1437 de 2011 (CPACA), adjunto al presente, estoy enviándole, para los fines pertinentes copia de la demanda, sus anexos y del auto de sustanciación **No. 954/2019-LMVA** de fecha Veintiséis (31) de Julio del 2019, mediante el cual el despacho 002 del Tribunal Administrativo de Bolívar, RESOLVIÓ; **ADMITIR** la presente demanda en primera instancia.

SE ADJUNTA LA DEMANDA, CON SUS RESPECTIVOS ANEXOS Y EL AUTO DE SUSTANCIACIÓN **No. 954/2019-LMVA**

Atentamente,

JUAN CARLOS GALVIS BARRIOS
Secretario General

Rama Judicial
Consejo Superior de la Judicatura
República de Colombia

TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DE BOLÍVAR
OFICIO

SIGCMA

Al contestar por favor cite:
RADICADO NRO: 000-2019-00316-00
OFICIO No 0331/2020-LMVA

Cartagena de Indias D. T. y C., Veintidós (22) de Enero de Dos Mil Veinte (2020).

SEÑORES:
NACIÓN – MINISTERIO DEFENSA – ARMADA NACIONAL
Carrera 54 N°26-25 CAN
Bogotá D.C

Asunto: **REMISIÓN DEMANDA Y ANEXOS**

Medio de control	**REPARACION DIRECTA**
Radicado	**13-001-23-33-000-2019-00316-00.**
Demandante	**ELOISA TORRES GONZALEZ Y OTROS.**
Demandado	**NACION – MINISTERIO DEL INTERIOR Y OTROS.**
Magistrado Ponente	**LUIS MIGUEL VILLALOBOS ÁLVAREZ.**

Cordial Saludo,

De conformidad con lo establecido en el artículo 612 del Código General del Proceso, que modifica el artículo 199 de la Ley 1437 de 2011 (CPACA), adjunto al presente, estoy enviándole, para los fines pertinentes copia de la demanda, sus anexos y del auto de sustanciación **No. 954/2019-LMVA** de fecha Veintiséis (31) de Julio del 2019, mediante el cual el despacho 002 del Tribunal Administrativo de Bolívar, RESOLVIÓ; **ADMITIR** la presente demanda en primera instancia.

SE ADJUNTA LA DEMANDA, CON SUS RESPECTIVOS ANEXOS Y EL AUTO DE SUSTANCIACIÓN **No. 954/2019-LMVA**

Atentamente,

JUAN CARLOS GALVIS BARRIOS
Secretario General

Rama Judicial
Consejo Superior de la Judicatura
República de Colombia

TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DE BOLÍVAR
OFICIO

SIGCMA

Al contestar por favor cite:
RADICADO NRO: 000-2019-00316-00
OFICIO No 0330/2020-LMVA

Cartagena de Indias D. T. y C., Veintidós (22) de Enero de Dos Mil Veinte (2020).

SEÑORES:
NACIÓN – MINISTERIO DEFENSA-POLICIA NACIONAL
Carrera 59 N° 26-21, Edificio CAN
Bogota, D.C.

Asunto: **REMISIÓN DEMANDA Y ANEXOS**

Medio de control	**REPARACION DIRECTA**
Radicado	**13-001-23-33-000-2019-00316-00.**
Demandante	**ELOISA TORRES GONZALEZ Y OTROS.**
Demandado	**NACION – MINISTERIO DEL INTERIOR Y OTROS.**
Magistrado Ponente	**LUIS MIGUEL VILLALOBOS ÁLVAREZ.**

Cordial Saludo,

De conformidad con lo establecido en el artículo 612 del Código General del Proceso, que modifica el artículo 199 de la Ley 1437 de 2011 (CPACA), adjunto al presente, estoy enviándole, para los fines pertinentes copia de la demanda, sus anexos y del auto de sustanciación **No. 954/2019-LMVA** de fecha Veintiséis (31) de Julio del 2019, mediante el cual el despacho 002 del Tribunal Administrativo de Bolívar, RESOLVIÓ; **ADMITIR** la presente demanda en primera instancia.

SE ADJUNTA LA DEMANDA, CON SUS RESPECTIVOS ANEXOS Y EL AUTO DE SUSTANCIACIÓN **No. 954/2019-LMVA**

Atentamente,

JUAN CARLOS GALVIS BARRIOS
Secretario General

Rama Judicial
Consejo Superior de la Judicatura
República de Colombia

TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DE BOLÍVAR
OFICIO

SIGCMA

Al contestar por favor cite:
RADICADO NRO: 000-2019-00316-00
OFICIO No 0329/2020-LMVA

Cartagena de Indias D. T. y C., Veintidós (22) de Enero de Dos Mil Veinte (2020).

DOCTOR:
VICENTE BLEL SCAFF
Gobernador de Bolivar
Carretera Cartagena - Turbaco km 3, sector bajo miranda – el cortijo
La Ciudad

Asunto: **REMISIÓN DEMANDA Y ANEXOS**

Medio de control	**REPARACION DIRECTA**
Radicado	**13-001-23-33-000-2019-00316-00.**
Demandante	**ELOISA TORRES GONZALEZ Y OTROS.**
Demandado	**NACION – MINISTERIO DEL INTERIOR Y OTROS.**
Magistrado Ponente	**LUIS MIGUEL VILLALOBOS ÁLVAREZ.**

Cordial Saludo,

De conformidad con lo establecido en el artículo 612 del Código General del Proceso, que modifica el artículo 199 de la Ley 1437 de 2011 (CPACA), adjunto al presente, estoy enviándole, para los fines pertinentes copia de la demanda, sus anexos y del auto de sustanciación **No. 954/2019-LMVA** de fecha Veintiséis (31) de Julio del 2019, mediante el cual el despacho 002 del Tribunal Administrativo de Bolívar, RESOLVIÓ; **ADMITIR** la presente demanda en primera instancia.

SE ADJUNTA LA DEMANDA, CON SUS RESPECTIVOS ANEXOS Y EL AUTO DE SUSTANCIACIÓN **No. 954/2019-LMVA**

Atentamente,

JUAN CARLOS GALVIS BARRIOS
Secretario General

Rama Judicial
Consejo Superior de la Judicatura
República de Colombia

TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DE BOLÍVAR
OFICIO

SIGCMA

Al contestar por favor cite:
RADICADO NRO: 000-2019-00316-00
OFICIO No 0328/2020-LMVA

Cartagena de Indias D. T. y C., Veintidós (22) de Enero de Dos Mil Veinte (2020).

SEÑORES:
NACIÓN-MINISTERIO DEL INTERIOR
Carrera 8 N° 7 – 83
Bogota, D.C.

Asunto: **REMISIÓN DEMANDA Y ANEXOS**

Medio de control	**REPARACION DIRECTA**
Radicado	**13-001-23-33-000-2019-00316-00.**
Demandante	**ELOISA TORRES GONZALEZ Y OTROS.**
Demandado	**NACION – MINISTERIO DEL INTERIOR Y OTROS.**
Magistrado Ponente	**LUIS MIGUEL VILLALOBOS ÁLVAREZ.**

Cordial Saludo,

De conformidad con lo establecido en el artículo 612 del Código General del Proceso, que modifica el artículo 199 de la Ley 1437 de 2011 (CPACA), adjunto al presente, estoy enviándole, para los fines pertinentes copia de la demanda, sus anexos y del auto de sustanciación **No. 954/2019-LMVA** de fecha Veintiséis (31) de Julio del 2019, mediante el cual el despacho 002 del Tribunal Administrativo de Bolívar, RESOLVIÓ; **ADMITIR** la presente demanda en primera instancia.

SE ADJUNTA LA DEMANDA, CON SUS RESPECTIVOS ANEXOS Y EL AUTO DE SUSTANCIACIÓN **No. 954/2019-LMVA**

Atentamente,

JUAN CARLOS GALVIS BARRIOS
Secretario General



Rama Judicial
Consejo Superior de la Judicatura
República de Colombia

TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DE BOLÍVAR
OFICIO

SIGCMA

Al contestar por favor cite:
RADICADO NRO: 000-2019-00316-00
OFICIO No 0327/2020-LMVA

Cartagena de Indias D. T. y C., Veintidós (22) de Enero de Dos Mil Veinte (2020).

SEÑORES:
DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE LA PRESIDENCIA DE LA REPUBLICA.
Calle 7 No.6-54
Bogota, D.C.

Asunto: **REMISIÓN DEMANDA Y ANEXOS**

Medio de control	**REPARACION DIRECTA**
Radicado	**13-001-23-33-000-2019-00316-00.**
Demandante	**ELOISA TORRES GONZALEZ Y OTROS.**
Demandado	**NACION – MINISTERIO DEL INTERIOR Y OTROS.**
Magistrado Ponente	**LUIS MIGUEL VILLALOBOS ÁLVAREZ.**

Cordial Saludo,

De conformidad con lo establecido en el artículo 612 del Código General del Proceso, que modifica el artículo 199 de la Ley 1437 de 2011 (CPACA), adjunto al presente, estoy enviándole, para los fines pertinentes copia de la demanda, sus anexos y del auto de sustanciación **No. 954/2019-LMVA** de fecha Veintiséis (31) de Julio del 2019, mediante el cual el despacho 002 del Tribunal Administrativo de Bolívar, RESOLVIÓ; **ADMITIR** la presente demanda en primera instancia.

SE ADJUNTA LA DEMANDA, CON SUS RESPECTIVOS ANEXOS Y EL AUTO DE SUSTANCIACIÓN **No. 954/2019-LMVA**

Atentamente,

JUAN CARLOS GALVIS BARRIOS
Secretario General

Cartagena de Indias D. T. y C,

Señores:
H. MAGISTRADOS TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DE BOLÍVAR
E. S. D.

MEDIO DE CONTROL: **REPARACION DIRECTA**
RADICACION: **13-001-33-33-000-2019-00316-00**
ACTOR: **ELOISA TORRES DE GONZALEZ Y OTROS**
DEMANDADO: **NACION - MINDEFENSA - EJÉRCITO NACIONAL-ARMADA NACIONAL-POLICIA NACIONAL-MUNICIPIO DE SAN JACINTO**
M.P. LUIS MIGUEL VILLALQBOS ALVAREZ

YELENA PATRICIA BLANCO NUÑEZ, abogada en ejercicio, identificada con la Cédula de Ciudadanía No. 1.050.035.403 de San Jacinto Bolívar y Tarjeta Profesional No. 194.901 del Consejo Superior de la Judicatura, en mi calidad de apoderado SUSTITUTA de la **NACION – MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL – EJERCITO NACIONAL**, según poder que anexo, me permito contestar la demanda, en los siguientes términos:

FRENTE A LAS PRETENSIONES

En calidad de apoderada judicial de la parte demandada **NACION – MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL – EJERCITO NACIONAL-ARMADA NACIONAL**, me opongo a todas y cada una de las pretensiones, declaraciones y condenas formuladas en la demanda, teniendo en cuenta que mi representada no puede responder por el supuesto daño causado a los demandantes y menos aún por los hechos ocurridos hace más de 20 años.

Me opongo a la prosperidad de las pretensiones de la demanda porque no se establece de manera clara la relación de causalidad existente entre los accionantes y los hechos alegados, en relación con el actuar de mi defendida; teniendo en cuenta que no se prueban debidamente los supuestos daños causados a todos y cada uno estos, ya que se observa claramente que los hechos alegados fueron **consecuencia del HECHO DE UN TERCERO, pues dicho desplazamiento fue consecuencia, tal como ellos lo mencionan en el presente medio de control, de la incursión de grupos al margen de la ley en el departamento de Bolívar, lo cual configura CAUSAL DE EXONERACIÓN DE RESPONSABILIDAD según lo ha reiterado la jurisprudencia del Consejo de Estado.**

Igualmente, dentro de la presente acción se tiene que no se vislumbra el lleno de los requisitos formales tendientes a demostrar el daño, lo que claramente impide la prosperidad de las indemnizaciones pretendidas. La jurisprudencia del Honorable Consejo de Estado, ha establecido que para haya

lugar a la indemnización se deben reunir los siguientes requisitos:

- QUE EL DAÑO SEA CIERTO,
- QUE ESTÉ DEBIDAMENTE DEMOSTRADO
- SUFICIENTEMENTE CUANTIFICADO

Vale la pena aclarar que el daño para ser indemnizable exige entre otros requisitos, el denominado de certeza, relacionado con la realidad de su existencia, en consecuencia se opone a cualquier concepto de daño hipotético o eventual.

EXCEPCIONES

CADUCIDAD

Se tiene por establecido que la caducidad se configura cuando el plazo consagrado en la ley para instaurar algún tipo de acción, ha vencido. Es la sanción que determina la ley por el no ejercicio oportuno del derecho de acción, en tanto al exceder los plazos preclusivos para acudir a la jurisdicción, se ve limitado el derecho que le asiste a toda persona de solicitar que sea definido un conflicto por el aparato jurisdiccional del poder público. Las normas de caducidad tienen fundamento en la seguridad jurídica que debe imperar en todo ordenamiento, en el sentido de impedir que situaciones permanezcan en el tiempo, sin que sean definidas judicialmente. En otros términos, el legislador establece unos plazos razonables para que las personas, en ejercicio de una determinada acción y, con el fin de satisfacer una pretensión específica, acudan a la jurisdicción a efectos de que el respectivo litigio o controversia, sea resuelto con carácter definitivo por el juez competente[1].

El literal i, numeral 2 del artículo 164 de la Ley 1437 de 2011 no modificó el término de caducidad establecido en el Código Contencioso Administrativo anterior como vemos así quedo actualmente establecido con la reforma:

"Artículo 164. Oportunidad para presentar la demanda. La demanda deberá ser presentada:
(…) 2. En los siguientes términos, so pena de que opere la caducidad:
…i) Cuando se pretenda la reparación directa, la demanda deberá presentarse dentro del término de dos (2) años, contados a partir del día siguiente al de la ocurrencia de la acción u omisión causante del daño, o de cuando el demandante tuvo o debió tener conocimiento del mismo si fue en fecha posterior y siempre que pruebe la imposibilidad de haberlo conocido en la fecha de su ocurrencia."

[1] 11 DE AGOSTO DE 2010, CONSEJO DE ESTADO, SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO, SECCION TERCERA, CONSEJERO PONENTE: ENRIQUE GIL BOTERO, RADICACIÓN NÚMERO: 85001-23-31-000-1998-00117-01(18826)

Es de anotar que esta excepción se propone por cuanto no existe una sola prueba que acredite que estamos en presencia de un delito de lesa humanidad, evento en el cual la caducidad no es aplicable.

En concordancia con lo anterior el Consejo de Estado en caso similar expuso:

"En efecto, de la lectura de la demanda incoada se concluye que la misma pretende la reparación del daño causado como consecuencia de dos hechos: (i) la situación de desplazamiento a que se vieron avocados los actores, comoquiera que en 1988, 1999 y 2004, dada la presión de los grupos armados al margen de la ley EPL, FARC y AUC, tuvieron que abandonar el predio rural de su propiedad ubicado en la vereda Tucura, corregimiento de Batatas, municipio de Tierralta, Córdoba y (ii) la ocupación del inmueble referido desde el año 2004 por 43 familias en situación de desplazamiento forzado que, según los actores, están "al mando del señor Fernando Pico, lugarteniente del señor Adolfo Paz alias Don Berna" .

4.1 Respecto del primer hecho, de acuerdo con los hechos narrados en el libelo, en virtud de la normalización del orden público en la región y la expedición por el INCODER de la Resolución n.° 605 del 28 de marzo de 2006, que aceptó la solicitud de protección del predio rural "Puerto Rico", en el año 2007 los demandantes llegaron a un acuerdo con esa entidad para transferir el dominio sobre la hacienda por la suma de $1.167.971.289, negocio jurídico que se frustró debido a que venta que no se pudo realizar debido a que, según advirtió la Defensoría del Pueblo Regional Córdoba a los actores, en el año 2004 el predio fue ocupado por 43 familias en situación de desplazamiento forzado.

En este sentido, la Sala encuentra que en concordancia con el artículo 16 de la Ley 387 de 1997 "por la cual se adoptan medidas para la prevención del desplazamiento forzado; la atención, protección, consolidación y esta estabilización socioeconómica de los desplazados internos por la violencia", la situación fáctica a la que se alude en la demanda culminó cuando las condiciones de orden público dejaron de significar "un riesgo para la seguridad[2]" de los demandantes.

Lo anterior si se considera que, por mandato legal, la condición de desplazado cesa cuando las víctimas pueden volver a su lugar de origen o restablecerse en otro sitio, porque las circunstancias de violencia y hostigamiento que generaron el desplazamiento han desaparecido.

---

[2] CORTE CONSTITUCIONAL, SENTENCIA T-737 DE 2010, M.P. MAURICIO GONZÁLEZ CUERVO. ADEMÁS, TAMBIÉN SE PUEDE CONSULTAR LAS SENTENCIAS T-706 Y T-159 DE 2011, T-737, T-528 T-515 DE 2010 Y T-1115 DE 2008, ENTRE MUCHAS OTRAS.

Al respecto, es razonable concluir que el desplazamiento forzado causa un daño continuado que obliga a contar el término de caducidad de la acción, no a partir del día en que ocurrió el desplazamiento, sino del momento en que cesa el daño, es decir, cuando están dadas las condiciones de seguridad para que se produzca el retorno o el restablecimiento de que trata el artículo 16 de la Ley 387 de 1997. De hecho, a esta conclusión ya había llegado la Subsección C en auto de 26 de julio de 2011 (expediente 41037, C.P. Enrique Gil Botero)[3]:

"…el desplazamiento forzado también infringe un daño que es continuado y se extiende en el tiempo, como quiera que dicha conducta no se agota en el primer acto de desplazamiento, por el contrario, ***el estado de desplazado continua hasta que las personas no puedan retornar a su lugar de origen, es decir, que las causas violentas que originaron el éxodo todavía existen, y por tanto, es imposible volver****" (negrilla fuera del texto).*

Por lo anterior, la Sala estima que en el presente caso la acción se encuentra caducada, porque, según lo sostenido en el libelo, en el año 2007 "se normalizó la situación de orden público en la región", es decir, se dieron las condiciones de seguridad para el retorno en los términos del artículo 16 de la Ley 387 de 1997, razón suficiente para considerar que a partir de ese momento empezó a correr el plazo de dos años previsto en el artículo 136.8 del C.C.A. para interponer la acción de reparación directa orientada a obtener el resarcimiento del daño causado por el desplazamiento forzado de que fueron víctimas los demandantes[4]."

Finalmente no hay que dejar de lado que el desplazamiento forzado tiene un término de caducidad especial, en consideración a la calidad del delito, más sin embargo no significa que la caducidad haya quedado abolida del todo, en casos como en el que nos ocupa se debe tener en cuenta, las condiciones de seguridad de la zona que permitieran retornar a su población, pues bien se afirma con claridad a lo largo de la demanda que el desplazamiento del corregimiento de Las Palmas, se causó por los actos cometidos por grupos paramilitares, es claro que las condiciones de seguridad se encuentran normalizadas desde ya hace varios años, inclusive si tenemos en cuenta el proceso de paz culminado con los paramilitares en el año 2006:

"La desmovilización de las autodefensas, producida en cumplimiento del acuerdo de Santa Fe de Ralito, firmado el 15 de julio de 2003 con el gobierno Uribe Vélez durante su primer cuatrienio, contribuye a afianzar la tendencia

[3] CON SALVAMENTO DE VOTO DEL DOCTOR JAIME ORLANDO SANTOFIMIO GAMBOA.

[4] CONSEJO DE ESTADO, SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO, SECCION TERCERA, CONSEJERO PONENTE: STELLA CONTO DIAZ DEL CASTILLO, VEINTIDÓS (22) DE NOVIEMBRE DE DOS MIL DOCE (2012), RADICACIÓN NÚMERO: 23001-23-31-000-2010-00380-01(40177), ACTOR: LUIS ANTONIO RODRIGUEZ GARCIA Y OTRO, DEMANDADO: MINISTERIO DE DEFENSA - EJERCITO NACIONAL

descendente en las masacres que desde 2002 se venía registrando.

Las desmovilizaciones de las autodefensas se iniciaron el 25 de noviembre de 2003 en Medellín con el bloque Cacique Nutibara y ***terminaron el 15 de agosto de 2006 con el bloque Elmer Cárdenas.*** *En 38 actos se desmovilizaron 31.671 de los integrantes de los grupos irregulares. Las organizaciones con mayor número de desmovilizados fueron el bloque Central Bolívar con 6.348, el bloque Norte con 4.760, el bloque Mineros con 2.780, el bloque Héroes de Granada con 2.033 y el bloque Elmer Cárdenas con 1.538.*[5]

Antes de concluido el proceso de desmovilización, comienzan a aparecer estructuras armadas en zonas donde actuaban las autodefensas, fuertemente vinculadas al narcotráfico y otras actividades delictivas.[6]

El poder mafioso a nivel local y el narcotráfico fueron cómplices del paramilitarismo que, no obstante haberse producido la desmovilización de buena parte de su componente armado, aún se mantienen intactos.

Desde agosto de 2002 y hasta enero de 2010 se han desmovilizado 52.403 personas, 31.671 procedentes de grupos paramilitares que dejaron las armas de manera colectiva, y 20.732 miembros de grupos guerrilleros y paramilitares que se desmovilizaron individualmente. Según información de la Policía Nacional, entre el año 2001 y el mes de diciembre de 2009 han sido capturados 5.890 desmovilizados y han muerto 2.210. "[7]

Debe quedar claro que las condiciones de seguridad se normalizaron para la zona, no solo por la desmovilización de los paramilitares sino además en lo que tiene que ver con la actividad de las fuerzas militares, consta que se ha hecho presencia en el departamento de Bolívar, por medio de sus unidades.

Teniendo en cuenta lo anterior, me permito solicitar de manera respetuosa se declare que en el presente caso se configura la caducidad del medio de control.

FALTA DE LEGITIMACION POR PASIVA DEL MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL

[5] Organización de Estados Americanos – Secretaría General. (febrero de 2007). Octavo informe trimestral del Secretario General al Consejo Permanente sobre la Misión de Apoyo al Proceso de Paz en Colombia (MAPP/OEA). Documento disponible en Internet: www.mapp-oea.org

[6] Comisión Nacional de Reparación y Reconciliación.(agosto de 2007). Disidentes, rearmados y emergentes ¿bandas criminales o tercera generación paramilitar?, Bogotá, Comisión Nacional de Reparación y Rehabilitación.

[7] http://www.verdadabierta.com/justicia-y-paz/244-la-historia/auc/54-periodo4#nota2

Tal y como señala el demandante, los desplazamientos forzados se realizaron en muchas regiones debido a las incursiones de las AUC (paramilitarismo), sin que se señale taxativamente los hechos en que se configura responsabilidad del Ministerio de Defensa Nacional y así defenderse la entidad de los señalamientos que se le hacen.

De conformidad con el artículo 217 de la Carta Política *"La Nación tendrá para su defensa unas fuerzas militares permanentes constituidas por Ejercito, la Armada y la Fuerza Aérea.*

Las Fuerzas Militares tendrán como finalidad primordial la defensa de la soberanía, la independencia, la integridad del territorio nacional y del orden constitucional"

No es el Ejército Nacional el llamado a prestar protección a los particulares ya que la función primordial es la defensa de la soberanía del territorio nacional. Y en ningún caso la guarda personal de los colombianos, la cual está a cargo de los distintos organismos de la Policía Nacional, previo estudio de sus condiciones de seguridad.

No es el Ministerio De Defensa Nacional el encargado de realizar la reparación integral de cada víctima o familia, de la población desplazada es la Unidad de Reparación Integral para victimas ya que la misma tiene múltiples funciones como:

Reparación individual de victimas

Las víctimas tienen derecho a ser reparadas de manera adecuada, diferenciada, transformadora y efectiva por el daño sufrido. Se trata de cinco medidas en sus dimensiones individual, colectiva, material, moral y simbólica.





Reparación Colectiva

Es el conjunto de medidas de restitución, indemnización, rehabilitación, satisfacción y garantía de no repetición a que tienen derecho las comunidades y las organizaciones o grupos sociales y políticos, en términos políticos, materiales y simbólicos.

En los términos de la ley 1448 de 2011 y del Decreto 4800 de 2011 son sujetos de reparación colectiva las comunidades, las organizaciones sociales y políticas y los grupos sociales y políticos por violaciones a sus derechos colectivos y a los derechos individuales de sus miembros que tengan un impacto colectivo ocurridas con ocasión del conflicto armado después del 1 de enero de 1985.



Enfoque Sicosocial

A través de este enfoque se busca que la reparación a las víctimas atienda las formas de interpretación que ellos y ellas y las comunidades a las que pertenecen, dan a lo que les sucedió, desde su experiencia emocional, cognitiva y relacional, y al significado que dan a la reparación y al restablecimiento de sus derechos.

Estrategia de recuperación emocional a nivel grupal

La Unidad para las víctimas busca apoyar al Ministerio de Salud y a otras instituciones involucradas en un ejercicio de complementariedad para la atención psicosocial de las víctimas.

La Unidad para las Víctimas quiere invitarlo(a) a conocer la Estrategia de Recuperación Emocional a Nivel grupal, es un proceso en donde las personas que han vivido hechos de violencia podrán compartir su experiencia en un grupo en el que van a haber personas que como ellas están luchando o han luchado día a día para sobreponerse. La Unidad para las victimas quiere acompañar y apoyar el proceso de recuperación emocional de las personas que han sufrido por el conflicto armado.

Fondo Nacional de Reparación

El Fondo para la Reparación de las Víctimas es una cuenta especial sin personería jurídica creada por el artículo 54 de la ley 975 de 2005 y administrada por la Unidad para la Atención y Reparación Integral a las Víctimas.

El Fondo está integrado por todos los bienes o recursos que a cualquier título se entreguen por las personas o grupos armados organizados ilegales a que se refiere la Ley 975 del 2005, por recursos provenientes del presupuesto nacional, donaciones en dinero o en especie, nacionales o extranjeras y las fuentes establecidas por el artículo 177 de la Ley 1448 del 2011.

EXCEPCION DE EXISTENCIA DE POLITICAS GUBERNAMENTALES FRENTE A LA REPARACION POR DESPLAZAMIENTO FORZADO

Es importante señalar que el Gobierno Nacional ha implementado políticas de indemnización para los desplazados por la violencia en Colombia las cuales se encuentran establecidas en la Leyes 975 del 2005 y 1448 del 2011.

La población desplazada por la violencia para obtener el derecho a la reparación tiene diferentes vías

institucionales: de un lado, el acceso a la reparación a través de la vía judicial penal, regulada por la Ley 975 de 2005 para los procesos penales llevados a cabo dentro de la jurisdicción de Justicia y Paz, mediante un incidente de reparación integral de los daños causados; de otro lado, la vía judicial contencioso administrativa; y finalmente la vía administrativa;

La Corte Constitucional se refirió a la aplicación del Decreto 1290 de 2008, sobre reparación individual vía administrativa. En esta providencia la Corte aclaró lo siguiente: que tal normatividad (i) comprendía regulaciones dirigidas a la restitución, indemnización, rehabilitación, satisfacción y garantías de no repetición, (ii) colocaba en cabeza de Acción Social el programa de reparación individual, (iii) establecía el principio de solidaridad como base de la reparación individual administrativa por violaciones de los derechos fundamentales de las víctimas atribuibles a grupos armados al margen de la ley, (iv) estipulaba quiénes eran destinatarios o beneficiarios de tal derecho, y (v) establecía cuáles eran las medidas de reparación, (vi) cuáles eran los diferentes programas de los distintos organismos del Estado que debían hacerse cargo de esas medidas, y (vi) cuáles eran los trámites y plazos para el reconocimiento de la indemnización, entre otras disposiciones.[8]

En sentencia de Acción de tutela T-458 de 2010 la Corte Constitucional se refirió a las distintas vías institucionales para obtener el derecho a la reparación.

En primer lugar, mencionó la vía judicial penal regulada por la Ley 975 de 2005, para los procesos penales llevados a cabo dentro de la jurisdicción de Justicia y Paz, a través de un incidente de reparación integral de los daños causados, siendo los victimarios los primeros obligados a reparar a las víctimas, subsidiariamente y de manera solidaria el grupo criminal al que pertenezcan los perpetradores del ilícito y, residualmente, el Estado.

En segundo lugar, se refirió a la vía administrativa regulada hasta ese momento por el Decreto 1290 de 2008 a través del programa de reparación individual vía administrativa para las víctimas de grupos armados al margen de la ley, recordando la obligación del Estado de facilitar el acceso de los accionantes a la reparación tanto por la vía judicial como por la vía administrativa. En este sentido, enfatizó la Corte que las entidades encargadas "***no pueden imponer requisitos que impliquen para las víctimas una carga desproporcionada, porque no puedan cumplirlos, porque su realización desconozca la especial protección constitucional a la que tienen derecho, o porque se vulnere su dignidad***. *No obstante, las víctimas conservan la obligación mínima de presentarse ante la entidad correspondiente y solicitar el acceso a los programas*." (Énfasis de la Sala)

[8] T-222 de 2008

Así mismo, en este pronunciamiento la Corte reiteró los criterios fijados por la sentencia C-1199 de 2008, en cuanto a la diferenciación entre las medidas de reparación y las medidas de otros programas sociales que presta el gobierno de manera ordinaria en materia de políticas públicas de vivienda, educación y salud, y de la asistencia humanitaria en caso de desastres. Lo anterior, sin perjuicio de la necesaria complementariedad que debe existir entre estas medidas.

HECHO DE UN TERCERO

Al demostrarse que la entidad demandada no es responsable de la conducta asumida por un tercero que no tiene ninguna relación con la entidad, por tanto un elemento de ruptura del nexo causal en el caso que nos ocupa.

Teniendo en cuenta lo anterior, no surge del análisis de los hechos alguna intervención del Estado para poder predicar su responsabilidad por los perjuicios causados a los demandantes bajo ningún régimen de responsabilidad, toda vez que la prueba allegada hasta el momento, permite concluir que el supuesto desplazamiento, se produjo por la acción de grupos al margen de la Ley.

El Hecho De Un Tercero, Causa Real, Directa Y Eficiente Del Daño

Teniendo en cuenta la forma como se desarrollaron los hechos, no es posible atribuir responsabilidad alguna a la entidad demandada, toda vez que el daño fue causado **por un tercero.** Si bien es cierto que el Estado, tiene una función preventiva y sancionadora en relación con los hechos punibles, no puede concluirse que sea responsable de su comisión en todos los eventos; ya que son imputables a él solo cuando han tenido como causa la acción u omisión de uno de sus agentes, o facilitada por la omisión en el cumplimiento de un deber concreto de la administración, o tuvo como causa la realización de un riesgo creado lícitamente por ella.

El hecho de un tercero como causal de exoneración consiste en la intervención exclusiva de un agente jurídicamente ajeno al demandado, en la producción de un daño.

De otro lado determinar la presencia o no de la falla en el servicio impone conocer los alcances de la obligación legal impuesta a la administración, precisando la forma como el Estado debió haber cumplido con sus obligaciones y que permitan calificar la conducta de la administración como anormalmente deficiente.

Los daños sufridos por los actores tuvieron como causa directa la acción de un tercero, el daño no se originó en la prestación inadecuada del servicio, sino del hecho exclusivo

de un tercero, ya que es de conocimiento nacional e internacional que los grupos terroristas y guerrilleros tienen azotado al país con su actuar delictivo y que muchas veces se sale del control estatal sus acciones.

Como se puede evidenciar no se dan los presupuestos para declarar la responsabilidad de mi representada por que existe el rompimiento del nexo causal exonerativa del **HECHO DE UN TERCERO.**

FALTA DE LOS ELEMENTOS NECESARIOS DE IMPUTACION

En el proceso, no hay elementos de juicio suficientes que conduzcan inequívocamente a establecer la responsabilidad de la entidad demandada.

Y LA INNOMINADA:

Interpongo esta excepción frente a toda situación de hecho y/o derecho que resulte probada en el presente proceso y que beneficie los intereses de la entidad que represento.

Solicito el reconocimiento oficioso, en la sentencia, de los hechos que resulten probados y que contribuyan una excepción de fondo.

Las demás que considere el despacho.

EN CUANTO A LOS HECHOS:

El Código General del Proceso establece:

Artículo 82. Requisitos de la demanda.
Salvo disposición en contrario, la demanda con que se promueva todo proceso deberá reunir los siguientes requisitos:

(…)
5. Los hechos que le sirven de fundamento a las pretensiones, debidamente determinados, clasificados y numerados.

El C.P.A.C.A, en el mismo sentido expone:

Artículo 162. Contenido de la demanda.
Toda demanda deberá dirigirse a quien sea competente y contendrá:
(…)
3. Los hechos y omisiones que sirvan de fundamento a las pretensiones, debidamente determinados, clasificados y numerados.

En cuanto a los hechos generales de la demanda, es de anotar, que la entidad siempre ha dado cumplimiento a los fines

estatales, y a los casos particulares que por sus circunstancias demandan una atención especial, siendo que para este caso no se ha demostrado la supuesta negligencia de mi defendida, y la relación de tal omisión con el desplazamiento de los demandantes.

Respecto a los homicidios, y los bienes e ingresos de los causantes, son hechos ajenos a mi defendida, los cuales deben ser probados.

No se aportan por parte de los demandantes las pruebas que permitan demostrar la imposibilidad de retorno al lugar donde habitaba habitualmente, y presuntamente se desplazaron.

Por lo tanto, debe ser probado por parte del demandante las circunstancias en los cuales fundamenta la responsabilidad de mis representadas.

ARGUMENTOS JURIDICOS DE LA DEFENSA

DEL DEBER DE PROTECCION

El Honorable Consejo de Estado ha contemplado que si no ha existido requerimiento previo a las autoridades de protección no puede existir condena de la nación en consideración al carácter relativo de la falla del servicio. Al respecto ha manifestado:

"En estos casos la Corporación ha reiterado que el Estado no está forzado a prestar amparo especial a sus funcionarios cuando estos no lo solicitan, pues la obligación protectora del Estado no va hasta asignar oficiosamente un escolta por cada agente suyo. En esa medida, de no estar probada en forma expresa la petición en torno a la seguridad, no puede inferirse la responsabilidad de la Administración. Si no se demuestra que se ha solicitado dicho amparo no puede pretenderse atribuir responsabilidad alegando que la entidad requerida hizo caso omiso a la petición, pues ella no tuvo conocimiento de la misma. Tampoco podría imputarse una posible deficiencia en la seguridad, extendiendo el deber de las autoridades a una misión objetiva de resultado: que no se produjera ningún acto que afectara el orden social, deseo si bien loable dentro de cualquier sistema de gobierno, imposible de lograr, ni siquiera con los mayores esfuerzos y extremas medidas, a costos inimaginables[4].

Preciso es advertir, que si bien es cierto, cuando hay uso adecuado y oportuno de los recursos y medios públicos destinados a la protección ciudadana, y a pesar de ello se producen daños, no se puede deducir inexorablemente responsabilidad patrimonial de la Administración, teniendo al

Estado como un asegurador general obligado a reparar todo daño, en toda circunstancia"[9]

13

En la demanda que se presenta no existe prueba que acredite que al Ministerio de Defensa ni a la Policía nacional se le solicitó protección por parte de los demandantes y que estos recibieron la solicitud o que se negaron a tramitarla.

MECANISMOS DE REPARACION DISEÑADOS POR EL ESTADO COLOMBIANO.

DE LA JUSTICIA TRANSICIONAL

El concepto de justicia transicional hace relación a una nueva noción de justicia que opera dentro de los procesos a través de los cuales se llevan a cabo transformaciones radicales de orden político de un país que atraviesa por periodos de violencia y pasa a otro de consolidación de la paz con la vigencia del Estado de Derecho, ofreciendo respuestas legales que tiene por objetivo enfrentar las situaciones de violencia presentadas en épocas anteriores.

En el marco de las Naciones Unidas, el concepto de justicia transicional comprende la variedad de los procesos y mecanismos relacionados con los esfuerzos de una sociedad por resolver los problemas derivados de un pasado de abusos a gran escala, a fin de que los responsables rindan cuentas de sus actos, de servir a la justicia y lograr la reconciliación.

SOBRE LA REPARACION A LA LUZ DE LA LEY DE JUSTICIA Y PAZ

Para que las víctimas individuales y colectivas puedan obtener el derecho a la reparación integral el ordenamiento jurídico ha previsto hasta ahora dos vías institucionales a través de las cuales se puede cumplir con dicha finalidad, de un lado, la Ley 975 de 2005 estableció que dentro de los procesos penales llevados dentro de la jurisdicción especial de Justicia y Paz es posible iniciar un incidente de reparación integral de los daños causados con la conducta criminal, "el cual debe abrirse en la misma audiencia en la que la Sala del Tribunal Superior de Distrito judicial se declare la legalidad de la aceptación de cargos, previa solicitud expresa de la víctima, o del fiscal del caso, o del Ministerio Público a instancia de ella" (Art. 23 de la Ley 975 de 2005). En este incidente, los primeros obligados a reparar son los perpetradores de los delitos; luego, en subsidio y en virtud del principio de solidaridad, el grupo específico al que pertenezcan los perpetradores; y, residualmente, el Estado.[10]

De otro lado, a través del Decreto 1290 de 2008, el gobierno dispuso crear un programa de reparación individual por vía

[9] Consejo de Estado. Sección Tercera. Sentencia del 21 de abril del 2004. Expediente 1994-02283. M.P. Ramiro Saavedra Becerra

[10] Ver las sentencias C-370/06 y C-575/06.

administrativa para las víctimas de violaciones del derecho a la vida, la integridad física, la salud física y mental, la libertad individual y sexual por parte de grupos armados organizados al margen de la ley. Este mecanismo pretende que el Estado repare de manera anticipada a las víctimas de los grupos armados organizados al margen de la ley, en ejercicio del principio de solidaridad y obligación residual, y en atención a los parámetros de orden internacional que señalan que la reparación debe ser suficiente, efectiva, rápida y proporcional a la gravedad de las violaciones y a la entidad del daño sufrido.[11]

El reconocimiento de las medidas de reparación a las que se refiere el presente programa no exige a la víctima haber acudido previamente a la vía judicial, así como tampoco agota las posibilidades de ser beneficiario de otros programas que completen el proceso de reparación integral a las víctimas. Es importante señalar que en el marco de justicia transicional los programas de reparación administrativa son, sin menor duda, el mecanismo más idóneo para alcanzar los fines de reparación de las víctimas.

La reparación administrativa tiene por objeto reparar individualmente respecto a derechos fundamentales violados a través del reconocimiento de hechos victimizantés ejecutados antes del 22 de abril de 2008, por los grupos armados organizados al margen de la ley, específicamente los grupos autodenominados guerrilla o autodefensas.

El Estado Colombiano estableció un procedimiento para la reparación a las víctimas de la violencia, siendo destinatarios o beneficiarios de este programa las personas que hubieren sufrido daño directo como consecuencia de la violación de sus derechos fundamentales, por acción de los grupos organizados al margen de la ley.

Los hechos victimizantés por los cuales se reconoce reparación individual por vía administrativa son homicidio, desaparición forzada, secuestro, lesiones personales que sí causan incapacidad, lesiones personales que no causaron incapacidad, tortura, delitos contra la libertad e integridad sexual, reclutamiento ilegal de menores y **desplazamiento forzado.**

Para las personas que fueron víctimas de cualquiera de los citados hechos victimizantés, ocurridos con anterioridad al 22 de abril de 2008, hasta la suma de cuarenta (40) salarios mínimos mensuales legales vigentes al momento del pago. ACCIÓN SOCIAL, realizará el estudio y trámite dentro de los dieciocho (18) meses siguientes a la presentación de la

[11] Cap VII No. 11 de los Principios y directrices básicos sobre el derecho de las víctimas de violaciones manifiestas de las normas internacionales de derechos humanos y de violaciones graves del derecho internacional humanitario a interponer recursos y obtener reparaciones. Resolución 60/147. Aprobada por la Asamblea General de las Naciones Unidas y adoptada el 16 de diciembre de 2007.

solicitud, para la aprobación por parte del Comité de Reparaciones Administrativas. 15

En la página web de la Unidad de Reparación Integral para victimas antigua, acción social se comunica a las personas en situación de desplazamiento forzado lo siguiente:

"Debe tenerse en cuenta que las personas que únicamente han sido víctimas del desplazamiento forzado no tienen necesidad de presentar la solicitud, pues el solo hecho de estar registradas en el Registro Único de Población Desplazada (RUPD) les da derecho a acceder al programa de reparación individual por vía administrativa, el cual confiere para la población en circunstancias de desplazamiento forzado, un subsidio para vivienda en condiciones especialmente favorables.

En efecto, la "indemnización solidaria" en el caso de la población en situación de desplazamiento forzado sólo tiene una forma de ser otorgada, de manera especial por la situación de los destinatarios:

(i) Por núcleo familiar(ii) Se reconocerá y pagará a través de FONVIVIENDA, (iii) El reconocimiento y pago de la reparación a este grupo de población se hará a través de bolsa preferencial, (iv) Para cualquier parte del territorio nacional,(v) Para vivienda nueva o usada,(vi) Trámite prioritario en el tiempo frente a la vivienda de interés social (V.I.S.),(vii) Cupo anual mínimo de treinta mil (30.000) familias, y(viii) Esta medida de reparación se reconocerá a quienes no hayan sido incluidos en anteriores programas por la misma causa, según lo dispone el parágrafo 5° del artículo 5 del Decreto 1290 de 2008.

Por lo tanto, si un núcleo familiar de personas en situación de desplazamiento forzado ya recibió subsidio de vivienda, o se encuentra en estado "calificado" que quiere decir a la espera de que haya disponibilidad presupuestal para otorgárselo, no podrá recibirlo de nuevo. El subsidio de vivienda sólo se reconocerá a aquéllos núcleos familiares que no hubieren sido incluidos con anterioridad.

Si, además del desplazamiento forzado, una persona desplazada ha sido víctima de otros hechos dentro de la lista de los descritos anteriormente, sí deberá presentar solicitud de reclamación de acuerdo con el tipo de violación de derechos, distinto al de desplazamiento forzado"

El Decreto 1290 de 2008 **"Por el cual se crea el Programa de Reparación Individual por vía administrativa para las víctimas de los grupos armados organizados al margen de la ley"**, establece:

Los deberes establecidos en el Decreto comprenden:

INDEMNIZACIÓN.

• HOMICIDIO, DESAPARICIÓN FORZADA Y SECUESTRO: Cuarenta (40) SMML.
(…)
• DESPLAZAMIENTO FORZADO: Hasta veintisiete (27) SMML.

RESTITUCIÓN.

Acciones que permitan a la víctima regresar a la situación anterior a la comisión del delito.

REHABILITACIÓN.

Asistencia para la recuperación de traumas físicos y psicológicos.

Así las cosas, diferentes entidades están involucradas en el programa de reparación por vía administrativa por la vía de la colaboración armónica. El Comité de Reparaciones Administrativas tiene la función de decidir sobre el otorgamiento de las medidas de reparación y el monto económico de las mismas, así como promover acciones de dignificación y reconocimiento público de las víctimas. Igualmente, entidades distintas a Acción Social pueden ser encargadas de ejecutar medidas específicas de reparación. Además, según el artículo 34 del Decreto 1290, la obligación de asesoría legal de las víctimas recae principalmente en la Defensoría del Pueblo y la Comisión Nacional de Reparación y Reconciliación.

Con todo, la principal entidad encargada del programa de reparación por vía administrativa es la Unidad de Reparación Integral para victimas antigua Acción Social. Así lo establece el artículo primero del Decreto 1290 de 2008 y, por ello, es a esta entidad a quien corresponde adelantar los trámites de recepción de las solicitudes, estudiar su viabilidad, y gestionar la ejecución de las medidas de reparación otorgadas.

En sentencia C-370 de 2006, que analizó la constitucionalidad de la Ley de Justicia y Paz la H. Corte Constitucional señaló:

6.2.4.1.12. En primer lugar, al menos en principio, no parece existir una razón constitucional suficiente para que, frente a procesos de violencia masiva, se deje de aplicar el principio general según el cual quien causa el daño debe repararlo. Por el contrario, como ya lo ha explicado la Corte, las normas, la doctrina y la jurisprudencia nacional e internacional han considerado que la reparación económica a cargo del patrimonio propio del perpetrador es una de las condiciones necesarias para garantizar los derechos de las víctimas y promover la lucha contra la impunidad. Sólo en el caso en el cual el Estado resulte responsable - por acción o

por omisión - o cuando los recursos propios de los responsables no son suficientes para pagar el costo de reparaciones masivas, el Estado entra a asumir la responsabilidad subsidiaria que esto implica. Y esta distribución de responsabilidades no parece variar en procesos de justicia transicional hacia la paz.
(…)

6.2.4.1.13(…). La Corte no desconoce que frente al tipo de delitos de que trata la ley demandada parece necesario que los recursos públicos concurran a la reparación, pero esto solo de forma subsidiaria. Esto no obsta, como ya se mencionó, para que el legislador pueda modular, de manera razonable y proporcionada a las circunstancias de cada caso, esta responsabilidad. Lo que no puede hacer es relevar completamente a los perpetradores de delitos atroces o de violencia masiva, de la responsabilidad que les corresponde por tales delitos. De esta manera, resulta acorde con la Constitución que los perpetradores de este tipo de delitos respondan con su propio patrimonio por los perjuicios con ellos causados, con observancia de las normas procesales ordinarias que trazan un límite a la responsabilidad patrimonial en la preservación de la subsistencia digna del sujeto a quien dicha responsabilidad se imputa, circunstancia que habrá de determinarse en atención a las circunstancias particulares de cada caso individual.

(…)

6.2.4.1.15. Finalmente, no sobra señalar que, en todo caso, la reparación no puede quedar absolutamente sometida a la voluntad política de quienes definen las normas de presupuesto, pues es un derecho de las víctimas que debe ser satisfecho, especialmente, en procesos que persigan la paz y la reconciliación. Por ello, resulta razonable que la reducción de las penas que la norma establece se encuentre acompañada de la adopción de otras medidas que, como el pago de los daños y la restitución de los bienes, puedan constituir un marco justo y adecuado para alcanzar de forma sostenible la finalidad buscada.
6.2.4.3.1.2. La Corte considera necesario detenerse en el contenido preciso de la norma que se estudia para dilucidar este cargo de inconstitucionalidad. En virtud de tal disposición, la Red de Solidaridad, al momento de liquidar y pagar las indemnizaciones que hayan sido decretadas por los jueces de conformidad con las disposiciones establecidas en la misma Ley 975 de 2005, habrá de sujetarse a los límites establecidos para ello en el Presupuesto Nacional. Ello implica que, en virtud de esta norma, pueden presentarse situaciones en las cuales una indemnización que ha sido reconocida y ordenada por un juez, creando así un derecho cierto y concreto en cabeza de una o más víctimas, puede ser limitada al momento de su liquidación y pago por parte de la Red de Solidaridad Social, en caso de que no exista suficiente disponibilidad de recursos en el Presupuesto

Nacional para ello. En otras palabras, la norma que se estudia permite que la materialización de un derecho cierto y reconocido judicialmente -v.g. el derecho a recibir una indemnización decretada judicialmente en tanto elemento de la reparación por los daños sufridos en virtud de violaciones de los derechos humanos- quede sujeta a una contingencia posterior, consistente en que existan suficientes recursos dentro del Presupuesto Nacional para pagarla.

6.2.4.3.1.3. En criterio de la Corte, esta limitación es desproporcionada, y constituye una afectación excesiva del derecho de las víctimas a la reparación. Una vez que se ha ordenado, como consecuencia de un proceso judicial adelantado con las formalidades de la ley, que una persona que ha sido víctima de una violación de sus derechos humanos tiene derecho a recibir una determinada suma de dinero en calidad de indemnización, se consolida a su favor un derecho cierto que no puede estar sujeto a posteriores modificaciones, mucho menos cuando éstas se derivan de la disponibilidad de recursos en el Presupuesto General de la Nación. Una vez se haya llegado a una decisión judicial sobre el monto de la indemnización a decretar para reparar los daños sufridos por las víctimas, ésta genera un derecho cierto que no puede ser modificado posteriormente por la Red de Solidaridad Social, en su función de liquidador y pagador de dichas indemnizaciones.

6.2.4.3.1.4. Adicionalmente, el deber de reparar recae sobre el responsable del delito que causó el daño, de tal forma que el presupuesto general de la nación no es la única fuente de recursos para financiar el pago de las indemnizaciones judicialmente decretadas. La norma juzgada parecería eximir al condenado de su deber de reparar en cuanto al elemento de la indemnización.

6.2.4.3.1.5. Lo anterior no significa que la disponibilidad de recursos públicos sea irrelevante o que la Comisión Nacional de Reparación y Rehabilitación pierda su facultad de fijar criterios para distribuir los recursos destinados a la reparación (artículo 52.6). Lo que sucede es que el derecho cierto no se puede desconocer en virtud de los recursos disponibles en una determinada vigencia fiscal. Las limitaciones presupuestales justifican medidas de distribución equitativas y temporales de los recursos escasos, pero no el desconocimiento del derecho judicialmente reconocido, situación diferente a aquella en la cual se puede encontrar quien no cuenta a su favor con una providencia judicial específica que ya haya definido el monto de la indemnización a que tiene derecho.

6.2.4.3.1.6. Por las anteriores razones, al constituir una afectación desproporcionada del derecho de las víctimas a la reparación que violenta las obligaciones constitucionales e internacionales del Estado colombiano en la materia, la expresión "dentro de los límites autorizados en el

Presupuesto Nacional" del numeral 56.1 del artículo 55 será declarada inexequible. (Resaltado fuera de texto)

La inexequibilidad de la norma anterior conlleva a que el Estado Colombiano no puede supeditar las indemnizaciones al presupuesto, sino que debe garantizar dicha reparación a las víctimas del conflicto, al tener una derecho cierto a la luz de la Ley de justicia y paz.

Adicionalmente se debe tener en cuenta el proyecto de Ley que cursa actualmente en el Congreso que busca restituir a las víctimas sus propiedades.

PROCEDIMIENTO PARA EL RECONOCIMIENTO Y APLICACIÓN DE LA REPARACIÓN INDIVIDUAL POR VÍA ADMINISTRATIVA

1. Solicitar voluntariamente la reparación.
2. Llenar el formulario "solicitud de reparación administrativa Comité de Reparaciones Administrativas".
3. Identificación de la verificación de la información.
4. Informe técnico.
5. Verificación de la información.
6. Término no mayor de dieciocho meses para dar respuesta al solicitante.

Es importante aclarar que las víctimas no requerirán de un abogado para el realizar el trámite y que la solicitud se debe presentar dentro de los dos próximos años.

DE LOS ELEMENTOS DE LA RESPONSABILIDAD - FALLA DEL SERVICIO.

En la teoría de responsabilidad del Estado se requiere para que se configure los siguientes requisitos:

- Una actuación de la administración calificada de irregular por omisión o por acción tardía o defectuosa, denominada como culpa, falta o falla del servicio.

- Un daño o perjuicio que reúne las características de cierto o real, especial, anormal y que refiera a una situación jurídicamente protegida pues es lógico que quien se encuentra en una situación ilegal debe correr los riesgos que ella produzca.

- El nexo causal entre el daño y la actuación, es decir que el daño debe ser efecto o resultado de aquella actuación imputable a la administración, la cual debe ser actual o próxima, determinante del daño y apta e idónea para causarlo.

Con relación al primero de estos elementos tenemos que se demanda por el presunto desplazamiento forzado de los accionantes.

Con relación al segundo de estos elementos se observa que los perjuicios ocasionados a la población fueron causados por el actuar de los grupos al margen de la Ley y no por el actuar de la fuerza pública, configurándose el hecho de un tercero.

Y con relación al tercero de estos elementos, es bien sabido que el artículo 90, inc. 1° de la Carta Política, exige - en orden a deducir la responsabilidad patrimonial del Estado -, que los daños antijurídicos sean "causados por la acción o la omisión de las autoridades públicas", con lo cual se refiere al fenómeno de la imputabilidad, tanto fáctica como jurídica.

De allí que el elemento indispensable - aunque no siempre suficiente - para la imputación, es el nexo causal entre el hecho causante del daño y el daño mismo, de modo que este sea el efecto del primero. En este entendimiento, la imputación del daño al Estado depende, en este caso, de que su causación obedezca a la acción o a la omisión de las autoridades públicas, en desarrollo del servicio público o en nexo con él.

Imputar –para nuestro caso– es atribuir el daño que padeció la víctima al Estado, circunstancia que se constituye en condición sine qua non para declarar la responsabilidad patrimonial de este último.

De allí que elemento indispensable –aunque no siempre suficiente – para la imputación, es el nexo causal entre el hecho causante del daño y el daño mismo, de modo que este sea el efecto del primero.

Por eso, la parte última del inciso primero del artículo 90 de la Constitución Política, en cuanto exige –en orden a deducir la responsabilidad patrimonial del Estado–, que los daños antijurídicos sean "causados por la acción o la omisión de las autoridades públicas", está refiriéndose al fenómeno de la imputabilidad, tanto fáctica como jurídica. Rodrigo Escobar Gil se refiere al punto en estos términos:

"... para el nacimiento de la obligación de reparar no basta sólo la imputatio facti; es decir, la relación de causalidad entre un hecho y un daño, sino que es necesario la imputatio juris, esto es, una razón de derecho que justifique que la disminución patrimonial sufrida por la víctima se desplace al patrimonio del ofensor". (Rodrigo Escobar Gil. Teoría general de los contratos de la administración pública. Legis, pág. 259)

Leguina lo expresa de esta manera:

"Para poder imputar un daño a un ente público, lo que interesa es que el ente tenga la titularidad del servicio o de la actividad desarrollada por sus funcionarios".(Ibidem, pág. 169).

García de Enterría se ocupa también de los "títulos y modalidades de imputación del daño a la administración" y, entre ellos se ocupa de "la integración del agente en la organización o actividad" –por la cual se ocasiona el daño, aunque advierte que "...por muy generosa que quiera ser la formula legal, es obvio que la cobertura de la administración no puede ser indefinida entre estos casos, de forma que alcance a los daños puramente personales del agente "puesto que "El fenómeno de imputación a la administración de la conducta lesiva de las personas que emplea se detiene, naturalmente, en los límites del servicio público, que es la referencia que la ley utiliza, excluyendo la actividad privada de aquellos".(Eduardo García de Enterría y Tomás Ramón Fernández. Curso de Derecho Administrativo. Editorial Civitas, volumen II, pág. 389.).-

En este entendimiento, la imputación del daño al Estado depende, en este caso, de que su causación obedezca a la acción o a la omisión de las autoridades públicas, en desarrollo del servicio público o en nexo con él. (Sentencia 10948 y 11643 de octubre 21 de 1999. Consejo de estado-Sección tercera.)

REQUISITOS DE LA POBLACION DESPLAZADA

Para tener derecho a los beneficios dispuestos en la ley 387 de 1997, se requiere que el beneficiario presente una declaración de los hechos del desplazamiento forzado ante las entidades autorizadas por la ley y de esta forma se pueda realizar la respectiva inscripción en el RUPD, tal y como lo dispone el artículo 32 de la citada ley 387.

Se insiste que respecto a la reparación de las víctimas se establecieron dos mecanismos de reparación por vía administrativa y por vía judicial, por lo cual deberá corroborarse con la Unidad de Atención y Reparación Integral a las Víctimas si el señor LUIS ALFONSO CAAMAÑO Y OTROS ya fueron reparados, de conformidad con lo expuesto por el honorable Consejo de Estado en sentencia de fecha 5 de febrero de 2015, radicación: 11001-03-15-000-2014-03343-00, Consejero Ponente: MARIA ELIZABETH GARCIA GONZALEZ

"… La Sala advierte que el Gobierno Nacional ha implementado dos mecanismos para garantizar la reparación a las víctimas del conflicto armado, en cumplimiento con lo ordenado en diferentes instrumentos internacionales, los cuales son: i) por vía judicial, mediante la Ley 975 de 2005 (incidente de reparación) y ii) por vía administrativa… La reparación por vía administrativa, fue regulada inicialmente por el Decreto 1290 de 2008, por medio del cual se pretende implementar un procedimiento administrativo que permita a los afectados obtener una reparación de manera anticipada. Posteriormente, en virtud de la Ley 1448 de 2011, por la cual se dictan medidas de atención, asistencia y reparación integral a las victimas del conflicto armado interno y se dictan otras

disposiciones, se reguló, entre otros aspectos, todo lo relacionado con la reparación de las víctimas del conflicto armado, entendida ésta como todas aquellas medidas tendientes a lograr la restitución, indemnización, rehabilitación, satisfacción y garantías de no repetición, ya sea, individual, colectiva, material, moral o simbólica. En el caso concreto, se advierte que lo pretendido por la actora es el reconocimiento de la indemnización administrativa, la cual está consagrada en el artículo 132, ibídem, que le impone la obligación al Gobierno Nacional de reglamentar el trámite, procedimiento, mecanismo, montos y demás parámetros para el otorgamiento de la misma. En virtud del anterior mandato, el Gobierno Nacional expidió el Decreto 4800 de 20 de diciembre de 2011, mediante el cual se establecieron los mecanismos para la implementación del programa de reparación a las víctimas creado por la Ley 1448 de 2011, y a su vez, derogó el Decreto 1290 de 2008… El Decreto 4800 de 2011, en el Título VII, Capítulo III, reguló lo relacionado con la indemnización administrativa, la cual estará a cargo de la UARIV, quien se encargará de administrar los recursos destinados para dicho fin. NOTA DE RELATORIA: En lo relacionado con el derecho a la reparación de las víctimas del conflicto armado, consultar sentencia del 4 de mayo de 2011, exp. 2011-00109-01. Ahora bien, en lo atinente a la protección vía tutela del derecho a la reparación a las víctimas del conflicto armado, ver sentencia del 1 de diciembre de 2011, exp.2011-02421-01. Ambas sentencias de esta Corporación."

INEXISTENCIA DE LOS PRESUPUESTOS DE RESPONSABILIDAD DEL ESTADO

DE LA RESPONSABILIDAD DEL ESTADO POR DESPLAZAMIENTO FORZADO-PRECEDENTE JUDICIAL.

La H. Corte Constitucional ha señalado que para que se concrete la situación de desplazamiento forzado se deben dar los siguientes presupuestos:

"(i) La coacción, que obliga al afectado a desplazarse dentro del territorio nacional, así como su permanencia dentro de las fronteras del territorio nacional; (ii) La amenaza o efectiva violación de derechos fundamentales, toda vez que la definición legal indica que ese desplazamiento se produce porque la vida, la integridad física, la seguridad y la libertad personal "han sido vulneradas o se encuentran directamente amenazadas"; y (iii) La existencia de unos hechos determinantes, tales como el conflicto armado interno; disturbios y tensiones interiores; violencia generalizada, violaciones masivas de los Derechos Humanos; infracciones al Derecho Internacional Humanitario, "u otras circunstancias

emanadas de las situaciones anteriores que puedan alterar o alteren drásticamente el orden público" [12].

Adicionalmente la Corte Constitucional ha señalado:

que en caso de contradicción al momento de aplicar la definición ajustada a un caso de persona o personas desplazadas internamente deberá acudirse a la aplicación del "principio pro homine" según el cual son varios los supuestos en los que encajaría la consideración de una situación de desplazado interno: a) como consecuencia de la acción ilegítima de las autoridades del estado; b) la acción u omisión legítima del Estado; c) teniendo en cuenta la región del país, la estigmatización derivada para la persona y su familia cuando como consecuencia de un proceso penal seguido por hechos ligados al conflicto armado interno, es absuelto posteriormente, y amenazado por grupos armados ilegales.[13]

El H. Consejo de Estado ha señalado que para que se configure la responsabilidad del Estado por desplazamiento forzado ha de darse los siguientes presupuestos:

La Sala debe examinar la responsabilidad del Estado siempre que se demuestre o acredite la i) la coacción que se traduzca en la imperiosa necesidad del afectado (s) de desplazarse de su lugar habitual de residencia (o donde está la afincó); la existencia de cualquier tipo de amenaza o la concreción de la violación de los derechos fundamentales (ya sea en la vida, integridad física, seguridad y libertad personal); y la existencia de hechos determinantes como: "conflicto armado interno; disturbios y tensiones interiores; violencia generalizada, violaciones masivas de los Derechos Humanos; infracciones al Derecho Internacional Humanitario, "u otras circunstancias emanadas de las situaciones anteriores que puedan alterar o alteren drásticamente el orden público"[14]

Adicionalmente el Consejo de Estado ha señalado que:

La responsabilidad del Estado cuando se produce un desplazamiento forzado. Para el a quo, la responsabilidad de la entidad demandada debía analizarse bajo el régimen clásico de la falla en el servicio. Desde la perspectiva de la responsabilidad del Estado, el precedente de la Sala ha señalado,

"Esta Sección del Consejo de Estado ha reiterado en varios pronunciamientos que en casos -como el que ahora ocupa la atención de la Sala- en los cuales se endilga a la Administración una omisión derivada del presunto incumplimiento de las funciones u obligaciones legalmente a

---

[12] Corte Constitucional, sentencia C-372 de 27 de mayo de 2009.

[13] Corte Constitucional, sentencia T-630 de 2007.

[14] Consejo de Estado – Sección Tercera, proceso 31093

su cargo, el título de imputación aplicable es el de la falla del servicio"15.

Dicho encuadramiento ***lleva a plantear la falla del servicio a partir de la omisión determinante en la que se encuentran incursas las autoridades públicas*** *"en el cumplimiento de las funciones que el ordenamiento jurídico le ha atribuido", de tal manera que se hace necesario evaluar el contenido de las obligaciones fijadas por el ordenamiento jurídico a cada entidad u órgano de la administración pública llamado a cumplirlas y, el grado o nivel de cumplimiento para el caso especifico16.*

DE LA FALLA DEL SERVICIO COMO PRESUPUESTO DE RESPONSABILIDAD EN DESPLAZAMIENTO FORZADO.

En recientes sentencias el H. Consejo de Estado ha venido señalando los presupuestos de responsabilidad para que se configure falla del servicio en desplazamiento forzado.

En efecto el Consejo de Estado ha señalado[17]:

Para encuadrar al supuesto mencionado, es necesario que se haya demostrado en el caso concreto la existencia de los hechos, de los "riesgos inminentes y cognoscibles" y de la omisión del Estado de adoptar todas las medidas razonables para haber precavido y prevenido la ocurrencia de las amenazas y/o vulneraciones de los derechos fundamentales, o de los derechos humanos de los demandantes, para asi concretarse la situación fáctica de desplazamiento forzado que estos invocaron.

(...)

Si bien la Inspección Municipal de La Cooperativa se encontraba en una zona que había sido objeto de acciones de grupos armados ilegales, lo que constituye un hecho notorio, especificamente el municipio de Mapiripán (Meta), con las pruebas allegadas al proceso no se logra determinar que se haya producido una incursión de estos grupos en la mencionada Inspección, o que se haya denunciado por los demandantes o la comunidad amenazas contra su vida, integridad y bienes, ya que no consta que los demandantes hayan acudido ante alguna autoridad local, departamental, la Defensoría o, del orden nacional informando y solicitando de las autoridades civiles, militares y policivas que operaban en esa jurisdicción la protección efectiva para su vida y bienes.

---

[15] Sentencias de 8 de marzo de 2007, Exp. 27434; de 15 de agosto de 2007, Exps. 00004 AG y 00385 AG; de 18 de febrero de 2010, Exp.18436.

[16] Sentencia de 18 de febrero de 2010, Exp.18436.

[17] Sentencia del 21 de febrero del 2011. Expediente 31093. C.P. Orlando Santofimio.

Al no demostrarse la ocurrencia concreta de los hechos señalados en la demanda el 28 de diciembre de 1999, no puede la Sala inferir de manera indirecta que los demandantes se encontraban en una situación de desplazamiento forzado, porque si bien se trataba de una zona en la que se reconoció por el Estado la existencia de conflicto armado, y era un hecho notorio la masacre ocurrida en el mes de julio de 1998, en el municipio de Mapiripán, no puede esto ser suficiente para encontrar que el Estado, en el caso concreto, desatendió los deberes jurídicos de prevención y protección de la vida, integridad física y libertad personal de los demandantes, de lo contrario se abriría la posibilidad de establecer la responsabilidad del Estado con base valoraciones hipotéticas que no se corroboran probatoriamente, sin perjuicio de entender que zonas como la Inspección Municipal de La Cooperativa estaban en el epicentro y en la confluencia de diferentes actores armados ilegales (en las declaraciones recogidas en los Consejos de Seguridad realizados se pone de presente esto) y en la concurrencia de múltiples factores de violencia. Luego, no está plenamente acreditado el daño antijurídico relacionado indudablemente con la situación de desplazamiento forzado, sino que se pretendió afirmar en abstracto su ocurrencia.

Por lo tanto, no puede la Sala considerar la existencia de una posición de garante institucional en abstracto, cuando el daño antijurídico no está sustentado en el caudal probatorio que obre en cada caso en concreto. De lo contrario, la decisión judicial tendría más una vocación de corrección de la política institucional, y no de decisión judicial ceñida estrictamente al daño y a la imputación jurídica probada dentro del proceso. El Estado tiene una obligación positiva frente a la protección de los derechos humanos de las víctimas del conflicto armado, lo que no implica que deba imputarse la responsabilidad de este sin el sustento probatorio suficiente.

En ese sentido, el precedente jurisprudencial constitucional establece,

"Se dice que hay derecho a protección cuando un titular de derechos fundamentales le exige al Estado que lo defienda frente a intervenciones injustas de terceros o del mismo Estado. El caso clásico es la protección a la vida. Pero en circunstancias particularmente complicadas, como es el caso de la violencia en Colombia, la posición no puede ser de todo o nada, sino que el propio Estado puede efectuar una COMPETENCIA DE PRONÓSTICO para ponderar cuándo y hasta donde puede dar el Estado una protección real y no teórica. Por supuesto que el Estado está obligado a hacer todo lo posible para proteger la vida de los asociados, máxime cuando el Estado debe "adoptar medidas en favor de grupos discriminados o marginados"[18].

---

[18] Corte Constitucional, sentencia T – 327 de 1997.

Por lo tanto, para configurarse una falla del servicio por parte de la demandada, se debe probar por los actores:

1. La existencia las amenazas que se señalan por los demandantes.
2. La solicitud de protección a las autoridades frente al peligro que tenían de sus vidas o informe de la situación que estaban atravesando.
3. La acción u omisión ilegitima del Estado de sus deberes.
4. Los motivos por los cuales no han regresado a su ciudad de origen y la razón por la cual los motivos de su presunto desplazamiento aún continúan.

Por otra parte, en punto al deber general de seguridad que debe prestar el Ejército Nacional a los ciudadanos, se reitera que es de medio y no de resultado, por tanto la Entidad no está compelida a evitar en términos absolutos todas las manifestaciones de la delincuencia en la sociedad, excepto cuando el deber se concretice a través de medidas de protección concedidas a la población vulnerable o afectada y siempre que se demuestre que no fueron atendidas por la Institución.

En el sub lite no reposa medio de convicción que demuestre que los demandantes hubieran solicitado al Ejército Nacional protección para él y sus parientes, como para predicar que la obligación general de brindar seguridad a todos los habitantes de nuestra patria, se objetivizó en ellos; pertinente es recalcar que la misión del Ejecito Nacional se concreta en defender *la soberanía, la independencia y la integridad territorial, para contribuir a generar un ambiente de paz, seguridad y desarrollo que garantice el orden constitucional de la nación*, no en la de proveer protección concreta a los ciudadanos colombianos, pues dicha competencia radica exclusivamente en otras dependencias del Estado.

Vistas así las cosas, no existe nexo de causalidad entre alguna omisión de protección o seguridad por parte del Ejército Nacional y el resultado dañoso; en estas condiciones, es imposible formular imputación

Es de tener en cuenta que el demandante señala en su demanda que su desplazamiento obedeció a amenazas de paramilitares, razón por la cual se configura la causal de exculpación de HECHO DE UN TERCERO.

INIMPUTABILIDAD DE RESPONSABILIDAD A LA ENTIDAD DEMANDADA

Sin duda, sostuvo el Consejo de Estado en sentencia del 9 de mayo de 2011, cuyo consejero Ponente fue el Dr. Jaime Orlando Santofimio Gamboa dentro del Expediente No. 54001-23-31-000-1994-08654-01(19976) que "*en la actualidad todo régimen de responsabilidad patrimonial del Estado exige la afirmación*

*del principio de imputabilidad19, según el cual, la indemnización del daño antijurídico cabe achacarla al Estado cuando haya el sustento fáctico y la atribución jurídica"20. Pues se reitera, el derecho no puede apartarse de las "estructuras reales si quiere tener alguna eficacia sobre las mismas"*21.

Y continúa indicando:

En cuanto a esto, cabe precisar que la tendencia de la responsabilidad del Estado en la actualidad está marcada por la imputación objetiva, título autónomo que "parte de los límites de lo previsible por una persona prudente a la hora de adoptar las decisiones"22. Siendo esto así, la imputación objetiva implica la "atribución", lo que denota en lenguaje filosófico-jurídico una prescripción, más que una descripción. Luego, la contribución que nos que nos ofrece la imputación objetiva, cuando hay lugar a su aplicación, es la de rechazar la simple averiguación descriptiva, instrumental y empírica de "cuando un resultado lesivo es verdaderamente obra del autor de una determinada conducta"23.

Esto, sin duda, es un aporte que se representa en lo considerado por Larenz según el cual había necesidad de "excluir del concepto de acción sus efectos imprevisibles, por entender que éstos no pueden considerarse obra del autor

---

19 En los términos de Kant, dicha imputación se entiende: "Imputación (imputatio) en sentido moral es el juicio por medio del cual alguien es considerado como autor (causa libera) de una acción, que entonces se llama acto (factum) y está sometida a leyes; si el juicio lleva consigo a la vez las consecuencias jurídicas del acto, es una imputación judicial (imputatioiudiciaria), en caso contrario, sólo una imputación dictaminadora (imputatiodiiudicatoria)". KANT, I. La metafísica de las costumbres. Madrid, Alianza, 1989, p.35.

20 El "otro principio de responsabilidad patrimonial del Estado es el de imputabilidad. De conformidad con éste, la indemnización del daño antijurídico le corresponde al estado cuando exista título jurídico de atribución, es decir, cuando de la voluntad del constituyente o del legislador pueda deducirse que la acción u omisión de una autoridad pública compromete al Estado con sus resultados". Corte Constitucional, sentencia C-254 de 25 de marzo de 2003.

21 "Tenía razón Welzel al considerar que el Derecho debe respetar estructuras antropológicas como la capacidad de anticipación mental de objetivos cuando se dirige al hombre mediante normas. Desde luego, si el ser humano no tuviera capacidad de adoptar o dejar de adoptar decisiones teniendo en cuenta motivos normativos, sería inútil tratar de influir en el comportamiento humano mediante normas prohibitivas o preceptivas". MIR PUIG, Santiago. "Significado y alcance de la imputación objetiva en el derecho penal", en Revista Electrónica de Ciencia Penal y Criminologia. 05-05-2003 [http://criminet.urg.es/recpc], pp.6 y 7.

22 "El Derecho se dirige a hombre y no a adivinos. Declarar típica toda acción que produzca un resultado dañoso, aun cuando éste fuese imprevisible, significaría que la ley no tiene en cuenta para nada la naturaleza de sus destinatarios; pues una característica del hombre es precisamente la de que no puede prever más que muy limitadamente las consecuencias condicionados por sus actos. Vincular un juicio de valor negativo (el de antijuridicidad) a la producción de un resultado que el hombre prudente no puede prever sería desconocer la naturaleza de las cosas (más concretamente): la naturaleza del hombre". GIMBERNAT ORDEIG, E. Delitos cualificados por el resultado y relación de causalidad. Madrid, 1990, pp.77 ss.

23 MIR PUIG, Santiago. Santiago. "Significado y alcance de la imputación objetiva en el derecho penal", ob., cit., p.7.

de la acción, sino obra del azar"24. Con lo anterior, se logra superar, definitivamente, en el juicio de responsabilidad, la aplicación tanto de la teoría de la equivalencia de condiciones, como de la causalidad adecuada, ofreciéndose como un correctivo de la causalidad, donde será determinante la magnitud del riesgo y su carácter permisible o no25.

Dicha tendencia es la que marcó el precedente jurisprudencial constitucional, pero ampliando la consideración de la imputación (desde la perspectiva de la imputación objetiva) a la posición de garante donde la exigencia del principio de proporcionalidad es necesario para considerar si cabía la adopción de medidas razonables para prevenir la producción del daño antijuridico, y así se motivara el juicio de imputación.

En los anteriores términos, la responsabilidad extracontractual del Estado se puede configurar una vez se demuestre el daño antijurídico y la imputación (desde el ámbito fáctico y jurídico), hecho este que como se ha sostenido a lo largo de este escrito no se prueba.

LAS OBLIGACIONES DEL ESTADO FRENTE A LAS PERSONAS RESIDENTES EN COLOMBIA

Frente a las obligaciones que tiene el Estado en torno a las personas naturales residentes en Colombia, es necesario hacer el siguiente repaso constitucional:

El artículo 2° inciso 2° de la Carta Magna, hace recaer en la autoridad de la República, la obligación de proteger entre otros derechos fundamentales, el de la vida:

"Artículo 2° LOS FINES DEL ESTADO (…)
Las autoridades de la República están instituidas para proteger a todas las personas residentes en Colombia, en su vida, honra, bienes, creencias y demás derechos y libertades, y para asegurar el cumplimiento de los deberes sociales del Estado y de los particulares"

En lo que hace a la responsabilidad jurídica de las autoridades el artículo 6° constitucional preceptúa:

"Artículo 6° LIBERTAD INDIVIDUAL Y PRINCIPIO DE LEGALIDAD. Los particulares sólo son responsables ante las autoridades por infringir la Constitución y las leyes. Los servidores Públicos lo son por la misma causa y por omisión o extralimitación en el ejercicio de sus funciones"

---

[24] *LARENZ, K. "Hegelszurechnungslehre", en MIR PUIG, Santiago. "Significado y alcance de la imputación objetiva en el derecho penal", ob., cit., p.7.*

[25] *JAKOBS, G. La imputación objetiva en el derecho penal. Bogotá, Universidad Extemado, 1994.*

Por su parte el artículo 90 en su inciso 1° nos habla de la responsabilidad extracontractual del Estado cuando dice:

"El Estado responderá patrimonialmente por los daños antijurídicos que le sean imputables, causados por la acción o la omisión de las autoridades públicas.

"En el evento de ser condenado el Estado a la reparación patrimonial de uno de tales daños, que haya sido consecuencia de la conducta dolosa o gravemente
Culposa de un agente suyo, aquél deberá repetir contra éste".

Pues bien, luego de este recuento normativo, cabe preguntar: ¿Hasta dónde llega la obligación del Estado Colombiano de proteger la vida de los residentes en este país?

Es claro, que conforme a las normas constitucionales, existe el deber de las autoridades de proteger la vida e integridad de todas las personas residentes en Colombia, dentro de un marco de igualdad sin ningún tipo de discriminación, pero esta obligación igualmente se sujeta a algunos parámetros, el cual es el conocimiento de los hechos para que puedan actuar, ya que para el Estado - Fuerza Pública le es imposible cuidar a cada uno de los habitantes del país.

El H. Consejo de Estado[26] ha compartido esta tesis al señalar:

RELATIVIDAD DE LA FALLA DEL SERVICIO - Concepto. Alcances / FALLA RELATIVA DEL SERVICIO - Concepto. Alcances / RELATIVIDAD DE LA OBLIGACION - Capacidad estatal limitada

No obstante, cabe señalar que la Sala ha considerado que a pesar de que es deber del Estado brindar protección a todas las personas residentes en el pais, no le son imputables todos los daños a la vida o a los bienes de las personas causados por terceros, porque las obligaciones del Estado son relativas, en tanto limitadas por las capacidades que en cada caso concreto se establezcan, dado que "nadie está obligado a lo imposible". Aunque, se destaca que esta misma Corporación en providencias posteriores ha aclarado que la relatividad de las obligaciones del Estado no excusa su incumplimiento, sino que debe indagarse en cada caso si en efecto fue imposible cumplir aquéllas que en relación con el caso concreto le correspondían.

CARGA DE LA PRUEBA (ART. 167 CGP).

El inciso primero del artículo 167 del C.G.P señala que *"Incumbe a las partes probar el supuesto de hecho de las normas que consagran el efecto jurídico que ellas persiguen." (...).*

[26] Consejo de Estado. Sección Tercera. Sentencia del 27 de abril del 2011 , Expediente (20374)

Dicha preceptiva consagra la regla subjetiva de la carga de la prueba, acogida y aplicada en nuestra legislación, según la cual las partes están llamadas a aportar las pruebas que sustenten sus pretensiones, so pena de que las mismas sean desestimadas. Así lo enseña el profesor Hernando Devis Echandía27:

"Pero, simultánea e indirectamente, dicha regla determina qué hechos debe probar cada parte para no resultar perjudicada cuando el juez la aplique (a falta también de prueba aportada oficiosamente o por la parte contraria, dada la comunidad de la prueba, que estudiamos en el núm. 31, punto 4), puesto que, conforme a ella, la decisión debe ser adversa a quien debería suministrarla, y, por tanto, le interesa aducirla para evitar consecuencias desfavorables." (…) Subrayas fuera de texto.

Esta carga procesal, implica la responsabilidad de las partes por su conducta durante el proceso, tendiente a allegar la prueba de los hechos que la benefician y a controvertir la de aquellos que han sido acreditados por el contrario y que pueden perjudicarla; en este orden de ideas, puede decirse que a las parte le es dable colocarse en una total o parcial inactividad probatoria por su propia cuenta y riesgo.

Este principio contiene una regla de conducta para el juzgador, en virtud de la cual, cuando falta la prueba del hecho que sirve de presupuesto a la norma jurídica que una parte invoca a su favor, debe fallar de fondo y en contra de esa parte[28]. Así pues, el fallador puede cumplir con su función de resolver el litigio cuando ante la ausencia de elementos probatorios, sin tener que abstenerse, para dar cumplimiento a los principios de economía procesal y eficacia de la función.

En suma, quienes hagan parte de la litis, deben participar activamente en el recaudo del material probatorio, para impedir al fallador que ante la escasez de medios de convicción, dirima el conflicto aún en contra de lo pretendido por ellas.

Ahora bien, ante la escases probatoria que rodea el caso sub judice, en cuanto a los móviles del suceso y los perjuicios incoados, será carga de la parte actora acreditar los supuestos de hecho de las normas que consagran el efecto jurídico que pretenden, impuesta por el artículo 167 del CGP, misma que se traduce en este evento, en la demostración de una obligación de seguridad concreta por parte del Ejército Nacional frente a los demandantes y que pese a ello la Institución no tomó las medidas de protección del caso; no de

---

[27] *DEVIS ECHANDÍA, Hernando. Teoría General de la Prueba Judicial, Tomo I. Bogotá: Editorial Temis, Quinta Edición, 2006. p.405, 406.*

[28] *DEVIS ECHANDÍA, Hernando; Compendio de Derecho Procesal. Pruebas Judiciales, Décima Edición; Biblioteca Jurídica Diké, Medellín, 1994, T.II, p. 27.*

otra forma podría derivarse responsabilidad de mi prohijada por falla en el servicio.

De conformidad con los argumentos jurídicos expuestos anteriormente comedidamente solicito al señor Juez se nieguen las pretensiones de la demanda en consideración a que contrario a lo afirmado por la parte demandante y como consecuencia de una valoración en conjunto de la totalidad del material probatorio allegado, debe concluirse que no se probó que el daño fuera imputable al Estado.

Señor Juez, cordialmente le solicito se sirva reconocerme personería jurídica para actuar en defensa de la **NACION – MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL – EJERCITO NACIONAL – ARMADA NACIONAL**, en los términos y para los fines que me fue concedido en el poder anexo a la presente.

PRUEBAS:

DOCUMENTALES A SOLICITAR:

De manera respetuosa me permito solicitar al señor Juez se oficie:

1. A la alcaldía municipal del municipio de Maria la Baja(Bolívar), para que certifique cuales son los predios de los accionantes o del causante, que se encuentran a paz y salvo por concepto de impuesto predial, propiedades que fueron abandonadas supuestamente desde el año 1997 y si existió mora alguna entre los años 2000 a la fecha.

2. Se solicite a la Unidad de **UNIDAD PARA LA ATENCION Y REPARACIÓN INTEGRAL A LAS VICTIMAS**, certifique cuales han sido los programas de reparación integral para la población del Municipio de Magangué Bolívar y que además certifique si los demandantes se han acogido a la indemnización por vía administrativa las fechas y los montos de la indemnización.

3. Se oficie a la Presidencia de la Republica para que certifique la totalidad de programas de atención y de asistencia a los habitantes de las poblaciones del Municipio de Maria la Baja Bolívar, realice un informe de las medidas de restauración, rehabilitación y garantías de no repetición que se han dado a los habitantes de tal municipio dentro del trámite del proceso de justicia y paz.

4. A la alcaldía municipal del municipio de Maria la Baja(Bolívar), para que remita copia con constancia de recibido de los oficios mediante los cuales solicitaron a mi defendida protección especial para el corregimiento de correa, y demás actuaciones puestas en conocimiento de la entidad que represento.

5. Al Comandante de la Primera Brigada de Infantería de Marina, a efectos de que certifique la jurisdicción de la Brigada, y si los demandantes pusieron en su conocimiento los hechos objeto de la demanda.

Es de anotar que esta prueba ya fue solicitada por la suscrita, sin que a la fecha de presentación de este escrito se tenga respuesta a la solicitud.

DOMICILIO Y NOTIFICACIONES

La parte demandada, Nación - Ministerio de Defensa Nacional - Ejercito Nacional -Armada Nacional y su representante legal, tienen su domicilio en Bogotá, en la avenida el Dorado Carrera 52 CAN EDIFICIO DEL MINISTERO DE DEFENSA. Correo electrónico de la entidad:

notificaciones.cartagena@mindefensa.gov.co.

El suscrito apoderado tiene su domicilio en esta ciudad, Oficina del Grupo Contencioso Constitucional del Mindefensa, ubicada en la Base Naval ARC Bolívar, Coliseo Segundo Piso, situada en la entrada al barrio Bocagrande de Cartagena, donde recibiré notificaciones o en la secretaria de su Despacho.

ANEXOS

a) Lo relacionado en el acápite de pruebas.
b) Poder otorgado para el asunto y sus anexos.
c) Resolución No. 8615 del 24 de Diciembre de 2012 y 3200 del 31 de julio de 2009.

Cordialmente,

YELENA PATRICIA BLANCO NUÑEZ

TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DE BOLIVAR
SECRETARIA GENERAL
HOY 10 FEB 2020 SE RECIBE MEMORIAL X
EXPEDIENTE CON CUADERNO(S) Y FOLIO(S).
CONSTACIA DE LA IMPOSIBILIDAD DE USAR EL MEDIO OFICIAL DE RECIBIR A FALTA DE SISTEMA X LUZ INSUMO

3:46 p

MINDEFENSA

Señor (a)
TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DE BOLIVAR
CARTAGENA
E S D

PROCESO N° 13001233300020190031000
ACTOR: ELOISA TORRES DE GONZALEZ
MEDIO DE CONTROL: REPARACION DIRECTA

GABRIELA RAMOS NAVARRO, portadora de la Cédula de Ciudadanía No 1.085.277.481 expedida en Pasto, en mi condición de **DIRECTORA DE ASUNTOS LEGALES DEL MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL (E)**, de conformidad con lo dispuesto en la Resolución No. 5978 del 01 de noviembre de 2019 y la resolución 8615 del 24 de diciembre de 2012, resolución 4535 del 29 de junio de 2017, manifiesto que confiero poder especial, amplio y suficiente a la Doctor (a) **YELENA PATRICIA BLANCO NULEZ**, identificada con la Cédula de Ciudadanía No. 1050035403 de SAN JACINTO y portadora de la Tarjeta Profesional No 194901 del Consejo Superior de la Judicatura, para que en nombre y representacion de la Nación - Ministerio de Defensa Nacional – Ejercito Nacional, asuma la defensa de la Entidad y lleve hasta su terminación el proceso de la referencia

El apoderado (a) queda plenamente facultada para que ejerza todas las acciones de conformidad con el Art. 77 del C.G.P, en especial para que sustituya y reasuma el presente poder, asi mismo asistir a las audiencias de conciliación con facultad expresa para conciliar dentro de los parámetros establecidos por el comité de conciliación del Ministerio de Defensa Nacional, de conformidad con las normas legales vigentes y en general ejercer todas las gestiones inherentes al mandato judicial, en procura de la defensa de los intereses institucionales y patrimoniales del Estado.

Atentamente,

GABRIELA RAMOS NAVARRO
C.C. No 1.085.277.481 de Pasto

ACEPTO:

YELENA PATRICIA BLANCO NULEZ
C. C. 1050035403
T. P. 194901 del C. S. J.
Apoderado(a) Ministerio de Defensa Nacional

TRIBUNAL SUPERIOR
19 NOV 2019
BOGOTÁ, D.C.
Presentado personalmente por el signatario
Gabriela Ramos N
quien se identificó con la C.C. No 1085
y manifestó que la firma que aparece en
la misma que usa en todos sus actos
públicos y privados.

Carrera 54 No. 26-25 CAN
www.mindefensa.gov.co
Bogotá, D.C. Colombia
Facebook: MindefensaColombia
Twitter: @Mindefensa

Scanned by CamScanner

REPÚBLICA DE COLOMBIA

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL

RESOLUCIÓN NÚMERO 5978 DE
(01 NOV 2019

Por la cual se encarga de las funciones del Despacho de la Dirección de Asuntos Legales, a un funcionario del Ministerio de Defensa Nacional – Unidad de gestión General.

EL MINISTRO DE DEFENSA NACIONAL

En ejercicio de las facultades constitucionales y legales, en especial las conferidas en el artículo 208 de la Constitución Política, literal g artículo 61 de la Ley 489 de 1998, en concordancia con el artículo 53 del Decreto 091 de 2007, y

CONSIDERANDO

Que por necesidades del servicio se requiere encargar de las funciones del empleo DIRECTOR DEL SECTOR DEFENSA, CODIGO 1-3, GRADO 18, de la Dirección de Asuntos Legales de la Unidad de Gestión General del Ministerio de Defensa Nacional, a la PD18 GABRIELA RAMOS NAVARRO, identificada con la cédula de ciudadanía No. 1.085.277.481, a partir del 1º de noviembre de 2019.

Que el artículo 53 del Decreto Ley 091 de 2007 prevé: "*ENCARGOS.- Los servidores Públicos del Sector Defensa, pertenezcan o no al Sistema Especial de Carrera del Sector Defensa, podrán, mediante acto administrativo, ser encargados para desempeñar transitoriamente un empleo o para realizar actividades relacionadas directa o indirectamente con la Misión y las atribuciones del sector o que tengan por finalidad el desempeño de responsabilidades diferentes a las que habitualmente le corresponderían al funcionario en desarrollo de sus funciones.*"

Que existe Disponibilidad Presupuestal para el reconocimiento del encargo, según Certificación No. 147 del 29 de octubre de 2019, expedida por la Jefe del área de Presupuesto del Grupo Financiero de la Dirección Administrativa.

Que por lo anteriormente expuesto,

RESUELVE

ARTÍCULO 1. Encargar al **PD18 GABRIELA RAMOS NAVARRO**, identificada con cédula de ciudadanía No. 1.085.277.481, de las funciones del empleo DIRECTOR DEL SECTOR DEFENSA, CODIGO 1-3, GRADO 18, de la Dirección de Asuntos Legales de la Unidad de Gestión General del Ministerio de Defensa Nacional, a partir de la fecha.

ARTÍCULO 2. La PD18 GABRIELA RAMOS NAVARRO, tendrá derecho a percibir la asignación básica del empleo Director del Sector Defensa, Código 1-3, Grado 18, durante el tiempo que dure el encargo.

ARTÍCULO 3. Comunicar a través del Grupo de Talento Humano de la Dirección Administrativa del Ministerio de Defensa Nacional – Unidad de Gestión General, el presente Acto Administrativo.

ARTÍCULO 4. La presente resolución rige a partir de la fecha de su expedición y surte efectos a partir del término establecido en el artículo primero.

COMUNÍQUESE Y CÚMPLASE
Dada en Bogotá, D. C., 01 NOV 2019

EL MINISTRO DE DEFENSA NACIONAL

GUILLERMO BOTERO NIETO

Vo.Bo. Secretario General
Vo. Bo. Directora Administrativa (E)
Vo. Bo. Coordinadora Grupo Talento Humano
Proyectó: PD. Sashenka Pinedo

Scanned by CamScanner

REPÚBLICA DE COLOMBIA

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL

RESOLUCIÓN NÚMERO 8615 DE 2012

(24 DIC. 2012)

Por la cual se delegan, asignan y coordinan funciones y competencias relacionadas con la actividad de defensa judicial en los procesos en que sea parte la Nación - Ministerio de Defensa Nacional.

EL MINISTRO DE DEFENSA NACIONAL

En uso de sus facultades constitucionales y legales y en particular las conferidas por el artículo 211 de la Constitución Política, los artículos 9 de la Ley 489 de 1998, 8 numeral 2 del Decreto 1512 de 2000, 1 del Decreto 049 de 2003, 2 numeral 8 del Decreto 3123 de 2007, 2 numeral 8 del Decreto 4890 de 2011, 23 de la Ley 446 de 1998, artículos 159 y 160 de la ley 1437 de 2011 y 64 del Código de Procedimiento Civil, y

CONSIDERANDO:

Que según lo previsto en el artículo 211 de la Constitución Política, la ley señalará las funciones que el Presidente de la República podrá delegar en los ministros, directores de departamentos administrativos, representantes legales de entidades descentralizadas, superintendentes, gobernadores, alcaldes y agencias del Estado que la misma ley determine. Igualmente, fijará las condiciones para que las autoridades administrativas puedan delegar en sus subalternos o en otras autoridades.

Que en virtud de la norma en cita la delegación exime de responsabilidad al delegante, la cual corresponderá exclusivamente al delegatario, cuyos actos o resoluciones podrá siempre reformar o revocar aquel reasumiendo la responsabilidad consiguiente.

Que de conformidad con lo consagrado en el artículo 9 de la Ley 489 de 1998, las autoridades administrativas, en virtud de lo dispuesto en la Constitución Política y de conformidad con la citada Ley, "están habilitadas para transferir el ejercicio de funciones y la atención y decisión de los asuntos a ellas confiados por la ley, mediante acto de delegación, a los empleados públicos de los niveles directivo y asesor vinculados al organismo correspondiente, con el propósito de dar desarrollo a los principios de la función administrativa enunciados en el artículo 209 de la Constitución Política y en la ley".

Que de acuerdo a lo previsto en el artículo 6 de la Ley 489 de 1998, las autoridades administrativas deben garantizar la armonía en el ejercicio de sus respectivas funciones con el fin de lograr los fines y cometidos estatales y prestar su colaboración a las demás entidades para facilitar el cumplimiento de sus funciones, procurándose en el desarrollo de la función pública, de manera prioritaria, dar aplicación a los principios de coordinación y colaboración entre las autoridades administrativas y entre los organismos del respectivo sector.

Que de conformidad con lo previsto en el artículo 23 de la Ley 446 de 1998 cuando en un proceso ante cualquier jurisdicción intervengan entidades públicas, el auto admisorio de la demanda se debe notificar personalmente al Representante Legal de la Entidad Pública o a quien éste haya delegado la facultad de recibir notificaciones.

Que teniendo en cuenta la clase, volumen y naturaleza de los procesos en que es parte la Nación - Ministerio de Defensa, se hace necesario delegar la facultad de notificarse y constituir apoderados, en algunos servidores públicos, en orden a garantizar el cumplimiento de los principios de eficacia, moralidad, economía y celeridad en la gestión litigiosa.

Que el artículo 159 de la ley 1437 de 2011, establece:

"CAPACIDAD Y REPRESENTACIÓN. Las entidades públicas, los particulares que cumplen funciones públicas y los demás sujetos de derecho que de acuerdo con la ley tengan capacidad para comparecer al proceso, podrán obrar como demandantes, demandados o intervinientes en los procesos contencioso administrativos, por medio de sus representantes, debidamente acreditados.

La entidad, órgano u organismo estatal estará representada, para efectos judiciales, por el Ministro, Director de Departamento Administrativo, Superintendente, Registrador Nacional del Estado Civil, Procurador General de la Nación, Contralor General de la República o Fiscal General de la Nación o por la persona de mayor jerarquía en la entidad que expidió el acto o produjo el hecho.

El Presidente del Senado representa a la Nación en cuanto se relacione con la Rama Legislativa; y el Director Ejecutivo de Administración Judicial la representa en cuanto se relacione con la Rama Judicial, salvo si se trata de procesos en los que deba ser parte la Fiscalía General de la Nación.

En los procesos sobre impuestos, tasas o contribuciones, la representación de las entidades públicas la tendrán el Director General de Impuestos y Aduanas Nacionales en lo de su competencia, o el funcionario que expidió el acto.

En materia contractual, la representación la ejercerá el servidor público de mayor jerarquía de las dependencias a que se refiere el literal b), del numeral 1 del artículo 2 de la Ley 80 de 1993, o la ley que la modifique o sustituya. Cuando el contrato o acto haya sido suscrito directamente por el Presidente de la República en nombre de la Nación, la representación de esta se ejercerá por el Director del Departamento Administrativo de la Presidencia de la República.

Las entidades y órganos que conforman el sector central de las administraciones del nivel territorial están representadas por el respectivo gobernador o alcalde distrital o municipal. En los procesos originados en la actividad de los órganos de control del nivel territorial, la representación judicial corresponderá al respectivo personero o contralor."

Adicionalmente al artículo 160 de la ley 1437 de 2011, nos indica:

"DERECHO DE POSTULACIÓN. Quienes comparezcan al proceso deberán hacerlo por conducto de abogado inscrito, excepto en los casos en que la ley permita su intervención directa.

Los abogados vinculados a las entidades públicas pueden representarlas en los procesos contenciosos administrativos mediante poder otorgado en la forma ordinaria, o mediante delegación general o particular efectuada en acto administrativo".

Que de conformidad con el inciso primero del artículo 64 del Código de Procedimiento Civil, la Nación y demás Entidades de Derecho Público, podrán constituir apoderados especiales para atender los procesos en que sean parte, siempre que sus representantes administrativos lo consideren conveniente por razón de distancia, importancia del negocio u otras circunstancias análogas.

R E S U E L V E

CAPITULO PRIMERO

DELEGACIONES AL INTERIOR DEL MINISTERIO DE DEFENSA – GESTIÓN GENERAL

ARTÍCULO 1. Delegar en el Director de Asuntos Legales del Ministerio de Defensa Nacional las siguientes funciones:

1. Notificarse de las demandas, atenderlas directamente y constituir apoderados en los procesos contencioso administrativos que cursen contra la Nación - Ministerio de Defensa Nacional, ante el Honorable Consejo de Estado, Tribunales Contencioso Administrativos y Juzgados Contencioso Administrativos, así como en los procesos que se adelanten ante la Corte Constitucional por demandas de inconstitucionalidad.

2. Notificarse de las acciones de Tutela, de Cumplimento, Populares o de Grupo, pudiendo contestar, rendir informes, constituir apoderados en dichas acciones e impugnar los fallos por sí o por intermedio de apoderado, así como presentarlas en nombre de la entidad como accionante o demandante.

3. Notificarse de las demandas, atenderlas directamente o designar apoderados dentro de los procesos que cursen en los Juzgados Civiles, Penales y Laborales de todo el territorio nacional en contra de la Nación - Ministerio de .Defensa Nacional.

4. Constituirse en parte civil o designar apoderados para que lo hagan, en los términos y para los efectos del artículo 36 de la Ley 190 de 1995.

5. Para efectos de la Ley 1066 de 2006 y demás normas concordantes, otorgar poderes a funcionarios abogados del Ministerio de Defensa Nacional según lo requieran las necesidades del servicio, para los trámites tendientes a la recuperación de la cartera por cobro coactivo, o realizarlas directamente, así como asignar funciones de Secretario a un empleado de la misma entidad, con el fin de apoyar con las funciones administrativas.

6. Notificarse y designar apoderados en las querellas policivas y administrativas que cursen ante el Ministerio de Protección Social e Inspecciones de Policía o atenderlas directamente.

7. Designar apoderados con el fin de iniciar cualquier tipo de acción en las jurisdicciones contencioso administrativo, ordinaria y policiva o iniciarlas directamente.

8. Notificarse y designar apoderados para atender e iniciar las actuaciones administrativas que se surtan o deban surtirse ante las entidades de la Administración Pública del orden Nacional, Departamental, Municipal o Distrital o hacerlo directamente o ante cualquier particular que ejerza funciones públicas, así como de las ofertas de compra de inmuebles que le presenten a la entidad.

9. Notificarse y designar apoderados, así como adelantar todos los tramites administrativos inherentes a las actuaciones ambientales o atenderlo directamente.

Continuación de la Resolución "Por la cual se delegan, asignan y coordinan funciones y competencias relacionadas con la actividad de defensa judicial en los procesos en que sea parte la Nación - Ministerio de Defensa Nacional.".

ARTÍCULO 2. Delegar la función de notificarse de las demandas y constituir apoderados en los procesos contencioso administrativos, acciones de Tutela, Populares, de Grupo y de Cumplimiento que cursen contra la Nación - Ministerio de Defensa Nacional ante los Tribunales y Juzgados, en los Comandantes de las Unidades Operativas y Tácticas de las Fuerzas Militares que se indican a continuación.

Ciudad de ubicación del Despacho Judicial Contencioso Administrativo	Departamento	Delegatario
Medellín	Antioquia	Comandante Cuarta Brigada
Arauca	Arauca	Comandante Brigada Dieciocho
Barranquilla	Atlántico	Comandante Segunda Brigada
Barrancabermeja	Santander del Sur	Comandante Batallón de Artillería de Defensa Aérea No.2 Nueva Granada
Cartagena	Bolívar	Comandante Fuerza Naval del Caribe
Tunja	Boyacá	Comandante Primera Brigada
Buenaventura	Valle del Cauca	Comandante Brigada Fluvial de Infantería de Marina No.2.
Buga	Valle del Cauca	Comandante Batallón de Artillería No.3 Batalla de Palace.
Manizales	Caldas	Comandante Batallón de Infantería No. 22 "Ayacucho"
Florencia	Caquetá	Comandante Décima Segunda Brigada del Ejercito Nacional
Popayán	Cauca	Comandante Batallón de Infantería No.7 "José Hilario López"
Montería	Córdoba	Comandante Décima Primera Brigada del Ejército Nacional
Yopal	Casanare	Comandante Décima Sexta Brigada del Ejército Nacional
Valledupar	Cesar	Comandante Batallón de Artillería No. 2 " La Popa"
Quibdo	Choco	Comandante Batallón de Infantería No. 12 "Alfonso Manosalva Flores"
Riohacha	Riohacha	Comandante Batallón de Infantería Mecanizado No. 6 "Cartagena"
Huila	Neiva	Comandante Novena Brigada del Ejército Nacional
Leticia	Amazonas	Comandante Brigada de Selva No.26 del Ejército Nacional.
Santa Marta	Magdalena	Comandante Primera División del Ejército Nacional.
Villavicencio	Meta	Jefe Estado Mayor de la Cuarta División
Mocoa	Putumayo	Comandante Brigada No.27 del Ejército Nacional
Cúcuta	Norte de Santander	Comandante Grupo de Caballería Mecanizado No. 5 "General Hermógenes Maza"
Pasto	Nariño	Comandante Batallón de Infantería No. 9 "Batalla de Boyacá"
Pamplona	Norte de Santander	Comandante Batallón de Infantería No.13 García Rovira.
Armenia	Quindío	Comandante Octava Brigada del Ejército Nacional.

Pereira	Risaralda	Comandante Batallón de Artillería No. 8 "San Mateo"
San Gil	Santander	Comandante Batallón de Artillería No.5 Capitán José Antonio Galán.
Bucaramanga	Santander	Comandante Segunda División del Ejército Nacional.
San Andrés	San Andrés	Comandante Comando Específico San Andrés y Providencia
Santa Rosa de Viterbo	Boyacá	Comandante Primera Brigada del Ejército Nacional
Sincelejo	Sucre	Comandante Primera Brigada de Infantería de Marina
Ibagué	Tolima	Comandante Sexta Brigada del Ejercito Nacional
Turbo	Antioquia	Comandante Batallón Fluvial de Infantería de Marina No 20.
Cali	Valle del Cauca	Comandante Tercera División del Ejercito Nacional
Zipaquira-Facatativá-Girardot	Cundinamarca	Director de Asuntos Legales del Ministerio de Defensa Nacional

PARÁGRAFO. Podrá igualmente el Director de Asuntos Legales del Ministerio de Defensa Nacional, constituir apoderados en todos los procesos que cursen ante los Tribunales y Juzgados Contencioso Administrativos del territorio nacional.

ARTÍCULO 3. Los delegatarios relacionados en el artículo 2 de la presente Resolución contaran para el ejercicio de la función delegada con los profesionales abogados de la Dirección de Asuntos Legales de este Ministerio.

Por su parte, los delegatarios brindaran apoyo a los abogados designados por la Dirección de Asuntos Legales para el cumplimiento de las funciones litigiosas a ellos asignadas, especialmente en la consecución de pruebas requeridas por las instancias judiciales al interior de los procesos.

PARÁGRAFO. En aquellas Jurisdicciones en donde no se cuente con funcionario de la Dirección de Asuntos Legales, se deberá prestar por parte del delegatario apoyo al apoderado encargado de esa instancia judicial con la designación de un funcionario de su Unidad para que realice el seguimiento a los procesos judiciales que se sigan en contra del Ministerio de Defensa Nacional. Para el efecto se harán las coordinaciones pertinentes.

CAPITULO SEGUNDO

DELEGACIONES EN OTRAS DEPENDENCIAS DEL MINISTERIO DE DEFENSA

ARTÍCULO 4. Delegar en el Superintendente de Vigilancia y Seguridad Privada las siguientes funciones:

1. La facultad de representar a la Nación - Ministerio de Defensa Nacional - Superintendencia de Vigilancia y Seguridad Privada en los procesos contencioso administrativos que se surtan ante las diferentes instancias judiciales, así como en los procesos que se adelanten ante la Corte Constitucional por demandas de inconstitucionalidad contra normas de su competencia.

En desarrollo de esta facultad el Superintendente de Vigilancia y Seguridad Privada podrá recibir notificaciones y constituir apoderados.

2. La facultad para notificarse de las acciones de Tutela, Populares, de Grupo y de Cumplimento, pudiendo rendir informes, constituir apoderados en dichas acciones e impugnar los fallos por si o por intermedio de apoderado.

3. La facultad para representar a la Nación - Ministerio de Defensa Nacional - Superintendencia de Vigilancia y Seguridad Privada en los procesos por cobro coactivo para hacer efectivos los créditos exigibles a favor de la Superintendencia y la facultad para constituir apoderados para hacer exigibles dichos créditos en todo el territorio nacional, para efectos de la Ley 1066 de 2006 y demás normas concordantes.

4. La facultad para representar a la Nación Ministerio de Defensa en los procesos ordinarios que contra la Superintendencia de Vigilancia y Seguridad Privada cursen en los estrados judiciales.

5. La facultad para representar a la Nación Ministerio de Defensa – Superintendencia de Vigilancia y Seguridad Privada, en los procesos penales.

ARTÍCULO 5. Delegar en el Director General de Sanidad Militar y Directores de Sanidad de las diferentes Fuerzas y Policía Nacional, en los Jefes de las Oficinas de Prestaciones Sociales del Ministerio de Defensa Nacional, del Ejército Nacional, de la Fuerza Aérea Colombiana, de la Armada Nacional y de la Policía Nacional, o quien haga sus veces y en los Jefes o Directores de Personal o Desarrollo Humano o quien haga sus veces en el Ministerio de Defensa Nacional, el Ejército Nacional, la Fuerza Aérea Colombiana, la Armada Nacional y la Policía Nacional , la facultad de notificarse de las acciones de Tutela, pudiendo contestar, rendir informes e impugnar los fallos por si o por intermedio de apoderado.

En desarrollo de esta delegación se remitirá a la Dirección de Asuntos Legales del Ministerio de Defensa Nacional, trimestralmente, la siguiente información:

1. Corporación judicial que atendió la tutela.
2. Accionante
3. Causa de la Acción
4. Resumen del fallo.
5. Decisión de Impugnación, si ha hubiere.

CAPITULO TERCERO

DISPOSICIONES COMUNES

ARTÍCULO 6. CONDICIONES PARA EL EJERCICIO DE LA DELEGACIÓN

Las delegaciones efectuadas a través de la presente resolución, serán ejercidas por los funcionarios delegatarios conforme a las siguientes condiciones:

1. La delegación es una decisión discrecional del delegante y su cumplimiento es vinculante para el delegatario.
2. El ejercicio de las competencias que por medio de la presente resolución se delegan, está sujeto a la observancia plena de los requisitos y parámetros relacionados con la actividad

litigiosa de las Entidades Públicas establecidas en la ley, manuales y politicas del Ministerio de Defensa Nacional.

3. Cuando lo estime conveniente, el Ministro de Defensa Nacional podrá reasumir en todo caso y en cualquier momento, total o parcialmente, las competencias delegadas por medio del presente acto.

4. La delegación establecida en el artículo 3 de esta Resolución no comprende la facultad a motu proprio, o a través de apoderado de conciliar, transar o utilizar cualquier otro mecanismo alternativo de solución de conflictos en nombre de la Nación – Ministerio de Defensa Nacional.

5. Las facultades delegadas mediante la presente Resolución son indelegables.

6. La delegación eximirá de toda responsabilidad al delegante, y será asumida plenamente y de manera exclusiva por el delegatario, sin perjuicio de que en virtud de lo dispuesto en el articulo 211 de la Constitución Política el delegante pueda en cualquier tiempo reasumir la competencia, revisar y revocar los actos expedidos por el delegatario, con sujeción a lo dispuesto en el Código Contencioso Administrativo.

7. El delegatario deberá observar estrictamente las disposiciones legales y reglamentarias que regulen el ejercicio de la delegación y es responsable de las decisiones que tome en ejercicio de la misma.

8. El delegatario deberá desempeñarse dentro del marco de actividades establecido en este acto de delegación.

9. El delegatario deberá atender oportunamente los requerimientos sobre el ejercicio de la delegación, hechos por delegante.

10. El delegatario deberá cumplir las orientaciones generales dadas por el delegante.

11. El delegatario facilitará la revisión de sus decisiones por el delegante.

12. Los servidores públicos que ejerzan la defensa judicial, deberán dar estricto cumplimiento a lo dispuesto en el artículo 45 del Decreto 111 de 1996.

13. En virtud del principio de continuidad de la administración y de la presunción de legalidad de los actos administrativos, el simple cambio de funcionario delegante y/o delegatario no extingue los efectos del acto de delegación. De ahí que, en caso de supresión de cargos o de cambio de denominación de los mismos, las delegaciones se entenderán efectuadas en aquellos que se han citado en el presente acto administrativo para la delegación de competencias, hasta tanto se expida un nuevo acto administrativo que las reasigne.

14. Las responsabilidades y consecuencias de la presente delegación, se rigen por las normas legales aplicables, y en particular por los artículos 9 y siguientes de la Ley 489 de 1998.

15. Este acto tiene fuerza ejecutoria mientras no sea revocado, suspendido, modificado, derogado o anulado por autoridad competente.

ARTÍCULO 7. COMPROMISO ANTICORRUPCIÓN DE LOS FUNCIONARIOS INVOLUCRADOS EN LA GESTIÓN DE REPRESENTACIÓN, APODERAMIENTO Y DEFENSA JUDICIAL.

Los funcionarios del Ministerio de Defensa Nacional, que tengan como función la actividad litigiosa ante las diferentes Jurisdicciones, deberán suscribir un compromiso anticorrupción que reposará en su folio de vida, en el que se exprese explícitamente su voluntad de abogar por la transparencia en los procesos litigiosos y la responsabilidad de rendir informes de su actuación, compromiso a través del cual, asumirán como mínimo los siguientes:

No ofrecer ni dar prebenda ni ninguna otra forma de contraprestación a ningún funcionario público.

No propiciar que nadie, bien sea empleado de la entidad o familiar ofrezca o dé prebendas o contraprestación a ningún funcionario de la entidad a su nombre;

Continuación de la Resolución "Por la cual se delegan, asignan y coordinan funciones y competencias relacionadas con la actividad de defensa judicial en los procesos en que sea parte la Nacion - Ministerio de Defensa Nacional.".

No recibir directa o indirectamente prebendas ni ninguna otra forma de contraprestación o beneficio a ningún interesado en los procesos que realiza para el cumplimiento de las funciones a su cargo, ni para retardar el ejercicio de dichas funciones.

No realizar conductas que atenten contra la seguridad del personal y de las instalaciones, así como de los intereses de la institución o que pongan a la entidad en desventaja frente a otras personas naturales o jurídicas.

Informar al inmediato superior de las conductas que se detecten relacionadas con falta de transparencia en el ejercicio del cargo, por parte de los funcionarios responsables del litigio.

No realizar acuerdos ni utilizar los mecanismos alternativos de solución de conflictos sin el previo análisis y aprobación del Comité de Conciliación y Defensa Judicial de la Entidad.

Asumir y reconocer expresamente, las consecuencias que se deriven del incumplimiento del compromiso anticorrupción precedente o de cualquiera otra de sus obligaciones legales asociadas a las gestiones propias de la actividad litigiosa a su cargo, ante las diferentes autoridades encargadas de llevar a cabo las correspondientes investigaciones.

ARTÍCULO 8. INFORME SEMESTRAL. El Superintendente de Vigilancia y Seguridad Privada, deberá remitir semestralmente un informe de la actividad realizada en virtud de esta Delegación al señor Ministro de Defensa Nacional para su seguimiento y control.

Los funcionarios encargados de la actividad litigiosa del Ministerio de Defensa Nacional, deberán rendir informe semestral de las actuaciones y del estado de los procesos a los delegatarios con copia a la Secretaría General de este Ministerio.

PARÁGRAFO: El informe semestral que rindan los delegatarios indicados en este artículo y los apoderados a los delegatarios, constituirá uno de los mecanismos para efectuar el seguimiento y control de la función delegada en este acto administrativo.

ARTÍCULO 9. EMPALME EN CASO DE CAMBIO DE MANDO. Cuando haya cambios de los funcionarios designados como delegatarios a través de la presente Resolución estos deberán preparar un informe de situación y ejecución de las funciones asignadas a su cargo, dejando constancia de la información y documentación entregada al nuevo funcionario que ejercerá las funciones o la competencia respectiva, cuya copia será remitida a la Dirección de Asuntos Legales del Ministerio de Defensa Nacional, para su control y seguimiento.

ARTÍCULO 10. VIGENCIA Y DEROGATORIA. La presente Resolución rige a partir de la fecha de su publicación y deroga las normas que le sean contrarias, en especial la Resolucion No. 3530 de 2007.

PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE.

24 DIC. 2012

Dada en Bogotá, D.C.

EL MINISTRO DE DEFENSA NACIONAL

JUAN CARLOS PINZÓN BUENO

GOBIERNO DE COLOMBIA MINDEFENSA

REPUBLICA DE COLOMBIA - MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL - DIRECCION DE ASUNTOS LEGALES
GRUPO CONTENCIOSO CONSTITUCIONAL – SEDE BOLIVAR

Nº **OFI 006 MDNUGGGCC**

CARTAGENA D.T., Y C. 23 de enero de 2020

Señor:
COMANDANTE PRIMERA BRIGADA DE INFANTERÍA DE MARINA
COROZAL-SUCRE

Con el fin de contestar la demanda de reparación directa adelantada por la señora ELOISA TORRES DE GONZALEZ, identificada con **C.C. No. 22766932**, contra la NACION – MINISTERIO DE DEFENSA – ARMADA NACIONAL –EJERCITO NACIONAL-; respetuosamente me permito solicitar al Señor Comandante de esa Unidad Militar, se sirva remitir a ésta dependencia con carácter urgente al recibo de la presente petición los informes y documentos correspondientes, relacionados con los siguientes hechos, Según el demandante:

"Se impetró demanda en contra de la Nación - Ministerio de Defensa - Armada Nacional – , respecto al pago de los perjuicios materiales, morales, y a la vida de relación, causados al convocante con el desplazamiento forzado que dicen sufrieron, y los homicidios de sus hijos GUSTAVO GONZALEZ TORRES, VICENTE GONZALEZ TORRE, TRIFON GONZALEZ TORRES, el 24 de mayo de 1997 en el municipio de Maria la Baja corregimiento de Correa, por grupos armados al margen de la Ley. Lo que conllevo a que los demandantes tuvieran que dejar abandonados a su suerte, la totalidad de muebles, enseres, y propiedades de la familia; los perjuicios individuales se hacen derivar de una causa común, que se imputa a las entidades demandadas: las acciones y omisiones de las autoridades militares."

Teniendo en cuenta lo anterior solicito se aporten a esta oficina para el ejercicio de la actividad encargada por el Ministerio de Defensa:

-Copia de todos y cada uno de los documentos relacionados con este caso concreto y que reposen en el archivo de la unidad militar, en especial la solicitud de protección especial por parte de alguno de los hoy demandantes y relacionados con las muertes en cuestión.

-Certificación de las actividades desempeñadas para la época encaminadas a contrarrestar los ataques de los grupos al margen de la ley en esta zona del país.

-En lo posible certificar cual es la situación actual de orden público de los corregimientos en cita y se certifique desde que año se encuentra normalizada en cuanto a ataques y amenazas de grupos paramilitares.

Los demás documentos e informes que el Señor Comandante, este a bien aportar a ésta dependencia para el cumplimiento de los fines de la labor judicial a mi atribuidos.

De la oportuna y eficaz gestión que ese comando se sirva prestar en apoyo a la misión asignada a esta oficina, dependen los resultados y alcances de la defensa de los intereses institucionales.

NOTIFICACIONES:

Dirección: BASE NAVAL ARC – BOLIVAR - Avenida San Martin, entrada Barrio Bocagrande – Cartagena. Mail: yele1707@gmail.com, yelenablanco@hotmail.com.

Cordialmente,

YELENA PATRICIA BLANCO NUÑEZ
Apoderado Grupo Contencioso Constitucional
Ministerio de Defensa - Sede Bolívar

Notificar 72-92

Secretaria Tribunal Administrativo - Seccional Cartagena

De: yelena blanco nuñez <yele1707@gmail.com>
Enviado el: viernes, 14 de febrero de 2020 10:50 a.m.
Para: Secretaria General Tribunal Administrativo - Bolivar - Bolivar; Secretaria Tribunal Administrativo - Seccional Cartagena
Asunto: Fwd: Respuesta a su oficio 006 RD ELOISA TORRES DE GONZALEZ
Datos adjuntos: OFICIO 0056-CBRIM1 10 FEB-2020 A GCC SEDE BOL RTA OFICIO 006 RD ELOISA TORRES DE GONZALEZ.pdf; aporta pruebas.doc

---------- Forwarded message ---------
De: **Yelena Patricia Blanco Nuñez** <Yelena.Blanco@mindefensa.gov.co>
Date: mié., 12 feb. 2020 a las 16:23
Subject: RV: Respuesta a su oficio 006 RD ELOISA TORRES DE GONZALEZ
To: yele1707@gmail.com <yele1707@gmail.com>

De: Nayibe del Socorro Salgado Gomez [mailto:nayibe.salgado@armada.mil.co]
Enviado el: lunes, 10 de febrero de 2020 05:06 p.m.
Para: Notificaciones Contenciosos Administrativos - ASJUR; Yelena Patricia Blanco Nuñez
Asunto: Respuesta a su oficio 006 RD ELOISA TORRES DE GONZALEZ

2019 - 316

Buenas tardes.

Anexo remito el oficio 0056-CBRIM1 - 10 feb/2020, mediante el cual damos respuesta a su oficio 006 R.D. Sra ELOISA TORRES DE GONZALEZ.

Le agradezco me confirmen el recibido. Muchas gracias.

TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DE BOLIVAR
SECRETARIA GEN
HOY 14 FEB 2020 SE RE
EXP. EXPEDIENTE CON CUADER FOLIO(S)
CONTRACCION DE LA OPORTUNIDAD DE
RECHAZO A FALTA DE SISTEMA

AS12 NAYIBE SALGADO GÓMEZ

Secretaria ASJUROP BRIM1

Corozal - Sucre

1293

INFORMACIÓN PÚBLICA RESERVADA

La seguridad es de todos | Mindefensa | LA VICTORIA ES DE TODOS | ARMADA DE COLOMBIA

No. 0056 /MDN-COGFM-COARC-SECAR-CIMAR-CBRIM1-SCBRIM1-JB3BRIM1-ASJUROP-1.9

Corozal (Sucre), 10 FEB 2020

Doctora
YELENA PATRICIA BLANCO NÚÑEZ
Apoderada Grupo Contencioso Constitucional
Ministerio de Defensa Nacional – Sede Bolívar
Base Naval ARC "Bolívar", Coliseo, Piso 2°
Bocagrande, Avenida San Martin
yelenablanco@hotmail.com
Cartagena de Indias D.T y C.

Asunto: Respuesta oficio No. 006 del 23 de enero de 2020
Reparación Directa ELOISA TORRES DE GONZÁLEZ

En atención a su requerimiento del asunto, a través del cual solicita información con ocasión de la demanda de Reparación Directa interpuesta por la señora ELOÍSA TORRES DE GONZÁLEZ, víctima de Desplazamiento Forzado por hechos ocurridos en el corregimiento de Correa municipio de María La Baja (Bolívar), me permito informarle lo siguiente:

1. Con relación al primer punto de su requerimiento, me permito informarle que una vez verificados los archivos físicos y digitales de esta Unidad, no se encontró documentos que den cuenta del caso concreto, así como tampoco se encontró registro de solicitud de protección especial por parte de alguna de las víctimas.

2. Respecto al segundo interrogante de su oficio, en el que solicita certificación de las actividades desempeñadas para la época encaminadas a contrarrestar los ataques de Grupos al Margen de la Ley en esta zona del país, a continuación me permito relacionar las acciones operacionales adelantadas en el departamento de Bolívar, durante el año 1997, así:

FECHA	UNIDAD	LUGAR	RESULTADO
22-ENE-1997	BAFIM3	SITIO LOMAS DEL BLEDO CARMEN DE BOL.	CONTACTO ARMADO: TROPAS DEL BAFIM3 SOSTUVIERON CONTACTO ARMADO CON UN GRUPO DE 03 BANDOLEROS PERTENECIENTES AL FRENTE 37 DE LAS FARC LOS CUALES SE ENCONTRABAN EN LA PARCELA LA ESPERANZA, COMO RESULTADO SE LOGRO DAR DE BAJA AL SUJETO ALBERTO DE JESÚS GUTIÉRREZ GALEANO (A. ROBINSON), CAPTURADO EL SUJETO CARLOS ALBERTO LÓPEZ HERNÁNDEZ (A. OVIDIO), LOGRANDO HUIR UN SUJETO CONOCIDO COMO ALIAS OVIDIO, INCAUTÁNDOSE 01 PISTOLA CAL 9 MM, 01 PROVEEDOR PARA LA MISMA, 02 GRANADAS DE FRAGMENTACIÓN, 03 PROVEEDORES PARA PISTOLA, 20 CARTUCHOS CAL. 9MM, 01 TARRO DE PÓLVORA NEGRA, 01 PONCHO VERDE, 02 MORRALES DE CAMPAÑA PEQUEÑO, 01 CARPA, 01 CUADERNO CON DOCUMENTACIÓN VARIA, 01 RADIO DE 2 METROS MARCA YAESU, 02 IOC.
12-FEB-1997	BAFIM3	CGTO CHARQUITAS MPIO SAN JACINTO	CONTACTO ARMADO – ASESINATOS: TROPAS DEL BAFIM3 SOSTUVIERON CONTACTO ARMADO CON BANDOLEROS DEL FRENTE 37 DE LAS FARC APROXIMADAMENTE A LAS 08:00 HORAS, RESULTANDO ASESINADO EL IMVL PÉREZ CONTRERAS EDUARDO (Q.E.P.D.). DURANTE EL DESARROLLO DEL ENFRENTAMIENTO RESULTÓ HERIDO CON IMPACTO DE ARMA DE

"Protegemos el azul de la Bandera"
Línea anticorrupción Armada Nacional 01 8000 11 69 69 – 24 Horas
Troncal de Occidente Vía Sincelejo – Corozal Tel: 2840789
www.armada.mil.co – Zulma.cifuentes@armada.mil.co

N° SC5466-1 N° GP045-1

INFORMACIÓN PÚBLICA RESERVADA

MDN-COGFM-COARC-SECAR-CIMAR-CBRIM1-SCBRIM1-JB3BRIM1-ASJUROP-1.9

INFORMACIÓN PÚBLICA
RESERVADA

			FUEGO EL SEÑOR ADOLFO ANTONIO DÍAZ ACOSTA C.C.8'050.045 DE ARENAS. SE LOGRÓ INCAUTAR 01 SUBAMETRALLADORA MP-5#HK94 CAL.9MM, 01 RADIO TIPO HANDY 2 MTRS, 35 UNIFORMES VERDES NUEVOS, 04 UNIFORMES VERDES USADOS, 01 TELEVISOR 14 PULGADAS, VÍVERES, MEDICINAS VARIAS, DOCUMENTACIÓN.
13-FEB-1997	BAFIM3	CGTO CHARQUITAS MPIO SAN JACINTO	CONTACTO ARMADO – ASESINATOS: TROPAS DEL BAFIM3 SOSTUVIERON CONTACTO ARMADO CON BANDOLEROS DEL 37 FRENTE DE LAS FARC APROXIMADAMENTE A LAS 11:00 HORAS EN EL SECTOR DE LA SIERRA, RESULTANDO ASESINADO EL IMVL CHAMORRO NAVARRO ROBERT (Q.E.P.D.) SE CONTINÚA CON LAS OPERACIONES. INFORMACIONES POSTERIORES INDICAN DE LA BAJA DE VARIOS BANDOLEROS.
14-FEB-1997	BAFIM3	CORREGIMIENTO DE CARACOLÍ CARMEN DE BOLÍVAR	CONTACTO ARMADO: TROPAS DEL BAFIM3 SOSTUVIERON CONTACTO ARMADO CON BANDOLEROS DEL FRENTE 37 DE LAS FARC, INFORMACIONES POSTERIORES DAN CUENTA DE UN SUBVERSIVO DADO DE BAJA, EN LAS TROPAS NO SE PRESENTARON NOVEDADES
14-FEB-1997	BAFIM3	CORREGIMIENTO DE LA CANSONA CARMEN DE BOLÍVAR	CONTACTO ARMADO: TROPAS DEL BAFIM3 SOSTUVIERON CONTACTO ARMADO CON BANDOLEROS DEL FRENTE 37 DE LAS FARC, NO SE PRESENTARON NOVEDADES NI RESULTADOS TANGIBLES.
08-JUN-1997	BAFIM3	CGTO CHARQUITAS MPIO SAN JACINTO	CONTACTO ARMADO: TROPAS DEL GRUPO DE TAREA BISONTE, CON BANDOLEROS DEL FRENTE 37 DE LAS FARC, EN EL SECTOR PUNTA DE PLANCHA FINCA LA COLINA, LOGRÁNDOSE UBICAR Y DESMANTELAR UN CAMPAMENTO PARA 50 SUJETOS APROXIMADAMENTE, CONSISTENTE EN CAMBUCHES, COCINA CON INSTALACIÓN PARA GAS, INCAUTOSE 01 CUADERNO SOBRE EL CONTROL DEL ARMAMENTO DE ESTE GRUPO; EN LA ACCIÓN FUE HERIDO EN EL DEDO ÍNDICE DE LA MANO IZQUIERDA EL IMVL FLÓREZ MEJÍA ROBERTO CARLOS.
11-AGO-1997	BRIM1	AREA RURAL MUNICIPIO CARMEN DE BOLÍVAR	CONTACTO ARMADO, TROPAS DEL GRUPO DE TAREA "BUFALO" ADSCRITAS A LA BRIM1 MEDIANTE OPERACIONES DE REGISTRO Y CONTROL DE ÁREA SOSTUVO CONTACTO ARMADO CON BANDOLEROS DEL FRENTE 35 FARC EN EL SITIO CONOCIDO COMO QUEBRADA DE VENADO, UBICADO EN EL ÁREA RURAL DEL CORREGIMIENTO DE MACAYEPO JURISDICCIÓN DEL MUNICIPIO EL CARMEN DE BOLÍVAR, DONDE FUE DADO DE BAJA 01 SUBVERSIVO NN., INCAUTÁNDOSE 01 FUSIL AK-47, 02 PROVEEDORES, 600 CARTUCHOS CALIBRE 5.56, 02 MORRALES DE CAMPAÑA, ASÍ MISMO RESULTÓ CON HERIDAS LEVES EL IMVL. BOLAÑOS MEDINA PEDRO.

3. Con relación al tercer interrogante, me permito informar que la situación actual de orden público en el corregimiento de Correa municipio de María la Baja (Bolívar), es de normalidad, presentándose casos aislados casos de delincuencia común, que ocurren en la generalidad del Territorio Nacional, los cuales vienen siendo contrarrestados con total determinación mediante operaciones coordinadas con la Policía Nacional e interagenciales con las autoridades de Policía Judicial y Fiscalía General de la Nación; sin embargo, se estima que dichos hechos de delincuencia no afectarán los procesos de retorno y/o reubicación de población desplazada.

Los hechos graves de violencia se presentaron hasta los años 2007-2009, cuando en Operaciones Militares lideradas por la Armada Nacional, se logró la desarticulación de las estructuras de los Frentes 35 y 37 de la ONT FARC, así como de las estructuras del ELN y del ERP; así mismo, se logró la desmovilización de las AUC, el 14 de Julio de 2005 cuando 595 hombres del autodenominado Bloque Héroes Montes de María entregaron sus armas y se sometieron a la Justicia.

A pesar de los ingentes esfuerzos de la Fuerza Pública por contrarrestar dichos fenómenos de violencia, en ocasiones resultó imposible poder prevenirlos o neutralizarlos; sin embargo, no se puede desestimar por parte de las autoridades judiciales los esfuerzos realizados en 22 años de

"Protegemos el azul de la Bandera"
Línea anticorrupción Armada Nacional 01 8000 11 69 69 – 24 Horas
Troncal de Occidente Vía Sincelejo – Corozal Tel: 2855555
www.armada.mil.co – Zulma.cifuentes@armada.mil.co
INFORMACIÓN PÚBLICA
RESERVADA

INFORMACIÓN PÚBLICA RESERVADA

confrontación armada[1], que representó un alto costo en vidas humanas[2], para las Fuerzas Militares y en especial para la Armada Nacional (197 militares fallecidos y 365 militares heridos), en procura de contrarrestar los fenómenos de violencia y restablecer las condiciones de seguridad en el territorio.

Este Comando queda atento a cualquier requerimiento adicional y recomienda que esta información sea solicitada a la Fiscalía General de la Nación, a la Policía Nacional y las autoridades del orden departamental, municipal y demás autoridades que considere puedan aportar datos útiles para el propósito de su requerimiento, en especial a la alcaldía, entidad a la que por mandato Constitucional y legal, le corresponde el mantenimiento del orden público en el municipio.

Finalmente, es oportuno precisar que la información contenida en este documento de acuerdo con su naturaleza y temática tiene un manejo diferenciado de conformidad con la ley[3], transfiriéndose su custodia y manejo, por lo que deberá procurar la debida reserva y utilización de la información de acuerdo con los fines del poder otorgado y el objeto manifestado en su requerimiento.

Atentamente,

Coronel de I.M. FERNANDO ÁLVAREZ MARTÍNEZ
Comandante Brigada de Infantería de Marina No. 1
INFORMACIÓN PÚBLICA RESERVADA

V°B°: CRCIM. Evert Andrés Mejía Giraldo
Segundo Comandante y JEM BRIM1

Copia. CN. Luz Marina Urrea Vanegas ASJUR COARC

Proyectó: TFADER Cifuentes Zulma
Asesora Jurídica Operacional BRIM1

[1] Aproximadamente desde el año de 1987 hasta el 2009.

[2] 197 militares asesinados.

3 **NOTA: RESERVA LEGAL, ACTA DE COMPROMISO DE RESERVA Y TRASLADO DE LA RESERVA LEGAL.** Se reitera que en Colombia, la información de inteligencia goza de reserva legal y por tal razón, la difusión debe realizarse únicamente a los receptores legales autorizados, observando los parámetros establecidos en la Ley Estatutaria 1621 del 2013 y el Decreto 1070 de 2015, en especial, lo pertinente a reserva legal, acta de compromiso y protocolo de seguridad y restricción de la información, de acuerdo con los artículos 33, 34, 35, 36, 37 y 38 de la Ley Estatutaria 1621 de 2013. Con la entrega del presente documento se hace traslado de la reserva legal de la información al destinatario del presente documento, en calidad de receptor legal autorizado, quien al recibir el presente documento o conocer de él, manifiesta con su firma o lectura que está suscribiendo acta de compromiso de reserva legal y garantizando de forma expresa (escrita), la reserva legal de la información a la que tuvo acceso. La reserva legal, protocolos y restricciones aplica a tanto a la autoridad competente o receptor legal destinatario de la información, como el servidor público que recibe o tenga conocimiento dentro del proceso de entrega, recibo o trazabilidad del presente documento de inteligencia o contrainteligencia, por la cual, se obliga garantizar que en ningún caso podrá revelar información, fuentes, métodos, procedimientos, agentes o identidad de quienes desarrollan actividades de inteligencia o contrainteligencia, ni podrán en peligro la seguridad y Defensa nacional. Quienes indebidamente divulguen, filtren, comercialicen, empleen o permitan que alguien emplee la información o documentos que gozan de reserva legal, incurrirán en causal de mala conducta, sin perjuicio de las acciones penales a que haya lugar.

"Protegemos el azul de la Bandera"
Línea anticorrupción Armada Nacional 01 8000 11 69 69 – 24 Horas
Troncal de Occidente Vía Sincelejo – Corozal Tel: 2840789
www.armada.mil.co – Zulma.cifuentes@armada.mil.co

INFORMACIÓN PÚBLICA RESERVADA

MDN-GCC-BOLÍVAR

1295

REVISO:

NOTIFICACION CORREO ELECTRONICO
CERTIFICO QUE ESTE MENSAJE FUE ENVIADO POR CORREO ELECTRONICO

JUAN CARLOS GALVIS BARRIOS
SECRETARIO GENERAL
SE DEJA CONSTANCIA QUE SE LE DIO CUMPLIMIENTO AL ARTICULO 205 DEL CP

/O=EXCHANGELABS/OU=EXCHANGE ADMINISTRATIVE GROUP (FYDIBOHF23SPDLT)/CN=RECI

De: Secretaria General Tribunal Administrativo - Bolivar - Bolivar
Enviado el: viernes, 14 de febrero de 2020 10:47 a.m.
Para: Procurador Judicial 22 (ederjenny1@hotmail.com); pajr030201@gmail.com; joseabuchaibe@gmail.com; notificacionjudicial@registraduria.gov.co; notificacionjudicialblv@registraduria.gov.co; jacardona@registraduria.gov.co; josemartineznello@hotmail.com; asuntossas@gmail.com; cnenotificaciones@cne.gov.co; jmcamargo39@gmail.com
Asunto: ESTADO ELECTRONICO RAD. 000-2020-00003-00
Datos adjuntos: 2020-00003-00.pdf

Rama Judicial
Consejo Superior de la Judicatura
República de Colombia

TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DE BOLÍVAR
Estado Electronico

SIGCMA

MEDIO DE CONTROL: ELECTORAL
MAGISTRADO: DR JOSE RAFAEL GUERRERO LEAL
RADICADO: 000-2020-00003-00
DEMANDANTE: JOSE MARTINEZ NIETO
DEMANDADO: ACTO DE ELECCION DEL SEÑOR JUAN MANUEL CAMARGO COMO ALCALDE DEL MUNICIPIO DE MARGARITA - BOLIVAR

En cumplimiento a lo dispuesto por el Art. 201 inciso 3° del CPACA por medio del presente mensaje de datos "COMUNICO" a usted que se profirió auto por medio del cual se ORDENA NO REPONER LA DECISION ADOPTADA MEDIANTE AUTO DE FECHA 21/01/2020. Para tal efecto puede consultar, descargar el estado electrónico y la providencia en el siguiente link de la página web de la rama judicial.

ESTADOS ELECTRONICOS TRIBUNALES ADMINISTRATIVOS DE BOLIVAR

SE ADJUNTA PROVIDENCIA

REVISO:

NOTIFICACION CORREO ELECTRONICO
CERTIFICO QUE ESTE MENSAJE FUE ENVIADO POR CORREO ELECTRONICO

JUAN CARLOS GALVIS BARRIOS
SECRETARIO GENERAL
SE DEJA CONSTANCIA QUE SE LE DIO CUMPLIMIENTO AL ARTICULO 205 DEL CP

/O=EXCHANGELABS/OU=EXCHANGE ADMINISTRATIVE GROUP (FYDIBOHF23SPDLT)/CN=RECI

De: postmaster@registraduriaco.onmicrosoft.com
Para: notificacionjudicial@registraduria.gov.co; notificacionjudicialblv@registraduria.gov.co
Enviado el: viernes, 14 de febrero de 2020 10:47 a.m.
Asunto: Retransmitido: ESTADO ELECTRONICO RAD. 000-2020-00003-00

Se completó la entrega a estos destinatarios o grupos, pero el servidor de destino no envió información de notificación de entrega:

notificacionjudicial@registraduria.gov.co (notificacionjudicial@registraduria.gov.co)

notificacionjudicialblv@registraduria.gov.co (notificacionjudicialblv@registraduria.gov.co)

Asunto: ESTADO ELECTRONICO RAD. 000-2020-00003-00

ESTADO ELECTRONICO ...

1

REVISO:

NOTIFICACION CORREO ELECTRONICO
CERTIFICO QUE ESTE MENSAJE FUE ENVIADO POR CORREO ELECTRONICO

JUAN CARLOS GALVIS BARRIOS
SECRETARIO GENERAL
SE DEJA CONSTANCIA QUE SE LE DIO CUMPLIMIENTO AL ARTICULO 205 DEL CP

/O=EXCHANGELABS/OU=EXCHANGE ADMINISTRATIVE GROUP (FYDIBOHF23SPDLT)/CN=RECI

De: Microsoft Outlook
Para: cnenotificaciones@cne.gov.co
Enviado el: viernes, 14 de febrero de 2020 10:47 a.m.
Asunto: Retransmitido: ESTADO ELECTRONICO RAD. 000-2020-00003-00

Se completó la entrega a estos destinatarios o grupos, pero el servidor de destino no envió información de notificación de entrega:

cnenotificaciones@cne.gov.co (cnenotificaciones@cne.gov.co)

Asunto: ESTADO ELECTRONICO RAD. 000-2020-00003-00

ESTADO ELECTRONICO ...

2

REVISO:

NOTIFICACION CORREO ELECTRONICO
CERTIFICO QUE ESTE MENSAJE FUE ENVIADO POR CORREO ELECTRONICO

JUAN CARLOS GALVIS BARRIOS
SECRETARIO GENERAL
SE DEJA CONSTANCIA QUE SE LE DIO CUMPLIMIENTO AL ARTICULO 205 DEL CP

/O=EXCHANGELABS/OU=EXCHANGE ADMINISTRATIVE GROUP (FYDIBOHF23SPDLT)/CN=RECI

De: postmaster@registraduriaco.onmicrosoft.com
Para: jacardona@registraduria.gov.co
Enviado el: viernes, 14 de febrero de 2020 10:47 a.m.
Asunto: Entregado: ESTADO ELECTRONICO RAD. 000-2020-00003-00

El mensaje se entregó a los siguientes destinatarios:

jacardona@registraduria.gov.co (jacardona@registraduria.gov.co)

Asunto: ESTADO ELECTRONICO RAD. 000-2020-00003-00

ESTADO ELECTRONICO ...

3

REVISO:

NOTIFICACION CORREO ELECTRONICO
CERTIFICO QUE ESTE MENSAJE FUE ENVIADO POR CORREO ELECTRONICO

JUAN CARLOS GALVIS BARRIOS
SECRETARIO GENERAL
SE DEJA CONSTANCIA QUE SE LE DIO CUMPLIMIENTO AL ARTICULO 205 DEL CP

/O=EXCHANGELABS/OU=EXCHANGE ADMINISTRATIVE GROUP (FYDIBOHF23SPDLT)/CN=RECI

De: postmaster@outlook.com
Para: josemartineznello@hotmail.com
Enviado el: viernes, 14 de febrero de 2020 10:47 a.m.
Asunto: Entregado: ESTADO ELECTRONICO RAD. 000-2020-00003-00

El mensaje se entregó a los siguientes destinatarios:

josemartineznello@hotmail.com (josemartineznello@hotmail.com)

Asunto: ESTADO ELECTRONICO RAD. 000-2020-00003-00

ESTADO ELECTRONICO ...

4

REVISO:

NOTIFICACION CORREO ELECTRONICO
CERTIFICO QUE ESTE MENSAJE FUE ENVIADO POR CORREO ELECTRONICO

JUAN CARLOS GALVIS BARRIOS
SECRETARIO GENERAL
SE DEJA CONSTANCIA QUE SE LE DIO CUMPLIMIENTO AL ARTICULO 205 DEL CP

/O=EXCHANGELABS/OU=EXCHANGE ADMINISTRATIVE GROUP (FYDIBOHF23SPDLT)/CN=RECI

De: postmaster@outlook.com
Para: ederjenny1@hotmail.com
Enviado el: viernes, 14 de febrero de 2020 10:47 a.m.
Asunto: Entregado: ESTADO ELECTRONICO RAD. 000-2020-00003-00

El mensaje se entregó a los siguientes destinatarios:

ederjenny1@hotmail.com (ederjenny1@hotmail.com)

Asunto: ESTADO ELECTRONICO RAD. 000-2020-00003-00

ESTADO ELECTRONICO ...

REVISO:

NOTIFICACION CORREO ELECTRONICO
CERTIFICO QUE ESTE MENSAJE FUE ENVIADO POR CORREO ELECTRONICO

JUAN CARLOS GALVIS BARRIOS
SECRETARIO GENERAL
SE DEJA CONSTANCIA QUE SE LE DIO CUMPLIMIENTO AL ARTICULO 205 DEL CP

/O=EXCHANGELABS/OU=EXCHANGE ADMINISTRATIVE GROUP (FYDIBOHF23SPDLT)/CN=RECI

De: Microsoft Outlook
Para: pajr030201@gmail.com; joseabuchaibe@gmail.com; asuntossas@gmail.com; jmcamargo39@gmail.com
Enviado el: viernes, 14 de febrero de 2020 10:47 a.m.
Asunto: Retransmitido: ESTADO ELECTRONICO RAD. 000-2020-00003-00

Se completó la entrega a estos destinatarios o grupos, pero el servidor de destino no envió información de notificación de entrega:

pajr030201@gmail.com (pajr030201@gmail.com)

joseabuchaibe@gmail.com (joseabuchaibe@gmail.com)

asuntossas@gmail.com (asuntossas@gmail.com)

jmcamargo39@gmail.com (jmcamargo39@gmail.com)

Asunto: ESTADO ELECTRONICO RAD. 000-2020-00003-00

ESTADO ELECTRONICO ...

REVISO:

NOTIFICACION CORREO ELECTRONICO
CERTIFICO QUE ESTE MENSAJE FUE ENVIADO POR CORREO ELECTRONICO

JUAN CARLOS GALVIS BARRIOS
SECRETARIO GENERAL
SE DEJA CONSTANCIA QUE SE LE DIO CUMPLIMIENTO AL ARTICULO 205 DEL CP

/O=EXCHANGELABS/OU=EXCHANGE ADMINISTRATIVE GROUP (FYDIBOHF23SPDLT)/CN=RECI

De: Secretaria General Tribunal Administrativo - Bolivar - Bolivar
Enviado el: viernes, 14 de febrero de 2020 10:25 a.m.
Para: angelescorcia828@gmail.com
Asunto: ESTADO ELECTRONICO RA.D 000-2020-00049-00
Datos adjuntos: 2020-00049-00.pdf

Rama Judicial
Consejo Superior de la Judicatura
República de Colombia

TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DE BOLÍVAR
Estado Electronico

SIGCMA

MEDIO DE CONTROL: ELECTORAL
MAGISTRADO: DR MOISÉS RODRIGUÉZ PÉREZ
RADICADO: 000-2020-00049-00
DEMANDANTE: ANGEL ALBERTO ESCORCIA PACHECO
DEMANDADO: WILLIAM DAU CHAMAT

En cumplimiento a lo dispuesto por el Art. 201 inciso 3° del CPACA por medio del presente mensaje de datos "COMUNICO" a usted que se profirió auto por medio del cual se INADMITE LA DEMANDA. Para tal efecto puede consultar, descargar el estado electrónico y la providencia en el siguiente link de la página web de la rama judicial.

ESTADOS ELECTRONICOS TRIBUNALES ADMINISTRATIVOS DE BOLIVAR

SE ADJUNTA PROVIDENCIA

REVISO:

NOTIFICACION CORREO ELECTRONICO
CERTIFICO QUE ESTE MENSAJE FUE ENVIADO POR CORREO ELECTRONICO

JUAN CARLOS GALVIS BARRIOS
SECRETARIO GENERAL
SE DEJA CONSTANCIA QUE SE LE DIO CUMPLIMIENTO AL ARTICULO 205 DEL CP

/O=EXCHANGELABS/OU=EXCHANGE ADMINISTRATIVE GROUP (FYDIBOHF23SPDLT)/CN=RECI

De: Microsoft Outlook
Para: angelescorcia828@gmail.com
Enviado el: viernes, 14 de febrero de 2020 10:25 a.m.
Asunto: Retransmitido: ESTADO ELECTRONICO RA.D 000-2020-00049-00

Se completó la entrega a estos destinatarios o grupos, pero el servidor de destino no envió información de notificación de entrega:

angelescorcia828@gmail.com (angelescorcia828@gmail.com)

Asunto: ESTADO ELECTRONICO RA.D 000-2020-00049-00



ESTADO
ELECTRONICO ...

Cartagena de Indias D. T. y C,

Señores:
H. MAGISTRADOS TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DE BOLÍVAR
E. S. D.

MEDIO DE CONTROL: **REPARACION DIRECTA**
RADICACION: **13-001-33-33-000-2019-00316-00**
ACTOR: **ELOISA TORRES DE GONZALEZ Y OTROS**
DEMANDADO: **NACION - MINDEFENSA - EJÉRCITO NACIONAL-ARMADA NACIONAL-POLICIA NACIONAL-MUNICIPIO DE SAN JACINTO**
M.P. LUIS MIGUEL VILLALOBOS ALVAREZ

YELENA PATRICIA BLANCO NUÑEZ, abogada en ejercicio, identificada con la Cédula de Ciudadanía No. 1.050.035.403 de San Jacinto Bolívar y Tarjeta Profesional No. 194.901 del Consejo Superior de la Judicatura, en mi calidad de apoderado SUSTITUTA de la **NACION – MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL – EJERCITO NACIONAL,** a usted vengo a fin de aportar las pruebas enunciadas en la contestación de la demanda.

Cordialmente,

YELENA PATRICIA BLANCO NUÑEZ

Señores
TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DE BOLÍVAR
Atte. LUIS MIGUEL VILLALOBOS ÁLVAREZ
ESD

Ref. MEDIO DE CONTROL.REPARACIÓN DIRECTA
Rad. 13001-23-33-000-2019-00316-00
DEMANDANTE: ELOÍSA TORRES GONZÁLEZ y otros
DEMANDADO: NACIÓN – DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE LA PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA – MINISTERIO DEL INTERIOR – MINISTERIO DE DEFENSA – ARMANDA NACIONAL – POLICÍA NACIONAL – DEPARTAMENTO DE BOLÍVAR

JUAN MAURICIO GONZÁLEZ NEGRETTE identificado con la cédula de ciudadanía No 73.197.718, en mi condición de Secretario Jurídico del Departamento de Bolívar, cargo para el cual fui nombrado mediante Decreto N° 01 de 2 de enero de 2020, actuando en ejercicio de las funciones propias de mi cargo y en especial las conferidas por el Decreto N° 819 de Junio 8 de 2017; respetuosamente manifiesto a usted que confiero poder especial amplio y suficiente al Abogado(a) **MARÍA PATRICIA PORRAS MENDOZA**, identificado(a) con cedula de ciudadanía No. 64.561.657 de Sincelejo, y Tarjeta Profesional No. 65.454 del Consejo Superior de la Judicatura, a fin de que represente al Departamento de Bolívar dentro del asunto de la referencia.

Nuestro (a) apoderado(a) queda ampliamente facultado(a) para interponer toda clase de recursos, notificarse de todas las providencias, asistir a las audiencias de conciliación y/o pacto de cumplimiento, aportar, solicitar pruebas y en general ejercer todas las atribuciones incitas de este mandato en defensa de los derechos e intereses del Departamento de Bolívar.

En caso de que haya lugar a conciliación y/o transacción, esta se realizará con base en las directrices impartidas por el Comité de Conciliación. Al apoderado le queda expresamente prohibido sustituir el presente poder.

Atentamente,

JUAN MAURICIO GONZÁLEZ NEGRETTE
Secretario Jurídico

Acepto este Poder

MARÍA PATRICIA PORRAS MENDOZA
C.C. N° 64.561.657 de Sincelejo
T.P. No. 65.454 del C.S.de la J.

REPÚBLICA DE COLOMBIA NOTARÍA TERCERA 13 ALBERTO MARRANCO MENDOZA NOTARIO AUT 1 CARTAGENA D.T Y C.

TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DE BOLIVAR SECRETARIA GENERAL HOY 13 MAR. 2020 RECIBE MEMORIAL Y EXPEDIENTE CON CUADERNOS Y FOLIOS

13300

Notaría Tercera
Del Círculo de Cartagena

602420

Diligencia de Presentacion Personal

Ante el Notario Tercero del Círculo de Cartagena

fue presentado personalmente el documento anexo por:

JUAN MAURICIO GONZALEZ NEGRETE

Identificado con C.C. **73197718**

Cartagena:2020-03-13 14:18

194316955

Para constatar la autenticidad de este documento, pasadas 6 horas de la fecha del mismo puede consultar en http://notariaterceradecartagena.com/consulta-tramite.html

PAPEL DE USO EXCLUSIVO DE LA NOTARIA TERCERA DE CARTAGENA NO TIENE COSTO PARA EL USUARIO



BOLÍVAR SÍ AVANZA
GOBIERNO DE RESULTADOS

819

DECRETO No. 08 JUN. 2017
(Despacho)
Por el cual se delega unas competencias

EL GOBERNADOR DEL DEPARTAMENTO DE BOLÍVAR
En uso de las facultades conferidas por el art. 209 de la Constitución Política, Ley 489 de 1998, y

CONSIDERANDO

Que el artículo 303 de la Constitución Política define que en cada uno de los Departamentos habrá un Gobernador que será Jefe de la Administración Seccional y Representante Legal del Departamento, y como tal, tiene la competencia para dirigir y coordinar la acción administrativa del Departamento y actuar en su nombre como gestor y promotor del desarrollo integral de su territorio, de conformidad con la Constitución y las leyes, por mandato expreso del numeral 2º. del artículo 305 de la Carta Política.

Que de conformidad con el articulo 94 del Decreto 1222 de 1986, son atribuciones del Gobernador: (...) 4. Llevar la voz del departamento y representarlo en los negocios administrativos y judiciales, pudiendo delegar esta representación conforme a la ley.

Que así mismo, el artículo 209 de la Constitución política de Colombia dispone que la función administrativa está al servicio de los intereses generales y se desarrolla con fundamento en los principios de igualdad, moralidad, eficacia, economía, celeridad, imparcialidad y publicidad, mediante la descentralización, la delegación y la desconcentración de funciones, disposición que fue desarrollada mediante el artículo 9 de la ley 489 de 1998, facultando a las autoridades administrativas para que mediante acto de delegación transfiera el ejercicio de las funciones a los empleados públicos de los niveles directivo y asesor.

Que en virtud a lo expuesto, se procederá a delegar la atribución del Gobernador consagrada en el artículo 94 citado, en funcionarios del nivel directivo y/o Asesor, a fin de garantizar la aplicación de los principios de eficacia, eficiencia, economía y celeridad en dichos procesos.

Por lo anterior,

DECRETA:

PRIMERO: Deléguese en los funcionarios que a continuación se relacionan, la competencia del Gobernador atribuida por el artículo 94 numeral 4. del Decreto 1222 de 1986, en especial la de comparecer en nombre y representación de la Entidad Territorial en las audiencias de conciliación, saneamiento, decisión de excepciones previas, y fijación del litigio de que tratan los artículos 101 del Código de Procedimiento Civil, 372 y 373 de la Ley 1564 de 2012, artículo 180 de la Ley 1437 de 2011, el artículo 77 del Código de Procedimiento laboral y Seguridad Social, modificado por el artículo 39 de la Ley 712 de 2001 y en las audiencias prejudiciales consagradas en el Decreto 2511 de 1998 y la Ley 640 de 2001, los artículos 12 y 13 de la Ley 678 de 2001 de las Acciones de Repetición y Llamamiento en garantía con fines de repetición, audiencias previas a la concesión de recursos de apelación (artículo 70 de la Ley 1395 de 2010, y en las demás actuaciones que requieran la presencia y/o intervención del Gobernador:

GOBERNACION DE BOLIVAR. ES FOTOCOPIA
DEL DOCUMENTO QUE REPOSA EN NUESTI
ARCHIVOS
05 MAR 2020
FECH

Bolívar primero

DECRETO No. 01 DEL 2020 02 ENE. 2020

"Por medio del cual se dispone hacer unos nombramientos ordinarios"

EL GOBERNADOR DEL DEPARTAMENTO DE BOLIVAR

En uso de sus facultades Legales y Constitucionales conferidas en los Artículos 299, 303 y 305 de la Constitución Política de Colombia, Decreto Extraordinario No.1222 de 1986, Decreto 1421 de 1993 y sus modificaciones, Ley 617 de 2000 y todas las demás que se refieren al caso,

DECRETA

ARTÍCULO PRIMERO: Nombrase con carácter ordinario al Doctor WILLY SIMANCAS MENDOZA, identificado con la cédula de ciudadanía No. 73.120.165, en el empleo de Asesor Código 105 Grado 04 asignado a la Secretaría General.

ARTÍCULO SEGUNDO: Nombrase con carácter ordinario al Doctor JORGE ALFONSO REDONDO SUAREZ, identificado con la cédula de ciudadanía No. 73.132.844, en el empleo de Secretario de Despacho Código 020 Grado 04 asignado a la Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural.

ARTÍCULO TERCERO: Nombrase con carácter ordinario al Doctor JUAN MAURICIO GONZÁLEZ NEGRETE, identificado con la cédula de ciudadanía No. 73.197.718, en el empleo de Secretario de Despacho Código 020 Grado 04 asignado a la Secretaría Jurídica.

ARTÍCULO CUARTO: Nombrase con carácter ordinario al Doctor CARLOS ENRIQUE DE JESÚS FELIZ MONSALVE, identificado con la cédula de ciudadanía No. 73.166.683, en el empleo de Secretario de Despacho Código 020 Grado 04 asignado a la Secretaría del Interior y Asuntos Gubernamentales.

ARTÍCULO QUINTO: Nombrase con carácter ordinario al señor ÁLVARO MANUEL GONZÁLEZ HOLLMAN, identificado con la cédula de ciudadanía No. 72.219.564, en el empleo de Secretario de Despacho Código 020 Grado 04 asignado a la Secretaría de Salud.

ARTÍCULO SEXTO: Nombrase con carácter ordinario al Doctor ALVARO JOSÉ REDONDO CASTILLO, identificado con la cédula de ciudadanía No. 8.644.691, en el empleo de Secretario de Despacho Código 020 Grado 04 asignado a la Secretaría Privada.

ARTÍCULO SÉPTIMO: Nombrase con carácter ordinario al Doctor EMMANUEL VERGARA MARTÍNEZ, identificado con la cédula de ciudadanía No. 1.047.387.329, en el empleo de Director Administrativo Código 009 Grado 02 asignado a la Dirección Función Pública de la Secretaría General.

ARTÍCULO OCTAVO: Nombrase con carácter ordinario al Doctor RUBEN ALFONSO MIRANDA STUMMO, identificado con la cédula de ciudadanía No. 9.103.550, en el empleo de Director Administrativo Código 009 Grado 02 asignado a la Dirección de Tesorería de la Secretaría de Hacienda.

Scanned by CamScanner

GOBERNACION DE BOLIVAR. ES FOTOCOPIA DEL DOCUMENTO QUE REPOSA EN NUESTR ARCHIVOS
FECHA: 0 3 MAY 2020

DECRETO No. 01 DEL 2020

"Por medio del cual se dispone hacer unos nombramientos ordinarios"

ARTÍCULO NOVENO: Nombrase con carácter ordinario al Doctor PEDRO MANUEL ALI ALI, identificado con la cédula de ciudadanía No. 19.871.747, en el empleo de Gerente General del Instituto Departamental de Deporte Y Recreación de Bolívar- IDERBOL.

ARTÍCULO DÉCIMO: Nombrase con carácter ordinario al Doctor IVÁN JOSÉ SANES PÉREZ, identificado con la cédula de ciudadanía No. 7.921.961, en el empleo de Director General del Instituto de Cultura y Turismo de Bolívar- ICULTUR.

ARTÍCULO DÉCIMO PRIMERO: El presente Decreto rige a partir de su expedición.

COMUNÍQUESE Y CÚMPLASE.

Dado en Cartagena de Indias, a los 0 2 ENE. 2020

VICENTE ANTONIO BLEL SCAFF
Gobernador de Bolívar

Proyectó y Revisó: Willy Escrucería Castro - Profesional Especializado Dirección Función Pública

Scanned by CamScanner

GOBERNACION DE BOLIVAR. ES FOTOCOPIA DEL DOCUMENTO QUE REPOSA EN NUES ARCHIVOS
FECHA: 0 MAR 2020

Bolívar primero

ACTA DE POSESION

En el Municipio de Turbaco - Bolívar, a los 14 días del mes de Enero de 2020, se presentó al DESPACHO DE LA DIRECCION FUNCION PUBLICA DE LA GOBERNACION DE BOLIVAR; el (la) señor(a): JUAN MAURICIO GONZALEZ NEGRETE, identificado (a) con la C.C No. 73.197.718, con el objeto de tomar posesión del cargo de SECRETARIO DE DESPACHO , Código 020 Grado 04, asignado al Despacho de la Secretaría Jurídica de la Gobernación de Bolívar, con una asignación mensual de $[illegible] y gastos de representación de $[illegible], para el cual fue NOMBRADO ORDINARIO, mediante Decreto No 01 de fecha 02 de Enero de 2020, con cargo a recursos Propios.

El posesionado juró en forma legal, prometiendo cumplir fiel y legalmente los deberes propios de su cargo.

El Posesionado manifestó que ha escogido libremente, como Empresa Promotora de Salud a: SURA EPS, como Fondo Administrador de Pensión a COLPENSIONES y como Fondo Administrador de Cesantías a PORVENIR, afirma bajo la gravedad del juramento que no se halla incurso en las causales de incompatibilidad e inhabilidad señaladas por las disposiciones constitucionales o legales, ni pesan sobre él sanciones penales ni disciplinarias que le impidan el ejercicio del cargo.

POSESIONADO

EMMANUEL VERGARA MARTINEZ
Director Función publica

Elaboró. Esegura
Revisó. W.Escrucería

Scanned by CamScanner

GOBERNACIÓN DE BOLÍVAR ES FOTOCOPIA DEL DOCUMENTO QUE REPOSA EN NUESTROS ARCHIVOS
FECHA: 05 MAR 2020

PORRAS
abogados asociados



Cartagena, marzo de 2020

H. Magistrados
TRIBUNAL ADMIISTRATIVO DE BOLÍVAR
M.P. LUIS MIGUEL VILLALOBOS ALVAREZ
Ciudad

Referencia: Reparación directa de ELOISA TORRES DE GONZALEZ Y OTROS contra DEPARTAMENTO DE BOLIVAR y otros.
Radicación: 13-001-23-33-000-2019-00316-00.
Asunto: Contestación de demanda y excepciones de mérito.

MARÍA PATRICIA PORRAS MENDOZA, mayor de edad y vecina de Cartagena, identificada con cédula de ciudadanía N° 64.561.657 expedida en Sincelejo, abogada portadora de la Tarjeta Profesional N° 65.454 expedida por el Consejo Superior de la Judicatura, en mi condición de apoderada especial del DEPARTAMENTO DE BOLIVAR, entidad territorial de creación constitucional, de conformidad con la delegación, decreto de nombramiento, acta de posesión y poder que obran en el expediente, demandada en la acción de grupo de la referencia, respetuosamente, procedo a CONTESTAR LA DEMANDA Y FORMULAR EXCEPCIONES DE MÉRITO, todo lo cual realizo de la siguiente manera:

OPORTUNIDAD

Esta demanda fue notificada personalmente mediante mensaje dirigido al buzón electrónico de mi representada, el día 04 de diciembre de 2019 (art. 199 CPACA), por tanto el traslado para ejercer la defensa comenzó al vencimiento del término común de 25 días después de surtida la notificación, esto es, del 05 de diciembre de 2019 al 31 de enero de 2020; y corrió durante los 30 días siguientes, del 03 de febrero al 13 de marzo de 2020, (arts. 172 y 199 CPACA) siendo inhábiles todos los sábados, domingos, festivos y vacancias judiciales comprendidos en ese lapso (art. 118 CGP), encontrándose mi representada en término para contestar.

PRONUNCIAMIENTO SOBRE EL CAPÍTULO 1 *"ANTECEDENTES"* Y CAPÍTULO 2 *"CONTEXTUALIZACIÓN-HECHOS GENERALES CONSTITUTIVOS DE LA IMPUTACIÓN DE LA RESPONSABILIDAD"*

En forma general manifiesto que el capítulo los *"antecedentes"* de la demanda en realidad son consideraciones personales de los actores referidas a situaciones históricas que consideran guardan relación con el caso concreto, sin que en las mismas se realicen imputaciones que conlleven una presunta declaratoria de responsabilidad patrimonial del DEPARTAMENTO DE BOLIVAR y, en consecuencia, de lugar al reconocimiento y pago de indemnización de los perjuicios supuestamente causados a la parte actora.

Adicionalmente, los hechos generales constitutivos de la imputación de responsabilidad no tienen relación alguna con las pretensiones solicitadas frente al DEPARTAMENTO DE BOLIVAR y —por tanto— tales hechos no sirven de fundamento a las pretensiones, incumpliendo así el artículo 162 del CPACA y los artículos 82.5 y 206 del CGP.

Y ello es importante porque siempre hemos de preguntarnos *"¿cuál es la razón por la que se acude al juez?, y frente a este cuestionamiento, la jurisprudencia del Consejo de Estado ha sostenido que la respuesta se encuentra en los hechos contenidos en la demanda, al ser éstos los que soportan el ejercicio*

MARÍA PATRICIA
PORRAS MENDOZA

Centro, Edificio Colseguros Of. 704
Calle Cochera del Gobernador N° 33-15
Cartagena de Indias, Colombia
Telefax: (57-5) 6606330 - Celular: 317 4424760
mariapatriciaporras@gmail.com

del derecho de acción y el reclamo de pretensiones concretas.[1] *Así, nos hallamos frente al motivo o fundamento mismo del proceso, ante la razón inmediata del derecho deducido en juicio.*[2]*."*[3]

Así las cosas, no estando fundamentadas las pretensiones en los hechos expuestos en la demanda, la misma carece de *causa petendi*, lo que la torna inadmisible e impróspera.

No obstante lo anterior, me pronuncio en forma individual sobre los hechos de la demanda, así:

PRONUNCIAMIENTO SOBRE EL CAPÍTULO 4 *"DE LOS HECHOS VICTIMIZANTES-VIOLACIÓN DE LOS DERECHOS HUMANOS CONTRA LOS DEMANDANTES- INFRACCIONES GRAVES AL DIH- IMPUTACIÓN DE LA RESPONSABILIDAD"*:

Pronunciamiento sobre el núcleo familiar de Eloísa Torres de González:

En cuanto a los hechos 1 al 36: No me constan y me atengo a lo que resulte probado. No obstante, agrego: El Departamento de Bolívar debe ser excluido por no tener legitimación sustantiva por pasiva para imputársele la obligación de reparar que en este proceso se pretende por cuanto en nada se relacionan los hechos dañinos alegados por los demandantes con dicha entidad territorial, como se explicará en la excepción denominada en esta contestación como "FALTA DE LEGITIMACIÓN EN LA CAUSA POR PASIVA DEL DEPARTAMENTO DE BOLÍVAR", argumentos a los cuales nos remitimos por economía procesal.

Pronunciamiento sobre el núcleo familiar de Estela del Carmen Puello Parra:

En cuanto a los hechos 37 al 50: No me constan y me atengo a lo que resulte probado. No obstante, agrego: El Departamento de Bolívar debe ser excluido por no tener legitimación sustantiva por pasiva para imputársele la obligación de reparar que en este proceso se pretende por cuanto en nada se relacionan los hechos dañinos alegados por los demandantes con dicha entidad territorial, como se explicará en la excepción denominada en esta contestación como "FALTA DE LEGITIMACIÓN EN LA CAUSA POR PASIVA DEL DEPARTAMENTO DE BOLÍVAR", argumentos a los cuales nos remitimos por economía procesal.

Pronunciamiento sobre el núcleo familiar de Carmen María González Torres:

En cuanto a los hechos 51 al 54: No me constan y me atengo a lo que resulte probado. No obstante, agrego: El Departamento de Bolívar debe ser excluido por no tener legitimación sustantiva por pasiva para imputársele la obligación de reparar que en este proceso se pretende por cuanto en nada se relacionan los hechos dañinos alegados por los demandantes con dicha entidad territorial, como se explicará en la excepción denominada en esta contestación como "FALTA DE LEGITIMACIÓN EN LA CAUSA POR PASIVA DEL DEPARTAMENTO DE BOLÍVAR", argumentos a los cuales nos remitimos por economía procesal.

Pronunciamiento sobre el núcleo familiar de María González de Julio y Eriberto Julio Arrieta:

En cuanto a los hechos 55 al 58: No me constan y me atengo a lo que resulte probado. No obstante, agrego: El Departamento de Bolívar debe ser excluido por no tener legitimación sustantiva por pasiva para imputársele la obligación de reparar que en este proceso se pretende por cuanto en nada se relacionan los hechos dañinos alegados por los demandantes con dicha entidad territorial, como se explicará en la excepción denominada en esta contestación como "FALTA DE LEGITIMACIÓN EN LA CAUSA POR PASIVA DEL DEPARTAMENTO DE BOLÍVAR", argumentos a los cuales nos remitimos por economía procesal.

---

[1] Consejo de Estado, Sección Primera, Sentencia de 18 de abril de 2007, exp. AP 0118-01 M. P. Rafael E. Osteau de Lafont Pianeta.
[2] Ver: COUTURE, Eduardo. Fundamentos del... *Ob. Cit.* Pág. 435.
[3] Consejo de Estado, Sección Tercera, Sentencia de 1 de noviembre de 2012, exp. Radicación: 25000-23-26-000-1999-0002-04(AG). M. P. Enrique Gil Botero. Subrayado nuestro.

MARÍA PATRICIA
PORRAS MENDOZA

Centro, Edificio Colseguros Of. 704
Calle Cochera del Gobernador N° 33-15
Cartagena de Indias, Colombia
Telefax: (57-5) 6606330 - Celular: 317 4424760
mariapatriciaporras@gmail.com

Pronunciamiento sobre el núcleo familiar de Lisandro González Torres:

En cuanto a los hechos 59 al 67: No me constan y me atengo a lo que resulte probado. No obstante, agrego: El Departamento de Bolívar debe ser excluido por no tener legitimación sustantiva por pasiva para imputársele la obligación de reparar que en este proceso se pretende por cuanto en nada se relacionan los hechos dañinos alegados por los demandantes con dicha entidad territorial, como se explicará en la excepción denominada en esta contestación como "FALTA DE LEGITIMACIÓN EN LA CAUSA POR PASIVA DEL DEPARTAMENTO DE BOLÍVAR", argumentos a los cuales nos remitimos por economía procesal.

Pronunciamiento sobre el núcleo familiar de Eulalia González de Vásquez:

En cuanto a los hechos 68 al 77: No me constan y me atengo a lo que resulte probado. No obstante, agrego: El Departamento de Bolívar debe ser excluido por no tener legitimación sustantiva por pasiva para imputársele la obligación de reparar que en este proceso se pretende por cuanto en nada se relacionan los hechos dañinos alegados por los demandantes con dicha entidad territorial, como se explicará en la excepción denominada en esta contestación como "FALTA DE LEGITIMACIÓN EN LA CAUSA POR PASIVA DEL DEPARTAMENTO DE BOLÍVAR", argumentos a los cuales nos remitimos por economía procesal.

Pronunciamiento sobre el núcleo familiar de Candelaria González Torres:

En cuanto a los hechos 78 al 86: No me constan y me atengo a lo que resulte probado. No obstante, agrego: El Departamento de Bolívar debe ser excluido por no tener legitimación sustantiva por pasiva para imputársele la obligación de reparar que en este proceso se pretende por cuanto en nada se relacionan los hechos dañinos alegados por los demandantes con dicha entidad territorial, como se explicará en la excepción denominada en esta contestación como "FALTA DE LEGITIMACIÓN EN LA CAUSA POR PASIVA DEL DEPARTAMENTO DE BOLÍVAR", argumentos a los cuales nos remitimos por economía procesal.

Pronunciamiento sobre el núcleo familiar de Aleida María González Torres:

En cuanto a los hechos 87 al 94: No me constan y me atengo a lo que resulte probado. No obstante, agrego: El Departamento de Bolívar debe ser excluido por no tener legitimación sustantiva por pasiva para imputársele la obligación de reparar que en este proceso se pretende por cuanto en nada se relacionan los hechos dañinos alegados por los demandantes con dicha entidad territorial, como se explicará en la excepción denominada en esta contestación como "FALTA DE LEGITIMACIÓN EN LA CAUSA POR PASIVA DEL DEPARTAMENTO DE BOLÍVAR", argumentos a los cuales nos remitimos por economía procesal.

Pronunciamiento sobre el núcleo familiar de Alcira González:

En cuanto a los hechos 95 al 103: No me constan y me atengo a lo que resulte probado. No obstante, agrego: El Departamento de Bolívar debe ser excluido por no tener legitimación sustantiva por pasiva para imputársele la obligación de reparar que en este proceso se pretende por cuanto en nada se relacionan los hechos dañinos alegados por los demandantes con dicha entidad territorial, como se explicará en la excepción denominada en esta contestación como "FALTA DE LEGITIMACIÓN EN LA CAUSA POR PASIVA DEL DEPARTAMENTO DE BOLÍVAR", argumentos a los cuales nos remitimos por economía procesal.

Pronunciamiento sobre el núcleo familiar de Jesús González Torres:

En cuanto a los hechos 104 al 111: No me constan y me atengo a lo que resulte probado. No obstante, agrego: El Departamento de Bolívar debe ser excluido por no tener legitimación sustantiva por pasiva para imputársele la obligación de reparar que en este proceso se pretende por cuanto en nada se relacionan los hechos dañinos alegados por los demandantes con dicha entidad territorial, como se explicará en la

MARÍA PATRICIA
PORRAS MENDOZA

Centro, Edificio Coseguros Of. 704
Calle Cochera del Gobernador N° 33-15
Cartagena de Indias, Colombia
Telefax: (57-5) 6606330 - Celular: 317 4424760
mariapatriciaporras@gmail.com

excepción denominada en esta contestación como "FALTA DE LEGITIMACIÓN EN LA CAUSA POR PASIVA DEL DEPARTAMENTO DE BOLÍVAR", argumentos a los cuales nos remitimos por economía procesal.

Pronunciamiento sobre el núcleo familiar de Vilma Rafaela González Torres:

En cuanto a los hechos 112 al 120: No me constan y me atengo a lo que resulte probado. No obstante, agrego: El Departamento de Bolívar debe ser excluido por no tener legitimación sustantiva por pasiva para imputársele la obligación de reparar que en este proceso se pretende por cuanto en nada se relacionan los hechos dañinos alegados por los demandantes con dicha entidad territorial, como se explicará en la excepción denominada en esta contestación como "FALTA DE LEGITIMACIÓN EN LA CAUSA POR PASIVA DEL DEPARTAMENTO DE BOLÍVAR", argumentos a los cuales nos remitimos por economía procesal.

PRONUNCIAMIENTO SOBRE LAS *"PRETENSIONES"*

En forma general, me opongo a la totalidad de las pretensiones de la demanda relacionadas con la declaratoria de responsabilidad del DEPARTAMENTO DE BOLIVAR y su condena, por carecer de fundamentos jurídicos y fácticos que permitan su prosperidad. En consecuencia, esta acción deberá ser denegada, condenando en costas a los actores en favor de mi defendida.

EXCEPCIONES

1. FALTA DE LEGITIMACIÓN EN LA CAUSA POR PASIVA DEL DEPARTAMENTO DE BOLÍVAR:

El artículo 90 de la Constitución establece la cláusula general de responsabilidad estatal, sin embargo la responsabilidad estatal y la consecuente obligación de resarcir los daños, solo se genera por el incumplimiento de las obligaciones constitucionales, legales o reglamentarias, de tal manera que una entidad estatal solo podrá ser declarada responsable por el incumplimiento de las obligaciones que el ordenamiento jurídico le impone.

La Corte Constitucional en sentencia de unificación SU – 254 de 2013, se refirió en los siguientes términos frente a la responsabilidad estatal por el desplazamiento forzado:

> *"En relación con el tema de la responsabilidad del Estado frente a los hechos que originan el desplazamiento, la jurisprudencia del Consejo de Estado ha establecido que al Estado le corresponde una doble responsabilidad: de un lado, le compete prevenir que los hechos del desplazamiento se produzcan, en cuanto es el encargado de velar por los derechos fundamentales de los asociados, pero que una vez ocurrido el desplazamiento, al Estado le corresponde la responsabilidad de atender y reparar a la víctima del desplazamiento, con el fin de que puedan reconstruir sus vidas. En punto a este tema, el Consejo afirmó:*
>
> > *"**Al Estado le compete impedir que el desplazamiento se produzca**, en razón a que las autoridades han sido establecidas para respetar y hacer respetar la vida, honra y bienes de los asociados, **pero si éste no es capaz de impedir que sus asociados sean expulsados de sus lugares de origen, tiene al menos que garantizarles la atención necesaria para reconstruir sus vidas.**"[4] (Resalta la Corte)"*

De tal manera que hay dos obligaciones en cabeza del Estado: i) Impedir que se produzca el desplazamiento forzado; y ii) Garantizar la atención de las víctimas en caso de que se produzca el desplazamiento forzado.

[4] Sentencia SI 00213-01 de 2006 Sección Tercera. Acción de grupo adelantada por el desplazamiento causado por la toma del corregimiento La Gabarra del municipio de Tibú.

MARÍA PATRICIA
PORRAS MENDOZA

Centro, Edificio Colseguros Of. 704
Calle Cochera del Gobernador N° 33-15
Cartagena de Indias, Colombia
Telefax: (57-5) 6606330 - Celular: 317 4424760
mariapatriciaporras@gmail.com

Conforme a lo anterior es dable determinar cuáles son las obligaciones para el estado frente al desplazamiento forzado y las obligaciones estatales en cabeza del Departamento de Bolívar, para demostrar que ninguna de ellas recae sobre el Departamento de Bolívar tal y como pasará a explicarse.

I) IMPEDIR QUE SE PRODUZCA EL DESPLAZAMIENTO FORZADO

Frente a la protección de la población, los artículos 217 y 218 de la Constitución Política, disponen lo siguiente:

> *"ARTICULO 217. La Nación tendrá para su defensa unas Fuerzas Militares permanentes constituidas por el Ejército, la Armada y la Fuerza Aérea.*
>
> *Las Fuerzas Militares tendrán como finalidad primordial la defensa de la soberanía, la independencia, la integridad del territorio nacional y del orden constitucional.*
>
> *La Ley determinará el sistema de reemplazos en las Fuerzas Militares, así como los ascensos, derechos y obligaciones de sus miembros y el régimen especial de carrera, prestacional y disciplinario, que les es propio.*
>
> *ARTICULO 218. La ley organizará el cuerpo de Policía.*
>
> *La Policía Nacional es un cuerpo armado permanente de naturaleza civil, a cargo de la Nación, cuyo fin primordial es el mantenimiento de las condiciones necesarias para el ejercicio de los derechos y libertades públicas, y para asegurar que los habitantes de Colombia convivan en paz.*
>
> *La ley determinará su régimen de carrera, prestacional y disciplinario."*

Así pues, es la misma Constitución Política la que consagra en cabeza de las Fuerzas Militares y de Policía la garantía de seguridad de la población.

Frente a esto último, el Consejo de Estado se ha pronunciado de la siguiente manera sobre el deber de protección[5]:

> *"Tal como ya se señaló, la razón de ser de las autoridades públicas no es otra que la de proteger a todas las personas residentes en Colombia en su vida, honra, bienes, creencias y demás derechos y libertades (art. 2 C.P.), obligaciones que en relación con los miembros de la Fuerza Pública establecen específicamente los artículos 217 y 218 ibídem, que señalan que a las Fuerzas Militares corresponde, entre otras funciones, la defensa de la soberanía del Estado y a la Policía Nacional el mantenimiento de las condiciones para el ejercicio de los derechos y libertades públicas y para asegurar que los habitantes de Colombia convivan en paz."*

Adicionalmente, en lo referente a impedir el desplazamiento forzado, el demandante en los hechos de la demanda imputa las acciones y omisiones en cabeza la fuerza pública, cuando afirma en el hecho 13 del capítulo 2 *"que la fuerza pública y en especial miembros de la infantería de marina adscritos a la primera brigada de la Policía Nacional y del Ejército Nacional desarrollaron operaciones concertadas con la organización armada ilegal, pervirtiendo su misión constitucional (...)"* pudiendo concluirse de lo anterior que los hechos causantes del daño no provienen de acciones u omisiones imputables al del Departamento de Bolívar, configurándose así la falta absoluta de legitimación por pasiva en relación con dicha entidad.

[5] Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera, Consejera Ponente: Ruth Estela Correa Palacio, 26 de enero de 2006, Radicación número: AG-25000232600020010021 3-01.

MARÍA PATRICIA
PORRAS MENDOZA

Centro, Edificio Colseguros Of. 704
Calle Cochera del Gobernador N° 33-15
Cartagena de Indias, Colombia
Telefax: (57-5) 6606330 - Celular: 317 4424760
mariapatriciaporras@gmail.com

El Consejo de Estado al explicar el alcance de la falta de legitimación en la causa ha indicado, entre otras en Sentencia[6] de 23 de enero de 2015, en la cual reitera Sentencia del 23 de octubre de 1990, manifiesta:

> *"Sentencia del 23 de octubre de 1990. Expediente No. 6054. "La legitimación en la causa consiste en la identidad de las personas que figuran como sujetos (por activa o por pasiva) de la pretensión procesal, con las personas a las cuales la ley otorga el derecho para postular determinadas pretensiones. Cuando ella falte bien en el demandante o bien en el demandado, la sentencia no puede ser inhibitoria sino desestimatoria de las pretensiones aducidas, pues querrá decir que quien las adujo o la persona contra las que se adujeron no eran las titulares del derecho o de la obligación correlativa alegada".*

En consecuencia, el Departamento de Bolívar debe ser excluido por no tener legitimación sustantiva por pasiva pues el ordenamiento jurídico no ha puesto en cabeza de ella la obligación de protección.

II) GARANTIZAR LA ATENCIÓN DE LAS VICTIMAS DEL DESPLAZAMIENTO FORZADO

De conformidad con lo establecido por la Corte Constitucional en sentencia de unificación SU-254 de 24 de abril de 2013, en la actualidad los responsables de la reparación a las víctimas de desplazamiento forzado — como entidades responsables en el nuevo marco jurídico-institucional creado por la Ley 1448 de 2011 y sus decretos reglamentarios 4088, 4155 y 4157 de 2011— son:

- El DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO PARA LA PROSPERIDAD SOCIAL.
- La UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE ATENCIÓN Y REPARACIÓN INTEGRAL A LAS VÍCTIMAS.

En efecto, indica la Sentencia SU-254 de 2013[7]:

> *"11.2.6.4 En cuarto lugar, esta Corporación debe precisar que existe una nueva institucionalidad creada por la Ley 1448 de 2011 como encargada de la reparación integral a las víctimas del conflicto armado y que por tanto, EN LA ACTUALIDAD LOS RESPONSABLES DE LA REPARACIÓN A LAS VÍCTIMAS DE DESPLAZAMIENTO FORZADO SON EL DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO PARA LA PROSPERIDAD SOCIAL, entidad en la que se transformó la antigua Agencia Presidencial para la Acción Social y la Cooperación Internacional – Acción Social-, de conformidad con el artículo 170 de la Ley 1448 de 2011 y el Decreto 4155 de 2011; LA UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE ATENCIÓN Y REPARACIÓN INTEGRAL A LAS VÍCTIMAS, de conformidad con los artículos 166 y 168 de la Ley 1448 de 2011, el Decreto 4157 de 2011, y el artículo 146 del Decreto 4800 de 2011; normas que determinan a estas entidades como directamente responsables en el nuevo marco institucional, creado por la Ley 1448 de 2011, de diseñar, implementar, ejecutar y otorgar las diferentes medidas de reparación integral para las víctimas del conflicto interno armado de que trata esa ley y de coordinar el Sistema Nacional de Atención y Reparación Integral a las Víctimas, de que tratan los artículos 159 a 174 de la misma normativa y el artículo 146 del Decreto 4800 de 2012, en el cual se dispone que la responsabilidad del programa de indemnización por vía administrativa estará en cabeza de la Unidad Administrativa Especial de Atención y Reparación Integral a las Víctimas, entidad que administrará los recursos destinados a la indemnización por vía administrativa."*

Así pues, según la jurisprudencia citada, no es el Departamento de Bolívar la entidad sobre la cual recae la obligación de garantizar la atención de las victimas del desplazamiento forzado, y a su vez los hechos

---

[6] CONSEJO DE ESTADO SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO SECCIÓN TERCERA SUBSECCIÓN C Consejero ponente: JAIME ORLANDO SANTOFIMIO GAMBOA Bogotá, D.C., veintitrés (23) de enero de dos mil quince (2015) Radicación número: 76001233100019970325101 (20.507) Actor: Joseph Mora Van Wichen y otros Demandado: Nación - Ministerio de Defensa Nacional y otros Asunto: Acción de Reparación Directa (Sentencia).

[7] Subrayado, mayúsculas y negrillas nuestras.

MARÍA PATRICIA
PORRAS MENDOZA

Centro, Edificio Coliseguros Of. 704
Calle Cochera del Gobernador N° 33-15
Cartagena de Indias, Colombia
Telefax: (57-5) 6606330 Celular: 317 4424760
mariapatriciaporras@gmail.com

generadores del daño manifestados por el demandante no tiene origen en ni acciones u omisiones imputables al Departamento de Bolívar.

2. FALTA DE LOS ELEMENTOS NECESARIOS DE IMPUTACIÓN - AUSENCIA DE FALLA DEL SERVICIO

En lo referente a la declaratoria de responsabilidad por omisión, como es el caso del desplazamiento forzado, pues es un tercero – grupos paramilitares, grupos guerrilleros o delincuencia común, etc... – el que realiza materialmente el acto, se ha pronunciado así el Consejo de Estado[8] frente a los requisitos para que se configure la responsabilidad:

> *"a) la existencia de una obligación legal o reglamentaria a cargo de la entidad demandada de realizar la acción con la cual se habrían evitado los perjuicios; b) la omisión de poner en funcionamiento los recursos de que se dispone para el adecuado cumplimiento del deber legal, atendidas las circunstancias particulares del caso; c) un daño antijurídico, y d) la relación causal entre la omisión y el daño."*

Criterio que el Consejo de Estado ha reiterado en otras oportunidades:

> *"En relación con la responsabilidad del Estado por omisión, ha considerado la Sala que para la prosperidad de la demanda es necesario que se encuentren acreditados los siguientes requisitos: a) la existencia de una obligación legal o reglamentaria a cargo de la entidad demandada de realizar la acción con la cual se habrían evitado los perjuicios; b) la omisión de poner en funcionamiento los recursos de que se dispone para el adecuado cumplimiento del deber legal, atendidas las circunstancias particulares del caso; c) un daño antijurídico, y d) la relación causal entre la omisión y el daño. Frente a este último aspecto, la Sala, con apoyo en la doctrina, que a su vez se inspiró en la distinción realizada en el derecho penal entre delitos por omisión pura y de comisión por omisión, precisó que en este tipo de eventos lo decisivo no es la existencia efectiva de una relación causal entre la omisión y el resultado, sino la omisión de la conducta debida, que de haberse realizado habría interrumpido el proceso causal impidiendo la producción de la lesión. De acuerdo con la jurisprudencia de la Sala, para que pueda considerarse que el Estado es responsable por omisión, en los eventos en los cuales se le imputa el daño por falta de protección, se requiere previo requerimiento a la autoridad, pero en relación a ese requerimiento no se exige ninguna formalidad, porque todo dependerá de las circunstancias particulares del caso. Es más, ni siquiera se precisa de un requerimiento previo cuando la situación de amenaza es conocida por dicha autoridad."*

Adicionalmente, la sentencia SU–254 de 2013 de la Corte Constitucional, al analizar los diferentes regímenes de responsabilidad aplicables al desplazamiento, expuso las siguientes consideraciones emanadas del Consejo de Estado:

> *"[e]n materia de la responsabilidad del Estado [...] se parte del supuesto de que la conducta dañosa la despliega un tercero ajeno a la estructura pública, y que jurídicamente tal conducta le es imputable al Estado, entre otros, por acción o por omisión, bajo los títulos de falla del servicio o de riesgo excepcional, según el caso. En el primero de esos títulos jurídicos, falla en el servicio, el daño se produce por la omisión del Estado en la prestación de los servicios de protección y vigilancia a su cargo, al no utilizar todos los medios que tiene a su alcance para repeler, evitar o atenuar el hecho dañoso, cuando ha tenido conocimiento previo de la posible ocurrencia del acontecimiento, previsibilidad que se constituye en el aspecto más importante dentro de este título de imputación, pues no es la previsión de todos los posibles hechos, los que configuran la omisión y el consecuente*

[8] Sentencia SI 00213-01 de 2006 S3. Acción de grupo adelantada por el desplazamiento causado por la toma del corregimiento La Gabarra del municipio de Tibú.

MARÍA PATRICIA
PORRAS MENDOZA

Centro, Edificio Colseguros Of. 704
Calle Cochera del Gobernador N° 33-15
Cartagena de Indias, Colombia
Telefax: (57-5) 6606330 - Celular: 317 4424760
mariapatriciaporras@gmail.com

deber de reparar, sino las situaciones individuales de cada caso que no dejen margen para la duda y que sobrepasen la situación de violencia ordinaria."

Confrontando lo anterior con los hechos y el sustento jurídico de la demanda, es claro que las acciones y omisiones manifestadas por el demandante no hacen referencia alguna a obligaciones imputables a las entidades demandas y en especial del Departamento de Bolívar, configurándose nuevamente la falta de legitimación en la causa por pasiva.

Aunado a lo anterior, de conformidad con las documentales que se adjuntan, se demuestra que en cumplimiento de las funciones asignadas al señor Gobernador del Departamento de Bolívar, como primera autoridad y conjuntamente con las autoridades con jurisdicción en el territorio departamental, se impartieron instrucciones y se llevaron a cabo Consejos de Seguridad para solventar la situación de orden público y seguridad que venía afectando al Departamento de Bolívar y prueba de ello son las constancias del cumplimiento de éste deber que se aportan con este memorial, donde se observan las actuaciones surtidas para proteger a los habitantes del territorio bolivarense.

Dan cuenta del cumplimiento de las obligaciones constitucionales y legales del Departamento, al solicitar protección a los habitantes y propender por su seguridad, documentos que se detallan a continuación:

1. Carta de fecha 15 de marzo de 1999, dirigida al Ministro en Funciones Presidenciales, donde se reporta la muerte de ciudadanos por grupos irregulares identificados como autodefensas y el desplazamiento de la población, solicitando acciones inmediatas y eficaces de todas las fuerzas militares, suscrita por el Gobernador de bolívar en su momento, Miguel Raad Hernández. (3 folios).
2. Oficio de fecha mayo 31 de 1999, dirigido al Coronel Francisco Javier Bermúdez Marín, Comandante del departamento de Policía de Bolívar, donde se informa sobre hechos de orden público ocurridos en los municipios de Córdoba, El Carmen de Bolívar y Zambrano (zona de los Montes de María) (3 folios).
3. Oficio de fecha mayo 31 de 1999, dirigido al Coronel Miguel Ignacio Pérez Garcés, Comandante de la 1ª Brigada de la Infantería de Marina, donde se informa sobre hechos de orden público ocurridos en los municipios de Córdoba, El Carmen de Bolívar y Zambrano (zona de los Montes de María) (3 folios).
4. Oficio de fecha mayo 31 de 1999, dirigido al Contralmirante Jairo Cardona Forero, Comandante de la Fuerza Naval del Caribe, donde se informa sobre hechos de orden público ocurridos en los municipios de Córdoba, El Carmen de Bolívar y Zambrano (zona de los Montes de María) (2 folios).
5. Oficio de fecha mayo 31 de 1999, dirigido al señor Jorge Alberto Lagos León, Director del DAS Bolívar, Comandante del departamento de Policía de Bolívar, donde se informa sobre hechos de orden público ocurridos en los municipios de Córdoba, El Carmen de Bolívar y Zambrano (zona de los Montes de María) (3 folios).
6. Oficio de fecha 27 de octubre de 1999 dirigido al contralmirante Jairo Cardona forero. Comandante de la Fuerza Naval del Caribe donde se solicita la adopción de medidas que permitan contrarrestar el accionar de grupos de autodefensas y brindar garantías a la población civil en su vida honra y bienes. (1 folio)
7. Copia del Oficio 006375 de fecha 14 de octubre de 1999, dirigido al Doctor Néstor Humberto Martínez Neira, Ministro del Interior por la Secretaria Privada del Fiscal General de la Nación, Claudia Patricia Molano Vargas. (1 folio)
8. Oficio No. 11227/MDN.AL-292 de fecha 25 de octubre de 1999 dirigido al Doctor Néstor Humberto Martínez Neira, Ministro del interior, por el Secretario General del Ministerio de Defensa, Mayor General Henry Medina Uribe. (1 folio)
9. Oficio No. 1206 de fecha 11 de octubre de 1999 dirigido al Doctor Luis Fernando Ramírez Acuña, Ministro de Defensa Nacional, por el Ministro del Interior Néstor Humberto Martínez Neira en el

MARÍA PATRICIA
PORRAS MENDOZA

Centro, Edificio Colseguros Of. 704
Calle Cochera del Gobernador N° 33-15
Cartagena de Indias, Colombia
Telefax: (57-5) 6606330 · Celular: 317 4424760
mariapatriciaporras@gmail.com

cual se comunica la información entregada por el Secretario del interior del Departamento de Bolívar relacionada a la situación de orden público en el Municipio del Carmen de Bolívar. (1 folio)

10. Oficio No. 1207 de fecha 11 de octubre de 1999 dirigido al General Rosso José Serrano Cadena, director General de la Policía Nacional por el Ministro del Interior Néstor Humberto Martínez Neira en el cual se comunica la información entregada por el Secretario del interior del Departamento de Bolívar relacionada a la situación de orden público en el Municipio del Carmen de Bolívar. (1 folio)
11. Oficio No. 1208 de fecha 11 de octubre de 1999 dirigido al Doctor Alfonso Gómez Méndez, Fiscal General de la Nación, por el Ministro del Interior Néstor Humberto Martínez Neira en el cual se comunica la información entregada por el Secretario del interior del Departamento de Bolívar relacionada a la situación de orden público en el Municipio del Carmen de Bolívar. (1 folio)
12. Oficio de fecha 04 de noviembre de 1999 dirigido al Secretario del Interior del Departamento de Bolívar Roberto Arrazola Juliao por el Secretario Privado del Ministerio del interior, informado las labores adelantadas en razón de la información puesta en conocimiento por la Gobernación de Bolívar con relación al orden público en el municipio del Carmen de Bolívar. (1 folio)
13. Oficio 1083/CFNA de fecha 17 de diciembre de 1999 dirigido al Gobernador de Bolívar Miguel Raad Hernández por el Comandante de la Fuerza Naval del Atlántico Contralmirante Humberto Cubillos padilla en el cual se le informa acerca del consejo de seguridad realizado en el municipio de El Carmen de Bolívar donde se trataron asuntos tendientes a fortalecer la acción mancomunada entre las autoridades civiles y militares y la sociedad. (2 folios)
14. Oficio 0055 de fecha 23 de febrero de 2000 dirigido al Alcalde Municipal de El Carmen de Bolívar por el Secretario del interior del Departamento de Bolívar, en el cual se manifiestan las labores de información y solicitud de medidas que ayuden a superar la emergencia de la zonas hechas al Ministerio del interior, Ministerio de Defensa, Fuerza Naval del Caribe, Defensa Civil y Cruz Roja en el ámbito de sus competencias. (1 folio)
15. Oficios No. 461MDM-000 y 462MDM-000 ambos de fecha 24 de febrero de 2000 dirigidos al Director de la Policía Nacional y al Comandante General de las Fuerzas Militares por el Secretario Privado del Ministro de Defensa Nacional señalando la remisión de la información entregada por el Gobernador del Departamento de Bolívar (E) Doctor Roberto Arrazola Juliao, referente a situación de orden público en el Carmen de Bolívar. (2 folios)
16. Oficio No. -466MDM-589 de fecha 24 de febrero de 2000 dirigido al Gobernador de Bolívar (E) Roberto Arrazola Juliao por el Secretario Privado del Ministerio de Defensa Nacional Capitán de Fragata Carlos Velasco Solano informando del traslado de la información entregada por el Departamento de Bolívar a fin de llevar a cabo las acciones pertinentes. (1 folio)
17. Oficio -0863 de fecha 03 de marzo de 2000 dirigido al Gobernador de Bolívar Miguel Raad Hernández por la Directora General para los Derechos Humanos del Ministerio del Interior (1 folio) la cual comunica la labor adelantada para brindar atención a las familias desplazadas y anexa respuesta de la Red de Solidaridad Social (2 folios)
18. Oficio No. 1490/MDN.AL-292 de fecha 02 de marzo de 2000 dirigido al Gobernador de Bolívar (E) Roberto Arrazola Juliao por el Secretario General del Ministerio de Defensa Nacional Vicealmirante Alfonso Calero Espinosa informando que pone en conocimiento de los comandos del Ejército, la Fuerza Aérea, y Dirección General de la Policía Nacional de la solicitud hecha por la Gobernación con relación al aumento de efectivos de la Fuerza Pública en los Montes de María debido a los enfrentamientos de grupos paramilitares y al frente de las FARC en esa zona.(1 folio)
19. Oficio No. 1139-COFAC-JOA-DIOPE-365 de fecha 27 de marzo de 2000 dirigido al Gobernador de Bolívar (E) Roberto Arrazola Juliao por el Comandante de la Fuerza Aérea General Héctor Fabio Velasco Chávez otorgando respuesta a la solicitud hecha por la gobernación. (1 folio)
20. Acta de reunión de Consejo de Seguridad Departamental de fecha 8 de marzo de 2000 (5 folios)
21. Acta de reunión de Consejo de Seguridad Departamental de fecha 15 de marzo de 2000 (13 folios)
22. Acta de Consejo de Seguridad de fecha marzo 11 de 2003 (10 folios).
23. Acta de Reunión de Consejo de Seguridad de fecha septiembre 3 de 2003 (21 folios).

MARÍA PATRICIA
PORRAS MENDOZA

Centro: Edificio Colseguros Of. 704
Calle Cochera del Gobernador N° 33-15
Cartagena de Indias, Colombia
Telefax (57 5) 6606330 Celular 317 4424760
mariapatriciaporras@gmail.com

24. Acta Reunión Conjunta de Seguimiento Electoral y Consejo de Seguridad Departamental de fecha octubre 9 de 2003 (8 folios).
25. Acta Reunión Conjunta de Seguimiento Electoral y Consejo de Seguridad Departamental de fecha octubre 16 de 2003 (10 folios).
26. Acta de Reunión de Consejo de Seguridad Departamental de fecha enero 22 de 2004 (12 folios).

Teniendo en cuenta las funciones asignadas por la Constitución a los Gobernadores en materia de orden público, artículo 303 Constitucional y el artículo 16 de la ley 62 de 1993, queda claro que el Departamento de Bolívar, a través de los Gobernadores de la época, Miguel Raad Hernández (y su secretario del Interior, Roberto Arrázola Juliao) y Luis Daniel Vargas Sánchez; impartieron oportunamente instrucciones precisas a las autoridades de fuerza pública con jurisdicción en los municipios de Córdoba, Zambrano y El Carmen de Bolívar, zona de los Montes de María como quedó indicado en los documentos ya relacionados, para que se protegiera vida, honra y bienes de los habitantes de dichas localidades y particularmente para que investigaran los hechos referidos al municipio de Córdoba, Bolívar.

En razón a lo expuesto, no le cabe imputación a las entidades demandadas en razón a la falla en el servicio alegada por los accionantes, dado su actuar diligente y oportuno y el cumplimiento de sus deberes constitucionales y legales, en especial del Departamento de Bolívar.

3. CADUCIDAD DE LA ACCIÓN

Respetuosamente me permito formular la presente excepción de mérito, para que sea evaluada al momento de decidir de fondo el asunto, por las razones que a continuación expongo, por considerar que efectivamente la presente acción para reclamar la totalidad de las pretensiones ha caducado.

Se tiene entonces que se ha configurado la caducidad por las siguientes razones:

a. CADUCIDAD A PARTIR DEL INCISO PRIMERO, ORDINAL i, NUMERAL 2, ART. 164 CPACA – Regla general.

Por tratarse de una demanda con medio de control de reparación directa, debe aplicarse la regla general contenida en el numeral 2, inciso i), del artículo 164 del CPACA, razón por la cual –conforme a los hechos y razones expuestas en el escrito de demanda– ha operado el fenómeno de caducidad. Dicha norma establece:

> *"Cuando se pretenda la reparación directa, la demanda deberá presentarse dentro del término de dos (2) años, contados a partir del día siguiente al de la ocurrencia de la acción u omisión causante del daño, o de cuando el demandante tuvo o debió tener conocimiento del mismo si fue en fecha posterior y siempre que pruebe la imposibilidad de haberlo conocido en la fecha de su ocurrencia. (...)"*

De acuerdo con la fecha señalada por la parte actora como originarias de los hechos que supuestamente causan el daño antijurídico reclamado, se afirma que la acción se encuentra caducada, teniendo en consideración el siguiente conteo:

NORMA APLICABLE	CONTEO	HECHOS	CADUCIDAD
Inciso primero, ordinal i, numeral 2, art. 164 CPACA.	Dos (2) años, contados a partir del día siguiente al de la ocurrencia de la acción u omisión causante del daño.	5 de junio de 1997 (Hecho 26,52, 59,79,88,113 de la demanda)	6 de junio de 1999
		24 de mayo de 1997 (Hecho 105 de la	25 de mayo de 1999

MARÍA PATRICIA
PORRAS MENDOZA

Centro, Edificio Colseguros Of. 704
Calle Cochera del Gobernador N° 33-15
Cartagena de Indias, Colombia
Telefax: (57-5) 6606330 - Celular: 317 4424760
mariapatriciaporras@gmail.com

		demanda)	

Como se observa, la demanda que nos ocupa es extemporánea y ha caducado en razón al paso del tiempo desde el nacimiento a la vida real y a la vida jurídica de los hechos de desplazamiento forzado que, según el dicho de la parte actora fueron los generadores del daño.

b. CADUCIDAD A PARTIR DEL ARTÍCULO 16 y 18 DE LA LEY 387 DE 1997 en concordancia con EL INCISO PRIMERO, ORDINAL I, NUMERAL 2, ART. 164 CPACA - Condiciones de seguridad para el retorno.

Como se transcribe a continuación en la providencia del Consejo de Estado[9] de 22 de noviembre de 2012, en aplicación del artículo 16 de la Ley 387 de 1997 y teniendo en consideración que *"la situación fáctica a la que se alude en la demanda culminó cuando las condiciones de orden público dejaron de significar "un riesgo para la seguridad" de los demandantes"*, la acción se encuentra caduca:

> *"4.1 Respecto del primer hecho, de acuerdo con los hechos narrados en el libelo, en virtud de la normalización del orden público en la región y la expedición por el INCODER de la Resolución n.° 605 del 28 de marzo de 2006, que aceptó la solicitud de protección del predio rural "Puerto Rico", en el año 2007 los demandantes llegaron a un acuerdo con esa entidad para transferir el dominio sobre la hacienda por la suma de $1.167.971.289, negocio jurídico que se frustró debido a que venta que no se pudo realizar debido a que, según advirtió la Defensoría del Pueblo Regional Córdoba a los actores, en el año 2004 el predio fue ocupado por 43 familias en situación de desplazamiento forzado.*
>
> *En este sentido, la Sala encuentra que en concordancia con el artículo 16 de la Ley 387 de 1997 "por la cual se adoptan medidas para la prevención del desplazamiento forzado; la atención, protección, consolidación y esta estabilización socioeconómica de los desplazados internos por la violencia", la situación fáctica a la que se alude en la demanda culminó cuando las condiciones de orden público dejaron de significar "un riesgo para la seguridad" de los demandantes.*
>
> *Lo anterior si se considera que, por mandato legal, la condición de desplazado cesa cuando las víctimas pueden volver a su lugar de origen o restablecerse en otro sitio, porque las circunstancias de violencia y hostigamiento que generaron el desplazamiento han desaparecido.*
>
> *Al respecto, es razonable concluir que el desplazamiento forzado causa un daño continuado que obliga a contar el término de caducidad de la acción, no a partir del día en que ocurrió el desplazamiento, sino del momento en que cesa el daño, es decir, cuando están dadas las condiciones de seguridad para que se produzca el retorno o el restablecimiento de que trata el artículo 16 de la Ley 387 de 1997. De hecho, a esta conclusión ya había llegado la Subsección C en auto de 26 de julio de 2011 (expediente 41037, C.P. Enrique Gil Botero:*
>
> > *"...el desplazamiento forzado también infringe un daño que es continuado y se extiende en el tiempo, como quiera que dicha conducta no se agota en el primer acto de desplazamiento, por el contrario, el estado de desplazado continua hasta que las personas no puedan retornar a su lugar de origen, es decir, que las causas violentas que originaron el éxodo todavia existen, y por tanto, es imposible volver " (negrilla fuera del texto).*

[9] CONSEJO DE ESTADO, SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO, SECCION TERCERA, SUBSECCION B, Consejero ponente: STELLA CONTO DIAZ DEL CASTILLO. Bogotá, D.C., veintidós (22) de noviembre de dos mil doce (2012). Radicación número: 23001-23-31-000-2010-00380-01(40177). Actor: LUIS ANTONIO RODRIGUEZ GARCIA Y OTRO. Demandado: MINISTERIO DE DEFENSA - EJERCITO NACIONAL. Subrayas nuestras.

MARÍA PATRICIA
PORRAS MENDOZA

Centro, Edificio Colseguros Of. 704
Calle Cochera del Gobernador N° 33-15
Cartagena de Indias, Colombia
Telefax: (57-5) 6606330 - Celular: 317 4424760
mariapatriciaporras@gmail.com

Por lo anterior, la Sala estima que en el presente caso la acción se encuentra caducada, porque, según lo sostenido en el libelo, en el año 2007 "se normalizó la situación de orden público en la región", es decir, se dieron las condiciones de seguridad para el retorno en los términos del artículo 16 de la Ley 387 de 1997, razón suficiente para considerar que a partir de ese momento empezó a correr el plazo de dos años previsto en el artículo 136.8 del C.C.A. para interponer la acción de reparación directa orientada a obtener el resarcimiento del daño causado por el desplazamiento forzado de que fueron víctimas los demandantes."

En efecto, se tiene que mediante sentencia de segunda instancia proferida por la Corte Suprema de Justicia[10] el 27 de abril de 2011, se confirmó la condena de Justicia y Paz del Tribunal Superior de Bogotá del 29 de junio de 2010, respecto de los postulados EDWAR COBOS TÉLLEZ y UBER ENRIQUE BANQUEZ MARTÍNEZ, en su condición de desmovilizados y jefes del bloque Héroes de los Montes de María y del Frente Canal del Dique de las Autodefensa Unidas de Colombia, AUC, entre otros por el delito de desplazamiento forzado cometidos en los municipios del Departamento de Bolívar. Informa dicha providencia:

"La organización del bloque Héroes de los Montes de María respondía a una jerarquía definida, contaba con estatutos de constitución y régimen disciplinario, reformados y aprobados en la Segunda Conferencia Nacional de las Autodefensas Unidas de Colombia36, los cuales permitían el ascenso de sus miembros en esa estructura[37] y, especialmente, estableció y aplicó unos específicos métodos de lucha, a través de los cuales buscó consolidar el control político y militar de la zona.

Estos métodos, implementados sobre la población civil, derivaron en la realización de homicidios selectivos, masacres, desplazamiento forzado, torturas, actos de violencia sexual y desaparición forzada, además, del reclutamiento de menores de edad, secuestros, actividades de narcotráfico e ilicitos contra los mecanismos de participación ciudadana[38].

En cuanto al reclutamiento de menores, el CTI en su informe sobre el tema enumera cuarenta (40) casos de jóvenes entre los catorce (14) y diecisiete (17) años de edad que ingresaron al bloque.

El grupo ilegal, con 594 miembros y 364 armas, se desmovilizó en el Corregimiento San Pablo, Municipio de María La Baja, Bolívar, el 14 de julio de 2005. Como miembro representante fue reconocido EDWAR COBOS TÉLLEZ, quien con otras 146 personas se postuló al proceso de Justicia y Paz.

Del total de desmovilizados de este bloque, 15 son mujeres: 4 de ellas entre 25 y 30 años, 3 entre 30 y 35; 7 entre 35 y 40 y 1 entre 40 y 45 años. Entre los hombres figuran 45 entre 18 y 25 años; 145 entre 25 y 30; 137 entre 30 y 35; 163 entre 35 y 40; 17 entre 40 y 45; 11 entre 45 y 50; 6 entre 50 y 55 y 2 hombres mayores de 55 años. A septiembre de 2009, 46 de los postulados habían fallecido[39].

Frente Canal del Dique

Especial mención debe hacerse al frente Canal del Dique, por cuanto su comandancia fue ejercida por el postulado UBER ENRIQUE BANQUEZ MARTÍNEZ, alias "Juancho Dique".

Esta estructura se creó el 14 de febrero de 2001 y en sus comienzos ocupó regiones de María La Baja, Arjona, Turbaco y Turbaná. En octubre de 2002 asumió la zona comprendida por los municipios de Carmen de Bolívar, San Jacinto, San Juan Nepomuceno, Bayunca, San Estanislao,

[10] Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación Penal. Magistrado Ponente: María del Rosario González de Lemos. Aprobado Acta No. 139. Bogotá D.C., abril veintisiete (27) de dos mil once (2011). Proceso Nº 34547. Subrayado nuestro.
Disponible en http://www.observatorioddr.unal.edu.co/ambitojuridico/catalogo_juridicojyp/34547.pdf.

MARÍA PATRICIA
PORRAS MENDOZA

Centro, Edificio Colseguros Of. 704
Calle Carrera del Gobernador N° 33-15
Cartagena de Indias, Colombia
Teléfax: (57-5) 6606330 - Celular: 312 4424760
mariapatriciaporras@gmail.com

Calamar, Mahates, Arroyo Hondo, San Cristóbal, Soplaviento, Arenal, Villanueva, Clemencia, Santa Catalina, Guamo, Santa Rosa y la ciudad de Cartagena, región que hasta entonces estuvo a cargo de alias "Jorge 40".

El bloque se organizó, a su vez, en varios grupos de acuerdo con los municipios de la región, cada uno de los cuales contaba con radio operadores y comandantes financiero, urbano, de contraguerrilla, de sección, de escuadra, de equipo, así como con patrulleros y, para el mercado de Bazurto en Cartagena, tenía una nómina independiente de quienes operaban en la ciudad[40]."

El frente Canal del Dique obtuvo los recursos necesarios para financiarse de las mismas fuentes establecidas por el Bloque: contribuciones concertadas, extorsiones, porcentajes de los contratos celebrados por las entidades públicas, así como del narcotráfico, a través de EDWAR COBOS TÉLLEZ. El promedio de gastos mensuales, incluidos nómina, logística y pagos a autoridades, ascendía aproximadamente a $140.000.000, de los cuales el narcotráfico les subsidió aproximadamente el 75% mensual[41].

De acuerdo con el postulado BANQUEZ, al momento de su llegada, el frente tenía 20 fusiles, insuficientes para enfrentar la guerrilla, razón por la cual acordaron con la base de la Infantería de Marina de la zona, que los lunes les prestaran armamento (fusiles M-60, morteros) cuya devolución hacían los jueves[42]. Luego "Cadena", con el apoyo determinante del ex Capitán del Ejército Nacional Jorge Rojas, consiguió armas provenientes, por lo general, de El Salvador y Nicaragua y de algunos países de Europa como Bulgaria.".[11]

Dado que la situación de orden público en la zona culminó con la desmovilización del BLOQUE MONTES DE MARIA de las AUC, el día *14 de julio de 2005* en el Municipio de San Pablo, Bolívar, a partir de allí las condiciones de orden público dejaron de significar "un riesgo para la seguridad" de los demandantes y, por tanto el conteo de la caducidad será el siguiente:

Norma aplicable	Conteo	Hechos	Caducidad
Inciso primero, ordinal i, numeral 2, art. 164 CPACA en concordancia con el art. 16 de la ley 387 de 1997.	Dos (2) años siguientes a partir de la fecha en que *se dieron las condiciones de seguridad para el retorno en los términos del artículo 16 de la Ley 387 de 1997.*	14 de julio de 2005	15 de julio de 2007

[11] Notas a pie original:
"[36] Cuaderno original correspondiente al Bloque Montes de María. La Convención se celebró durante el 16, 17 y18 de mayo de 1998.
[37] Cfr. Fls. 235 a 258, carpeta anexa N° 9, Estatutos ACCU.
[38] Cfr. Fls. 80 a 85 CTI Informe de Menores, del 28-09-2009. Fls. 87 a 91, CTI Informe de secuestro del 28-09-2009. Fls.122 a 128 CTI Informe de narcotráfico del 18 – 09 - 2009; Fls. 130 a 146, CTI Informe de vínculos con cargos de elección popular, del 19 – 09 – 2009. Fls. 148 a 170, CTI, Informe de entrega fosas y exhumaciones del 19 – 09 – 2009. Fls. 265 a 278 CTI Masacres. Fls. 280 a 283, CTI, Desplazamientos y Fls. 286 a 297, CTI Desapariciones Forzadas, carpeta N° 9.
[39] Carpeta de anexos No. 9, entregada por la Fiscalía en la diligencia de legalización de cargos, folio 173.
[40] Información suministrada por el postulado BANQUEZ MARTÍNEZ en la audiencia de legalización de cargos, sesión del 21 de septiembre de 2009.
[41] Sesión del 29 de septiembre de 2009. El informe suministrado por BANQUEZ MARTÍNEZ muestra que el valor de la nómina mensualmente fue de aproximadamente $90.000.000.oo. El pago que se hizo a autoridades y que aparece constante durante varios meses del 2004 incluía la policía de San Onofre, policía de Tolú Viejo, Brigada No. 1 de Colosal, Comandante de la SIJIN, Batallón N° 4 de Infantería, subsidio a soldados campesinos, informantes, etc.
[42] Sesión del 8 de julio de 2009. Información de UBER BANQUEZ en la audiencia de control de legalidad de cargos. 43 Cfr. Auto de 25 Feb. /2010 Legalización de cargos, Fls. 43 a 52. 44 CD correspondiente a la audiencia de control formal y material de cargos, realizada el 9 de septiembre de 2009. 3ª sesión, minuto 00:45."

MARÍA PATRICIA
PORRAS MENDOZA

Centro, Edificio Colseguros Of. 704
Calle Cochera del Gobernador N° 33-15
Cartagena de Indias, Colombia
Telefax: (57-5) 6606330 - Celular: 317 4424760
mariapatriciaporras@gmail.com

c. CADUCIDAD A PARTIR DE LA CADUCIDAD CONTENIDA EN EL INCISO SEGUNDO, ORDINAL i, NUMERAL 2, ART. 164 CPACA – Régimen especial para el desplazamiento Forzado.

Aunado a lo anterior, si se tuviera en cuenta la forma de contabilizar el mismo término por el Consejo de Estado en relación con la caducidad en casos de desplazamiento forzado[12] —como el que nos ocupa— en concordancia con el inciso segundo, ordinal i, numeral 2, del artículo 164 del CPACA, también encontraríamos caduca la presente acción.

Ha explicado el Consejo de Estado[13]:

> *"5. Respecto de la forma para computar el plazo de caducidad en los eventos de daño continuado, la jurisprudencia de la Sección ha sido reiterativa, en el sentido de que cuando se demanda la reparación de un daño continuado en el tiempo, como sería la hipótesis del desplazamiento forzado, el término para intentar la acción, sólo inicia su conteo a partir del momento en que se verifique la cesación de la conducta o hecho que dio lugar al mismo, el razonamiento discurre así:*
>
> > *"...en un tema tan complejo como el de la caducidad, que involucra de una parte razones de justicia y de otra el interés de la seguridad jurídica, no es posible establecer criterios absolutos, pues todo depende de las circunstancias que rodean el caso concreto. No obstante, no debe perderse de vista que de conformidad con la ley, para establecer el término de caducidad se debe tener en cuenta el momento de la producción del hecho, omisión, operación u ocupación generadores del perjuicio. Ahora bien, como el derecho a reclamar la reparación de los perjuicios sólo surge a partir del momento en que éstos se producen, es razonable considerar que el término de caducidad en los eventos de daños que se generan o manifiestan tiempo después de la ocurrencia del hecho, deberá contarse a partir de dicha existencia o manifestación fáctica, pues el daño es la primera condición para la procedencia de la acción reparatoria. **Para la solución de los casos difíciles como los de los daños que se agravan con el tiempo, o de aquéllos que se producen sucesivamente, o de los que son el resultado de hechos sucesivos, el juez debe tener la máxima prudencia para definir el término de caducidad de la acción, de tal manera que si bien dé aplicación a la norma legal, la cual está prevista como garantía de seguridad jurídica, no se niegue la reparación cuando el conocimiento o manifestación de tales daños no concurra con su origen**".[14] (Destaca la Sala)*
>
> *La doctrina también ha sido de la misma opinión:*
>
> > *"Por el contrario, en el supuesto de los daños continuados, al producirse éstos día a día en el tiempo, produciéndose un agravamiento paulatino sin solución de continuidad, como consecuencia de un único hecho inicial, nos encontramos con que el resultado lesivo no puede ser evaluado de manera definitiva hasta que no cesa el hecho causante de los mismos los que ha llevado a la jurisprudencia a señalar, con reiteración, que el plazo de prescripción de la acción de responsabilidad no empieza a*

---

[12] *C.E. SECC TERCERA, AUTO 08001233100020100076201 (41037), Jul 26/2011, C.P. Enrique Gil Botero.*

[13] Consejo de Estado. Sala de lo Contencioso Administrativo. Sección Tercera. Subsección C. Consejero ponente: Enrique Gil Botero. Bogotá D.C., veintiséis (26) de julio de dos mil once (2011). Radicación número: 08001-23-31-000-2010-00762-01(41037). Actor: Luis Alfonso León Aldana y Otros. Demandado: La Nación-Ministerio de Defensa Nacional-Policia Nacional-Ejercito Nacional- Referencia: Acción de Reparación Directa. Subrayado nuestro, negrillas del texto original.

[14] En sentencia de 16 de agosto de 2001, expediente radicado al No. 13.772.

MARÍA PATRICIA
PORRAS MENDOZA

Centro, Edificio Colseguros Of. 704
Calle Cochera del Gobernador N° 33-15
Cartagena de Indias, Colombia
Telefax: (57-5) 6606330 - Celular: 317 4424760
mariapatriciaporras@gmail.com

computarse hasta que cesan los efectos lesivos, por contraposición a los que ocurren en el supuesto de daños permanentes."[15]

Hechas estas consideraciones, la Sala estima necesario aplicar una excepción a la norma de caducidad, en los casos en los que las pretensiones se fundamentan en un daño de carácter continuado, así pues, frente al desplazamiento forzado se impone un tratamiento igual al de la desaparición forzada, pues el criterio conceptual determinante para que ésta no opere en la forma tradicional es equivalente en ambos casos, y por ende, no podría predicarse su existencia en el sub lite, porque la conducta vulnerante no ha cesado, por el contrario, se ha extendido en el tiempo.".

Y dispone el inciso segundo, ordinal i, numeral 2, del art. 164 CPACA:

"Sin embargo, el término para formular la pretensión de reparación directa derivada del delito de desaparición forzada, se contará a partir de la fecha en que aparezca la víctima o en su defecto desde la ejecutoria del fallo definitivo adoptado en el proceso penal, sin perjuicio de que la demanda con tal pretensión pueda intentarse desde el momento en que ocurrieron los hechos que dieron lugar a la desaparición".

Esto traído a colación, por cuanto en la demanda se hace alusión a que los Grupos al marguen de la ley autodenominados Autodefensas Unidas de Colombia – AUC que operaban en la zona geográfica indicada en la demanda, ubicada en el DEPARTAMENTO DE BOLIVAR, era el *"Bloque Héroes de los Montes de María"*, bloque al mando de EDWAR COBOS TÉLLEZ y UBER ENRIQUE BANQUEZ MARTÍNEZ, en su condición de desmovilizados y jefes del bloque Héroes de los Montes de María y del Frente Canal del Dique de las Autodefensa Unidas de Colombia, AUC, que han sido condenados penalmente por las infracciones que cometieron contra la población.

En efecto, mediante sentencia de segunda instancia proferida por la Corte Suprema de Justicia[16] el 27 de abril de 2011, se confirmó la condena de Justicia y Paz del Tribunal Superior de Bogotá del 29 de junio de 2010, respecto de los postulados EDWAR COBOS TÉLLEZ y UBER ENRIQUE BANQUEZ MARTÍNEZ, en su condición de desmovilizados y jefes del bloque Héroes de los Montes de María y del Frente Canal del Dique de las Autodefensa Unidas de Colombia, AUC, entre otros por el delito de desplazamiento forzado cometidos en los municipios del Departamento de Bolívar.

En este orden de ideas, el conteo de la caducidad sería el siguiente:

Norma aplicable	Conteo	Hechos	Caducidad
Inciso segundo, ordinal i, numeral 2, art. 164 CPACA	Dos (2) años siguientes a partir de la fecha en que retorne el desplazado o en su defecto desde la ejecutoria del fallo definitivo adoptado en el proceso penal.	27 de abril de 2011	28 de abril de 2013

En consecuencia, y bajo la anterior arista, también ha operado la caducidad de la acción.

d. CADUCIDAD ACORDE CON SENTENCIA SU – 254 DE 2013 DE LA CORTE CONSTITUCIONAL:

En este orden de ideas, al ser ésta una demanda que se sustenta en desplazamiento forzado, debe tomarse como punto de referencia para el conteo del término de presentación de la demanda la

[15] Gónzalez Perez, Jesús. Responsabilidad Patrimonial de las Administraciones Públicas. Primera Edición. editorial Civitas. Madrid 1996. pag 381 y 382.
[16] Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación Penal. Magistrado Ponente: María del Rosario González de Lemos. Aprobado Acta No. 139. Bogotá D.C., abril veintisiete (27) de dos mil once (2011). Proceso Nº 34547.
Disponible en http://www.observatorioddr.unal.edu.co/ambitojuridico/catalogo_juridicojyp/34547.pdf.

MARÍA PATRICIA
PORRAS MENDOZA

Centro, Edificio Coliseguros Of. 704
Calle Cochera del Gobernador N° 33-15
Cartagena de Indias, Colombia
Telefax: (57-5) 6606330 Celular: 317 4424760
mariapatriciaporras@gmail.com

ejecutoria de la sentencia SU-254 de 2013 proferida por la Corte Constitucional, la cual —como bien se indica en la providencia de 25 de enero de 2016 antes reproducida— *"debe computarse a partir del día hábil siguiente al 22 de mayo de 2013, fecha en que se produjo la ejecutoria de la precitada sentencia, ..."*.

Así las cosas, se tiene que el conteo de la caducidad en este caso es el siguiente:

HECHO	FECHA	PLAZO CADUCIDAD
Inicio conteo caducidad – ejecutoria Sentencia SU-254 de 2013, Corte Constitucional.	23 de mayo de 2013	(Faltan: 2 años)
Suspensión término de caducidad – Presentación conciliación prejudicial.	23 de octubre de 2018	5 años+ 5 meses (caduca)
Audiencia de conciliación prejudicial.	11 de diciembre de 2018	
Suspensión máxima del término de caducidad – Presentación conciliación prejudicial y hasta por tres meses.	N/A	
Acta de no acuerdo conciliatorio, Procuraduría Judicial.	22 de enero de 2019	5 años+2 meses +29 días
Caducidad	23 de julio de 2015	2 Años
Presentación de la demanda.	17 de junio de 2019	5 años + 6 meses + 17 días

El plazo máximo para que operara la caducidad se extendía hasta el 23 de julio de 2015; fecha a la que se llega partiendo del 23 de mayo de 2013, fecha de ejecutoria de la Sentencia SU-254 de 2013, luego de descontar de los dos años[17] establecidos para operar la caducidad del medio de control de reparación directa, el plazo de interrupción de la caducidad con ocasión de la presentación de la conciliación prejudicial y la posterior reanudación del conteo hasta la fecha límite de dos (2) años.

De la constancia y sello impuesto en el escrito de demanda por la Oficina Judicial de reparto, es claro que la acción para demandar la totalidad de las pretensiones pedidas ha caducado por que la demanda fue presentada extemporáneamente el 17 de junio de 2019.

e. CADUCIDAD ACORDE CON SENTENCIA UNIFICATORIA DE FECHA 29 DE ENERO DE 2020 PROFERIDA POR EL CONSEJO DE ESTADO:

En reciente jurisprudencia el Consejo de Estado[18] unificó la posición con relación a la caducidad de las pretensiones indemnizatorias formuladas con ocasión de delitos de lesa humanidad, crímenes de guerra y cualquier otro asunto en el que se pueda solicitar la declaratoria de responsabilidad patrimonial al Estado, rango dentro de los que encajan los hechos relatados en la presente demanda.

Afirma la parte resolutiva *"UNIFICAR la jurisprudencia de la Sección Tercera del Consejo de Estado, en relación con la caducidad de las pretensiones indemnizatorias formuladas con ocasión de los delitos de lesa humanidad, los crímenes de guerra y cualquier otro asunto en el que se pueda solicitar la declaratoria de responsabilidad patrimonial al Estado, bajo las siguientes premisas: i) en tales eventos resulta aplicable el término para demandar establecido por el legislador; ii) este plazo, salvo el caso de la desaparición forzada, que tiene regulación legal expresa, se computa desde cuando los afectados conocieron o debieron conocer la participación por acción u omisión del Estado y advirtieron la posibilidad de imputarle*

[17] Numeral 2, Literal i, articulo 164 CPACA.
[18] Consejo de Estado. Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera, Sala Plena, sentencia de unificación de fecha 29 de enero de 2020, radicación 85001-33-33-002-2014-00144-01 (61.033) actor Juan José Coba y otros, M. P Dra Marta Nubia Velásquez Rico

MARÍA PATRICIA
PORRAS MENDOZA

Centro, Edificio Colseguros Of. 704
Calle Cochera del Gobernador N° 33-15
Cartagena de Indias, Colombia
Telefax: (57-5) 6606330 - Celular: 317 4424760
mariapatriciaporras@gmail.com

responsabilidad patrimonial, y iii) el término pertinente no se aplica cuando se observan situaciones que hubiesen impedido materialmente el ejercicio del derecho de acción y, una vez superadas, empezará a correr el plazo de ley."

Conforme a lo anterior y al determinarse según los hechos de la demanda, que los actores afirman que existió participación del Estado en cabeza de su fuerza pública de los hechos de desplazamiento que motivaron la presente demanda y pudieron advertir de estos, teniendo en cuenta las fechas aludidas el término aplicable para el conteo de la caducidad es de dos (2) años a partir del conocimiento, ha operado el fenómeno de la caducidad. Por ende:

DECISIÓN UNIFICATORIA DE JURISPRUDENCIA	HECHOS	CADUCIDAD
Dos (2) años, contados a partir del día siguiente de la fecha en que conocieron o debieron conocer de la participación por acción u omisión del Estado y advirtieron la posibilidad de imputarle responsabilidad patrimonial.	5 de junio de 1997 (Hecho 26,52, 59,79,88,113 de la demanda)	6 de junio de 1999
	24 de mayo de 1997 (Hecho 105 de la demanda)	25 de mayo de 1999

En consecuencia por esta condición también ha operado el fenómeno de la caducidad en el presente asunto.

4. EXCEPCIÓN INNOMINADA

Solicito, igualmente, se declare cualquiera otra excepción que resulte probada durante el transcurso del presente proceso, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 180.6 y 187 del CPACA.

PRUEBAS Y ANEXOS

1. DOCUMENTALES QUE SE ANEXAN:
   1.1. Poder y sus anexos
   1.2. Carta de fecha 15 de marzo de 1999, dirigida al Ministro en Funciones Presidenciales, donde se reporta la muerte de ciudadanos por grupos irregulares identificados como autodefensas y el desplazamiento de la población, solicitando acciones inmediatas y eficaces de todas las fuerzas militares, suscrita por el Gobernador de bolívar en su momento, Miguel Raad Hernández. (3 folios).
   1.3. Oficio de fecha mayo 31 de 1999, dirigido al Coronel Francisco Javier Bermúdez Marín, Comandante del departamento de Policía de Bolívar, donde se informa sobre hechos de orden público ocurridos en los municipios de Córdoba, El Carmen de Bolívar y Zambrano (zona de los Montes de María) (3 folios).
   1.4. Oficio de fecha mayo 31 de 1999, dirigido al Coronel Miguel Ignacio Pérez Garcés, Comandante de la 1ª Brigada de la Infantería de Marina, donde se informa sobre hechos de orden público ocurridos en los municipios de Córdoba, El Carmen de Bolívar y Zambrano (zona de los Montes de María) (3 folios).
   1.5. Oficio de fecha mayo 31 de 1999, dirigido al Contralmirante Jairo Cardona Forero, Comandante de la Fuerza Naval del Caribe, donde se informa sobre hechos de orden público ocurridos en los municipios de Córdoba, El Carmen de Bolívar y Zambrano (zona de los Montes de María) (2 folios).
   1.6. Oficio de fecha mayo 31 de 1999, dirigido al señor Jorge Alberto Lagos León, Director del DAS Bolívar, Comandante del departamento de Policía de Bolívar, donde se informa sobre hechos

MARÍA PATRICIA
PORRAS MENDOZA

Centro, Edificio Colseguros Of. 704
Calle Cochera del Gobernador N° 33-15
Cartagena de Indias, Colombia
Telefax: (57-5) 6606330 - Celular: 317 4424760
mariapatriciaporras@gmail.com

de orden público ocurridos en los municipios de Córdoba, El Carmen de Bolívar y Zambrano (zona de los Montes de María) (3 folios).

1.7. Oficio de fecha 27 de octubre de 1999 dirigido al contralmirante Jairo Cardona forero. Comandante de la Fuerza Naval del Caribe donde se solicita la adopción de medidas que permitan contrarrestar el accionar de grupos de autodefensas y brindar garantías a la población civil en su vida honra y bienes. (1 folio)

1.8. Copia del Oficio 006375 de fecha 14 de octubre de 1999, dirigido al Doctor Néstor Humberto Martínez Neira, Ministro del Interior por la Secretaria Privada del Fiscal General de la Nación, Claudia Patricia Molano Vargas. (1 folio)

1.9. Oficio No. 11227/MDN.AL-292 de fecha 25 de octubre de 1999 dirigido al Doctor Néstor Humberto Martínez Neira, Ministro del interior, por el Secretario General del Ministerio de Defensa, Mayor General Henry Medina Uribe. (1 folio)

1.10. Oficio No. 1206 de fecha 11 de octubre de 1999 dirigido al Doctor Luis Fernando Ramírez Acuña, Ministro de Defensa Nacional, por el Ministro del Interior Néstor Humberto Martínez Neira en el cual se comunica la información entregada por el Secretario del interior del Departamento de Bolívar relacionada a la situación de orden público en el Municipio del Carmen de Bolívar. (1 folio)

1.11. Oficio No. 1207 de fecha 11 de octubre de 1999 dirigido al General Rosso José Serrano Cadena, director General de la Policía Nacional por el Ministro del Interior Néstor Humberto Martínez Neira en el cual se comunica la información entregada por el Secretario del interior del Departamento de Bolívar relacionada a la situación de orden público en el Municipio del Carmen de Bolívar. (1 folio)

1.12. Oficio No. 1208 de fecha 11 de octubre de 1999 dirigido al Doctor Alfonso Gómez Méndez, Fiscal General de la Nación, por el Ministro del Interior Néstor Humberto Martínez Neira en el cual se comunica la información entregada por el Secretario del interior del Departamento de Bolívar relacionada a la situación de orden público en el Municipio del Carmen de Bolívar. (1 folio)

1.13. Oficio de fecha 04 de noviembre de 1999 dirigido al Secretario del Interior del Departamento de Bolívar Roberto Arrazola Juliao por el Secretario Privado del Ministerio del interior, informado las labores adelantadas en razón de la información puesta en conocimiento por la Gobernación de Bolívar con relación al orden público en el municipio del Carmen de Bolívar. (1 folio)

1.14. Oficio 1083/CFNA de fecha 17 de diciembre de 1999 dirigido al Gobernador de Bolívar Miguel Raad Hernández por el Comandante de la Fuerza Naval del Atlántico Contralmirante Humberto Cubillos padilla en el cual se le informa acerca del consejo de seguridad realizado en el municipio de El Carmen de Bolívar donde se trataron asuntos tendientes a fortalecer la acción mancomunada entre las autoridades civiles y militares y la sociedad. (2 folios)

1.15. Oficio 0055 de fecha 23 de febrero de 2000 dirigido al Alcalde Municipal de El Carmen de Bolívar por el Secretario del interior del Departamento de Bolívar, en el cual se manifiestan las labores de información y solicitud de medidas que ayuden a superar la emergencia de la zonas hechas al Ministerio del interior, Ministerio de Defensa, Fuerza Naval del Caribe, Defensa Civil y Cruz Roja en el ámbito de sus competencias. (1 folio)

1.16. Oficios No. 461MDM-000 y 462MDM-000 ambos de fecha 24 de febrero de 2000 dirigidos al Director de la Policía Nacional y al Comandante General de las Fuerzas Militares por el Secretario Privado del Ministro de Defensa Nacional señalando la remisión de la información entregada por el Gobernador del Departamento de Bolívar (E) Doctor Roberto Arrazola Juliao, referente a situación de orden público en el Carmen de Bolívar. (2 folios)

1.17. Oficio No. -466MDM-589 de fecha 24 de febrero de 2000 dirigido al Gobernador de Bolívar (E) Roberto Arrazola Juliao por el Secretario Privado del Ministerio de Defensa Nacional Capitán de Fragata Carlos Velasco Solano informando del traslado de la información entregada por el Departamento de Bolívar a fin de llevar a cabo las acciones pertinentes. (1 folio)

MARÍA PATRICIA
PORRAS MENDOZA

Centro, Edificio Colseguros Of. 704
Calle Cochera del Gobernador N° 33-15
Cartagena de Indias, Colombia
Telefax: (57-5) 6606330 - Celular: 317 4424760
mariapatriciaporras@gmail.com

1.18. Oficio -0863 de fecha 03 de marzo de 2000 dirigido al Gobernador de Bolívar Miguel Raad Hernández por la Directora General para los Derechos Humanos del Ministerio del Interior (1 folio) la cual comunica la labor adelantada para brindar atención a las familias desplazadas y anexa respuesta de la Red de Solidaridad Social (2 folios)

1.19. Oficio No. 1490/MDN.AL-292 de fecha 02 de marzo de 2000 dirigido al Gobernador de Bolívar (E) Roberto Arrazola Juliao por el Secretario General del Ministerio de Defensa Nacional Vicealmirante Alfonso Calero Espinosa informando que pone en conocimiento de los comandos del Ejército, la Fuerza Aérea, y Dirección General de la Policía Nacional de la solicitud hecha por la Gobernación con relación al aumento de efectivos de la Fuerza Pública en los Montes de María debido a los enfrentamientos de grupos paramilitares y al frente de las FARC en esa zona.(1 folio)

1.20. Oficio No. 1139-COFAC-JOA-DIOPE-365 de fecha 27 de marzo de 2000 dirigido al Gobernador de Bolívar (E) Roberto Arrazola Juliao por el Comandante de la Fuerza Aérea General Héctor Fabio Velasco Chávez otorgando respuesta a la solicitud hecha por la gobernación. (1 folio)

1.21. Acta de reunión de Consejo de Seguridad Departamental de fecha 8 de marzo de 2000 (5 folios)

1.22. Acta de reunión de Consejo de Seguridad Departamental de fecha 15 de marzo de 2000 (13 folios)

1.23. Acta de Consejo de Seguridad de fecha marzo 11 de 2003 (10 folios).

1.24. Acta de Reunión de Consejo de Seguridad de fecha septiembre 3 de 2003 (21 folios).

1.25. Acta Reunión Conjunta de Seguimiento Electoral y Consejo de Seguridad Departamental de fecha octubre 9 de 2003 (8 folios).

1.26. Acta Reunión Conjunta de Seguimiento Electoral y Consejo de Seguridad Departamental de fecha octubre 16 de 2003 (10 folios).

1.27. Acta de Reunión de Consejo de Seguridad Departamental de fecha enero 22 de 2004 (12 folios).

1.28. Copia digital en un (01) CD contentivo de: Archivo PDF de la sentencia proferida por la Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación Penal de fecha 27 de abril de 2011, Proceso No. 34547 soporte de los argumentos manifestados en el presente escrito.

PETICIÓN

Por todo lo anteriormente explicado, solicitamos se declaren probadas las excepciones propuestas y, en consecuencia, se desestimen las pretensiones de la demanda por carecer de fundamentos de hecho y de derecho y se condene al actor a gastos y costas del proceso.

NOTIFICACIONES

- Departamento de Bolívar: Carretera Cartagena-Turbaco Km. 3, Sector Bajo Miranda - El Cortijo, después del cementerio Jardines de Paz, notificaciones@bolivar.gov.co.
- La apoderada: Edificio Colseguros Of. 704, Centro, Calle Cochera del Gobernador N° 33-15, Cartagena de Indias, Colombia; dirección electrónica: mariapatriciaporras@gmail.com.

Con el respeto acostumbrado,

MARIA PATRICIA PORRAS MENDOZA
C.C. 64.561.657 de Sincelejo
T.P. 65.454 C. S. de la J.



MARÍA PATRICIA
PORRAS MENDOZA

Centro, Edificio Colseguros Of. 704
Calle Cochera del Gobernador N° 33-15
Cartagena de Indias, Colombia
Telefax: (57-5) 6606330 - Celular: 317 4424760
mariapatriciaporras@gmail.com

7325

Gobernación de Bolívar
Despacho del Gobernador

Cartagena de Indias, 15 de marzo de 1999

Doctor
RODRIGO LLOREDA CAICEDO
Ministro en Funciones Presidenciales
Palacio de Nariño
Santa Fe de Bogotá

Señor Presidente encargado:

Con todo respeto me dirijo a Usted para poner en su conocimiento los graves hechos de orden público registrados en los últimos días en jurisdicción de los municipios de El Carmen de Bolívar y San Jacinto, ubicados en el centro del Departamento en la Subregión de los Montes de María.

En efecto, las autoridades de la zona reportan un total de 14 muertes de ciudadanos inermes, asesinados por grupos irregulares al parecer pertenecientes a las autodenominadas "autodefensas unidas de Colombia" según letreros pintados en los vehículos interceptados e informes recogidos entre los ciudadanos de la región. Tales incursiones han originado el desplazamiento masivo de más de 500 familias hacia la cabecera municipal de El Carmen de Bolívar, y la suspensión del transporte automotor a las veredas y corregimientos de dichas dos municipalidades, causando grandes desazón y angustia en las comunidades rurales y enorme perjuicio a la economía campesina de la región. Al abandonar sus parcelas los campesinos dejan sus cultivos y ganados, no recogen la cosecha de aguacate y se origina desabastecimiento alimentario en las cabeceras municipales y aún en la misma capital del Departamento.

Por un Bolívar Grande
Un reto de futuro!

Gobernación de Bolívar
Despacho del Gobernador

Al condenar enérgicamente el miserable asesinato de estos compatriotas, acudo ante Usted en demanda de acciones inmediatas y eficaces para perseguir y capturar a los responsables de tan execrables crímenes. El Departamento de Bolívar ha puesto demasiadas víctimas en esta larga guerra sucia, unas veces por las incursiones atroces de los mal llamados "Paramilitares" y otras por la igualmente condenable y atroz acción de la guerrilla.

Bolívar reclama su legítimo derecho a ser un territorio libre de paramilitares y guerrilla. Demandamos el fortalecimiento de la institucionalidad y la permanente presencia del estado a través de todas sus agencias. Demandamos una acción estratégica eficaz de todas nuestras fuerzas militares en contra de todos los agentes violentos que operan en nuestro territorio. De manera particular exigimos las siguientes medidas urgentes:

a) *Presencia de la Policia Nacional en los 17 municipios del centro y sur de Bolívar de donde se retiró, en algunos casos desde hace ya algunos años, o a los otros donde no ha llegado aún.*

b) *El diseño y puesta en marcha de un plan del Ejercito y la Infantería de Marina contra los retenes de la guerrilla y autodefensas en nuestras carreteras y rios.*

c) *La creación de fuerzas especiales de reacción inmediata con asiento en lugares estratégicos de nuestra geografía, como carreteras, ríos, aeropuertos, etc.*

d) *Aumento del pie de fuerza y equipos de la Armada Nacional en las ríos de Bolívar.*

Al lado de estos reclamos, estamos solicitando al Ministro del Interior, a la Defensoría del Pueblo, la Procuraduría y al Alto Comisionado de Paz, su presencia permanente en las zonas de conflicto del Departamento, para velar por el respeto a los derechos humanos y al Derecho Internacional Humanitario, con acciones tanto promocionales y preventivas como reactivas contra los violadores de los mismos.

Por un Bolivar Grande
Un reto de futuro!

5

Gobernación de Bolívar
Despacho del Gobernador

Finalmente reitero, por su digno conducto, al alto gobierno, mi decidida voluntad y la de todo el Gobierno Departamental, de continuar adoptando las médidas necesarias para rescatar al Departamento de la crisis, aumentar la inversión social en la provincia, combatir la corrupción con la mayor energía, descentralizar la administración para acercarla a las regiones y sus habitantes, y forzar el cambio de las actuales estructuras injustas. Para esto se requiere tambien la voluntad del Gobierno Nacional en adoptar las medidas que este Departamento viene reclamando en todos los ordenes para acabar con la inequidad que hoy nos afecta.

El Gobernador de Bolívar reitera su pleno apoyo y adhesión al proceso de paz del gobierno nacional y ofrece incondicionalmente su modesco concurso a favor del mismo, pero clama al cielo y a Ustedes para que los irregulares no sigan asesinando a nuestros conciudadanos.

Soy de Usted con toda atención y respeto,

MIGUEL RAAD HERNANDEZ
Gobernador de Bolívar

Por un Bolívar Grande
Un reto de futuro!

(6)

Gobernacion de Bolívar

Cartagena de Indias, 31 de Mayo de 1999

Coronel
FRANCISCO JAVIER BERMUDEZ MARIN
Comandante Departamento de Policía Bolívar
Cartagena de Indias, D.T. y C.

Atentamente me dirijo a usted para poner en su conocimiento los graves hechos de orden público registrados en los últimos días en los municipios de El Carmen de Bolívar, Zambrano y Córdoba, ubicados en el centro del Departamento en la subregión de los Montes de María, donde su institución ejerce jurisdicción.

En efecto, las autoridades municipales han venido reportando la inseguridad que reina en la vía que conduce de El Carmen de Bolívar a Zambrano, donde innumerables conductores han sido atracados por delincuentes comunes, la subversión y grupos de justicia privada, que dejan como saldo varios conductores asesinados y grandes perdidas económicas y además el incremento de casos de abigeato.

En el día de ayer, en la cabecera municipal de El Carmen de Bolívar fueron instaladas dos cargas explosivas que ocasionaron daños materiales en dos residencias, una de ellas de propiedad del señor Ramón Torres Ramos, padre del actual Alcalde del El Carmen de Bolívar Doctor Ramón Torres Serra, en este atentado resultó herido el Doctor Galo Torres Serra.

De igual manera, en horas de la noche del día de ayer en cercanías del municipio de Córdoba fueron escuchadas varias detonaciones y disparos de alto calibre provocados por desconocidos, situación esta que obligó a la población civil a refugiarse y las autoridades policivas a tomar medidas de prevención.

En el día de hoy, un carro que transportaba valores fue emboscado por subversivos en inmediaciones del Aeropuerto de El Carmen de Bolívar, acción delictiva que dejó como saldo tres uniformados asesinados, hecho

(53)

este que atenta contra las normas del Régimen Penal establecido y que condenamos enérgicamente.

Con el fin de garantizar la seguridad ciudadana y reestablecer las condiciones de orden público en las zonas afectadas, demandamos de su institución:

- Acciones inmediatas y eficaces para perseguir y capturar a los responsables de estas acciones delicuenciales y terroristas.

- Diseño y puesto en marcha de un plan estratégico y eficaz, que involucre a las fuerzas policivas, militares y de seguridad con jurisdicción en la zona que contrarreste el accionar de los todos los agentes violentos que operan en la subregión.

Finalmente les reitero la decidida voluntad del Gobierno del Departamento de Bolívar de continuar adoptando las medidas necesarias que nos permitan garantizar la seguridad y convivencia de los habitantes del territorio Departamental.

ROBERTO ARRAZOLA JULIAO
Gobernador (E) del Departamento de Bolívar.

(54)

XMT REPORT

Jun. 01 1999 03:45PM

NO.	OTHER FACSIMILE	START TIME	USAGE TIME	MODE	PAGES	RESULT
01	6609124	Jun. 01 03:44PM	00'50	TX	01	OK

(55)

Gobernacion de Bolívar

Cartagena de Indias, 31 de Mayo de 1999

Coronel
MIGUEL IGNACIO PEREZ GARCES
Comandante 1 Brigada de Infantería de Marina
Sincelejo.

Atentamente me dirijo a usted para poner en su conocimiento los graves hechos de orden público registrados en los últimos días en los municipios de El Carmen de Bolívar, Zambrano y Córdoba, ubicados en el centro del Departamento en la subregión de los Montes de María, donde su institución ejerce jurisdicción.

En efecto, las autoridades municipales han venido reportando la inseguridad que reina en la vía que conduce de El Carmen de Bolívar a Zambrano, donde innumerables conductores han sido atracados por delincuentes comunes, la subversión y grupos de justicia privada, que dejan como saldo varios conductores asesinados y grandes perdidas económicas y además el incremento de casos de abigeato.

En el dia de ayer, en la cabecera municipal de El Carmen de Bolívar fueron instaladas dos cargas explosivas que ocasionaron daños materiales en dos residencias, una de ellas de propiedad del señor Ramón Torres Ramos, padre del actual Alcalde del El Carmen de Bolívar Doctor Ramón Torres Serra, en este atentado resultó herido el Doctor Galo Torres Serra.

De igual manera, en horas de la noche del día de ayer en cercanías del municipio de Córdoba fueron escuchadas varias detonaciones y disparos de alto calibre provocados por desconocidos, situación esta que obligó a la población civil a refugiarse y las autoridades policivas a tomar medidas de prevención.

En el día de hoy, un carro que transportaba valores fue emboscado por subversivos en inmediaciones del Aeropuerto de El Carmen de Bolívar, acción delictiva que dejó como saldo tres uniformados asesinados, hecho

(50)

este que atenta contra las normas del Régimen Penal establecido y que condenamos enérgicamente.

Con el fin de garantizar la seguridad ciudadana y reestablecer las condiciones de orden público en las zonas afectadas, demandamos de su institución:

- Acciones inmediatas y eficaces para perseguir y capturar a los responsables de estas acciones delicuenciales y terroristas.

- Diseño y puesto en marcha de un plan estratégico y eficaz, que involucre a las fuerzas policivas, militares y de seguridad con jurisdicción en la zona que contrarreste el accionar de los todos los agentes violentos que operan en la subregión.

Finalmente les reitero la decidida voluntad del Gobierno del Departamento de Bolívar de continuar adoptando las medidas necesarias que nos permitan garantizar la seguridad y convivencia de los habitantes del territorio Departamental.

ROBERTO ARRAZOLA JULIAO
Gobernador (E) del Departamento de Bolívar.

(54)

JOURNAL

Jun. 01 1999 12:23PM

NO.	OTHER FACSIMILE	START TIME	USAGE TIME	MODE	PAGES	RESULT	*CODE
01	<FAX # NOT AVAIL.>	Jun. 01 10:14AM	01'57	RX	02	OK	
02	<FAX # NOT AVAIL.>	Jun. 01 10:17AM	00'45	RX	00	NO RESPONSE	
03	CARACOL CGENA	Jun. 01 10:18AM	01'21	RX	01	OK	
04	0956298049	Jun. 01 10:42AM	00'40	TX	00	NO RESPONSE	
05	0956298049	Jun. 01 10:44AM	00'33	TX	00	NO DOCUMENT	
06	TIENDA LA CENTRA	Jun. 01 10:46AM	01'17	TX	00	DOCUMENT JAMMED	
07	0956298049	Jun. 01 10:48AM	00'39	RX	00	COMMUNICATION ERROR	(54)
08	TIENDA LA CENTRA	Jun. 01 10:49AM	01'38	TX	00	DOCUMENT JAMMED	
09	COSMETICOS VOGUE	Jun. 01 10:54AM	00'52	TX	01	OK	
10	VIC DAMA	Jun. 01 10:56AM	01'19	TX	03	OK	
11	0915703001	Jun. 01 11:03AM	00'35	TX	00	COMMUNICATION ERROR	(41)
12	0912843200	Jun. 01 11:08AM	00'41	TX	00	NO RESPONSE	
13	VIC DAMA	Jun. 01 11:09AM	01'09	TX	02	OK	
14	0915703001	Jun. 01 11:12AM	00'12	TX	00	NO DOCUMENT	
15	0915703001	Jun. 01 11:13AM	00'41	TX	00	NO RESPONSE	
16	VIC DAMA	Jun. 01 11:16AM	03'57	TX	02	DOCUMENT JAMMED	
7	0912843200	Jun. 01 11:20AM	00'07	TX	00	NO DOCUMENT	
	VIC DAMA	Jun. 01 11:23AM	04'54	TX	08	DOCUMENT JAMMED	
[illegible]	VIC DAMA	Jun. 01 11:29AM	00'52	TX	01	OK	
[illegible]	VIC DAMA	Jun. 01 11:30AM	00'53	TX	01	OK	
[illegible]	VIC DAMA	Jun. 01 11:31AM	01'30	TX	03	OK	
22	ORDENPUBLICO MIN	Jun. 01 11:34AM	01'04	TX	01	OK	
23	ORDENPUBLICO MIN	Jun. 01 11:36AM	01'21	TX	01	OK	
24	2621767	Jun. 01 11:38AM	01'07	TX	01	OK	
	6609124	Jun. 01 11:40AM	00'44	TX	01	OK	
[illegible]	B-3 BRIM-1	Jun. 01 11:42AM	00'58	TX	01	OK	
[illegible]	FUERZA NAVAL DEL	Jun. 01 11:45AM	00'49	TX	01	OK	
28	SAN SEBASTIAN CO	Jun. 01 11:51AM	01'06	RX	01	OK	
29	ALCALDIA DE AREN	Jun. 01 11:56AM	00'53	TX	01	OK	
30	6643499	Jun. 01 11:59AM	00'12	TX	00	NO DOCUMENT	
31	6643499	Jun. 01 12:02PM	03'41	TX	02	OK	
32	CONSEJERIAPOLITI	Jun. 01 12:06PM	00'37	TX	01	OK	
33	DESACONT LTDA	Jun. 01 12:08PM	00'50	TX	01	OK	
34	FUERZA NAVAL DEL	Jun. 01 12:20PM	01'14	TX	02	OK	
35	B-3 BRIM-1	Jun. 01 12:21PM	01'23	TX	01	OK	

USumi99

*CODE = FOR SERVICE CENTER USE ONLY

52

7334

Gobernacion de Bolívar

Cartagena de Indias, 31 de Mayo de 1999

Contralmirante
JAIRO CARDONA FORERO
Comandante Fuerza Naval del Atlántico
Cartagena de Indias, D.T. y C.

Atentamente me dirijo a usted para poner en su conocimiento los graves hechos de orden público registrados en los últimos días en los municipios de El Carmen de Bolívar, Zambrano y Córdoba, ubicados en el centro del Departamento en la subregión de los Montes de María, donde su institución ejerce jurisdicción.

En efecto, las autoridades municipales han venido reportando la inseguridad que reina en la vía que conduce de El Carmen de Bolívar a Zambrano, donde innumerables conductores han sido atracados por delincuentes comunes, la subversión y grupos de justicia privada, que dejan como saldo varios conductores asesinados y grandes perdidas económicas y además el incremento de casos de abigeato.

En el día de ayer, en la cabecera municipal de El Carmen de Bolívar fueron instaladas dos cargas explosivas que ocasionaron daños materiales en dos residencias, una de ellas de propiedad del señor Ramón Torres Ramos, padre del actual Alcalde del El Carmen de Bolívar Doctor Ramón Torres Serra, en este atentado resultó herido el Doctor Galo Torres Serra.

De igual manera, en horas de la noche del día de ayer en cercanías del municipio de Córdoba fueron escuchadas varias detonaciones y disparos de alto calibre provocados por desconocidos, situación esta que obligó a la población civil a refugiarse y las autoridades policivas a tomar medidas de prevención.

En el día de hoy, un carro que transportaba valores fue emboscado por subversivos en inmediaciones del Aeropuerto de El Carmen de Bolívar, acción delictiva que dejó como saldo tres uniformados asesinados, hecho

64

2

este que atenta contra las normas del Régimen Penal establecido y que condenamos enérgicamente.

Con el fin de garantizar la seguridad ciudadana y reestablecer las condiciones de orden público en las zonas afectadas, demandamos de su institución:

- Acciones inmediatas y eficaces para perseguir y capturar a los responsables de estas acciones delicuenciales y terroristas.

- Diseño y puesto en marcha de un plan estratégico y eficaz, que involucre a las fuerzas policivas, militares y de seguridad con jurisdicción en la zona que contrarreste el accionar de los todos los agentes violentos que operan en la subregión.

Finalmente les reitero la decidida voluntad del Gobierno del Departamento de Bolívar de continuar adoptando las medidas necesarias que nos permitan garantizar la seguridad y convivencia de los habitantes del territorio Departamental.

ROBERTO ARRAZOLA JULIAO
Gobernador (E) del Departamento de Bolívar.

65

48

7336

Gobernacion de Bolívar

Cartagena de Indias, 31 de Mayo de 1999

Doctor
JORGE ALBERTO LAGOS LEON
Director DAS Bolívar
Cartagena de Indias, D.T. y C.

Atentamente me dirijo a usted para poner en su conocimiento los graves hechos de orden público registrados en los últimos días en los municipios de El Carmen de Bolívar, Zambrano y Córdoba, ubicados en el centro del Departamento en la subregión de los Montes de María, donde su institución ejerce jurisdicción.

En efecto, las autoridades municipales han venido reportando la inseguridad que reina en la vía que conduce de El Carmen de Bolívar a Zambrano, donde innumerables conductores han sido atracados por delincuentes comunes, la subversión y grupos de justicia privada, que dejan como saldo varios conductores asesinados y grandes perdidas económicas y además el incremento de casos de abigeato.

En el día de ayer, en la cabecera municipal de El Carmen de Bolívar fueron instaladas dos cargas explosivas que ocasionaron daños materiales en dos residencias, una de ellas de propiedad del señor Ramón Torres Ramos, padre del actual Alcalde del El Carmen de Bolívar Doctor Ramón Torres Serra, en este atentado resultó herido el Doctor Galo Torres Serra.

De igual manera, en horas de la noche del día de ayer en cercanías del municipio de Córdoba fueron escuchadas varias detonaciones y disparos de alto calibre provocados por desconocidos, situación esta que obligó a la población civil a refugiarse y las autoridades policivas a tomar medidas de prevención.

En el día de hoy, un carro que transportaba valores fue emboscado por subversivos en inmediaciones del Aeropuerto de El Carmen de Bolívar, acción delictiva que dejó como saldo tres uniformados asesinados, hecho

47

Gobernacion de Bolívar

este que atenta contra las normas del Régimen Penal establecido y que condenamos enérgicamente.

Con el fin de garantizar la seguridad ciudadana y reestablecer las condiciones de orden público en las zonas afectadas, demandamos de su institución:

- Acciones inmediatas y eficaces para perseguir y capturar a los responsables de estas acciones delicuenciales y terroristas.

- Diseño y puesto en marcha de un plan estratégico y eficaz, que involucre a las fuerzas policivas, militares y de seguridad con jurisdicción en la zona que contrarreste el accionar de los todos los agentes violentos que operan en la subregión.

Finalmente les reitero la decidida voluntad del Gobierno del Departamento de Bolívar de continuar adoptando las medidas necesarias que nos permitan garantizar la seguridad y convivencia de los habitantes del territorio Departamental.

ROBERTO ARRAZOLA JULIAO
Gobernador (E) del Departamento de Bolívar.

(18)

XMIT REPORT

Jun. 01 1999 03:38PM

NO.	OTHER FACSIMILE	START TIME	USAGE TIME	MODE	PAGES	RESULT
01	Direc. Sec. DAS Ca	Jun. 01 03:36PM	01'28	TX	02	OK

(48)

7339

Gobernación de Bolívar

URGENTE

Cartagena de Indias, 27 de octubre de 1999

Señor Contralmirante
JAIRO CARDONA FORERO
Comandante Fuerza Naval Atlántico
Cartagena de Indias, D.T. y C.

A esta oficina se han acercado varios habitantes de los municipios de la Subregión de los Montes de María y nos han manifestado su preocupación por una versión que circula en su territorio referida a una posible escalada de las autodefensas en dichas localidades, manifiestan que existen amenazas contra la población civil a quienes acusan de ser colaboradores de la subversión.

Teniendo en cuenta los últimos hechos de violencia que se han registrado en el Departamento de Bolívar, solicitamos con carácter urgente adoptar las medidas necesarias y eficaces que nos permitan contrarrestar el accionar de estos grupos y brindar verdaderas garantías a la población en su vida, honra y bienes.

Cordialmente,

ROBERTO ARRAZOLA JULIAO
Secretario del Interior

Cvh/ymd.

Por un Bolívar Grande
Un reto de futuro!

7340

(46)

FISCALIA
GENERAL DE LA NACION

Santa Fe de Bogotá, D.C., 14 OCT. 1999

DFG/0001/ 006375

Doctor
Néstor Humberto Martínez Neira
Ministro del Interior
Ciudad

MINISTERIO DEL INTERIOR
No.: 17681
Fecha : 10-20-99 Hora : 10:41:51
DESTINO : DESPACHO MINISTRO
ANEXOS : 4

Señor Ministro:

Aviso recibo de su Oficio 1208 enviado al Fiscal General de la Nación, mediante el cual se informa sobre la situación de orden público en el Municipio de El Carmen de Bolívar, en donde fueron secuestrados tres personas y asesinadas tres más en el sector de Gambocito. Al respecto manifiesto a su Despacho que por competencia se ha dado traslado del mismo a la Dirección Seccional de Fiscalías de Barranquilla, para conocimiento de la Unida de Fiscalía Delegada ante los Jueces Penales del Circuito Especializado, para las diligencias pertinentes.

Cordial saludo,

Claudia Patricia Molano Vargas
Secretaria Privada del Fiscal General

20 OCT. 1999

AccíaV. 13/10/99.

7494

DESPACHO DEL FISCAL GENERAL
DIAGONAL 22B (Avda. Luis Carlos Galán) No. 52 - 01 BLOQUE C PISO 4 SANTA FE DE BOGOTA, D.C.
CONMUTADOR: 5702000 - 4149000 Exts 2003-2004 FAX 2017

(63)

7347

REPUBLICA DE COLOMBIA

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL

SECRETARIA GENERAL

Santa Fé de Bogotá, D. C., 25 OCT 1999

Nº 11227 / MDN.AL-292

Doctor
NESTOR HUMBERTO MARTINEZ NEIRA
Ministro del Interior
Ciudad

MINISTERIO DEL INTERIOR
No.: 20212
Fecha : 10-25-99 Hora : 15:00:55
DESTINO : DESPACHO MINISTRO
ANEXOS : N

Señor Ministro:

Con toda atención aviso recibo de su comunicación Nº1206 del 11 de los corrientes, remisor del Informe del orden público en el municipio de El Carmen de Bolívar (Bolívar), debido a la presencia de grupos al margen de la ley.

Sobre el particular me permito manifestarle que se dio traslado de dicho documento al Comando de la Armada y a la Dirección General de la Policía Nacional, para los fines pertinentes.

Cordialmente,

Mayor General HENRY MEDINA URIBE
Secretario General

REGISTRO Nº 019162
19/10/1999 02:33

25 OCT. 1999
7644

62

7342
42

Ministerio del Interior

Despacho del Ministro

1206

Santafé de Bogotá D.C., 11 OCT. 1999

Doctor
LUIS FERNANDO RAMIREZ ACUÑA
Ministro de Defensa Nacional
Santafé de Bogotá

Apreciado Ministro:

El Secretario del Interior del Departamento de Bolívar, doctor Roberto Arrázola Juliao, se ha dirigido a este Despacho para dar a conocer la situación de orden público en el municipio de Carmen de Bolívar, donde el pasado 21 de septiembre un grupo de hombres armados secuestró unas personas y asesinó a tres en el sector de Gambotico. El doctor Arrázola informa que puso en conocimiento de esta situación al Comando del Departamento de Policía de Bolívar, a la I Brigada de Infantería de Marina y a la Fuerza Naval del Atlántico.

En consecuencia, me he permitido dirigirme nuevamente a Usted, como al Director General de la Policía Nacional, General Rosso José Serrano Cadena, reiterando la necesidad de adoptar las medidas necesarias para proteger la vida e integridad de los habitantes de Carmen de Bolívar.

De igual manera me dirigí al Fiscal General de la Nación, doctor Alfonso Gómez Méndez, para que por su conducto la Fiscalía General de la Nación adelante la correspondiente investigación.

Cordial saludo,

NESTOR HUMBERTO MARTINEZ NEIRA
Ministro del Interior

Anexo: Un (1) Folio

59

CAMBIO PARA CONSTRUIR LA PAZ

13 43
(#9)

1207

Ministerio del Interior

Despacho del Ministro

Santafé de Bogotá D.C., 11 OCT. 1999

General
ROSSO JOSE SERRANO CADENA
Director General
Policía Nacional
Santafé de Bogotá

Apreciado General Serrano:

El Secretario del Interior del Departamento de Bolívar, doctor Roberto Arrázola Juliao, se ha dirigido a este Despacho para dar a conocer la situación de orden público en el municipio de Carmen de Bolívar, donde el pasado 21 de septiembre un grupo de hombres armados secuestró unas personas y asesinó a tres en el sector de Gambotico. El doctor Arrázola informa que puso en conocimiento de esta situación al Comando del Departamento de Policía de Bolívar, a la I Brigada de Infantería de Marina y a la Fuerza Naval del Atlántico.

En consecuencia, me he permitido dirigirme nuevamente a Usted, como al Ministro de Defensa Nacional, doctor Luis Fernando Ramírez Acuña, reiterando la necesidad de adoptar las medidas necesarias para proteger la vida e integridad de los habitantes de Carmen de Bolívar.

De igual manera me dirigí al Fiscal General de la Nación, doctor Alfonso Gómez Méndez, para que por su conducto la Fiscalía General de la Nación adelante la correspondiente investigación.

Cordial saludo,

NESTOR HUMBERTO MARTINEZ NEIRA
Ministro del Interior

Anexo: Un (1) Folio

60

(44) 7344

1208

Ministerio del Interior

Despacho del Ministro

Santafé de Bogotá D.C., 11 OCT. 1999

Doctor
ALFONSO GOMEZ MENDEZ
Fiscal General de la Nación
Santafé de Bogotá

Apreciado señor Fiscal:

El Secretario del Interior del Departamento de Bolívar, doctor Roberto Arrázola Juliao, se ha dirigido a este Despacho para dar a conocer la situación de orden público en el municipio de Carmen de Bolívar, donde el pasado 21 de septiembre un grupo de hombres armados secuestró unas personas y asesinó a tres en el sector de Gambotico. El doctor Arrázola informa que puso en conocimiento de esta situación al Comando del Departamento de Policía de Bolívar, a la I Brigada de Infantería de Marina y a la Fuerza Naval del Atlántico.

En consecuencia, me he permitido dirigirme a Usted para que por su digno conducto la Fiscalía General de la Nación adelante la correspondiente investigación.

De igual manera me dirigí al Director General de la Policía Nacional, General Rosso José Serrano Cadena y al Ministro de Defensa Nacional, doctor Luis Fernando Ramírez Acuña, reiterando la necesidad de adoptar las medidas necesarias para proteger la vida e integridad de los habitantes de Carmen de Bolívar.

Cordial saludo,

NESTOR HUMBERTO MARTINEZ NEIRA
Ministro del Interior

Anexo: Un (1) Folio

(61)

CAMBIO PARA CONSTRUIR LA PAZ

7345

Ministerio del Interior

Despacho del Ministro

Santafé de Bogotá D.C., 04 NOV. 1999

Doctor
ROBERTO ARRAZOLA JULIAO
Secretario del Interior
Departamento de Bolívar
Santafé de Bogotá

Apreciado doctor Arrázola:

Me refiero a su oficio recibido en este Despacho el pasado 7 de octubre en el que da a conocer la situación de orden público en el municipio de Carmen de Bolívar, donde el pasado 21 de septiembre un grupo de hombres armados secuestró a unas personas y asesinó a tres más en el sector de Gambotico. Así mismo, informa que puso en conocimiento de esta situación al Comando del Departamento de Policía de Bolívar, a la I Brigada de Infantería de Marina y a la Fuerza Naval del Atlántico.

Al respecto, me permito informarle que el señor Ministro del Interior se dirigió al Ministro de Defensa Nacional, doctor Luis Fernando Ramírez Acuña y al Director General de la Policía Nacional, General Rosso José Serrano Cadena, reiterando la necesidad de adoptar las medidas necesarias para proteger la vida e integridad de los habitantes de Carmen de Bolívar. En respuesta, el Secretario General del Ministerio de Defensa Nacional, Mayor General Henry Medina Uribe, señaló, en comunicación que me permito adjuntar, que se dio traslado del oficio al Comando de la Armada y a la Dirección General de la Policía Nacional para los fines pertinentes.

De igual manera el señor Ministro del Interior se dirigió al Fiscal General de la Nación, doctor Alfonso Gómez Méndez, para que por su conducto la Fiscalía General de la Nación adelante la correspondiente investigación. En respuesta a esta solicitud, la Secretaria Privada del Fiscal General de la Nación, doctora Claudia Patricia Molano Vargas, señaló que por competencia se dio traslado del oficio a la Dirección Seccional de Fiscalías de Barranquilla, para conocimiento de la Unidad de Fiscalía Delegada ante los Jueces Penales del Circuito Especializado, encargada de adelantar las diligencias pertinentes.

Adjunto fotocopia de las comunicaciones mencionadas.

Cordial saludo,

NICOLAS YEPES CORRALES
Secretario Privado

CAMBIO PARA CONSTRUIR LA PAZ

ARMADA NACIONAL

FUERZA NAVAL DEL ATLANTICO

Cartagena de Indias, D.T.y C. Diciembre 17 de 1999

No. 1083 /CFNA

Al : Doctor
MIGUEL RAAD HERNANDEZ
Gobernador Departamento de Bolívar
Cartagena de Indias, D.T. y C.

Atentamente le informo que el pasado viernes 10 de diciembre, fue realizado un Consejo de Seguridad en el Municipio del Carmen de Bolívar, en el cual se trataron asuntos tendientes a fortalecer la acción mancomunada entre las autoridades civiles y militares y la sociedad en general, para tal efecto se concretaron los siguientes cursos de acción:

1. Efectuar trabajos en unión con la Comunidad Civil en las regiones, donde se encuentran las unidades de la Primera Brigada de I.M. y de la Policía Nacional.

2. Trabajar por el propósito que el Gobierno Nacional ha trazado, el cual consiste en la obtención de la Paz Nacional y la Convivencia Ciudadana.

3. La falta de servicios públicos y de alcantarillados, son uno de los factores predominantes para la convivencia ciudadana.

4. Trazar un plan para el incremento del cultivo del tabaco en la región, en vista que este año disminuyó un 60%, así mismo se ha venido afectando el cultivo de aguacate y maíz de la región.

5. Centralizar el problema de los desplazados de los diferentes corregimientos.

6. La creación de Centros de Salud que se hacen necesarios para optimizar la prestación de estos servicios a la comunidad.

7. Efectuar Acciones Cívico Navales, con el propósito de cambiar la forma de pensar de los diferentes grupos (hostiles, neutrales y amigos), hacia las Fuerzas Militares, logrando así el objetivo Nacional.

8. La adquisición de fondos para la construcción de un acueducto en el Municipio del Carmen de Bolívar, para solventar el principal problema de esta región: la falta de agua potable.

9. La creación de más fuentes de empleo, para evitar la proliferación de delincuencia común en la región.

10. Incrementar la Educación Superior y Tecnología con el SENA.

11. Coordinar con el Ministerio de Justicia o la Dirección del INPEC, la construcción o adecuación de una cárcel municipal para la región.

12. Trabajar en conjunto con la administración municipal para una mejor convivencia ciudadana.

13. Instalar una agencia del Banco Agrario.

Cordialmente,

Contralmirante **HUMBERTO CUBILLOS PADILLA**
Comandante Fuerza Naval del Atlántico

1348

(4)

Gobernación de Bolívar

Cartagena de Indias, 23 de febrero del 2000

0055

Doctor
RAIMUNDO COHEN COGOLLO
Alcalde Municipal
El Carmen de Bolívar

Acusamos recibo de su oficio fechado febrero 18 del 2000, recibido en este despacho el 23 de febrero del 2000, referido a la situación de orden público que se vive en su jurisdicción.

Al respecto, me permito comunicarle que nos dirigimos al Ministro del Interior, Doctor Nestor Humberto Martínez Neira y al Ministro de Defensa, Doctor Luis Fernando Ramirez, informando y solicitando de inmediato concurso en la adopción de medidas que ayuden a superar la emergencia que afrontan los pobladores de esta región de Bolívar.

De igual manera nos dirigimos al Comandante de la Fuerza Naval del Atlántico, Contralmirante Humberto Cubillos Padilla y a los Directores Seccionales de la Cruz Roja y Defensa Civil para que adelanten acciones dentro del ámbito de su competencia.

Atentamente,

ROBERTO ARRAZOLA JULIAO
Secretario del Interior de Bolívar

Jdg.

32

4

Por un Bolívar Grande
Un reto de futuro!

REPUBLICA DE COLOMBIA

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
SECRETARIA PRIVADA

Santa Fe de Bogotá, D.C., 24 FEB. 2000

No. - 461 MDM-000

ASUNTO : Envío Documento

AL : Señor General
ROSSO JOSE SERRANO CADENA
Director General de la Policía Nacional
Gn.

Siguiendo instrucciones del señor Ministro de Defensa Nacional, de la manera más respetuosa me permito enviar al señor General Director General de la Policía Nacional, para su conocimiento y fines pertinentes, copia del oficio de fecha 21 de febrero del año en curso, remitido por el Doctor ROBERTO ARRAZOLA JULIA Gobernador del Departamento de Bolívar (E), referente a la situación de orden público que sufre esta zona del país por parte de las autodefensas y la guerrilla.

Capitán de Fragata **CARLOS VELASCO SOLANO**
Secretario Privado Ministro de Defensa Nacional

ANEXO : Lo enunciado

(11)

1350

REPUBLICA DE COLOMBIA

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
SECRETARIA PRIVADA

Santa Fe de Bogotá, D.C., 24 FEB. 2000

No. - 462 MDM-000

ASUNTO : Envío Documento

AL : Señor General
FERNANDO TAPIAS STAHELIN
Comandante General de las Fuerzas Militares
Gn.

Siguiendo instrucciones del señor Ministro de Defensa Nacional, de la manera más respetuosa me permito enviar al señor General Comandante General de las Fuerzas Militares, para su conocimiento y fines pertinentes, copia del oficio de fecha 21 de febrero del año en curso, remitido por el Doctor ROBERTO ARRAZOLA JULIA Gobernador del Departamento de Bolívar (E), referente a la situación de orden público que sufre esta zona del país por parte de las autodefensas y la guerrilla.

Capitán de Fragata **CARLOS VELASCO SOLANO**
Secretario Privado Ministro de Defensa Nacional

ANEXO : lo enunciado

12

3357

REPUBLICA DE COLOMBIA

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
DESPACHO

Santafé de Bogotá DC., 24 FEB. 2000

No. 0-466 MDM-589

Doctor
ROBERTO ARRAZOLA JULIAO
Gobernador de Bolivar (E.)
Cartagena

Apreciado Doctor:

Siguiendo instrucciones del señor Ministro de Defensa Nacional y en relación con su comunicación de febrero 21/2000, de la manera más atenta me permito informarle que se dio traslado al Comando General de las Fuerzas Militares, así como a la Dirección General de la Policía Nacional, con el fin de que se lleven a cabo las acciones pertinentes.

Cordialmente,

Capitán de Fragata CARLOS VELASCO SOLANO
Secretario Privado

ANEXO: Lo anunciado

(10)

41

Dependencia:

Al contestar cite este No.: 10863

DIRECCION GENERAL PARA LOS DERECHOS HUMANOS
Calle 13 No. 8-38 Piso 4 Tels. 2815050 - 3369366

Santafé de Bogotá, 03 MAR 2000

Doctor
MIGUEL ENRIQUE RAAD HERNANDEZ
Gobernador del Departamento de Bolívar
Edificio de la Gobernación
Plaza de la Proclamación
Cartagena de Indias

REF.: Su Comunicación del 22 de febrero de 2000

Respetado Señor Gobernador:

Por instrucciones del Señor Ministro, atentamente acuso recibo de la comunicación de la referencia, mediante la cual solicita cooperación a fin de que la población desplazada que se encuentra en el municipio del Carmen de Bolívar reciban atención.

Sobre el particular, me permito informarle que la Red de Solidaridad Social como responsable de la coordinación y desarrollo del Sistema Nacional de Información y Atención Integral a la Población Desplazada por la Violencia, comunicó que cada una de las instituciones competentes en la materia, están brindando atención a las familias desplazadas asentadas en dicho municipio (anexo fotocopia de la respuesta).

Esta Dirección de conformidad con la normativa vigente, coadyuva para el cabal cumplimiento de las responsabilidades gubernamentales en la materia.

Cordialmente,

CLAUDIA PATRICIA CACERES CACERES
Directora General

Anexo: lo anunciado en dos folios

JAMCA
R-0713

FECHA DE RECIBO 01 MAR 2000

DEPENDENCIA Despacho

HORA 4:50 p.m.

FIRMA [illegible] No 0824

MININTERIOR
DIRECCION DDHH
Fecha Reparto: Marzo 1/2000
Responsable
Instrucción

Solidaridad

Santa Fe de Bogotá, febrero 28 del 2000

Doctora
CLAUDIA PATRICIA GARCES CARCELES
Dirección General Para los Derechos Humanos
Ciudad

En respuesta a su solicitud de información, según memorando N° 4- 0744, sobre las acciones que ha adelantado la Red de Solidaridad Social y demás instituciones, de atención humanitaria a la población desplazada de la subregión de Montes de María ubicada en la cabecera municipal de El Carmen de Bolívar le comento lo siguiente:

- Debido a la masacre ocurrida recientemente en el corregimiento de El Salado, se desató el desplazamiento de la población de dicho lugar y de la población de las veredas El Respaldo, Canabolí y Los Palmitos, siendo casi en su totalidad población de El Salado, hacia la cabecera del Municipio de El Carmen de Bolívar.
- De acuerdo al censo realizado por la personería municipal (en Unidad de Atención y Orientación Integral UAO - móvil: Registro y atención de población) se encuentran en la cabecera de El Carmen un total de 464 familias (2236 personas) de ellas 424 mujeres, 1419 niños y 392 hombres.
- Producto de dos reuniones (23 y 27 de febrero) de Comité Municipal de Atención a la Población Desplazada realizadas en El Carmen, que contó con la participación de autoridades municipales (alcaldía y personería), Cruz Roja Nacional, Defensoría del Pueblo, Pastoral Social, voceros de los desplazados y la Red de Solidaridad Social, se acordó la realización de un Plan de Contingencia que está ejecutando en la actualidad.
- La población desplazada ubicada en la cabecera municipal actualmente en su gran mayoría (410 familias) se encuentra alojada en casas de familiares y amigos; 70 del total de familias se encuentran ubicadas en tres (3) albergues montados y coordinados por la Alcaldía Municipal, con el apoyo de la Cruz Roja Nacional, Pastoral Social y la Red de Solidaridad Social.

- Los alimentos para la población desplazada han sido proporcionados con recursos de la Red de Solidaridad Social (estos han sido entregados al municipio y a Pastoral Social para su distribución):
  - 560 kilos de pollo
  - 400 latas de sardina
  - 500 mercados ($21000 cada uno) por valor total de $16'800.000.

Cuando se agoten estas provisiones y si persiste la situación en la zona, los alimentos serán comprados por el CICR (Cruz Roja Internacional) los cuales serían distribuidos a la población desplazada a través de la Cruz Roja Nacional.

(7)

- Dada la sobre población en el lugar, que puede generar una emergencia sanitaria, el municipio está distribuyendo en carrotanques agua para los albergues y en las viviendas donde están alojadas las familias desplazadas.

- Para la atención adecuada a la población desplazada, por iniciativa de la Red de Solidaridad Social, se realizó el montaje de una unidad movil de atención integral (denominada por la Red UAO) ubicada entre el corregimiento y el Carmen de Bolívar. En la gestión de esta UAO participaron la Red, Alcaldía, Personería, Defensoría, Pastoral Social y Cruz Roja. A través de esta Unidad se realizó el registro de la población, se orientó la ubicación de la población y se coordinó la entrega de alimentos.
- Con el propósito de avanzar en el proceso de estabilización socio-económica de la población afectada por el conflicto armado en la zona, la Red de Solidaridad Social realiza las gestiones pertinentes para el montaje de un Centro de Atención Temporal (CAT) a fin de ofrecer una atención más prolongada en el tiempo, de acuerdo a las circunstancias que se presenten. En este espacio se pretenden desarrollar actividades productivas y atención psico social para el acompañamiento integral de dicha población.
- Para consolidar el anterior proceso de estabilización socio económica, lo mismo que la construcción de una propuesta que restituya la dignidad de dicha población se constituyó la Comisión Facilitadora de Paz y la Convivencia Ciudadana en el Departamento de Bolívar (Misión Humanitaria de El Carmen de Bolívar) contando con la participación de la Red de Solidaridad Social y de diversas entidades de orden nacional, regional y local, la misma ONU con han operado en la zona.

Cualquier aclaración al respecto o información adicional que sea por ustedes requerida estaremos atentos a responderla oportunamente.

Cordialmente,

MARTIN ALVO CALLE
Subgerente Territorial

c.c. Doctor MIGUEL ENRIQUE RAAD HERNADEZ, Gobernador de Bolívar.

OP.
El Gobernador de Bol
of. recibido

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL

SECRETARIA GENERAL

Cita: para el Jefe del Des-
Cuadro

Santa Fé de Bogotá, D. C., 02 MAR 2000

No. 1490 / MDN.AL-292

Doctor
ROBERTO ARRAZOLA JULIAO
Gobernador del Departamento de Bolívar (E)
Cartagena de Indias D.T.

Con toda atención acuso recibo de su oficio del pasado 21 de febrero, en el que solicita el aumento de efectivos de la Fuerza Pública, en los Montes de María, jurisdicción de los departamentos de Bolívar y Sucre, y la creación de una base aérea, teniendo en cuenta los enfrentamientos de miembros de grupos paramilitares y el Frente 37 de las Farc – Ep, en esa zona.

Al respecto me permito manifestarle que se dio traslado de dicho documento a los Comandos del Ejército, la Fuerza Aérea y a la Dirección General de la Policía Nacional, para los fines pertinentes.

Cordialmente,

Vicealmirante ALFONSO CALERO ESPINOSA
Secretario General

RADICADO N° 003355
29/02/2000 02:30

Recibí: 14-03-2000
Hora 12:11
Valencia

(9)

E-mail: www.mindefensa.gov.co
infprotocol@mindefensa.gov.co

7356

FUERZAS MILITARES DE COLOMBIA
FUERZA AEREA

Santafé de Bogotá, 27 MAR. 2000

No. 1139 -COFAC-JOA-DIOPE-365

Doctor
ROBERTO ARRAZOLA JULIAO
GOBERNADOR DEL DEPARTAMENTO DE BOLIVAR (E)
Cartagena de Indias

Respetado doctor:

En referencia al oficio No. 0102 de ese despacho del 23 de febrero de 2000 comedidamente le comunico que la Fuerza Aérea, siempre esta atenta a apoyar las Unidades de Superficie, no sólo de la Armada sino del Ejército Nacional con los medios aéreos disponibles en las Bases Aéreas Mayor General "CAMILO DAZA de Barranquilla , Capitán "GERMAN OLANO" de Puerto Salgar y Coronel "ARTURO LEIVA POSADA" de Rionegro, Antioquia; que en primera instancia prestan los apoyos que requiera el Departamento de Bolívar, los cuales son coordinados por los Comandos respectivos de la Infantería de Marina y Ejército destacados en ese Departamento, pero actualmente la Fuerza Aérea no posee ni los medios ni los recursos para construir y dotar una Base Aérea.

Quiero resaltar la disposición de nuestros hombres y medios, los cuales están siempre dispuestos a brindar su apoyo en cualquier lugar del territorio nacional donde este es requerido.

Atentamente,

General HECTOR FABIO VELASCO CHAVEZ
Comandante Fuerza Aérea

51

ACTA CONCEJO DE SEGURIDAD DEPARTAMENTAL
(Marzo 8 del 2000)

En Cartagena de Indias, siendo las 09:00 horas del día 8 de Marzo del 2000, en el Despacho del señor Gobernador del Departamento de Bolívar, se llevó a cabo la Reunión del Consejo de Seguridad Departamental, asistieron los siguientes miembros:

ROBERTO ARRAZOLA JULIAO
Gobernador Encargado y Secretario del Interior

HECTOR JULIO PACHON
Comandante Fuerzas Especiales
Infantería de Marina

Teniente Coronel JOSE VICENTE PERDOMO G
Comandante Departamento de Policía División Bolívar

HECTOR E DUQUE BLANCO
Director Seccional DAS Bolívar (E)

RAYMUNDO COHEN COGOLLO
Alcalde Municipal de El Carmen de Bolívar

ALVARO MURILLO R.
Secretario Departamento Administrativo Planeación.

CIRA VELASQUEZ HERAZO
Coordinadora Area de Orden Público

El Doctor Arrazola manifiesta que está reunión extraordinaria obedece a la inquietud de los Alcaldes de la zona de los Montes de María que todos conocen que en estos días se ha agudizado, los hechos de perturbación del orden público, quiere exponer la problemática y compartir algunos informaciones. Se refiere al interés que tiene el señor Gobernador de mejorar las condiciones de vida con inversión social en la zona.

El señor Alcalde de El Carmen de Bolívar expresa que es de todos conocido los hechos que han sucedido en El Carmen de Bolívar en los años 98 y 99, aproximadamente se desplazaron unas 12.000 personas por los diferentes hechos que vienen cometiendo los actores del conflicto en la zona.

Para el año 2000 unas 3000 personas se desplazaron de la región del Salado, estos hechos han generado una situación dificil para el Carmen de Bolívar; existe un promedio de 3.000 a 3.500 niños desplazados, se han cerrado 47 Escuelas, 11 del núcleo 1A y 26 del núcleo B.

La gran mayoría de los desplazados tienen familiares en El Carmen por lo que no se van a encontrar grandes albergues sino que están dispersos.

Se tiene un informe de Umata de posibles perdidas desde el punto de vista agrícola y pecuaria que corresponde a la zona del Salado y otras veredas vecinas, ya que las cosechas no se han podido recoger por la situación de orden público. La Secretaria de Educación levantó información de las escuelas abandonadas, la deserción estudiantil es alta; los predios abandonados no van a tributar al municipio y esto generará una crisis de recursos.

Los Comerciantes secuestrados una vez que son liberados cierran sus negocios y se van de la población. Se tiene conocimiento que se está extorsionando a la gente, estos no denuncian, las empresas y las personas que generan empleo, están abandonando el municipio, ya se está trabajando sobre eso por parte de las autoridades policivas y militares.

Se solicitó al Coronel Devia el aumento del pie de fuerza, se tiene la presencia de una compañía de Contraguerrilla de Infantería de Marina, esto ha dado lugar a la disminución de delitos que se venían cometiendo.

Solicita la presencia de Infantería de Marina de ser posible en el casco urbano.

El señor Coronel HECTOR JULIO PACHON, de las Fuerzas Especiales de la I Brigada de Infantería de Marina, manifiesta que hay que diseñar una estrategia para que la gente vuelva a su lugar de origen se garantiza la presencia militar, considera indispensable que entre todas las fuerzas del orden se coordine una estrategia.

El señor RAYMUNDO COHEN, Alcalde Municipal de El Carmen de Bolívar, expresa: la población del Salado manifestó que no regresan, la gente esta muy sensible, están solicitando la presencia del Ejército en la zona para recoger sus pertenencias y cosechas.

El Doctor ROBERTO ARRAZOLA JULIAO, Secretario del Interior del Departamento de Bolívar, informa que se tienen información de los funcionarios que se desplazaron al Salado. Con una comisión de Gobierno Nacional, la Iglesia y ACNUR, la Gobernación procura generar las condiciones para que se de el retorno de las familias a su sitio de origen, pero en esta oportunidad la situación fue tan cruel que la comunidad ha manifestado que no quieren volver.

Se tiene informe que algunas familias de El Salado se están saliendo de El Carmen de Bolívar la gente de bien que no tiene problema no regresa, ellos han pedido la presencia de la Infantería de Marina, para tratar de recuperar las cosechas.

La Gobernación colabora con el transporte para recuperar las cosechas, la Alcaldía debe coordinar la programación.

El coronel PERDOMO- expresa que conociendo la problemática a la Policía le preocupa el desplazamiento de la población, no solo a El Carmen sino a otras capitales, la falta de empleo, el acompañamiento es importante, la región no se puede dejar sola, porque así se van a ir retirando las empresas que generen ingresos en la zona.

El Comando Departamental ha gestionado recursos para construir la Estación de Policía de El Carmen de Bolivar y se gestionan recursos para la Estación de Zambrano. En el Carmen de Bolívar, se presentan factores de delincuencia común esto puede estar dando lugar a la magnificación de los hechos y por la información que se da a través de los medios de prensa.

En el Carmen se gradúan un alto número de jóvenes y solo pasan unos pocos a la Universidad; el Departamento debe diseñar una estrategia de producción y diversificación de cultivos para mejorar los ingresos de las familias.

El Doctor ALVARO MURILLO Secretario de Planeación del Departamento expresa el interés del gobierno Departamental por los Montes de María, se elabora un plan para el desarrollo integral de los Montes de María conjuntamente, con el Departamento de Sucre, en relación a los municipios de Montes de María de Sucre y Bolivar el propósito es lograr que este plan estratégico contemple varias áreas.

Infraestructura vial tiene gran importancia para articular de manera transversal al municipio de El Carmen de Bolívar en especial vía El Carmen Chinulito, y la comunicación de Córdoba con Ovejas.

El documento será presentado el 14 de Marzo al gobierno nacional, en la Oficina del Alto Comisionado.

Componente de Acueducto y Saneamiento Básico: tienen un valor de $53.000.000.000.oo.

El Coronel Perdomo, considera que este es una necesidad muy sentido e importante de la subregión.

SECTOR AGROPECUARIO: Valor $125.000.000.oo incluye los cultivos a través de proyectos productivo y manejo de bosques.

SECTOR SALUD: Se pretende elevar la categoría del Hospital Monte Carmelo a un 3er nivel, mejorar la infraestructura de Salud en la subregión y deporte también están incluidos otros sectores.

La propuesta es crear en El Carmen de Bolivar un Centro Piloto Universitario, donde confluyan todas las Universidades que puedan ofrecer programas a la sub-región.

El Coronel Perdomo manifiesta que se debe tener en cuenta el componente de justicia para combatir la impunidad.

El doctor ARRAZOLA, expone la solicitud formulada por el Procurador Provincial del Carmen de Bolívar quien solicita la adopción de medidas por el incremento de los hechos de violencia en El Carmen de Bolívar.

El señor Alcalde dice que con relación a los hechos de violencia en el sector de Gambotico, se han adoptado medidas en Consejo de Seguridad, se reforzó el pie de fuerza, control de motos de alto cilindraje, restricción al porte de armas, existe presencia de la Infantería de Marina en la zona rural, la Policía envió una comisión de grupo antireacción que viene realizando medidas de registro, retenes y patrullajes ejercen control y brindan más cobertura de seguridad a la población.

Se han disminuido los índices, desafortunadamente la Infantería de Marina salió para atender lo del Salado.

El Doctor Arrazola comenta que la prensa, registra la muerte de un comerciante en la cabecera, el Alcalde expresa que el parecer se están dando retaliaciones entre los grupos al margen de la ley que están enfrentados, por eso las muertes selectivas, en estos momentos no obstante lo del Salado hay seguridad en la población a pesar del temor la población colabora.

En estos días 2 delincuentes fueron capturados en el Barrio Nariño.

El Doctor Arrazola, expone la situación del señor Alcalde de San Juan Nepomuceno quien solicita autorización para despachar fuera de su municipio por razones de seguridad.

El Coronel Perdomo expresa que ha tenido contacto con el señor Alcalde, la Policía le tiene dos escoltas, la Infantería uno, las relaciones con el Alcalde son muy buenas, se han coordinado las medidas necesarias para su seguridad personal.

Expresa que lamenta que los Alcaldes de Córdoba y Zambrano no asistan a la mesa de trabajo a la que fueron invitados por cuanto los resultados han sido fructíferos.

El Coronel Pachón expresa que se debe hacer un llamado a los Alcaldes que no asistieron a la reunión y la conveniencia de realizar una reunión con presencia del Gobernador para ventilar lo de El Carmen, a lo que el Alcalde manifiesta que la asistencia humanitaria de los desplazados está resulta pero se debe trabajar para ir creando un ambiente de confianza y recuperación sociológica con la población desplazada.

El Doctor Arrazola propone integrarnos a través de brigadas cívica militares y de integración cultural y deportiva.

El Alcalde invita a una marcha con pañuelos blancos que se realizará el 17 de Marzo.

Se da por terminada está reunión a las 11:30 de la mañana.

H

7361

Gobernación de Bolívar
Secretaría del Interior

REUNIÓN DE SEGURIDAD

FECHA : 8 de marzo de 2000
Hora: 9:00 a.m.

NOMBRE	ENTIDAD	FIRMA
HECTOR JULIO PACHON	FUERZAS ESPECIALES EJ.	
HECTOR F. DUQUE BLANCO.	SECCIONAL DAS BOLIVAR	
Raymundo Achun	Alcalde el carmen	R. Achun
ALVARO MURILLO R.	DEPTO. ADM. PLANEACIÓN	
ROBERTO ARRAZOLA OBISPO		
TENIENTE CORONEL JOSÉ VICENTE PEDROZO GAVIRIA	POLICIA NACIONAL	
Jairo Velásquez	S. del Interior	

ACTA CONSEJO DE SEGURIDAD
(MARZO 15 de 2000)

En Cartagena de Indias, a los 15 días del mes de Marzo del 2000, se llevo a cabo la reunión del Consejo de Seguridad, en el Despacho del señor Gobernador, a las 15:00 horas, con el fin de evacuar el siguiente orden del día:

1. Llamado a lista
2. Intervención del Señor Gobernador del Departamento
3. Informe de las Autoridades Policivas, Militares y de Seguridad.
4. Informe de los Organismos de Vigilancia, Investigación y Defensoría.
5. Proposiciones y varios.

Con la asistencia de los siguientes miembros:

Dr. MIGUEL RAAD HERNANDEZ
Gobernador del Departamento

Dr. ROBERTO ARRAZOLA JULIAO
Secretario del Interior.

Dra. CIRA VELASQUEZ HERAZO
Coordinadora del Area de orden público

Dr. NELSON EDUARDO DURAN P
Procurador Departamental de Bolivar

Dr. JOSE ANTONIO PINZON P
Director Seccional de Fiscalías

Doctor HECTOR E. DUQUE B
Director (e) Seccional DAS Bolívar

Dr. JULIO SANCEZ A
Procurador Provincial de el Carmen de Bolívar.

T.C. JOSE VICENTE PERDOMO

Contralmirante HUMBERTO CUBILLOS PADILLA
Comandante Fuerza Naval del Atlántico

Coronel CARLOS EDUARDO DEVIA G
Comandante Policía Bolívar

Coronel RODRIGO QUIÑONEZ CARDENAS
Comandante I Brigada de Infantería de Marina.

El Doctor MIGUEL RAAD HERNANDEZ Gobernador del Departamento expresa: se ha convocado fundamentalmente por dos aspectos.

Por los hechos acaecidos en Montes de María en las últimas semanas de lo de El Salado y la reciente incursión de los grupos armados en San Juan Nepomuceno y Maríalabaja

Ya se realizó una reunión de seguridad, se adoptaron medidas en lo que tiene que ver con el Salado, se hará evaluación de las medidas adoptadas y la evolución de la situación.

También se analizará el paro cívico, que coincide con lo que las FARC, han denominado paro armado quieren que se adopten medidas, y se evalúe los efectos.

El señor gobernador propone lectura de informe sobre los hechos acaecidos en la región de Córdoba, el doctor Arrazola procede a la lectura del mismo.

El señor coronel DEVIA conceptúa; con relación a esa información: el señor alcalde no ha manifestado que se estén presentado atracos. El señor gobernador pregunta de donde previene la información. El doctor Arrazola dice que esta fue suministrada personalmente por el Alcalde.

El señor contralmirante dice que el día 15 de febrero fue que sobrevoló el helicóptero en Córdoba y esto fue la antesala de lo que ocurrió en el Salado, y que a las 11:30 de la mañana, la población educativa cerró por que se iban a tomar el pueblo.

Es importante, pide recordar esa fecha y tenerla en cuenta porque dentro de la región no se habían presentando estos hechos, existían rumores de presencia de la AUC, pero no con las características de lo que se dio. El helicóptero fue destruido en el departamento del Magdalena, el Coronel PERDOMO, expresa que las 5 personas que figuran como desaparecidas en El Carmen de Bolívar no sucedió en jurisdicción del Departamento, al parecer fue en Bosconía de ellos apareció una.

Se aclara que los hechos de la ambulancia que transportaba un herido desde El Carmen, estos no sucedieron dentro de la ambulancia.

El coronel QUIÑONEZ, aclara, que lo referente a los familiares de las víctimas del Salado, se le ofreció acompañamiento con las tropas para el Ingreso a El Salado.

Ejercían presión para que el alcalde se hiciera presente y diera a conocer los nombre. Ellos hicieron un bloqueo de la carretera, las personas no pretendían ingresar, no se trancó a nadie, se facilitaba el acceso, la gente no quiso subir.

El coronel DEVIA comenta que, la demás personas, solicitan que la Cruz Roja fuese hasta el lugar, pero este organismo, dijo que no, iban supuestamente por no tener garantías para ingresar.

El Procurador Provincial y la Defensoría del Pueblo, expresa que ellos presumían que los campos estuvieran minados por eso se actuó con cautela.

El coronel QUIÑONEZ dice, al señor de la Cruz Roja, se le dieron todas la informaciones y el manifestó que no podía hacerlo así que tenía que hacer sus contactos personales, también aclara que después de la reacción de las tropas, la infantería de Marina, tenía tropas en áreas cercana a San Jacinto, las tropas se mantienen en un punto equidistante, siempre están alrededor de los Montes de María.

El doctor ARRAZOLA, aclara la información sobre las declaraciones del comandante de la Estación de policía de San Jacinto.

El Coronel DEVIA dice que en la semana pasada se desactivaron dos granadas de fusil en San Jacinto, también se analiza la situación de San Juan y Zambrano.

El contralmirante expresa: en el caso de Zambrano, a raíz de la reacción rápida de la Brigada, la guerrilla, comenzó a hacer retenes de civil y con fusil. Por la acción de los helicópteros y aviones. Hace un llamado de atención sobre el accionar de la guerrilla de realizar operaciones de civil pero armados y luego manipular la opinión a través de la radio y medios de prensa.

La misma exposición que hizo en Cartagena, también se hizo en Sucre y la de los retenes entre El Carmen, Ovejas y Chinulito, los vienen realizando de civil y son muy rápidos, cuando llegan los helicópteros se mezclan con la población civil para confundirse y evadir el accionar de las autoridades.

El señor gobernador dice: este es el resumen de los hechos más relevantes que tiene registrada la Secretaría del interior. Esto describe la alteración de orden público que se vive en los Montes de María.

El coronel QUIÑONEZ manifiesta, de la reunión que se realizó surgieron los siguientes recomendaciones.

Es necesario precisar la información en cuanto al número de ranchos quemados en Zambrano, no son tantos.

El señor gobernador, el coronel Quiñonez, toca un punto clave, es un fenómeno comprensible por el pánico de la gente, el año pasado se encontraba en Barranquilla cuando llego un informe de inteligencia a la II Brigada sobre el corregimiento de Hato viejo, en Calamar sobre la presencia de un número de subversivos, al analizar las informaciones, esto no era así, esto dejó como experiencia que se deben verificar los informes.

Se han presentado retenes esporádicos en varios sitios.. enviará informe de resultados primer trimestre.

En relación con la recuperación de semovientes se han recuperado mas de 550 cabezas, en 1999, se recuperaron unos 231 en todo el año.

En lo que toca con cilindros de gas se han recuperado unos 200 en cuanto a vehículos se han recuperado mas del 50% de ellos. De las personas retenidas las han tenido que soltar muy rápido, hoy en día solo queda un ganadero en poder de la subversión.

Los secuestrados que se han cometido es contra pequeños comerciantes la subversión está debilitada ellos no han tenido resultado, sobre todo a las FARC se han ido aislando.

Están disminuidos, tratan de reorganizarse. En el año 2000 se han destruido alrededor de 9 campamentos en operaciones de registro y control.

La reacción de la fuerza publica le ha disminuido el accionar a los grupos, ellos fracasaron en la toma de las ferias y en el intento de la toma de Córdoba.

Se llevan a cabo acciones psicológicas se han realizado envío de mensajes esto ha tenido un efecto, la subversión está disminuida están buscando oxigeno, en los últimos días ha bajado el accionar.

Se deben complementar con los programas de estado.

En dos ocasiones se tuvo conocimiento del enfrentamiento entre AUC y guerrilla, en San Onofre, trataban de asentarse los grupos de justicia privada.

Los movimientos previos a lo que sucedió en el Salado obedeció a maniobras de distracción para abrir las tropas de Infantería de Marina.

Al conocer la información, se trabajó de inmediato y se operó oportunamente hubo unos resultados, en El Salado se encontraron 7 campamentos de los bandidos, ahora golpearon al Norte en Marilabaja, en esa jurisdicción han pagado rescate, han llevado secuestrados, fueron y golpearon en sitios específicos.

5

Se sabe que las AUC, pretenden protegera algunos dueños de haciendas, y algunos de estos apoyan a las AUC, se prevé el incremento de los ataques en sitios estratégicos.

El coronel QUIÑONEZ manifiesta, se encontró un desarrollo impresionante de la guerrilla, por la integración de los grupos, crearon una columna móvil de fuerza especiales. Estaban minando las vías cerca de Sincelejo donde pretendían llegar. Se golpeó muy rápido, ellos estaban buscando mantener el equilibrio, pero se les llegó oportunamente.

Hay un plan estratégico de la AUC, desde Urabá, la cordillera Antioqueña hasta la Guajira, el objetivo es una costa atlántica limpia de guerrilla en el 2.000. De allí las incursiones.

A pesar de los golpes infringidos, la situación se ve critica y complicada para efectuar la captura tanto de la subversión como de las AUC.

RECOMENDACIONES:

Intégranos unos a otros sin protagonismo. Con relación a las AUC, ellos operan por plato, en el Magdalena, golpean y se retiran a otra jurisdicción. Se deben establecer retenes en la vía Carreto Plato y el Vizo. Ofrecer recompensas para que colabore la comunidad y denuncie.

Hay que exigir que los otros organismos militares ejerzan mayor control por los sitios donde ingresan estos grupos.

Integrara loa alcaldes y personeros para obtener información oportuna, y así poder verificar, para ello se debe programar una reunión con los alcaldes.

El Gobernador, expresa que en una época la Infantería de Marina tenía un puesto en El Playón y El Salado, pero este fue retirado hace unos 2 ó 3 años, por Playón pasan todos los secuestrados de la zona.

6

Hace énfasis en los secuestro, en el año van 39 secuestros, han sido liberados 22 personas permanecen cautivos 17, solo 2 se atribuyen a la delincuencia común, el resto a la subversión.

Estos hechos se están dando más en las cabeceras municipales, este es un tema sobre el que hay que trabajar más. Existe déficit de pie de fuerza, esto es grave y evidente sobre todo en la Policía.

El señor **Gobernador pregunta** ¿qué capacidad de integración hay si se cuenta con un Batallón Móvil del Ejercito?

El señor **Contralmirante** – responde, que a estas acciones hay que agregarle acciones encaminadas a recuperar la legitimidad y la Convivencia y que los órganos de investigación den resultados que se castigue a los responsables con penas ejemplarizantes.

El señor Gobernador, comenta que con los medios que se tienen debemos tratar de ser más eficaces. En el Sur de Bolívar, ya no está la guerrilla, en las cabeceras municipales, se hizo una acción focalizada.

El doctor Lagos Directos Seccional DAS Bolívar, expresa que, se ha trabajado en la Red de informantes. El señor Gobernador comenta que el Departamento, viene mejorando sus finanzas, esto permitirá mayor apoyo a las fuerzas armadas.

Invita a ser optimista y avanzar con lo que tenemos.

El señor **Contralmirante** dice: a primera vista la situación puede parecer caótica pero sin embargo se ha avanzado a paso firme deja claro que el reconoce los esfuerzos realizados por el gobierno departamental, pero el análisis que ha hecho el señor Coronel Quiñonez refleja la realidad, se debe trabajar coordinadamente y todos tenemos que colaborar.

El Señor **Procurador** Considera de suma utilidad lo que se ha comentado, al conocer las circunstancias difíciles, nos obliguen a estudiar a fondo la problemática sin que implique desconocimiento a las labores que viene realizando la fuerza publica.

Actividades de comportamiento- La parte disciplinarias modernas es inherente a la función publica para verificar el cumplimiento de las funciones de acuerdo a las competencias. El Estado es débil y la guerra lo que nos ha permitido es reconocer la verdad, en un país si hay vacío de estado alguien lo ocupa. Esta es una verdad objetiva. En ese aspecto la parte económica es determinante, todos los aspectos planteados son importantes.

Expresa que es respetuoso de los espacios y este es el espacio para debatir las inquietudes y decir las cosas. Le llama la atención las relaciones de la prensa con la comunidad.

Versiones como las que aparecieron en la Prensa sobre los hechos del Salado, la desinformación ocasiona desligitimación y cuando el Estado se desligitima, quienes se legitiman son los otros.

En el Departamento se habla de Montes de María, pero se debe tener en cuenta la importancia de los Montes de María, dentro de la Economía Nacional.

En las informaciones del señor Castaño todos los inversiones que realizan los AUC, se financian en su mayoría por dineros del narcotráfico.

El señor gobernador comenta, cuando se tiene una situación de conflicto se buscan las explicaciones transcendentes, a veces resuelta estrecho este marco, por eso va hacer un bosquejo de la situación del Departamento de que son los vacíos de Estado.

Los vacíos que se dan en una sociedad son: vacíos de estado, vacío de liderazgo y de comunidad.

8

Que hacer para llenarlos. – Hace unos años la situación de Los Montes de María no era tan apretada como hoy, pero eso se dividió el Departamento en subregiones.

Cada una tiene su plan de desarrollo incorporado en Plan Departamental de desarrollo, se convocó un consejo de gobierno para presentar la subregión del Sur de Bolívar, al gobierno Nacional, y que este incluyera el Sur de Bolívar dentro del Plan Nacional de Desarrollo. Hoy la situación del sur de Bolivar es otra.

Se tiene dos planes integrales, uno para el Sur de Bolivar y otro para Montes de María con el fin de que sea presentada en la Mesa de Donante a Europa. Mientras se vienen realizando esfuerzos de reactivación económica se viene realizando la siembra de ajonjolí que se vende a Caribian , Cesam, hay otro proyecto el de Palma Africana en Marialabaja, se tiene sembrados unas 610 hectáreas , en el Sur de bolívar se tienen otras 5.000 hectáreas, allá el proyecto no está tan avanzado como en Montes de María.

Se han realizado alianzas con Palmas de Santander en el Sur de Bolívar y la hacienda Las Flores en Montes de María.

Este viernes se inició una estrategia de capacitación pedagógica en orden público y Convivencia Ciudadana. Como se pude observar las acciones son integrales.

El doctor ARRAZOLA- sugiere realizar reunión con alcaldes de los Montes de María con el fin de trabajar de manera coordinada.

9

CONCLUSIONES:

Sugerencias:

- Mejorar el trato a desertores (Reforma de Legislación)
- Fortalecer los Comité de Inteligencia
- Trabajar con los alcaldes y los personeros para que asistan a la capacitación que se brinda en seguridad ciudadana y orden público.
- Ofrecer el pago de recompensas para estimular a la comunidad a colaborar.
- Reglamentar el transito de vehículos con cilindros de gas propano.
- Reentrenamiento de personal en áreas urbanas.
- Visitas a la zona por parte de los subcomandantes.
- Reforzamiento de los estaciones de la policía en El Carmen de Bolívar y San Jacinto.
- Se reforzaran los puesto de control con policías de carreteras
- Con relación al paro de las Centrales Obreras, se implementarán las siguientes medidas.

1. Restricción al transito de Motociclistas
2. Restricción al transporte de cilindros de GAS
3. Control al transporte de llantas.

La Fuerzas del Orden tienen diseñado planes de contingencia que ya han sido puesto en practica y que han dado resultados. Hay que tener en cuenta el inconveniente nuevo que es el paro armado declarado por las FARC, que se sumaran al paro de las Centrales Obreras, a partir de las 20 horas se tendrá acuartelamiento de 2° grado.

En la parte urbana y cabecera municipales se desarrollarán planes fantasmas y plan documento a partir de las 06:00 horas el plan correcaminos y control vial, a las 12PM ley seca.

10

Se adelantarán operaciones de registro y control y retenes.

- Toma de puntos críticos por parte de Infantería de Marina en las empresas de servicios público , alcaldía , Gobernación , Monumentos Nacional, etc.
- Control interno del orden público por parte de la policía nacional.
- Prohibición del parte de armas a partir 07:00 A.M.
- Restricción a el transito de motociclistas.
- Ley seca 12:00 P.M
- Se hace un análisis especial sobre el caso de Turbaco , se ordena reforzar con más agentes el puesto de Turbaco.

Gobernación de Bolívar

CONSEJO DE SEGURIDAD DE BOLIVAR

SESION : MARZO 15 DE 2000

LUGAR : DESPACHO DEL GOBERNADOR
HORA: 03:00 P.M.

ASISTENCIA

Dr. MIGUEL RAAD HERNANDEZ
Gobernador de Bolívar

Dr. ROBERTO ARRAZOLA JULIAO
Secretario del Interior

Dra. CIRA VELASQUEZ HERAZO
Coordinadora del Area de Orden público

Dr. NELSON EDUARDO DURAN P.
Procurador Departamental de Bolívar

Dr. ALFREDO PALIS TURBAY
Procurador Distrital de Cartagena

Dr. JOSE ANTONIO PINZON P.
Director Seccional de Fiscalías

Dr. MIGUEL PARRA VILLAREAL
Director C.T.I.

Hector E. Duque B.
Director (E.) Secc DAS Bolivar

GOBERNACION DE BOLIVAR
SECRETARIA GENERAL

Julio Sanchez A.
Procurador Provincial
de el Carmen de Bolivar
Grupo Estudios (DAS)

Gobernación de Bolívar

CONSEJO DE SEGURIDAD DE BOLIVAR

SESION : MARZO 15 DE 2000

LUGAR : DESPACHO DEL GOBERNADOR
HORA: 03:00 P.M.

ASISTENCIA

Dr. JORGE ALBERTO LAGOS LEON
Director Seccional D.A.S. Bolívar

Dra. MURIEL PEREZ DIAZGRANADOS
Defensora del Pueblo en Bolívar

Contralmirante
HUMBERTO CUBILLOS PADILLA
Comandante Fuerza Naval del Atlántico

Coronel
CARLOS EDUARDO DEVIA G.
Comandante Policía Bolívar

Brigadier General
FREDY PADILA DE LEON
Comandante II Brigada del Ejercito

Coronel
RODRIGO QUIÑONEZ CARDENAS
Comandante I Brigada de Inf. de Marina

GOBERNACION DE BOLIVAR
SECRETARIA DE GOBIERNO

GOBERNACION DE BOLIVAR
SECRETARIA DEL INTERIOR

REUNIÓN CONSEJO DE SEGURIDAD MARZO 11 DE 2003

En Cartagena de Indias, a los once (11) días del mes de marzo de 2003, se reunieron en las instalaciones de la Gobernación de Bolívar, con el fin de llevar a cabo una reunión de Consejo Departamental de Seguridad las siguientes personas.

Orden del día

1. Verificación de asistencia
2. Intervención del doctor Gustavo Lecompte Gómez, Gobernador (E)
3. Intervención de las autoridades militares, de Policía y Seguridad
4. Intervención de las autoridades de Vigilancia, Investigación y Defensoría Pública
5. Proposiciones y varios.

Intervención del doctor Gustavo Lecompte Gómez, Gobernador encargado- Está reunión es importante porque en la medida en que se adopten posiciones se debe sentar precedentes de fortalecimiento de la comunicación para actuar monolíticamente, se conoce que existen serias amenazas contra los concejales del Carmen de Bolívar, las autoridades de fuerza pública y las autoridades que están presentes. El Carmen de Bolivar debe ser ejemplo no solo a nivel departamental sino nacional, como funcionarios públicos debe constituir motivo de inspiración para proteger las instituciones, Zorrecon avanza bien, hay indicadores que demuestran que la adopción de la estrategia va a tener efectos positivos en la seguridad y el orden público de esa región.

Las fuerza militares vienen destinando para su abnegada protección de la población civil y de los funcionarios están asumiendo responsabilidades frente al conflicto, requiere el respaldo de la sociedad civil, habrá unos costos de guerra pero esta es de todos los colombianos porque a todos nos afecta por igual la problemática, todos tenemos deberes y obligaciones como sociedad civil debemos denunciar los hechos que se puedan presentar, también nos asiste una responsabilidad y es la de mantener las institucionalidad, no podemos permitir que los violentos nos saquen a sombrerazos, no podemos seguir haciéndole el juego a ellos todos conocemos los resultados, debemos sentirnos bien acompañados por ellos . Las amenazas no son nuevas, vienen de tiempo atrás, cuando se asumen responsabilidades como servidores públicos y representante de las comunidades sabíamos perfectamente a que nos enfrentábamos. Hoy por hoy debemos estar firmes al pie de esa responsabilidad que asumimos al encarnar los cargos a los que aspiraron.

Al interior de la Gobernación hemos sido víctimas del terrorismo, cuando se asume el cargo se sabe a lo que se enfrenta con la responsabilidad y las

funciones, afirma está seguro que el hecho de estar aquí significa que se va a seguir amparando a la comunidad, los violentos no van a sacar a sombrerazos a los colombianos, todo el país está pendiente de nuestra actuación. Se refiere a las declaraciones de un concejal del Carmen de Bolívar que dice que la renuncia no va a cambiar la situación, hay que servir de ejemplo al pueblo colombiano, con el apoyo de todos los organismos y rodear a las autoridades.

Intervención de la Doctora Maribel Romero, Secretaria del Interior Municipio del Carmen de Bolívar: Excusa al señor alcalde que se encuentra hospitalizado en Barranquilla, ya que fue sometido a una intervención quirúrgica, es de conocimiento público la ola de violencia que afecta al Carmen de Bolívar de hace rato pero se ha incrementado en los últimos meses.

En el 2002 se realizaron 9 atentados con explosivos en el casco urbano, se lograron desactivar dos cargas explosivas, en el 2003 no es desconocido el esfuerzo que viene realizando la administración municipal y esto hoy lo están cobrando los diferentes grupos que tienen interés en el Carmen de Bolívar.

En marzo de 2002 se recibió una misiva que iba dirigida a los diputados, a los alcaldes, a los concejales y al gobernador, donde pedían la renuncia de estas personas, se desató una situación de seguridad difícil para estos funcionarios y para los concejales quienes se vieron abocados a presentar renuncia. El día 5 de marzo 13 concejales renunciaron masivamente, se dieron varios atentados terroristas, el 7 de febrero en IDEMA, el 22 en el terminal, el 27 de febrero dos explosivos fueron instalados en torres eléctricas, hubo diez muertes selectivas en el casco urbano y dos secuestros entre ellos el del médico Ricardo Bray.

Lo que pretende es desestabilizar la administración del Carmen de Bolívar con la salida del alcalde y el atentado al presidente del concejo. El 3 de febrero de ese año fue atacado a bala el concejal Valle quien está en mal estado de salud, Señor gobernador para ellos no quiere que se repita la historia del año 2000 y del 99, apoya a la fuerza pública, no quieren ser objetivo de grupos armados sea cual sea, piden respeto y están dispuestos a luchar por su municipio, se deben explorar mecanismos para proteger efectivamente a los funcionarios y sus familiares.

Manifiesta que la población tiene gran temor por que cuando han pasado mas de cinco días que no sucede nada es seguro que algo va a suceder, preocupa que esos hechos ocurrieron a escasos 250 metros del comando de la policía, los concejales presentaron renuncia masiva, solicita a la gobernación y a la fuerza publica que se les brinden mayores garantías de seguridad y que adopten medidas para bajar el tono a la violencia que afecta la región.

Como alcalde encargado se ha reunido con las autoridades, en los consejos de seguridad se habla de resultados, pero preocupa que aun contando con la fuerza publica se sigan dando estos hechos de violencia e intimidación, no es

justo lo que esta pasando con su municipio y la región Solicita al señor gobernador definir como se van a definir que les garantice seguridad a los servidores públicos , exhorta a los concejales a exponer la situación tal cual esta sucediendo, porque no se puede vivir con as amenazas , la población se encuentra muy asustada y hay muchas familias que han resultado afectadas por los atentados terroristas.

El señor gobernador, recuerda a los asistentes la naturaleza de la reunión, en cuanto a la seguridad de los concejales y los servidores públicos, todos debemos trabajar unidos, debemos ser solidarios. No debemos salir corriendo, los delincuentes no deben lograr su objetivo, debemos buscar salidas la seguridad no debe estar comprometida. La decisión que se tome será fundamental, se esta en la mira de los colombianos.

.Intervención de concejal José Simón Abuabara Turbay. Expresa que el 15 de agosto de 2002, le tocó renunciar como concejal del Carmen de Bolívar por serias amenazas contra la corporación, se hizo un consejo de seguridad no participaron todos los concejales dada las circunstancias el alcalde no acepto la renuncia se acogieron al decreto 2255 de 2002 y la corporación dispuso sesionar de manera privada para no desestabilizar al estado colombiano. Mas tarde se presento el atentado del presidente del concejo en su casa, días más tarde sucedió un atentado personal y trataron de matarlo sin embargo ellos decidieron seguir sesionando como corporación. En esta oportunidad otra vez recibieron amenazas y les indican que sí siguen sesionando les iba a pasar peor que lo que sucedió al presidente del concejo el año pasado, primero se creyó que se trataba de enemigos políticos, pero esta vez se tienen términos para `presentar la renuncia, manifiesta que están expuestos en el Carmen de Bolívar, no quieren protagonismos se reunieron 13 de los 15 concejales y manifestaron al señor alcalde su posición, le pidieron apoyo y ayuda como en la primera ocasión el tema se trato con un perfil bajo pero ahora reaparece el problema y las cosas van en serio.

Una concejal presento una carta de renuncia estando el receso el concejo espera tomas una desición a ver que pasa, siguen sesionando y exponiéndose les preocupa la seguridad de su familia no quieren ceder espacios, han luchado por tener una curul y no quieren doblegarse pero no es fácil no tienen la experiencia en esta materia sostuvieron reuniones con funcionarios de la SIJIN que les impartieron instrucciones de autoprotección, pero una cosa es estar en Cartagena y otra vivir en el Carmen.

Intervención de la concejal Pabla Torres- Manifiesta que quienes le antecedieron ya hicieron un diagnostico de lo que le está sucediendo en su localidad no es fácil la situación del municipio cada día la situación se torna peligrosa y difícil porque se atenta contra la vida de la colectividad, han asumido las funciones de concejo pese a cualquiera que sea la situación de orden publico, en su municipio tienen asientos grupos a margen de la ley de

GOBERNACION DE BOLIVAR
SECRETARIA DEL INTERIOR

diversas corrientes tanto de izquierda como de derecha, están viviendo una paranoia, lo mas importante es proteger a la familia. Se deben coordinar con as autoridades para generar confianza, pide colocarse en su lugar, los concejales son responsables y consecuentes con la obligación que asumieron pero hay amenazas de tipo personal y familiar.

Doctor Gustavo Lecompte- Expresa que precisamente porque todos saben la situación que se vive en el carmen de Bolívar y la situación personal de cada concejal es que se ha convocado esta reunión porque se sabe del alto riesgo pero también del concepto de responsabilidad de los concejales, se trata de buscar soluciones que puedan servir no solo para la región sino para el país no se puede salir huyendo, la fortaleza está en que todos deben unirse.

Se debe partir de la voluntad que tienen de permanecer en el cargo y buscar medidas de alternativas de solución pregunta cuales son los términos de la amenaza, a lo que responde el doctor Abuebara que en el parque del Carmen llegó una persona joven y se acerco a unos concejales y les dijo "Sí siguen sesionando les va a pasar peor que al concejal Valle esta persona se identifico como miembros de las FARC y les dijo que iba en serio y que les daba 48 horas para renunciar por esa razón se dirigieron al alcalde y le dieron a conocer la situación.

Dra. Maribel Romero – Comenta que al doctor Valle le colocaron un petardo a final de las sesiones, de las amenazas se informo al alcalde y a las autoridades quienes lo trataron en un consejo de seguridad, en la primera oportunidad algunos concejales entregaron la renuncia y viajaron a Barranquilla y hablaron con el alcalde, quien despacha desde Barranquilla pero en esta segunda oportunidad se confirmo que las cosas eran serias.

Concejal Lelys Berrocal- Pide que en el Carmen de Bolívar se responda por los muertos que cada día pone esa localidad, que es lo que está pasando, ellos también son partes del gobierno y del estado, pero es que no tienen para donde irse, donde se van a meter, decirlo es fácil pero vivirlo es difícil no tienen fuerza suficientes lo que devenga no les alcanza.

Contralmirante Guillermo Barrera Hurtado- Afirma que no se debe pensar en forma individual para resolver los problemas se debe reflexionar que le puede pasar a uno, bastara con colocar una reja, una alarma, contar con guardaespaldas, un vehículo blindado y un día cualquiera pasa una situación. No, la seguridad no se puede construir en forma individual, no existe fuerza disponible para colocar un policía en cada cuadra, pero si pueden existir ciudadanos solidarios, comenta que estuvo en el Carmen de Bolivar en San Jacinto se entrevistó con concejales pero no en el Carmen de Bolívar. Se pudo reunir con gentes de diferentes gremios. Trabajará intensamente para buscar la solidaridad. Sabe lo que están sintiendo, a él también le han pedido que salga del país su familia, pero el no puede abandonar su país, pide que se piense en

11

el ejemplo de Candono, en el Cauca que con parcantas, cantos y bastones sin un arma se han revelado contra la guerrilla y la sacaron de sus municipios.

Cualquier esfuerzo es inútil sino se tiene solidaridad porque cuando una persona conoce que se esta cometiendo un delito porque no se acerca a la autoridad, no debe existir desconfianza con las autoridades que apenas acaban de llegar, existe la posibilidad que todos puedan sentirse protegidos, se debe mirar o que sienten las personas cuando en el año en que fueron elegidos hubo 250 homicidios, esto debe dolernos a todos, durante estas semanas se desarrollan operaciones en los Montes de María, hoy día salio un teniente que fue trasladado a Bogotá el cual fue victima de un atentado terrorista, con minas antipersonas, no obstante la fuerza pública esta dispuesta a trabajar con todos, la constitución le da el poder de seguridad al señor alcalde conjuntamente con la policía, en el año 2002 la región fue afectada por una oleada terrorista que busca atemorizar a las personas, todas las medidas que se acuerden sino se trabajan juntas no se puede hacer mucho se necesita conocer de inmediato los hechos, a veces olvidamos lo que paso en el Carmen de Bolívar, nos debe doler a todos, es más peligros sobre todo desde que se decretó las zonas de rehabilitación, vamos a trabajar unidos y en conjunto.

Se han capturado más de 80 personas todas judicializadas los organismos se reúnen cada 8 días, hace 8 días se le dio a prioridad al Carmen de Bolívar por parte de los organismos, trabajamos todos con solidaridad, incluso pedimos que nos digan las cosas con ojo critico para poder tomar los correctivos, la violencia se ha metido en el Carmen de Bolívar desde hace rato, hace 30 años todo el mundo podía ir a la escuela y a sus fincas hoy no. Convoca hombro a hombro a todas las instituciones para ayudar a recuperar la región y sacar adelante la gestión de los alcaldes, cada uno de los presentes es un ser único irrepetible que tiene como prioridad la libertad para desarrollarse integralmente. La mayor seguridad se tiene en quienes votaron por autoridades.

Intervención del Coronel Jesús Antonio Gómez Méndez, Comandante Departamento de Policía Bolívar- La policía tiene que asumir el esquema de seguridad en todo su conjunto, para ello está destacado el señor Coronel Mogollón, el tema de seguridad es compartido con la fuerza pública, la Fiscalía, el CTI, se debe trabajar en conjunto, coordinados, conformando esquemas de seguridad para cada uno, se podría pensar en un escolta para cada uno, algunos tienen escoltas porque así lo determinaron los estudios de riesgo realizados, otros recibieron recomendaciones, hoy se están presentado situaciones que se deben mirar con detenimiento. Entiende la dificultad que se vive, se debe avanzar en la conformación de los frentes de seguridad de cada sector, en el Carmen de Bolívar ha sido difícil la conformación por la falta de solidaridad y confianza de la comunidad, se necesita mayor incidencia de los líderes.

GOBERNACION DE BOLIVAR
SECRETARIA DEL INTERIOR

Se realizan estudios de riesgo y grado de amenaza a través de la policía. Se harán sesiones semanales de revisión, recomienda trabajar una estrategia que convoque a todos los Carmeros, se debe conocer al vecino, que hace, en que trabaja. Se han realizado unas capturas y coincidencialmente la presión de renuncia de los concejales se presenta después de estos resultados. Han fallecidos 9 personas en el Carmen pero también han sido por las FARC y por las AUC, en la semana se encontraron abandonados unos artefactos explosivos en el casco urbano.

La policía está comprometida, respalda a sus autoridades convoca a que entre todos se deben diseñar esquemas de comunicación ágil, con patrullajes etc., se vienen adelantando operativos tanto en la zona rural como urbana, se harán retenes, control de motos y parrilleros.

Intervención del doctor Jaime Cuestas Ripoll, Director Seccional de Fiscalías- Hace un año se tuvo una situación similar, estos municipios de San Juan, el Carmen de Bolívar, son peligrosos, pero también valerosos sus habitantes, la fiscalía también ha sido victima de amenazas a fiscales, han sido asesinados varios fiscales en el país pero lejos de atemorizar a la institución, esto genera mayor compromiso, en varias partes del país ha sucedido lo mismo, a pesar de todo, la institución continua trabajando hombro a hombro no les temblará la mano para tomar decisiones, el estado no se defiende huyendo las instituciones, sino actuando cumpliendo con su deber.

Coronel Ussa Luna, Comandante I Brigada de Infantería de Marina- Manifiesta que su institución apoya todos los aspectos, medidas y esquemas que se coordinen entre las autoridades, solicita adelantar campañas de sensibilización, llama la atención por los hechos ocurridos con los agentes en la vía a Zambrano, no hubo pronunciamiento ni repudio de la comunidad, el objetivo Nº 1 de la institución es apoyar al Carmen de Bolívar.

Doctor Fabian Araujo Mendoza, Director Das Bolívar- Lo que queda evidenciado en la reunión es la falta de confianza entre los concejales y sus autoridades legítimamente constituidas tanto a nivel municipal como en el departamento. Su institución se entero de las amenazas a través de los medios de comunicación. El mensaje es de desconfianza, no se tiene claro quien fue el que recibió el mensaje de las 48 horas como termino perentorio. Esto dificulta la investigación, se puede tratar de cualquier persona que quiere desestabilizar la comunidad.

El Das y sus oficinas están a disposición de las autoridades y la comunidad, la seguridad es responsabilidad de todos. Realizarán la revisión de los estudios de seguridad porticados, las instituciones están para apoyarlos, con la policía, se coordinarán medidas, rondas periódicas, revistas etc. Solicita apoyo para instalar un puesto del Das en el Carmen, la zona de el Carmen - San Jacinto y Zambrano es la más compleja por eso se debe trabajar una estrategia especial

se han realizado registros y allanamientos y no se han obtenido resultados, a la gente le da miedo señalar a los que ocasionan la violencia en la zona, falta confiar en las autoridades.

Recomendaciones del señor Contralmirante Guillermo Barrera Hurtado:

- No se puede seguir huyendo, se hará frente a los grupos, hoy los amenazados son los concejales mañana pueden ser otros.
- Se debe tener firmeza y coraje, se debe asumir una posición.
- No se debe hacer eco de las amenazas, el principal objetivo del terrorismo es atemorizar, asustar las comunidades deben rodear a sus instituciones.
- La seguridad reside en la solidaridad, la policía es una prolongación de la comunidad la Infantería son las fuerzas del estado para defender el territorio y a sus ciudadanos.

Doctor Lecompte- manifiesta que los concejales tienen la palabra, se les ha escuchado y se les ha brindado total respaldo. Se debe actuar solidariamente, no se debe renunciar al privilegio de ser los representantes de la comunidad, se debe creer en la eficacia alas autoridades.

CONCLUSIONES:

- Se adelantan mesas de convivencia para fortalecer la construcción de lo público, ciudadanía, valores, derechos humanos y DIH, se realizarán campañas de integración entre autoridades y comunidad con la participación de la fuerza pública, actos culturales, deportivos, religiosos etc.
- Se avanzará en fortalecimiento institucional, adopción de planes de seguridad, policía comunitaria, campañas de acción cívico - militar, respecto a la vida, control al porte de armas, campañas de tránsito, solución pacifica de conflicto y violencia intrafamiliar.
- Invita a reconsiderar la medida a las autoridades y a los concejales, el estado los acompaña y respaldaron todas las instituciones.
- Agradece el tiempo, la asistencia y las sugerencias, el Almirante Barrera manifiesta que la Fuerza Naval se compromete a acompañar a los concejales con efectivos del Bafim 3 para los desplazamientos.

GOBERNACION DE BOLIVAR
SECRETARIA DEL INTERIOR

REUNION DE SEGURIDAD
MARZO 11 DE 2003.

ASISTENCIA

Dr. GUSTAVO LECOMPTE GOMEZ
Gobernador de Bolivar (e)

Dra. CIRA VELASQUEZ HERAZO
Coor. Unidad de Orden Público y Conv.

Contral.GUILLERMO BARRERA HURTADO
Comandante Fuerza Naval del Caribe

Coronel. JESUS A GOMEZ MENDEZ
Cte. Departamento de Policía Bolivar

Cap. de Fragata CESAR A. CARDONA O.
Cte. BAFIM 3

Dr. JORGE FABIAN ARAUJO MENDOZA
Director DAS Regional Bolivar

Dr. JAIME CUESTA RIPOLL
Director Seccional de Fiscalía

Dr. OSCAR F. CASTELLANOS PRADA
Director CTI

Sr. OTOMAR LASCARRO SILVA
Alcalde Municipal de El Carmen de Bolivar

GOBERNACION DE BOLIVAR
SECRETARIA DEL INTERIOR

REUNION DE SEGURIDAD
MARZO 11 DE 2003.

ASISTENCIA

CONCEJALES DE EL CARMEN DE BOLIVAR

ELIECER MARQUEZ ORTEGA

FREDIS ROMERO T.

Lelis R. Bermudez.

Oswaldo Fenaint

Pablo Gomez.

Ramos Ortegon

Nicolas Tapias M.

CR German Ussa L.

Angelica I. Santamaria O.

Elsa Rosa Salinas Rosas

GOBERNACION DE BOLIVAR
SECRETARIA DEL INTERIOR

CONSEJO DEPARTAMENTAL DE SEGURIDAD
MARZO 11 DE 2003.

ASISTENCIA

CONCEJALES DE EL CARMEN DE BOLIVAR

Gabriel. Martinez	
Juan C. Redondo V	Juan C. Redondo V
Blanca Victoria Sabagh	

GOBERNACION DE BOLIVAR
SECRETARIA DEL INTERIOR

REUNION CONSEJO DE SEGURIDAD
SEPTIEMBRE 3 DE 2003

En Cartagena de Indias, a los tres días del mes de septiembre de 2003, se reunieron en las instalaciones de la Fuerza Naval del Caribe con el fin de llevar a cabo una reunión de la Comisión de Coordinación y Seguimiento Electoral las siguientes personas.

Orden del día

1. Verificación de asistencia
2. Intervención del doctor Gustavo Lecompte Gómez, Secretario del Interior
3. Intervención de los Delegados del Registrador del Estado Civil
4. Intervención de las autoridades militares, de Policía y Seguridad
5. Intervención de las autoridades de Vigilancia, Investigación y Defensoría Pública
6. Proposiciones y varios.

Intervención del doctor Gustavo lecompte Gómez, Secretario del Interior – Informa que con las autoridades de orden público, de seguridad, vigilancia e investigación se han desarrollado reuniones preparatorias del proceso electoral, no han asistido todos los candidatos, no hay ni habrá zonas vedadas para el ejercicio al derecho de sufragio. Con esta reunión se quiere conocer las sugerencias, inquietudes de candidatos y los partidos políticos para el debate electoral.

Intervención del señor Almirante Guillermo Barrera Hurtado, Comandante de la Fuerza Naval del Caribe- Manifiesta el énfasis y compromiso del gobierno nacional y las instrucciones impartidas a los organismos del estado para trabajar en equipo, la seguridad es el resultado de un trabajo en doble vía, se realizarán otras reuniones. En lo que toca a la seguridad personal se realizarán estudios de riesgo, esto se coordinará internamente entre las autoridades con miras a garantizar la integridad de los aspirantes.

GOBERNACION DE BOLIVAR
SECRETARIA DEL INTERIOR

Intervención del doctor Fernando Mendoza Mendoza, Delegado del Registrador Nacional- Excusa a la doctora Marta Ciodaro quien está atendiendo actividades del proceso electoral que se avecina, informa que ayer se inicio jornada de capacitación con los registradores municipales, mañana se harán con los diferentes organismos de fuerza pública, la Procuraduría, la Fiscalía, el CTI y en la tarde lo harán los periodistas.

En la semana de 18 de septiembre se tendrá la visita del Presidente del Consejo Nacional Electoral y otros magistrados que participaran en reuniones con candidatos. La connotación del proceso electoral que se avecina es especial no sólo está en juego las elecciones de gobernadores, alcaldes, diputados, etc., sino las instalaciones del estado de derecho, no habrá zonas vedadas no se presentaran sabotajes, se requiere trabajar en equipo, se refiere a la reunión realizada por la policía en la semana pasada, hubo ausencia de los candidatos a la reunión. En esta oportunidad se cuenta con organismos

de seguridad fuertes, que han demostrado que pueden mantener a raya a los delincuentes y garantizar que los bolivarenses acudan a ejercer su derecho libremente.

Intervención del Coronel Jesús Antonio Gómez Méndez Comandante Departamento de Policía Bolívar- Con relación a la capacitación para el personal de su institución solicita coordinar una nueva fecha. En cuanto a la seguridad de los candidatos ha designado para este fin al señor Capitán de la Rocha para la realización de estudio de riesgo de amenaza. La policía ha diseñado esquemas de seguridad a nivel de alcaldes y gobernadores. También hay requerimientos a nivel de concejo. Estas son medidas institucionales no obedecen a padrinazgos.

Se creo una central de información para conocer todos los eventos políticos que se van a desarrollar pone a disposición la línea 130 y 157 teléfonos 6609117 para cualquier coordinación.

Realizan patrullajes, acompañamiento de seguridad en ámbitos urbanos y en área rural, se hará acompañamiento militar. Solicita dar a conocer cualquier situación para atenderla oportunamente. Sobre el tema de la central está constituida por oficiales que hacen análisis de los candidatos, su comportamiento, hace referencia a que solo asistieron candidatos uno a

la alcaldía de Cartagena 2 a la Gobernación, pero le hubiera gustado que los candidatos estuvieran presentes en la reunión. Requiere sinceridad y oportunidad de todos, hablar con confianza para actualizar los estudios de riesgo y demás medidas.

Intervención del doctor Gustavo Lecompte Gómez, Secretario del Interior –Informa que simultáneamente a esta reunión se hará en Mahates la próxima semana, en Magangue y santa Rosa del Sur. Se debe atender que es imposible mantener escoltas a todos los candidatos, lo que se hace es trabajar una estrategia general para brindar seguridad en grupo, a los que tengan dificultades se les hará acompañamiento especial.
El servicio de protección es gratuito, se debe coordinar con los Comandantes de Policía tanto a nivel regional como municipal. Cuando se den desplazamientos se debe informar con anterioridad para coordinar. Se recomienda guardar bajo perfil en los desplazamientos.

Intervención del doctor Jaime Cuesta Ripoll, Director Seccional de Fiscalías- Su jurisdicción es amplía tiene que trabajar en dos frente, vigilancia y judicializacion, su accionar es antes y después del proceso. A nivel de casco urbano se ubicaran puestos móviles y puestos fijos ya se han judicializado personas por delitos electorales.

Se han destacado 4 fiscales para este fin, la Fiscalía está presta a atender cualquier requerimiento.

Intervención del doctor Sacristán Director Das Bolívar- Informa que a su institución se han acercado algunas personas se les está resolviendo, trabaja coordinadamente con los candidatos y las autoridades. recomienda a los candidatos contar con un asesor en el

tema de seguridad para que los acompañen en los desplazamientos y que sirva de enlace con los organismos. Se debe pensar en medidas de autoprotección .

El gobierno expidió una directiva en ese sentido, ningún candidato debe acudir a grupos que no sean del estado.

Intervención del señor Director del CTI- Se trabaja coordinadamente con el fin de evitar el entorpecimiento del proceso electoral, se vienen

adelantando en investigaciones para dar respuesta a las denuncias de la comunidad.

Intervención del señor almirante Guillermo Barrera Hurtado, Comandante Fuerza Naval del Caribe- todas las instituciones están unidas para trabajar por la democracia, los principios básicos son la dignidad de la persona humana, la solidaridad se debe coordinar con las autoridades los desplazamientos al número 315-7333120 esta disponible las 24 horas Tte. Coronel Ricardo Rivera del Bafim 2. para los candidatos del Dique hacía abajo coordinar con el Bafim 3, recomienda prudencia en los desplazamientos. La seguridad de la patria y la facultad de toma de decisiones no pueden recaer en nada diferente al imperio institucional. No se puede fundamentar con feudos modernos, guerrilla, paramilitares que deben ser combatidos por el estado. Sin seguridad no hay vida no hay empleo, la ciudadanía debe acudir a votar, la fuerza pública está obligada a proteger a todos por igual. La energía de la fuerza pública está concentrada en cuidar y proteger a los candidatos e impedir que algún candidato tenga contactos con grupos al margen de la ley. Lo único que disuade a los violentos es la energía de la fuerza pública y no de la ciudadanía

Intervención del doctor Gustavo lecompte Gómez, Secretario del Interior – Todas las instituciones trabajan denodadamente con el fin de garantizar la seguridad de los candidatos y garantizar el debate electoral. También serán inflexibles para sancionar cualquier intento de quebrantar la ley.

Intervención del Diputado Carlos Cabrales- expresa su preocupación sobre la transparencia del debate electoral. Se cuenta con todas las garantías, pero igual debe ocurrir una vez termine el debate electoral, solicita a la Fiscalía y el CTI estar atentos.

Intervención del doctor Jorge Quintana – Se refiere a los candidatos a alcaldía de Cartagena, recibió una llamada de un número privado donde le informaban que ni él ni el tigre llegan el 26 de octubre. También ha ocurrido os mismo con otras personas. Llama la atención sobre los topes de las campañas, la democracia se rompe cuando se violan los topes establecidos.

Intervención del doctor Gustavo lecompte Gómez, Secretario del Interior- Manifiesta que los hechos expresados deben ser dados a conocer a la Fiscalía, llama la atención en que no se puede utilizar esta reunión para hacer proselitismo y ser breve, hacer uso raciona del tiempo.

Intervención del doctor Moisés Planeta Pérez- Asesor del candidato Willis Martínez- Recomienda a las fuerza militares socializar al interior tener cuidado con la aplicación del articulo 122 del Código Electoral, en lo que tiene que ver con el ejercicio de los testigos electorales, para que no se les atropelle y se colabore con el ejercicio de sus funcionarios. Por ello se deben hacer capacitaciones.

Intervención del señor Almirante Guillermo Barrera Hurtado, Comandante de la Fuerza Naval del Caribe- Naval del Caribe- Manifiesta que se tomará atenta nota, las fuerzas militares siempre coordina este aspecto con la Registraduría, recomienda no ponerlo en presente porque no hay elecciones todavía.

Intervención del doctor arcadio Almanza, aspirante a la Asamblea Departamental- Expresa inquietud en cuanto al uso de los borradores de los tarjetones, hasta ahora no se sabe como son los tarjetones, la ciudadanía debe saber como utilizarlos, se debe avanzar en campañas pedagógicas para instruir a los electores.

Intervención del doctor Omar Salcedo Álvarez, Capitán de Navío ® del Nuevo Partido- Expresa que la reforma política nos pone del presente un reto, la labor es dispendiosa en lo que respecta a los testigos electorales, la pedagogía debe ser clara en procura que las elecciones sean positivas y permita contar con nuevos aspirantes. Se debe montar un escenario que permita que en todas las mesas haya testigos electorales equitativamente.

Intervención del doctor Eder Florez, Aspirante a Asamblea Departamental- Hay muchos sectores se conocen los aspirantes vienen siendo citados por las AUC, ejemplo en el caso de la línea, donde les han dicho a la ciudadanía que no pueden votar por Eder Flórez, los avisos de algunos candidatos son borrados, esto hace temer por la vida de los candidatos a los que viene apoyando su campaña sobre todo en el tema de la Gobernación, hecho que fue puesto en conocimiento del Gobernador y de las autoridades competentes.

Intervención del señor almirante Guillermo Barrera Hurtado, Comandante Fuerza Naval del Caribe- Informa que estos hechos deben ser denunciados y abocados por la Fiscalía, todas las instituciones tienen la responsabilidad de garantizar el derecho a elegir y se elegido.

Intervención del doctor Neftali Pacheco, Aspirante al Concejo – Manifiesta su complacencia por el enfoque pedagógico en que se desarrolla esta reunión, se debe procurar el bienestar y garantizar los derechos de la comunidad. Todos deben respetar los procesos, se debe respeto a la dignidad humana, hay veces se dirigen a las autoridades y no se tienen respuestas. A esta afirmación el Almirante Barrera, solicita al señor Pacheco ser específico al referirse a las autoridades identificando que autoridad no le ha atendido su solicitud.

Intervención del doctor Fernando Mendoza Mendoza, Delegado del Registrador Nacional- aclara que los testigos electorales son personas que deben solicitar su inscripción en representación de determinado candidato o movimiento, inician su tarea junto con la apertura de elecciones hasta el traslado de los pliegos a las arcas triclaves. Pero a veces algunos candidatos los utilizan para cumplir actividades distintas a su función específica, los testigos deben acudir a la capacitación que imparte la Registraduría.

La comisión escrutadora: Si bien son nombrados por el Tribunal del Distrito de Cartagena, los Registradores Municipales deben estar atentos para que los escrutadores cumplan con su función, se hizo solicitud especial al tribunal sobre este particular, los escrutadores y claveros se capacitarán. A partir de la semana entrante llegan las tarjetas, cualquier orientación sobre este tema la pueden obtener en su despacho.

Intervención del señor Director del DAS Bolívar- Informa que el sábado a las 9.00 a.m. se impartirá una capacitación sobre medidas de autoprotección a los candidatos.

No siendo otro el objeto de la presente se termina la presente reunión.

1907

GOBERNACION DE BOLIVAR
SECRETARIA DEL INTERIOR

REUNION COMITÉ DE SEGUIMIENTO ELECTORAL
FUERZA NAVAL DEL CARIBE
SEPTIEMBRE 3 DE 2003

ASISTENCIA

Dr. GUSTAVO LECOMPTE GOMEZ
Secretario del Interior

Dra. CIRA VELASQUEZ HERAZO
Coor. Unidad de Orden Público y Conv

Contral. GUILLERMO BARRERA HURTADO
Comandante Fuerza Naval del Caribe

Coronel. JESUS A. GOMEZ MENDEZ
Comandante Departamento de Policía Bolivar

Coronel. JOSE LEONIDAS MUÑOZ
Comandante I Brigada de I.M.

Capitán de Fragata. AUGUSTO VIDALES LARARTE
Comandante Bafim 2

Dr. ROMULO BETANCOURT GARRIDO
Director Seccional DAS Bolivar
Dr. CARLOS JAIME SARCEDIAN B

Dr. FERNANDO MENDOZA MENDOZA
Delegado del Registrador Nacional

Dra. MARGARITA PETROCELLI LAZARRO
Delegada del Registrador Nacional

Dr. ARTURO ZEA SOLANO
Defensor del Pueblo Regional Bolivar

Dra. AMADA OJEDA TORREGROSA
Procuradora Regional de Bolivar

Dra. GALA DE LA VEGA SERNA
Procuradora Provincial

GOBERNACION DE BOLIVAR
SECRETARIA DEL INTERIOR

REUNION COMITÉ DE SEGUIMIENTO ELECTORAL
FUERZA NAVAL DEL CARIBE
SEPTIEMBRE 3 DE 2003

ASISTENCIA

Dr. JAIME CUESTA RIPOLL
Director de Fiscalías



Dr. OSCAR CASTELLANO PRADA
Director CTI

7403

GOBERNACION DE BOLIVAR
SECRETARIA DEL INTERIOR

REUNION COMITÉ DE SEGUIMIENTO ELECTORAL
FUERZA NAVAL DEL CARIBE
SEPTIEMBRE 3 DE 2003

ASISTENCIA

Dr. GUSTAVO LECOMPTE GOMEZ
Secretario del Interior

Dra. CIRA VELASQUEZ HERAZO
Coor. Unidad de Orden Público y Conv

Contral. GUILLERMO BARRERA HURTADO
Comandante Fuerza Naval del Caribe

Coronel. JESUS A. GOMEZ MENDEZ
Comandante Departamento de Policía Bolivar

Coronel. JOSE LEONIDAS MUÑOZ
Comandante I Brigada de I.M.

Capitán de Fragata. AUGUSTO VIDALES LARARTE
Comandante Bafim 2

Dr. ROMULO BETANCOURT GARRIDO
Director Seccional DAS Bolivar

Dr. FERNANDO MENDOZA MENDOZA
Delegado del Registrador Nacional

Dra. MARGARITA PETROCELLI LAZARRO
Delegada del Registrador Nacional

Dr. ARTURO ZEA SOLANO
Defensor del Pueblo Regional Bolivar

Dra. AMADA OJEDA TORREGROSA
Procuradora Regional de Bolivar

Dra. GALA DE LA VEGA SERNA
Procuradora Provincial

GOBERNACION DE BOLIVAR
SECRETARIA DEL INTERIOR

REUNION COMITÉ DE SEGUIMIENTO ELECTORAL
FUERZA NAVAL DEL CARIBE
SEPTIEMBRE 3 DE 2003

ASISTENCIA

Dr. JAIME CUESTAS RIPOLL
Director de Fiscalía

Dr. OSCAR CASTELLANO PRADA
Director CTI



GOBERNACION DE BOLIVAR
SECRETARIA DEL INTERIOR

REUNION COMITÉ DE SEGUIMIENTO ELECTORAL
FUERZA NAVAL DEL CARIBE
SEPTIEMBRE 3 DE 2003

ASISTENCIA

Dr. CARLOS DIAZ REDONDO
Alcalde Distrital de Cartagena de Indias _____

Dr. CARLOS TINOCO OROZCO
Alcalde Municipal de Arjona _____

Dr. JUAN MEJIA LOPEZ
Alcalde Municipal de Clemencia _____

Dr. BORIS. DE J. LLAMAS F.
Alcalde Municipal de San Estanislao _____

Dr. EDUARD DE LA C. GONGORA
Alcalde Municipal de Santa Catalina _____

Dr. ADALBERTO ARROYO OROZCO
Alcalde Municipal de Santa Rosa Norte _____

Dr. BENJAMIN MARTINEZ NARVAEZ
Alcalde Municipal de Soplaviento _____

Dr. LUIS CAMPO MARTINEZ
Alcalde Municipal de Turbaco _____

Dr. PEDRO PEREZ MARRUGO
Alcalde Municipal de Turbana _____

Dr. GILBERTO AMAYA VASQUEZ
Alcalde Municipal de Villanueva _____

Dr. BENJAMIN LOPEZ ESCOBAR
Alcalde Municipal San Cristóbal ANTONIO GUERRERO G (E)

Secretario del Interior de San Cristóbal ANTONIO GUERRERO G.

140.6

GOBERNACION DE BOLIVAR
SECRETARIA DEL INTERIOR

REUNION COMITÉ DE SEGUIMIENTO ELECTORAL
FUERZA NAVAL DEL CARIBE
SEPTIEMBRE 3 DE 2003

ASPIRANTES ALCALDIA ZODE DIQUE

ASISTENCIA

NOMBRES	FIRMA
Jorge Fidel Borge San Estanislao de Kostka.	
Julio Castellano Martinez Mompox - Bol.	

GOBERNACION DE BOLIVAR
SECRETARIA DEL INTERIOR

REUNION COMITÉ DE SEGUIMIENTO ELECTORAL
FUERZA NAVAL DEL CARIBE
SEPTIEMBRE 3 DE 2003

ASISTENCIA

Dr. CARLOS DIAZ REDONDO
Alcalde Distrital de Cartagena de Indias _____

Dr. CARLOS TINOCO OROZCO
Alcalde Municipal de Arjona _____

Dr. JUAN MEJIA LOPEZ
Alcalde Municipal de Clemencia _____

Dr. BORIS. DE J. LLAMAS F.
Alcalde Municipal de San Estanislao _____

Dr. EDUARD DE LA C. GONGORA
Alcalde Municipal de Santa Catalina _____

Dr. ADALBERTO ARROYO OROZCO
Alcalde Municipal de Santa Rosa Norte _____

Dr. BENJAMIN MARTINEZ NARVAEZ
Alcalde Municipal de Soplaviento _____

Dr. LUIS CAMPO MARTINEZ
Alcalde Municipal de Turbaco _____

Dr. PEDRO PEREZ MARRUGO
Alcalde Municipal de Turbana _____

Dr. GILBERTO AMAYA VASQUEZ
Alcalde Municipal de Villanueva _____

Dr. BENJAMIN LOPEZ ESCOBAR
Alcalde Municipal San Cristóbal X Antonio Guasaro Alcalde (E)

Secretario del Interior de San Cristóbal _____

GOBERNACION DE BOLIVAR
SECRETARIA DEL INTERIOR

REUNION COMITÉ DE SEGUIMIENTO ELECTORAL
FUERZA NAVAL DEL CARIBE
SEPTIEMBRE 3 DE 2003

DIPUTADOS ASAMBLEA DEPARTAMENTAL

Dra. COLOMBIA ADUEN BRAY	_____
Dra. ELISA BUSTILLO BARRAZA	_____
Dra. JUDITH FERRER MONTENEGRO	_____
Dr. LORENZO HODEG LLÓRENTE	_____
Dr. LIDIO GARCIA TURBAY	_____
Dr. WILLY SIMANCAS MENDOZA	_____
Dr. ANDRES RICAUTE ARMESTO	_____
Dr. JESUS A. PAYARES CASTILLO	_____
Dr. JORGE A. TAFUR DIAZ	_____
Dr. EVELIO MONTES TORRES	_____
Dr. JAVIER POSADA MEOLA	_____
Dr. RICHARD COBA VACA	_____
Dr. ALEJANDRO ARRAZOLA	_____
Dr. RAUL DOMINGUEZ	_____
Dr. CARLOS CABRALES	_____
Dr. PAULO SEXTO OYOLA	_____
Dr. CARLOS CABRALES	Carlos Cabrales.
Dr. RAUL VARGAS	_____

GOBERNACION DE BOLIVAR
SECRETARIA DEL INTERIOR

REUNION COMITÉ DE SEGUIMIENTO ELECTORAL
FUERZA NAVAL DEL CARIBE
SEPTIEMBRE 3 DE 2003

ASPIRANTES CONCEJO DISTRITAL DE CARTAGENA DE INDIAS

ASISTENCIA

NOMBRES	FIRMA
Leila Mosquera Famer	
Neptali Pacheco Trujillo	
ALEX BARRIOS ALMANZA	
Ismael Gonzalez A.	
Carlos A Valdeblanquez	
Manuel H. Melo Mendoza	
Rodolfo Santiago M.	
Manuel Rodolfo PALACIO A	

GOBERNACION DE BOLIVAR
SECRETARIA DEL INTERIOR

REUNION COMITÉ DE SEGUIMIENTO ELECTORAL
FUERZA NAVAL DEL CARIBE
SEPTIEMBRE 3 DE 2003

ASPIRANTES ASAMBLEA DEPARTAMENTAL

ASISTENCIA

NOMBRES	FIRMA
EDEN FLOREZ López	
ARCADIO ALMANSA IGLESIAS	
RITO ANTONIO ANGULO	
LUIS G. FUENTES P.	
JESUS ANTONIO CORREA OCAMPO	
FREDY E. TORRES. Z	
Esther Maria Jalilie !	

GOBERNACION DE BOLIVAR
SECRETARIA DEL INTERIOR

REUNION COMITÉ DE SEGUIMIENTO ELECTORAL
FUERZA NAVAL DEL CARIBE
SEPTIEMBRE 3 DE 2003

ASPIRANTES CONCEJO DISTRITAL DE CARTAGENA DE INDIAS

ASISTENCIA

NOMBRES	FIRMA
Blas Torres Martinez.	
Luther Larios	
Manuel Rodolfo Palacios	
Williams Contreras (Cedil).	
José Joaquin Posada	
Pedro Pérez Manrique	

GOBERNACION DE BOLIVAR
SECRETARIA DEL INTERIOR

REUNION COMITÉ DE SEGUIMIENTO ELECTORAL
FUERZA NAVAL DEL CARIBE
SEPTIEMBRE 3 DE 2003

ASPIRANTES CONCEJO DISTRITAL DE CARTAGENA DE INDIAS

ASISTENCIA

NOMBRES	FIRMA
William Contreras J. A. L.	
Hernando Amaris V.	Hernando Amaris V.
Luther Larios C.	
Mauricio Muskus C.	
Fernando Trucco P.	
Eduardo Ospino Fl.	

GOBERNACION DE BOLIVAR
SECRETARIA DEL INTERIOR

REUNION COMITÉ DE SEGUIMIENTO ELECTORAL
FUERZA NAVAL DEL CARIBE
SEPTIEMBRE 3 DE 2003

DIPUTADOS ASAMBLEA DEPARTAMENTAL

Dra. COLOMBIA ADUEN BRAY _____

Dra. ELISA BUSTILLO BARRAZA _____

Dra. JUDITH FERRER MONTENEGRO _____

Dr. LORENZO HODEG LLÓRENTE _____

Dr. LIDIO GARCIA TURBAY _____

Dr. WILLY SIMANCAS MENDOZA _____

Dr. ANDRES RICAUTE ARMESTO _____

Dr. JESUS A. PAYARES CASTILLO _____

Dr. JORGE A. TAFUR DIAZ _____

Dr. EVELIO MONTES TORRES _____

Dr. JAVIER POSADA MEOLA _____

Dr. RICHARD COBA VACA _____

Dr. ALEJANDRO ARRAZOLA _____

Dr. RAUL DOMINGUEZ _____

Dr. CARLOS CABRALES _____

Dr. PAULO SEXTO OYOLA _____

Dr. CARLOS CABRALES _____

Dr. RAUL VARGAS _____

GOBERNACION DE BOLIVAR
SECRETARIA DEL INTERIOR

REUNION COMITÉ DE SEGUIMIENTO ELECTORAL
FUERZA NAVAL DEL CARIBE
SEPTIEMBRE 3 DE 2003

ASPIRANTES A ALCALDIA DE CARTAGENA

ASITENCIA

Dr. ALBERTO BARBOZA SENIOR _____

Dr. JORGE QUINTANA SOSA _____

Dr. LUIS GILLERMO MARTINEZ FERNANDEZ _____

Dr. LUIS C. PEREZ NAVARRO _____

Dr. JAVIER N. BUSTILLO PERTUZ _____

Dra. LIZBETH TORRES GOMEZ _____

Dr. RICARDO SERGE PARDO _____

GOBERNACION DE BOLIVAR
SECRETARIA DEL INTERIOR

REUNION COMITÉ DE SEGUIMIENTO ELECTORAL
FUERZA NAVAL DEL CARIBE
SEPTIEMBRE 3 DE 2003

ASPIRANTES GOBERNAICON DE BOLIVAR

ASITENCIA

DR. LIBARDO SIMANCAS TORRES _____

Dr. ARMANDO VILLEGAS SENTENO _____

Dr. SENEN DE JESUS GONZALEZ VELEZ _____

Dr. LUIS E. GUTIERREZ GOMEZ _____

Dra. YAZMIN LOPEZ DE RINCON _____

Dra. ADELFA L. PINEDA CESPEDES _____

ALFONSO LOPEZ COSSIO _____

GOBERNACION DE BOLIVAR
SECRETARIA DEL INTERIOR

COMISION DE COORDINACION Y SEGUIMIENTO ELECTORAL Y CONSEJO DE SEGURIDAD DEPARTAMENTAL

(Octubre 9 de 2003)

En Cartagena de indias a los nueve (9) días del mes de octubre de dos mil tres (2003), se reunieron en el despacho del señor gobernador de Bolivar con el fin de llevar a cabo una reunión conjunta de la Comisión de Seguimiento Electoral y del Consejo de Seguridad del Departamento de Bolivar las siguientes personas:

Dr. Gustavo Lecompte Gómez	Gobernador de Bolivar (e)
Dra. Cira Velasquez Herazo	Coor. Unidad de Orden Público
Dra. Amada Ojeda Torregrosa	Procuradora Regional Bolivar
Cap. de Nav. José Leonidas Muñoz	Comandante I Brigada de I. M.
Cap. de Navío. Hernando Wills	Jefe del Estado Mayor Fuerza Naval
Mayor. Milton Varón Rubio	Segundo Comandante Batallón Nariño
Coronel. Jesús Gómez Méndez	Comandante Departamento de Policía Bolivar
Cap. de Frag. Benjamín Herrera	Fuerza Naval del Caribe
Cap. de Frag. Augusto Vidales Larrarte	Comandante Bafim 2
Cap. de Frag. Horacio Zea Z	Comandante Bafim 3
Dr. Romulo Betancourt G	Director Seccional Das Bolivar
Dr. Víctor J. Higuera Villanueva	Das Sucre
Dr. Walter Vega Vaquero	Fiscalía Seccional
Dr. Oscar Castellano Prada	Director CTI
Dr. Arturo Zea Solano	Defensor Regional del Pueblo
Dr. Fernando Mendoza Mendoza	Delegado Registrador Nacional
Dra. Margarita Petrochelli	Delegado Registrador Nacional
Dr. José Luis Rodríguez Linares	Asesor Especial de la Registradora Nacional.

Seguidamente se somete a consideración el siguiente orden del día, que fue aprobado por los asistentes:

ORDEN DEL DIA

TEMAS A TRATAR

- Situación de Orden Público
- Avances preparativos proceso electoral

1. Llamado a lista
2. Intervención del doctor Gustavo Lecompte Gómez, Gobernador de Bolivar (e)
3. Intervención de los señores Delegados del Registrador Nacional del Estado Civil
4. Intervención de las autoridades Militares, Policías y Seguridad
5. Intervención de las Autoridades de Investigación, Vigilancia y Defensoría Públicas
6. Proposiciones y Varios

Intervención del doctor Gustavo Lecompte Gómez, inicia su intervención diciendo que es necesario despejar las dudas si es que subsisten sobre el proceso electoral, en ese sentido es importante que la ciudadanía sepa cual es la situación de orden público, que conozcan que están dadas las garantías necesarias para que el debate transcurra libre de presiones e interferencias y que este se desarrolle dentro de los estándares de la democracia. Frente a ese punto después del reporte dado por las autoridades se conoce que el orden publico esta bajo control, lo ocurrido en el día de ayer en el municipio de Zambrano en la vereda Capaca donde dos niños cayeron en un campo minado fue doloroso, es un hecho aislado que en nada compromete la situación de orden público ni la realización del debate electoral.

En lo que respecto al punto dos del orden del día se debe tener claro la situación de orden público que pueda afectar los corregimientos de los municipios y que den base para el posible traslado de mesas a los cascos urbanos de acuerdo a las recomendaciones de las autoridades.

En el Sur de Bolivar; se han recibido quejas porque supuestamente algunos grupos vienen ejerciendo presiones para que se vote por tal o cual candidato, y la subversión viene haciendo proselitismo para que no se salga a votar. Se deben definir lo concerniente al traslado de mesas y en especial en el Sur de Bolivar, ya que no se tiene comunicación con la V Brigada del Ejército, sin embargo la policía y el Batallòn Nariño han hecho unas recomendaciones.

Intervención del doctor Fernando Mendoza Mendoza, Delegado de la Registradora Nacional, Comenta que hay algunas actividades pendientes por realizar de acuerdo al calendario electoral, el Sábado once (11) tendrá lugar la designación de jurados de votación de acuerdo con las Legislaciones Electoral Colombiana. El Domingo doce (12) en

el Centro de Procesamiento Primario de datos, se realizará el simulacro de elecciones de autoridades departamentales, municipales y diputados.

Invita a las autoridades para que den su punto de vista sobre las situaciones a corregir, el horario en que se llevará a cabo el simulacro es de 9:00 A.M. A 4:00 P.M, se evaluará el sistema de comunicaciones sobre todo por lo que tiene que ver con Colombia Telecomunicaciones, se han realizado capacitaciones con la Fuerza Naval, La Policia y DAS. En la otra semana se hará igualmente con los jurados, los escrutadores y claveros: En lo que tiene que ver con la convocatoria de escrutadores y claveros pide apoyo a la gobernación sobre todo por lo de transparencia. En Magangué se viene pidiendo presencia de Fuerza Pública en todo los corregimientos

Queda pendiente lo que tiene que ver con el traslado de mesas, le preocupa la situación de los municipios del Sur, ya que no se tienen contacto con la comandancia de la V y XI Brigada del Ejercito, esto ha dificultado la definición de la ubicación el traslado de mesas, con relación al tema tratado por el comandante de la II Brigada del Ejército referido a Achì, donde el alcalde y registrador dicen que solo hay necesidad de trasladar dos corregimientos a la cabecera y el **Mayor Varón**, siempre ha planteado en las reuniones el traslado de las mesas de 17 corregimientos. Insiste en que en la medida en que se cuente con seguridad la recomendación es no trasladar mesas

En el caso de Montecristo, la situación es contraria, la registradora pide que se trasladen a la cabecera las mesas y el alcalde dice que no.

Pinillos se recomienda el traslado de tres corregimientos Puerto López, La Unión La Rufina, es una solicitud formal del comandante de la Base Militar de Pinillos.

Casos de trashumancia El Consejo Nacional Electoral anuló las inscripciones de unas 5000 cédulas aproximadamente en 12 municipios del departamento y en el distrito de Cartagena de Indias, Córdoba, Mahates, Margarita, Regidor, San jacinto del Cauca, Santa catalina, Turbana, Zambrano Clemencia, Marialabaja, Cantagallo, Soplaviento, y Río Viejo firma que se hará llegar a la fiscalía copia de resolución

Intervención del Coronel José Leonidas Muñoz Comandante de la I Brigada de Infantería de Marina. En un esfuerzo interinstitcional se han capturado 117 bandidos, se han producido capturas importantes como la de jefe de la milicias del ERP, se han producido dos combates, 2 bandidos han sido abatidos, alias tirso y otro.

Se han desactivado cuatro campos minados, se incautó media tonelada de explosivos, se descrubrio un campo minado con 30 cargas en un área bastante amplia. Resalta con dolor el hecho sucedido en Capaca, Zambrano la situación de los niños uno resulto muerto el otro gravemente herido.

Se recibió una alerta temprana en San Cristóbal, se hizo claridad, sobre el tema tanto por parte de la I Brigada, como por parte de la Gobernación, se ha prestado apoyo a ISA y Electrocosta para reparar las torres dinamitadas.

En cuanto a las quejas recibidas por amenazas, estas han sido generalizadas por parte de los grupos armados, se conoce que un candidato a la alcaldía en El Carmen de Bolivar, ha sido amenazado informa que sus tropas entraron al Salado la comunidad esta satisfecha con la presencia de la I Brigada.

En lo que se refiere al traslado de mesas eso quedo claro y definido en reunión anterior el esquema de seguridad diseñado sigue adelante.

El Mayor Milton Varón Rubio, Segundo Comandante del Batallòn Nariño informa que su institución viene desarrollando operaciones ofensivas en Tiquisio y Montecristo con el fin de garantizar la seguridad y que todos los grupos que delinquen en la región se replieguen a sus áreas estratégicas, desafortunadamente, se perdió un soldado que cayo en un campo minado, se dio de baja un bandolero. El comandante del Batallòn ha adoptado el esquema táctico, reitera que su institución está presente en Magangué, tendrá presencia en Coyongal y La Ventura.

ACHI: es un municipio complejo en Santa Lucia hubo alteraraciòn en las elecciones pasadas se quemó una mesa de votación, se recomienda el traslado de las mesas de 17 corregimientos a la cabecera, solo podrán cubrir cuatro corregimientos, se desarrollan operaciones importantes entre Montecristo y Tiquisio, estas operaciones han dado buen resultado pero no se puede descartar que estos grupos pretendan atentar contra el proceso. En Montecristo, la situación de orden público esta bajo control hay combates por la vìa de El Dorado.

En Pinillos recomienda trasladar las mesas de Puerto López, Pueblo Nuevo y la Unión, y dejar las mesas del resto de corregimientos, en la parte Norte de la jurisdicción Cicuco , Talaigua, Magangué, Mompox no hay problemas de orden publico.

EL doctor Gustavo Lecompte Gómez- Gobernador de Bolivar (e), Manifiesta que sigue siendo preocupante la situación del Sur de Bolivar, por su geografía por la distancia por los actores que se mueven allá se debe precisar la situación.

En reunión pasada se había pensado trasladar las mesas de los corregimientos a la cabeceras municipales, pero analizada la situación en Mompox hay tranquilidad en principio no existe la necesidad de traslado no hay registro historial ni reportes de orden público, subsiste la situación de seguridad y tranquilidad en cuanto al resto del departamento sigue manteniendo inquietudes, el Mayor Varón lo ha confirmado, se siguen recibiendo denuncias anomimas como la que se les entrego en fotocopia, eso preocupa por que puede que no se presenten situaciones también puede presentarse el hecho que la gente intimidada no pueda votar y que las fuerzas oscuras lograron su cometido, queda pendiente por definir el Sur de Bolivar, subsiste la situación de miedo en puntos localizados se debe estar alerta, en cuanto a las medidas adicionales a implementar en aquellos corregimiento en donde no haya presencia física, no solo se .debe evaluar costos beneficios frente al riesgo y responsabilidad que eso implica, por dar mayor comodidad a un electorado se puede poner en riesgo la comunidad y el proceso.

El doctor Fernando Mendoza Mendoza, Delegado del Registrador Nacional, dice que en caso que se presente un hecho que atente contra el proceso en cualquier municipio, esto no afecta el resultado electoral del mismo, solo del sitio donde ocurrió; porque puede suceder que los jurados o los electores pueden resultar presionados. En esos corregimientos donde no haya presencia policiva ni militar es necesario analizar el comportamiento histórico, para tomar la decisión bien sea del traslado o que las mesas queden en esos sitios sin que la seguridad se vea comprometida. Por razones de transporte por que de nada vale que se instalen el mayor número de mesas de votación si el elector no puede ejercer libremente su derecho al sufragio.

El doctor Romulo Betancourt Garrido Director DAS Bolivar, informa que el análisis de la situación de orden público hecha por el comandante de la I brigada es claro. Le Preocupa el traslado del material y los resultados electorales antes y después por lo que tiene que ver con su custodia. Se han conocido rumores sobre este particular los rumores no sirven para iniciar procesos pero si son indicio para tomar medidas de prevención.

El doctor Fernando Mendoza Mendoza, informa que se entregará a los municipios zonificados los Kit de mesas de votación y los documentos electorales en Cartagena, Magangué, El Carmen de Bolivar, Turbaco estos serán entregados directamente en las mesas de votación.

En el resto de municipios los kit serán entregados directamente a la Registraduría Municipal para que lo entreguen en la cabecera y sean enviados a los corregimientos, insiste que le preocupa Magangué, ya que en el registro histórico esta localidad ha tenido problemas con los resultados electorales en ocasiones anteriores.

El representante de la Fiscalía, Informa que normalmente a nivel institucional se reúnen para coordinar la vigilancia del proceso electoral y judicializar, los casos a que haya lugar informa que la Comisión Interinstitucional se reúne los días miércoles a las 4 de la tarde.

El doctor Arturo Zea Solano - Defensor del Pueblo Regional Bolivar Sintetiza: tres actores atacan los procesos electorales, la guerrilla que incinera los documentos con el fin de causar impacto, las AUC, que están presionando tratando de incidir para que voten por determinado candidato y el tercer actor es la compraventa de votos.

En Bolivar y la Costa seremos el hazme reír sí se llega a presentar fraude electoral, este esta tocando puertas y sí no se toman medidas haremos el ridículo ante el país, Se debe estar atentos, se debe reforzar la seguridad en los corregimientos de Magangué si bien no hay quema de votos, que sucede es que los corruptos compran el delegado y los jurados. No se necesitan grandes unidades sino presencia eficaz que pueda servir de medio disuasivo, debemos tener capacidad reactiva frente a la ciudadanía que denuncia para que esta reciba una respuesta eficaz.

Doctor Víctor Julio Higuera Villanueva Director del DAS Sucre, Manifiesta que en el municipio de Magangué los candidatos Arana y López permanecen en constantes enfrentamientos verbales se ha recomendado en las reuniones mesura y prudencia para evitar la polarización.

Tras de mirar los antecedentes, en orden público en su jurisdicción todo esta normal, se ha dado protección y capacitación a candidatos en los 17 municipios de su jurisdicción.

El doctor Gustavo Lecompte Gómez, manifiesta que en cuanto a las intervenciones de los candidatos y la publicidad este aspecto esta reglamentado en el decreto No. 1616 a los medios le cabe responsabilidad, independientemente de que la publicidad sea financiada por cualquier candidato en ese sentido no pueden denigrar ni desinformar a la comunidad.

En cuanto a la situación de orden público podemos decirle que están dadas las garantías para un proceso electoral con transparencia sin limitación habrán puntos aislados que en nada comprometen el desarrollo del mismo, la comunidad puede ir a votar de manera pacifica.

TRASLADO DE MESAS:

Las decisiones adoptas se mantienen no hay cambios ni variaciones para las recomendaciones del Batallòn Nariño y la I Brigada.

El doctor Fernando Mendoza Mendoza, Debido a la ausencia de delegados de la V y XI Brigada queda pendiente definir lo que corresponde al sur de Bolivar, sobre este particular el comandante del Departamento de Policía Bolivar informa que él asistirá a una reunión en Bucaramanga para coordinar con el comandante de la V Brigada todo lo relacionado con esta zona

PROPOSICIONES Y VARIOS:

El comandante de la I Brigada informa que ha solicitado a el señor Gobernador se adopten medidas para restringir el tráfico vehícular y de personas por las carreteras nacionales que atraviesan el departamento y las vías intermunicipales e intercorregimentales, con el fin de evitar situaciones de orden público. A esta propuesta el señor gobernador responde que esta solicitud será estudiada y en los próximos días se estará expidiendo el decreto respectivo.

Doctora Amada Ojeda Torregrosa Procuradora Regional Bolivar, A la procuraduría le preocupa el orden público en Bolivar y sucre, pero además al señor procurador le preocupa la transparencia por los antecedentes que se han dado no solo en Cartagena sino en los municipios. El procurador ha enviado directivas, cartillas alusivas al referendo y los comicios electorales de 2003, su entidad cuenta con una línea denuncias y correo electrónico, pide al registrador la lista de mesas de votación para distribuir el personal en los puestos de votación.

Las quejas sobre intervención en política tienen tramite preferencial no se han recibido denuncias concretas, salvo el caso de un alcalde.

No siendo otro el objeto de la presente se da por terminada.

Y en constancia se firma como aparece

GUSTAVO LECOMPTE GOMEZ
Gobernador de Bolivar (e)

GOBERNACION DE BOLIVAR
SECRETARIA DEL INTERIOR

REUNIÓN DE LA COMISIÓN DE COORDINACIÓN Y SEGUIMIENTO ELECTORAL Y DEL CONSEJO DE SEGURIDAD DEPARTAMENTAL
FECHA : 9 DE OCTUBRE DE 2003
HORA 9:00 A.M.

ASISTENCIA

Dr. GUSTAVO LECOMPTE GOMEZ
Gobernador de Bolivar (e).

Dra. CIRA VELASQUEZ HERAZO
Coordinadora Unidad de Orden Público

Contral. GUILLERMO E BARRERA HURTADO
Comandante Fuerza Naval del Caribe.

Brigadier General JAIRO D. PINEDA NIÑO
Comandante V Brigada del Ejército

Brigadier General. OSCAR E. GONZALEZ PEÑA
Comandante XI Brigada del Ejército

Brigadier General. GILBERTO ROCHA AYALA
Comandante II Brigada del Ejército

Coronel. LUIS FERNANDO ROJAS ESPINOSA
Comandante Batallón Nariño

Coronel JESUS ANTONIO GOMEZ MENDEZ
Comandante Departamento de Policía Bolívar

Teniente Coronel. CARLOS H. SERNA
Comandante Batallón Fluvial N° 30

Coronel JOSE LEONIDAS MUÑOZ
Comandante I Brigada de Infantería de Marina

Cap. de Fragata AUGUSTO VIDALES LARRARTE
Comandante Batallón Policía Naval Militar No. 2

Cap. de Fragata HORACIO ZEA ZULUAGA
Comandante Bafim No. 3

7423
8

GOBERNACION DE BOLIVAR
SECRETARIA DEL INTERIOR

REUNIÓN DE LA COMISIÓN DE COORDINACIÓN Y SEGUIMIENTO ELECTORAL Y DEL CONSEJO DE SEGURIDAD DEPARTAMENTAL
FECHA : 9 DE OCTUBRE DE 2003
HORA 9:00 A.M.

ASISTENCIA

Dr. ROMULO BATANCOURT GARRIDO
Director Seccional DAS Bolivar.

Dr. VICTOR JULIO HIGUERA VILLANUEVA
Director Seccional DAS Sucre

Dr. JAIME CUESTA RIPOLL
Director Seccional de Fiscalías

Dr. OSCAR CASTELLANO PRADA
Director CTI

Dra. AMADA OJEDA TORREGROSA
Procuradora Regional Bolivar

Dra. GALA DE LA VEGA SERNA
Procuradora Provincial

Dr. ARTURO ZEA SOLANO
Defensor del Pueblo Regional Bolivar

Dr. FERNANDO MENDOZA MENDOZA
Delegado del Registrador Nacional

Dra. MARGARITA PETROCHELLI LAZARO
Delegada del Registrador Nacional

José Luis Rodriguez Linares
Asesor Especial Registraduría del

TC. Benjamin Herrera Niño
Oficial Operaciones

GOBERNACION DE BOLIVAR
SECRETARIA DEL INTERIOR

REUNION COMISION DE SEGUIMIENTO ELECTORAL Y CONSEJO DE SEGURIDAD DEPARTAMENTAL

En Cartagena de indias a los dieciséis (16) días del mes de octubre de dos mil tres (2003), se reunieron en el despacho del señor gobernador de Bolivar con el fin de llevar a cabo una reunión conjunta de la Comisión de Seguimiento Electoral y del Consejo de Seguridad del Departamento de Bolivar las siguientes personas:

Dr. Gustavo Lecompte Gómez	Gobernador de Bolivar (e)
Cap. de Navío. Hernando Wills	Jefe del Estado Mayor Fuerza Naval
Mayor. Milton Varón Rubio	Segundo Comandante Batallón Nariño
Coronel. Jesús Gómez Méndez	Comandante Departamento de Policía Bolivar
Cap. de Frag. Benjamín Herrera	fuerza Naval del Caribe
Cap. de Frag. Augusto Vidales Larrarte	Comandante Bafim 2
Dr. Luis Cardona	Das Bolivar
Dr. Victor J. Higuera Villanueva	Das Sucre
Dr. Jaime Cuesta Ripoll	Director Seccional de Fiscalias
Dr. Oscar Castellano Prada	Director CTI
Dr. Arturo Zea Solano	Defensor Regional del Pueblo
Dr. Fernando Mendoza Mendoza	Delegado Registrador Nacional
Dr. José A. López Vasquez	Delegado Registrador Nacional

Se somete a consideración y es aprobado el siguiente orden del día

TAMAS A TRATAR:

- Situación de Orden Público
- Avances preparativos proceso electoral

ORDEN DEL DIA

1. Llamado a lista
2. Intervención del doctor Gustavo Lecompte Gómez, Gobernador de Bolivar (e).
3. Intervención de los señores Delegados Departamentales del Registrador Nacional del Estado Civil
4. Intervención de las Autoridades Militares, Policivas y Seguridad
5. Intervención de las Autoridades de Investigación, Vigilancia y Defensoría Publica
6. Proposiciones y varios

Intervención del doctor Gustavo Lecompte Gómez, Gobernador de Bolivar (e)- Inicia su intervención agradeciendo a todas las autoridades su asistencia a la reunión, expresa que a través de la prensa todos se habrán enterado de su renuncia al cargo de gobernador, es una decisión dolorosa por el compromiso con que asumió el cargo y al fin se termina cogiendo cariño a la actividad, es una decisión que meditó mucho sobre todo teniendo en cuenta que se está a escasos días de las elecciones para escoger gobernador, alcaldes, y concejales, pero las circunstancias le hacen imposible seguir cumpliendo con la labor, por su talante y estilo pese a todo se debe continuar con la responsabilidad de sacar adelante el debate electoral que se avecina. Está a la espera del señor presidente encargue su remplazo a que el señor gobernador se reintegre como es el deseo e todos por el bien del departamento, pese a ello esta reunión debe adelantarse dentro de esas circustancias.

Intervención de las Autoridades Electorales- El doctor Fernando Mendoza Mendoza, hace la presentación del doctor José Alfonso López Vasquez, quien ha sido designado por la señora Registradora Nacional para acompañarlo en este debate, él viene trasladado del departamento del Cesar, pide a los asistentes toda la colaboración para con este funcionario.

Informa que el día martes pasado en el Carmen de Bolivar, se tomó la decisión de trasladar a el registrador de esa localidad a otro sitio y encargar a un funcionario de carrera de su institución inicialmente esta decisión no fue del agrado de parte de algunos de los sectores políticos, pero gracias al apoyo brindado por la policía nacional y al delegado de la fiscalia y la intervención del delegado, se pudo superar la situación. La situación que se presentó que 4 ó 5 candidatos se encadenaron y no permitían la entrada al público, pero se mantuvo diálogo con ellos, se les explico que la Registraduría es una entidad de puertas abiertas. que los traslados obedecian a la politica de transparencia de la Registraduría, que se han recibido algunas quejas y denuncias y por muy y irrelevantes que estas sean saludable descartar cualquier suspicacia y por eso los traslados. se superó la situación gracias a Dios se solicitó a la Registraduría Nacional el envío de un funcionario nacional para que obre como gobernador Ad- Hoc.

Se han dado algunos traslados de registradores, en San Juan, Achí, Mompox, Santa Catalina, en El Carmen de Bolivar, el de Magangué renunció, en su reemplazo se le asignaron funciones de registrador a la secretaría general de la delegación departamental, es una funcionaria de experiencia y de confianza, además viene a reforzarla un funcionario nacional.

Traslados de Registradores: Arroyo Hondo a San jacinto, Talaigua a Arjona, Rio Viejo a Cicuco, Margarita a Regidor y una de las Registradoras de Cartagena la doctora Ingrid Fortich a Barranquilla, en apoyo a esta ciudad.

El día 17 de este mes se adelantará una campaña de capacitación con los escrutadores y claveros designados por el tribunal del distrito judicial de Cartagena, esta capacitación es importante deben asistir los funcionarios delegados por el tribunal, le preocupa la asistencia porque en oportunidades pasadas se convocó y la asistencia fue poca llama la atención sobre las situaciones en que se vieron involucrados miembros de las comisiones escrutadoras, por el afán y el desespero por terminar la labor, eso ha dado lugar a errores que se reflejan en el procedimiento electoral. Por eso se solicitó con anticipación al Tribunal Superior que designará funcionarios con alto perfil.

Informa que recibieron una queja del aspirante a la gobernación doctor Alfonso López Cossio, quien manifiesta el porque de los traslados de mesas en el municipio de Córdoba a la cabecera, en el escrito presentado por este aspirante compromete la gestión del gobernador encargado, el doctor Mendoza comenta que a todos les consta que el que menos tiene que ver con los traslados es el gobernador, que la Registraduría también está comprometida con que el proceso se adelante en todo el territorio, pero la solicitud de traslado de mesas es de la fuerza pública, las autoridades militares que han sugerido esta recomendación por razones de orden público.

Se llevó a cabo un simulacro, la preocupación que asiste a las autoridades electorales es lo relacionado con las comunicaciones, en el último simulacro este componente no funcionó en 15 municipios, como Carmen de Bolivar, lo poco que se hizo fue gracias al Plan de Contingencia diseñado con el apoyo de la Policia y la Fuerza Naval. Se citó al gerente de Colombia- telecomunicaciones, de dio aviso y se comprometió a la gerencia nacional, este servicio es vital para el proceso, los resultados y sirve para detectar la ocurrencia de situaciones anómalas.

Intervención del doctor José Alfonso López Vasquez ÷ Manifiesta que viene del departamento del Cesar, está vinculado con la Registraduría hace más de cinco años (5), le sorprende que en algunos municipios del departamento todavía se operen las comunicaciones para elecciones por SAI, sobre todo lo referido a transmisión de datos. Esto obliga a tener planes alternos con la policía y las autoridades militares; se escogieron por sorteo 19.844 jurados de votación, son personas particulares a la delegación, son funcionarios externos, pero cualquier error que ellos cometan se imputa a la Registraduría. Las elecciones territoriales suscitan gran interés, esto hace que el debate se vuelva más complejo para la Registraduria ya que los registradores están en el ojo del huracán, de ahí las medidas que se han adoptado para generar confianza y transparencia, espera que no se presenten problemas de orden público y agradece el apoyo que le han brindado todas alas autoridades de Bolivar.

Intervención Autoridades Policivas, Militares y de Seguridad

Coronel Jesús Gómez Méndez- Expresa su saludo al nuevo delegado de la Registraduría, lamenta la decisión del doctor Gustavo Lecompte Gómez, como gobernador encargado del departamento, cuenta con el respaldo y apoyo de su institución, espera que los motivos que generaron esta decisión se subsanen por el bien y seguridad de todos los bolivarenses. Los preparativos que se han realizado y el seguimiento a evaluación de los mismos han agregado valor al proceso electoral. El tema que preocupa es el de comunicaciones con su institución funcionó y que se puede apoyar a la delegación en los 45 municipios.

Recibió una comunicación del alcalde del municipio de Córdoba quien manifiesta su inquietud por el traslado de algunas mesas ya que esto representa un gasto adicional para su municipio.

Con relación al sur de Bolivar, en las reuniones de coordinación adelantada con la V Brigada del Ejército se acordó el siguiente cubrimiento:

Santa Rosa Sur: Habrá presencia física de Policía y Ejército, 10 corregimientos no tendrán presencia de fuerza pública, el ejército recomendó el traslado de las mesas de esos 10 corregimientos, por razones de orden público, la Registraduría Municipal se opone, se debe tomar una decisión en este sentido, el fin de semana pasado el Presidente de la República visitó ese municipio la comunidad pidió al doctor Uribe la presencia militar en zona rural, esa inquietud se la llevó el comandante de la V Brigada del Ejército y el Alto Mando militar para tomar una pronta decisión.

Simití: Cubrimiento de policía y ejército en la cabecera, sin presencia de fuerza pública 13 corregimientos, San Blas tendrá tropas de la V Brigada del ejército. Informa que la policía tiene un puesto de control en Cerro de Burgo, pero est se retira temporalmente para reforzar la cabecera. **No hay traslado de mesas.**

San Pablo: Cuenta con servicio policivo y militar en la cabecera. **Se ha recomendado el trasladado** de las mesas de 6 corregimientos: Vallecito, El Socorro, Cañaveral, Cerro Azul, Santo Domingo y Villanueva a la cabecera municipal.

Se decidió no trasladar las mesas aún sin servicio de policía en 4 corregimientos: Agua Sucia, Canaletal, El Carmen Pozo Azul.

Morales: Cubrimiento del ejército y la policía en la cabecera.

Cubrimiento físico del Ejércitos en 2 corregimientos: Micoahumado, La Esmeralda. Cubrimiento de área por patrulla móvil: 3 corregimientos, El Dique, La Palma, Las Pailas. Sin presencia del ejército 4 corregimientos :Boca la Honda, Bodega Central, Corcobado y Paredes de Ororia, **no hay traslados de mesas.**

Arenal: Cubrimiento de policía y ejército en la cabecera. Los corregimientos de Buenavista, Carnizala y San Rafael tendrán apoyo del ejército, **no hay traslados de mesas.** .

Cantagallo: Presencia policia y ejército cabecera, **fue trasladada a la cabecera la mesa del corregimiento de San Lorenzo.**

Regidor: Contará con servicio de policía la cabecera, el corregimiento Santa Teresa tendrá ejército **no hay traslados de mesas.**

Río Viejo: tendrá presencia de policía y ejército en la cabecera, no tendrán cubrimiento 11 corregimientos, la V Brigada recomienda el traslado de mesas de estos corregimientos a la cabecera. Este municipio es considerado de alto riesgo por orden público.

San Jacinto del Cauca: Contará con tropas de la XI Brigada del Ejército en la cabecera, las recomendaciones del comandante de la brigada es **trasladar las mesas de 9 corregimientos a la cabecera.**

Intervención del mayor Milton Varón Rubio, Segundo Comandante Batallón Nariño
En lo que tiene que ver con el municipio de Montecristo se han detectado algunos planes por parte de la subversión pero los dispositivos que se vienen adelantando le ha mermado su capacidad ofensiva y de organización. Las tropas del Batallón Nariño, realizan operaciones en Casa de Barro en esa zona, están operando las FARC, fueron abatidos 2 subversivos, ayer en una región denominada las curvas se abatió un miembro del ERP, que hacía proselitismo político, en contra del proceso electoral, también fueron abatidos 3 guerrilleros del ERP dorado eso nos da una muestra del riesgo que se cierne sobre las elecciones en los sitios que no alcanzan a ser cubiertos por la fuerza publica, por eso es necesario tener en cuenta las recomendaciones que se han formulado.

En lo que tiene que ver con el traslado de mesas en Tiquisio se cubrirá físicamente la cabecera y los corregimientos de la Ventura, Puerto Coca, Tiquisio Nuevo, no estarán cubiertos 8 **corregimientos, los cuales se sugieren trasladarlos a la cabecera municipal.**

Altos del Rosario, estará cubierto el corregimiento de La Pacha, sin cubrimiento 3 corregimientos, **no hay traslados de mesas.**

Achí contarán con presencia física los corregimientos de : Guacamayo, Playalta, Puerto Venecia y Tres Cruces, sin cubrimiento 17 corregimientos, los cuales se sugiere el traslado de mesas a la cabecera municipal.

Magangué tendrán presencia física en el corregimiento de Coyongal y La Ventura

El Peñón, tendrá cubrimiento el corregimiento de Peñoncito., sin cubrimiento 5 corregimientos, **no hay traslados de mesas,** también se contará con tropas en la cabecera del municipio de Cicuco y los soldados campesinos que operan en las cabeceras de los municipios de Achí, Puerto Rico y Pinillos

Intervención del Doctor Gustavo Lecompte Gómez – Le preocupa que los candidatos a la gobernación tengan visiones distintas en cuanto al traslado de mesas, siempre habrá razones de inconformidad, a pesar de eso la idea es que las mesas estén en sus sitios originales, los organismos hacen esfuerzos para garantizar la seguridad física y de área, y facilitar el ejercicio democrático, lo que es igual para todos no es ventaja para nadie. No se puede ir contra hechos que indican que se pueden presentar este tipo de interferencias por parte de los grupos al margen de la ley que pueden atentar contra el proceso electoral. Ha sido siempre la voluntad de todos los integrantes de la Comisión de Seguimiento Electoral que el mayor número de mesas que se puedan mantener en sus sitios de mantengan, se han coordinado ingentes esfuerzos con todos los organismos de fuerza pública para garantizar la seguridad en todos los sitios.

Donde existe una alta posibilidad que ocurran hechos que puedan perturbar el proceso electoral y que coloque en riesgo a los electores, entonces tenemos que analizar este tema, con la ayuda de los expertos en la materia, las autoridades policivas, militares, de seguridad, y las autoridades de investigación; se debe ser prudente por tratar de complacer a un alcalde y/o candidato, no se puede dañar el esfuerzo de todos, hay que aclarar que cuando se traslada una mesa no quiere decir que no van a haber elecciones, sino que los electores deben trasladarse.

Intervención del Capitán de Navío Hernando Wills, Jefe del Estado Mayor de la Fuerza Naval del Caribe – Quien expresa el caso del municipio de Córdoba se ha analizado detalladamente en lo que respecta a su institución, existe concenso de las instituciones, le preocupa que faltando 10 días se reciba este requerimiento nuevamente del alcalde, sin embargo están en condiciones de revisar detalladamente. Las recomendaciones sugeridas son instrucciones del comandante de la I Brigada, quien ya tiene previsto el esquema de seguridad y hasta la fecha las sugerencias por parte de la I Brigada de Infantería de Marina para el traslado de mesas en su jurisdicción es la siguiente:

Córdoba tendrán presencia de la Infantería Marina, la cabecera municipal y los corregimiento de San Andrés, Martín Alonso y Tacamocho, por lo que se sugiere trasladar las mesas de Guaimaral a San Andrés, las de Sincelejito y Pueblo Nuevo a Martín Alonso, en el resto de la jurisdicción de la I Brigada.

El Carmen de Bolivar, se recomienda el traslado de las mesas de 14 corregimientos a la cabecera municipal y dejar las que corresponden a los corregimientos de El Hobo, El Salado, San Carlos y Raizal Santa Lucía, los cuales contarán con presencia de tropas.

San Jacinto, el traslado de las mesas de los 7 corregimientos a la cabecera municipal.

Turbaco, trasladar la mesa del corregimiento de San José del Chiquito a la cabecera municipal teniendo en cuenta la solicitud del alcalde de Turbaco para que la mesa de votación sea trasladada a la cabecera municipal porque gran parte de la población de este corregimiento se encuentra desplazada a la cabecera de Turbaco.

San Juan Nepomuceno, el traslado de las mesas de los corregimientos de Corralito, La Haya, San José del peñón a la cabecera municipal, tendrán presencia de tropas los corregimientos de San Pedro Consolado y San Cayetano, en lo que respecta a San Agustín no contará con fuerza pública pero la mesa de este corregimiento funcionara en ese mismo sitio.

Marialabaja, en este municipio se recomienda el traslado de la mesa del corregimiento de Mampujan a la cabecera municipal.

Zambrano, en este municipio se recomienda trasladar la mesa de su único corregimiento, Jesús del Río a la cabecera municipal

Los integrantes de la mesa de trabajo de la Comisión de Seguimiento Electoral del departamento de Bolivar, atendiendo las sugerencias y recomendaciones de las autoridades policivas, militares de seguridad, responsables del orden público en el departamento imparten su visto bueno para el traslado de las mesas de votación de los corregimientos de los diferentes municipios identificados en el acta de esta reunión a las cabeceras de los mismos.

Intervención del representante del DAS de Sucre - Informa que su institución tiene previsto el dispositivo de seguridad, en los últimos días no se han recibido quejas ni denuncias. Su entidad tiene conocimiento que los alcaldes de san Jacinto del Cauca y Córdoba, fueron suspendidos por la Procuraduría.

Intervención del doctor Jaime Cuesta Ripoll, Director Seccional de Fiscalía- Su entidad cuenta con 46 fiscalías locales, pero tiene una limitación, no tiene posibilidad de movilidad, las quejas deben ser presentadas en cada una de las sedes de la fiscalía en los municipios del departamento. Solicita a las otras instituciones como la policía y el DAS que cuentan con medio de transporte apoyar a sus unidades en Magangué, Mompox, El Carmen, con el fin de armonizar las actividades y poder operar en unidades móviles, a esta solicitud el coronel Jesús A. Gómez Méndez responde afirmativamente a esta solicitud.

Sobre este particular se han impartido instrucciones precisas a los registradores, en Cartagena, se hizo el sorteo computarizado en presencia de las entidades de control, se determinó que todos los jurados deben estar en el censo electoral del respectivo municipio. En Cartagena tocó sacar más de 100 jurados que no estaban en el censo. Hubo necesidad de levantar un acta porque en la mayoría de los municipios no se pudo implementar el ejercicio de conformar la lista de jurados por área aliatoria.

Los escrutadores y claveros son nombrados por el Tribunal Superior, se instó para que designarán funcionarios de alto nivel. La reunión que se desarrollará mañana es determinante con los escrutadores y claveros.

Con relación al traslado de la doctora Ingrid fue designada la doctora Patricia Jiménez Maza funcionaria de carrera, a la que se estará apoyando y respaldando.

Intervención del doctor Gustavo Lecompte Gómez – Lo que sucede con la doctora Ingrid nos debe llenar de confianza, ella ha ido designada como prenda de garantía, igual que las personas que vienen delegadas de otro lugar del país porque tienen las mismas calidades.

Con relación a la pregunta de los hechos denunciados en san Cristóbal, por parte del Defensor del Pueblo en relación con las presiones que ejercieron algunos grupos, el representante del Das informa que se adelanta las labores de inteligencia. El doctor Jaime Cuesta comenta que su entidad adelanta la investigación sobre este particular.

Finalmente el doctor Lecompte agradece a todas las autoridades el apoyo y colaboración que le brindaron en su gestión al frente de la Secretaria del Interior y de la Gobernación, espera poder servir al país y a todos desde sus actividades privadas.

No siendo otro el objeto de la presente se termina y firma como aparece.

GUSTAVO LECOMPTE GOMEZ
Gobernador de Bolivar (e).

GOBERNACION DE BOLIVAR
SECRETARIA DEL INTERIOR

REUNIÓN DE LA COMISIÓN DE COORDINACIÓN Y SEGUIMIENTO ELECTORAL Y DEL CONSEJO DE SEGURIDAD DEPARTAMENTAL
FECHA : 16 DE OCTUBRE DE 2003
HORA 10:00 A.M.

TAMAS A TRATAR:

- Situación de Orden Público
- Avances preparativos proceso electoral

ORDEN DEL DIA

1. Llamado a lista
2. Intervención del doctor Gustavo Lecompte Gómez, Gobernador de Bolivar (e).
3. Intervención de los señores Delegados Departamentales del Registrador Nacional del Estado Civil
4. Intervención de las Autoridades Militares, Policivas y Seguridad
5. Intervención de las Autoridades de Investigación. Vigilancia y Defensoría Publica
6. Proposiciones y varios

1432

GOBERNACION DE BOLIVAR
SECRETARIA DEL INTERIOR

REUNIÓN DE LA COMISIÓN DE COORDINACIÓN Y SEGUIMIENTO ELECTORAL Y DEL CONSEJO DE SEGURIDAD DEPARTAMENTAL
FECHA : 16 DE OCTUBRE DE 2003
HORA 10:00 A.M.

ASISTENCIA

Dr. GUSTAVO LECOMPTE GOMEZ
Gobernador de Bolivar (e).

Dra. CIRA VELASQUEZ HERAZO
Coordinadora Unidad de Orden Público

Dr. CARLOS DIAZ REDONDO
Alcalde Distrital de Cartagena de Indias

Dr. CLIMACO SILVA
Secretario de Gobierno Distrital

Contral. GUILLERMO E BARRERA HURTADO
Comandante Fuerza Naval del Caribe. CN Hernando Wills V Jefe Estado Mayor F.N.C.

Brigadier General JAIRO D. PINEDA NIÑO
Comandante V Brigada del Ejército

Brigadier General. OSCAR E. GONZALEZ PEÑA
Comandante XI Brigada del Ejército

Brigadier General. GILBERTO ROCHA AYALA
Comandante II Brigada del Ejército

Coronel. LUIS FERNANDO ROJAS ESPINOSA
Comandante Batallón Nariño

Coronel JESUS ANTONIO GOMEZ MENDEZ
Comandante Departamento de Policía Bolívar

Teniente Coronel. CARLOS H. SERNA
Comandante Batallón Fluvial N° 30

Coronel JOSE LEONIDAS MUÑOZ
Comandante I Brigada de Infantería de Marina

CF Benjamin Herrera Nuñez

GOBERNACION DE BOLIVAR
SECRETARIA DEL INTERIOR

REUNIÓN DE LA COMISIÓN DE COORDINACIÓN Y SEGUIMIENTO ELECTORAL Y DEL CONSEJO DE SEGURIDAD DEPARTAMENTAL
FECHA : 16 DE OCTUBRE DE 2003
HORA 10:00 A.M.

ASISTENCIA

Cap. de Fragata. AUGUSTO VIDALES LARRARTE
Comandante Batallón Policía Naval Militar No. 2

Cap. de Fragata HORACIO ZEA ZULUAGA
Comandante Bafim No. 3

Dr. ROMULO BATANCOURT GARRIDO
Director Seccional DAS Bolivar.

Dr. VICTOR JULIO HIGUERA VILLANUEVA
Director Seccional DAS Sucre

Dr. JAIME CUESTA RIPOLL
Director Seccional de Fiscalías

Dr. OSCAR CASTELLANO PRADA
Director CTI

Dra. AMADA OJEDA TORREGROSA
Procuradora Regional Bolivar

Dra. GALA DE LA VEGA SERNA
Procuradora Provincial

Dr. ARTURO ZEA SOLANO
Defensor del Pueblo Regional Bolivar

Dr. FERNANDO MENDOZA MENDOZA
Delegado del Registrador Nacional

Dra. JOSE ALFONSO LOPEZ VASQUEZ
Delegada del Registrador Nacional

Dr. JOSE LUIS RODRIGUEZ LINARES
Asesor Especial de la Registraduría Nacional

ACTA DE REUNION CONSEJO DE SEGURIDAD DEPARTAMENTAL
Enero 22 DE 2004m
Municipio de El Carmen de Bolívar

En el municipio de El Carmen de Bolívar, a los Veintidós días del mes de Enero del año 2004, se llevó a cabo una reunión del Consejo de Seguridad Departamental con el fin de analizar la situación de Seguridad y orden público de los municipios de los Montes de María las siguientes personas:

Libardo Simancas Torres, Gobernador de Bolívar, Ildefonso Baldiris Silva, Secretario del Interior, Vicealmirante Guillermo Barrera Hurtado Comandante Fuerza Naval del Caribe, Cr. José David Guzmán – comandante Departamento PolicíaBolívar, Capitán de Fragata Horacio Zea Solano – comandante Bafim 3, Dr. Ugel Raül López Tom - DAS Bolívar, Dr. Oscar Castellano Prada – Director CTI, Dr. Arturo Zea Solano – Defensor del Pueblo, Dr. Candelario Paniza – Procurador Provincial El Carmen de Bolívar, Dr. Amaury Julio Pérez – secretario de planeación, Dr. Horacio Cárcamo – Secretario de Educación, Dr. Nicolás Chedraui – Secretario de Salud, Dr. Yuris Bayter – Alcalde Barranco de Loba, Dr. Pedro ÁlvarezBlanco – Secretario Agua Potable. Dr. Ramiro Pereira – Secretario Agricultura.Dra. Cira Velásquez Herazo – Coordinadora de Orden Público – Gobernación, Dr. Amer Bayuelo – Alcalde El Carmen de Bolívar, Guillermo González Guardo – Alcalde San Jacinto, Jorge Fernando Barrios Guzmán – Alcalde San Juan Nepomuceno, Dra. Esther Cecilia GómezCatalán – Alcalde Zambrano, Víctor Aguirre – Alcaldía Municipio de Córdoba, Dr. Roberto Barrios Borrero – Alcalde El Guamo, Dr. Pedro Guerrero Salcedo – Alcalde Calamar, Dr. Francisco Varela – Alcalde Mahates, Dra. Viverlis de la Hoz Mercado – Alcalde Arroyo hondo, Sr. Adalberto Marimon – Alcalde Marialabaja, Dres. Erasmo Porto – Secretario Gobierno y Emiro Pérez – Director Umata El Carmen de Bolívar, Flor María Herrera Franco –Secretaria de Gobierno Mahates, RocíoMartínez Medina – Presidente Concejo Municipio El Carmen deBolívar, Tulio Donado, Lidis Estrada, Yina Benítez.

Dr. Amer Bayuelo: Alcalde de El Carmen de Bolívar. Brinda un respetuoso saludo de bienvenida a la tierra de Lucho Bermúdez, celebra la realización de esta reunión dice que una oportunidad que tienen los alcaldes, para analizar la situación.
Dr. Libardo Simancas, Gobernador de Bolívar: Expresa un cordial saludo a los alcaldesde los Montes de María y de los municipios del Dique, a los altos mandos militares, a la Procuraduría, a la Defensoría, a la Fiscalía y el CTI. A los personerosy a los representantes de los gremios y asociaciones que se encuentran presentes, hoy se realiza un consejo regional de seguridad y gobierno en los montes de María, la seguridad se construye en uno de los fines esenciales del estado a señalar que las autoridades de la republica están instituidas para proteger la honra, bienes y libertades de los ciudadanos, por eso la administración que presido y concordante con el programa de gobierno por el Bolívar que todos queremos, el componente de la seguridad y coherente con la política del presidente de la republica de seguridad democrática estamos convencidos que se hacen necesario garantizar la seguridad y tranquilidad que permite el desarrollo social y económico del departamento y de la región.

Por eso es importante doblemente el compromiso de garantizar la seguridad como primera autoridad de policía militar de seguridad sino también de los alcaldes como primera autoridad de sus municipios como jefe de policía que les señala la cara política y las leyes de contar sus planes de desarrollo abriendo espacios de participación a los ciudadanos por que la prevención juega un papel importante más la colaboración ciudadana, la preservación y guarda del orden público en compromiso de todos de las autoridades regional, local, de la policía, los militares y de las autoridades de seguridad pero también de los ciudadanos.

Existe un segundo componente que es la inversión social. Que venga a satisfacer las necesidades básicas insatisfechas, en materia de salud, educación, agua potable, desarrollo de productos productivos, que generen oportunidades de empleo y vivienda para que las comunidades tengan garantizadas sus derechos y la dignidad humana.La metodología a utilizar es primero la presentación de las autoridades locales, los personeros, las autoridades de policía, militares y ministerio público, bajo la premisa de la discreción que se deba manejar el tema de la seguridad, escuchar a los gremios de la región, a los invitados, agradecer la hospitalidad del alcalde del Carmen de bolívar, la presencia de alcaldes, sus secretarios de despacho, los gremios e invitados.

Cr. Carlos Garzón: Fuerza Naval del Caribe, dice que la Fuerza Naval se encuentra motivada, entrenada y comprometida con el desarrollo de operaciones basadas en el respeto de los derechos humanos, ejecutan operaciones navales de orden interno para mantener el control y la gobernabilidad en el territorio terrestre y marítima, ejercen jurisdicción marítima en Córdova, Bolívar y Sucre, de estos 21 son de Bolívar, velan por la seguridad de los puntos críticos, como son 1184 torres eléctricas, por puentes, 19 subestaciones, 5 terminales marítimos, 1 aeropuerto, dos refinerías, por las vías.
Organizaciones Terroristas: El frente 37 de las Farc con unos 220 hombres, el frente 35 con 160 hombres, el ELN con 120, el ERP, estos 3 grupos tienden a la baja, y las AUC, que tienen unos 670 hombres.

Zona de Rehabilitación: Acciones terroristas: Antes de Zorrecon se tuvo 9 retenes ilegales, 10 artefactos explosivos. 19 torres dinamitadas, 8 campos minados, 60 secuestros, después de Zorrecon, estas son las cifras: 28 secuestros, de los cuales han sido liberados 18, se han desactivad 17 artefactos explosivos, se han realizado 8 retenes ilegales, 1 torre derribada. Las Acciones terroristas en contra de la población civil, se aumentaron, se disminuyeron las acciones con artefactos explosivos y los secuestros. El aluminio de las torres de energía derribadas es utilizado para la fabricación de artefactos explosivos artesanales.
Infantes Campesinos: 9 municipios cuentan con presencia de infantes campesinos, estos son: Zambrano, Córdoba, El Carmen de Bolívar, Villanueva, Santa Rosa, San Estanislao.

Se puso en marcha la estrategia de Red de Cooperantes, dirigida a estimular a la ciudadanía que suministre información para prevenir hechos delictivos, igual el pago de recompensas, la Red de Seguridad de los Montes de María con apoyo del Ministerio del Interior, recomienda a los alcaldes liderar y divulgar esta información con la comunidad, para los que quieran afiliarse a la repetidora.

Acción Integral: Es un esfuerzo de coordinación y articulación de las políticas públicas para fortalecer las acciones del estado procurando el bienestar de la comunidad. Se realizan reuniones y visitas a las autoridades, el objetivo es afianzar la institucionalidad, cambiar la indiferencia por la solidaridad, se busca la unión de la comunidad para cambiar el miedo, y fomentar una cultura de seguridad, se tiene un puesto de mando en el Salado. Se realiza trabajo en conjunto con las ongs y las entidades estatales, buscando que las comunidades tengan sentido de pertenencia por su tierra.

La Acción Integral buscará impulsar proyecto de vida forjada en valores y principios, en los 1.370 alumnos bachilleres de los municipios de los Montes de María, en los cursos 10 y 11º. Entre las obras de cooperación cívico militar se tiñen: El apoyo a la gestión de los gobiernos municipales, participación en los Comités Municipales de Desplazados, Gobernabilidad, Apoyo a proyectos de Desarrollo, Apoyo a la Infantería de Marina, Brigadas Cívico-Navales. AsesoríaJurídica en temas de Orden Público, se requiere de los alcaldes municipales darle cumplimiento alart 315 de la ConstituciónPolítica, crear y fortalecer los Comités de Población Desplazada, expedir normas de control de orden público, impulsar las asociaciones de municipios que lideren proyectos regionales, se requiere apoyo para el programa de los infantes campesinos y las brigadas cívico-navales, en fin la fuerza pública está para defender y garantizar la vida, honra y bienes de la

Cr. José David Guzmán – Comandante PoliciaBolívar. Resalta la cooperación de todas las autoridades, la misión de la institución es contribuir la satisfacción de las necesidades de seguridad y tranquilidad pública. Se está a la espera de un personal que viene de Bogotá para reforzar las estaciones de El Guamo, Calamar, y Marialabaja.

Informe de Criminalidad: En elaño anterior, ocurrieron 87 homicidios comunes, 16 homicidios en accidente de tránsito, 1 caso de homicidio colectivo, 7 de piratería, 9 retenes, 7 secuestros y 1 secuestro colectivo, 14 casos de terrorismo, hoy van 6, 3 casos de extorsión.. Existen factores que se convierten en vulnerabilidad como es el caso de la flexibilidad de la ley penal, el temor a informar y cooperar, la falta de inversión social estatal, el terrorismo, el narcotráfico, desempleo, panfilismo juvenil, alcoholismo, drogadicción, miseria, violencia intrafamiliar, intolerancia social, ajuste de cuentas, aumento de la población desplazada La policía tiene cobertura en todos los municipios del departamento, con la operatividad se busca cubrir el mayor número de punto críticos. Se cuenta con el grupo de carabineros, los frentes de seguridad, en San Juan existen 14, en Marialabaja 2, en el Guamo 2, además el plan de seguridad de carreteras, se dejará un escuadrón de carabineros en el Carmen de Bolívar, en Magangué, en el Sur y otro en el norte, se trabaja en conjunto con la gobernación respaldando la iniciativa de reactivación del turismo.

DAS. Es un organismo relativamente nuevo comparado con el ejército y la policía, cumplió 50 años en el 2003, tiene como función la seguridad del presidente de la república y su familia y ser el primer recolector de inteligencia en el país, también prestan seguridad a personajes y funciones de policía judicial, ahora por la política de seguridad democrática de presidencia se han integrado en una sola fuerza con policía, la fiscalía, el ejército y la armada. Producen inteligencia para judicializar, los resultados y las capturas se han dado en coordinación con los otras autoridades, cuando se dan las capturas es porque existen pruebas recolectadas por seguimiento, antecedentes y estudios, vienen realizando operaciones encubiertas, también realizan jornadas de expedición de certificados judiciales. Manifiesta que su institución está a disposición de las autoridades.

Alcalde de Mahates Francisco Varela. La experiencia de la implementación de la zona de rehabilitación para su municipio ha sido buena, desde la institucionalización no se presentan casos, la comunidad se siente segura, necesitan apoyar a la estación de policía y a los infantes campesinos con motocicletas. Los problemas que se han identificado para el acceso es el mal estado de la vía, este es un factor que afecta la seguridad.

Alcalde de Zambrano: Resalta la importancia de esta reunión con carácter regional, en otras épocas su comunidad puso muchas víctimas, antes, a raíz de la presencia de los infantes campesinos la entrada del pueblo es una excelente idea, en las festividades folclóricas y culturales fue un éxito, regresaron muchos paisanos, pide apoyo para que la paz se siga manteniendo. Cuando se posesionó no hubo empalme, sugiere se convoque a las autoridades de control y la procuraduría para que verifique, para evitar que más adelante se le pueda denunciar por omisiónsolicita que le hagan llegar copia de los oficios enviados a los entes de control y vigilancia en el corredor del Carmen a Sambrano hay 3 puestos militares.

Alcalde de Calamar: felicita a las fuerzas militares por retomar el control en el norte del departamento, a su municipio le hace falta paz, la razón de ser es la comunidad, no se la han ganado ninguna de las autoridades, ese 30% se debe seguir trabajando, demostrar ética y actitudes en eso se incluye todos, incluso el. No solo se debe eliminar el temor sino también eliminar el riesgo, porque están enfrentados al arma, es importante la integración entre todas las autoridades eso facilita la tarea.

Alcalde de el Carmen de Bolívar: agradece el apoyo de la armada a la comunidad del Carmen de Bolívar resalta el trabajo y la pedagogía con niños con niños de sus barrios sobre todos las visitas que hicieron a Cartagena, igual con la policía. Hay finqueros que han logrado que la comunidad le pierda el miedo.En Cansona hay finqueros que están siendo extorsionados por las FARC estos ciudadanos piden la presencia de la fuerza pública ellos están dispuestos a colaborar. Las FARC está realizando una labor de exterminio de personas a quienes antes les obligaban a colaborar, los datos que se tienen habían de 15 personas pero en realidad van unas 60 personas asesinadas, el ultimo ocurrió en el Hobo se necesita un batallón permanente en la en Cansona porque es un corredor que va a todas partes.

Estamos en zona de guerra, los alcaldes de monte de María no se quieren ver involucrados. Quieren la seguridad para su pueblo, solicita la presencia de la fuerza pública en Cansona y un punto de inteligencia en el Carmen de Bolívar. En el tema de acueducto se invirtieron 3.300.000 hoy no hay agua, se envió un oficio a Condor.S.A que garantiza la realización del contrato que se venció hoy, se entregó toda la documentación a la fiscalía porque eso no se puede tolerar, no se le puede fallar a la comunidad.

Hay una comunidad que está pendiente de retornar y requiere apoyo es la población de la zona baja, hay otra población en resistencia que es el Hobo, Bajo Grande, Raizal que desarrollan un proyecto de caña panelera que se puede cofinanciar y sale más barato, los presupuestos son bajos se tienen necesidades de motos por ser más operativas.

Personero del Carmen de Bolívar: agradece la presencia de la fuerza pública, la situación ha mejorado han dado resultado las medidas de cierres de vías, a su despacho han llegado los transportadores de productos que se han visto afectados por el cierre de vías, algunos salían a las 7:00 ahora salen a las 4:00, para comercializar se requieren ciertas horas piden que se les conceda un permiso especial, el los identificaría, los agricultores de la zona alta están siendo extorsionados, les están quitando sus fincas. El coronel Garzón de la armada expresa que el comandante del batallón fue autorizado por el gobierno para que a criterio de él y la necesidad expida los permisos que se necesiten. Con relación a la Cansona, la policía y las fuerzas militares vienen operando con inteligencia el comandante del batallón requiere información, él es autónomo para atender las situaciones. El representante del DAS solicita al alcalde ponerse en contacto con él.

El doctor Libardo manifiesta: Lo tratado por el Doctor Amer Bayuelo sobre los acercamientos o contactos con grupos al margen de la ley le corresponde al presidencia de la república, todo lo relacionado con el manejo de los procesos de paz. Los gobernadores son agentes para guardar el orden público, la gobernación puede servir de mediadora con la autorización del presidente de la república para hacer acercamientos con los actores del conflicto pero con la autorización del presidente de la república se entiende que los alcalde están en el escenario donde operan los grupos al margen de la ley.

Hay un consejo de convivencia y desarrollo social con presencia de la iglesia y otras entidades que podrían ayudar.

Alcalde de Arroyo Hondo: expresa que con la presencia de los infantes campesinos ha venido desarrollando actividades cívicas culturales, necesita ser reforzados en movilidad con motos para el transporte, hoy su municipio respira tranquilidad. Recuerda a los alcaldes las deducciones del 5% de los contratos de obras públicas para los fondos de seguridad.

Alcalde San Juan de Nepomuceno: expresa su reconocimiento por la labor que desarrolla la fuerza naval en la región, tienen un buen nivel de coordinación y colaboración con el BAFIM3, los soldados campesinos, la policía, se están dando resultados importantes, trabajan con la policía cívica conformada por niños, se debe inculcar la labor social y el apoyo de la comunidad a los soldados campesinos. Se siente el apoyo de las fuerzas militares, su alcaldía seguirá apoyándolos, hay confianza en la comunidad hacia sus autoridades.

Hay tranquilidad en la zona en la cabecera pero hay problemas con los corredores de San Pedro consulado, lata, las tinas, Carreto, María la baja, este tema se trató en consejos de seguridad en su municipio. Se debe pensar en un puesto militar en corralito, porqueras, porque las familias de San José del peñón quieren regresar a su corregimiento el 30 de agosto, pensaban regresar pero 2 días después sucedió la masacre de los guáimaros.

Le preocupa que existen muchas coincidencias con el clima que antecedió el primer retorno en San José del peñón, este retorno debe ser digno con arreglo de las vías, con proyectos productivos, arreglo del puesto de salud de la escuela, se suma a la petición del personero del Carmen de Bolívar, solicita que se amplié el horario, este generaría confianza en la comunidad y la seguridad de sus poblaciones, le gustaría que se realizara una campaña de expedición de certificados judiciales y que el das volviera a su municipio, solicita apoyo con motocicletas dice, que no ha recibido formalmente la administración de su municipio, el regreso de San José del peñón, por arreglo de la vía eso es importante para reactivar el acueducto por ello la necesidad del puesto militar y reactivar el puesto de policía en San Cayetano.

Intervención del gobernador: El tema de los desplazados será coordinado con el Doctor Baldiris Secretario del interior, está listo el decreto de incorporación de los docente tal como lo establece la ley 715, en cuanto a restricciones del tráfico vehicular e partidario que se vaya ampliando a sectores dependiendo de la necesidad.

Alcalde electo de San Jacinto: dice que hace dos años inicio la campaña tiene una emisora comunitaria, inicialmente fue amenazado pero ya se le ha reforzado la seguridad le preocupa que no han realizada empalme y la situación de los operativos que se han dado, hay algunas personas que han demostrado su inocencia, pero hay otras personas que no cuentan con recursos.

Alcalde del Guamo: En días pasados hubo en la zona de San Juan en San Pedro Consolado y en lata apareció un grupo armado, esto genero temor en la gente, a los pocos días llegaron soldados campesinos, hace poco lo de los concejales, este tema se está manejando, la situación ya es de calma en el Guamo, entre las dificultades que encontró esta la falta de redes telefónicas, no hay servicios hace 3 meses, el brinda los apoyos pero no ha tenido respuestas, se acoge a lo que defina el gobierno departamental en lo que tiene que ver con el transporte.
Representante del Municipio de Córdoba: informa que su municipio goza de tranquilidad, existen buenas relaciones entre la comunidad y la fuerza pública, la policía necesita más motocicletas, a raíz de las inundaciones los campesinos quedaron en la miseria, existe confianza entre la comunidad, la policía y la infantería.
Señor Luis Torres: Manifiesta que en su región es importante la presencia de la infantería, si el ejército llega a salir ellos se sentirían desprotegidos, hay en el pueblo 150 familias a las que les han quitado la tierra, ellos Vivian de sus fincas y han quedado en la calles, hay varias familias afectadas que no se atreven a renunciar.

Coronel Garzón: las tropas de infantería se están moviendo constantemente, les solicita ponerse en contacto con el oficial Melo, con base en la información se realizan operaciones y dependiendo de las evaluaciones se decide si se queda oh no en el sitio, agradece la información y el valor civil de la comunidad.

Alcalde del Carmen: en la cosecha que dura 4 meses, se necesita la presencia militar para evitar que la delincuencia se quede con el producto de la cosecha son 2.000.000 que produce la cosecha de la zona.

Doctor Libardo Simancas: exalta el valor civil del señor Luis Torres y pide al coronel Garzón brindarle total apoyo.

Doctor Arturo Zea: Hace relación al tema de la zona de rehabilitación solicita incluir al comandante equipos de sensibilización, su misión tiene estrategias generales de empoderamiento de las comunidades, por eso en el Salado se aspira a que las comunidades ejerciten sus derechos, desde el punto de vista institucional y comercial, resalta la labor de la fuerza naval con el de comunicaciones el mutuo respeto que ha recibido el apoyo permanente y las respuestas a las notas que ha dado el informe público para visibilizar los tenemos de los derechos humanos, la resolución defensoría del salado es un documento guía para que todos estemos pendientes del cumplimiento.

Tema San Jacinto: 346 personas de julio a enero, han sido liberadas 142 personas que representan un 40%, cuestiona el informe de la defensoría es el perfil del informe, debe ser revisado por la fiscalía y las autoridades se pueden presentar equivocaciones que pueden dar lugar a mas desconfianza de los ciudadanos, tal como lo decía el alcalde de calamar. Las fiscalía debe mirar con as cuidado las cifras, las personas vienen siendo presentadas en la televisión y en la prensa, esto es casi una condena anticipada. En el caso del señor Torres tenemos que la comunidad pide presencia de la fuerza pública se debe avanzar en el tema del acercamiento entre la comunidad y el liderazgo para trabajar conjuntamente con las autoridades.

Doctor Candelario: se refiere al tema del empalme de las administraciones, una coordinación de datos que se debe dar entre la administración saliente y entrante le dice a los alcaldes que deben formular la queja respectiva, la seguridad es un fin del estado, de ahí se derivan todas as políticas del estado, se constituye en el eje central de una política del gobierno, pero esta no puede rebasar los limites la defensoría debe vigilar el cumplimiento y el respeto de los derechos humanos.

Llama la atención sobre el decreto 2002, está contemplado en las consideraciones la ha prensión de ciudadanos con base en indicios, estos hechos han creado incertidumbre jurídica, se debe reflexionar sobre ese proceder. Se está violando el derecho a la igualdad en lo del transporte se debe ampliar el horario de 8 pm. A 5 am. Y con eso se solúciona el problema.

Representante de Fiscalía: la entidad tiene la difícil labor de investigar y acusar a los infractores de la ley, se basa en pruebas que la norma penal establece, sobre esa base se hace las acusaciones la fiscalía está dividida entre fiscalía y CTI, realizan un trabajo coordinado y articulado con la armada, la policía y el DAS para la seguridad de la comunidad.

Lamentablemente dependen de la valoración de los testimonios para acusar a las personas. Se está trabajando en la valoración de los testigos para abrir un proceso se requieren 2 indicios graves, el proceso se adelanta, se apoyan en la procuraduría y la defensoría pública.

Toca hacer las capturas la hora la determina el trabajo de la inteligencia la fiscalía está preocupada los fiscales están recolectando las pruebas; hasta ahora no se ha capturado a nadie por anónimo, al testigo se le hace una valoración, el señor fiscal ha dado instrucciones sobre lo que tiene que ver con las presentaciones a la prensa de capturas masivas, a el fiscal siempre se le envía un informe especial.

En el caso de la alcaldesa de Zambrano se debe pedir una comisión de fiscalía, recomienda tener buenos asesores, sobre el tema de la corrupción en el sector en el que se presentan los problemas es en contratación estatal.

El padre Darwin asiste en representación del arzobispo de Cartagena agradece la invitación dice que a su parroquia se han acercado personas que al parecer son personas honestas quienes le manifiestan que si no le pagan a la guerrilla les van a volar los negocios y si les pagan pueden ser procesados y señalados como colaboradores, muchos de ellos son colaboradores de las autoridades.

Representante del CTI expresa su institución depende de la valoración del testimonio, están preocupados por el desgaste institucional se fuerzan por hacer muy bien las cosas.

Intervención del doctor Idelfonso BaldirisSecretario del Interior: Informa a los alcaldes que en la secretaria del interior se reciben y revisan los acuerdos aprobados por los consejos municipales, recomienda a los alcaldes, tener en cuenta los informes de gestión y rendición de cuentas ante la contraloría departamental, en la secretaria del interior se tiene una comunicación fluida con los alcaldes, estos deben remitir los informes de orden público y lo atinente a situaciones de emergencia originada en desastres naturales y antrópicos.

Doctor Amaury Julio – secretario de planeación: Informa sobre los lineamientos generales del plan de desarrollo, recomienda a los alcaldes presentar proyectos de carácter regional.

Doctor Ramiro Pereira – Secretario de Agricultura: Dice que el desarrollo económico y social del departamento pasa por la secretaria de agricultura que pueda complementar la política de seguridad democrática.

Los proyectos deben tener un enfoque social y económico se cuenta con una oficina de negocios, se firmó una agenda con el ministerio de agricultura, se tiene previsto la siembra de 10.000 hectáreas de bosque y la puesta en marcha del centro de desarrollo tecnológico

Conclusiones:

1. Se agradece la presencia de los alcaldes, de la policía, los militares y las autoridades de seguridad e investigación, se deben trabajar unidos y coordinados para derrotar el terrorismo.
2. Se deben realizar consejos de seguridad todos los meses y en las regiones cada 2 meses para que la comunidad tenga certeza de las medidas que adoptan sus autoridades.
3. Pide a los alcaldes impulsar la participación de las comunidades en los asuntos de interés colectivos como es el tema de la seguridad.
4. Se debe promover el respeto y defensa de los Derechos Humanos, en todas las actuaciones de las autoridades que ejercen jurisdicción en Bolívar.
5. Tener en cuenta las peticiones de los alcaldes en materia de seguridad., el mayor compromiso y responsabilidad del gobierno departamental y de las autoridades municipales es garantizar la vida, honra y bienes e los ciudadanos, así mismo propender por el bienestar, la tranquilidad ciudadana y el desarrollo de sus comunidades. No siendo otro el objeto de la presente diligencia, se da por terminada y en constancia, se anexa copia de la lista de asistencia.

GOBERNACION DE BOLIVAR
SECRETARIA DEL INTERIOR

CONSEJO DE SEGURIDAD Y DE GOBIERNO
CARMEN DE BOLIVAR
Enero 22 de 2004

ASISTENCIA

Dr. LIBARDO SIMANCAS TORRES
Gobernador de Bolivar

Dr. ILDEFONSO BALDIRIS SILVA
Secretario del Interior

Dra. CIRA VELASQUEZ HERAZO
Coor. Unidad de Orden Público

Vice. GUILLERMO BARRERA HURTADO
Comandante Fuerza Naval del Caribe

Coronel. JOSE DAVID GUZMAN
Comandante Departamento Policía Bolívar (e)

Capitán de Fragata. JOSE LEONIDAS MUÑOZ
Comandante I Brigada de Infantería de Marina

Capitán de Fragata. HORACIO ZEA ZULUAGA
Comandante Bafim 3

Dr. ROMULO BETANCOURT GARRIDO
Director DAS Seccional Bolivar

Dra. MARIA ROCIO CORTEZ VARGAS
Directora Seccional de Fiscalías (e)

Dr. OSCAR CASTELLANO PRADA
Director CTI

Dr. ARTURO ZEA SOLANO
Defensor Regional del Pueblo

Dra. AMADA OJEDA TORREGROSA
Procuradora Regional Bolivar

Dra. GALA DE LA VEGA SERNA
Procuradora Provincial de Cartagena

Dr. CANDELARIO PANIZA
Procurador Provincial Carmen de Bolivar

GOBERNACION DE BOLIVAR
SECRETARIA DEL INTERIOR

CONSEJO DE SEGURIDAD Y DE GOBIERNO
CARMEN DE BOLIVAR
Enero 22 de 2004

ASISTENCIA

Dr. LIBARDO SIMANCAS TORRES
Gobernador de Bolivar

Dr. ILDEFONSO BALDIRIS SILVA
Secretario del Interior

Dra. CIRA VELASQUEZ HERAZO
Coor. Unidad de Orden Público

Vice. GUILLERMO BARRERA HURTADO
Comandante Fuerza Naval del Caribe

Coronel. JESUS ANTONIO GOMEZ MENDEZ
Comandante Departamento Policia Bolivar

Capitán de Fragata. JOSE LEONIDAS MUÑOZ
Comandante I Brigada de Infantería de Marina

Capitán de Fragata. HORACIO ZEA ZULUAGA
Comandante Bafim 3

Dr. ROMULO BETANCOURT GARRIDO
Director DAS Seccional Bolivar

Dra. MARIA ROCIO CORTEZ VARGAS
Directora Seccional de Fiscalías (e)

Dr. OSCAR CASTELLANO PRADA
Director CTI

Dr. ARTURO ZEA SOLANO
Defensor Regional del Pueblo

Dra. AMADA OJEDA TORREGROSA
Procuradora Regional Bolivar

Dra. GALA DE LA VEGA SERNA
Procuradora Provincial de Cartagena

Dr. CANDELARIO PANIZA
Procurador Provincial Carmen de Bolivar

GOBERNACION DE BOLIVAR
SECRETARIA DEL INTERIOR

CONSEJO DE SEGURIDAD Y DE GOBIERNO
CARMEN DE BOLIVAR
Enero 22 de 2004

ASISTENCIA

Sr. AMER ALFONSO BAYELO BERRIO
Alcalde Municipal El Carmen de Bolivar

Sr. GUILLERMO LEON GONZALEZ GUARDO
Alcalde Municipal San Jacinto – Bolívar

Sr. JORGE FERNANDO BARRIOS GUZMAN
Alcalde Municipal San Juan Nepomuceno – Bolívar

Sra. ESTHER CECILIA GOMEZ CATALAN
Alcaldesa Municipal Zambrano – Bolívar

Sr. JAIME ALBERTO ORTEGA ALVAREZ
Alcalde Municipal de Córdoba – Bolívar

Sr. ROBERTO BARRIOS BORRERO
Alcalde Municipal de El Guamo – Bolívar

Sr. PEDRO MANUEL GUERRERO SALCEDO
Alcalde Municipal de Calamar – Bolívar

Sr. FRANCISCO VARELA FFERNANDEZ
Alcalde Municipal de Mahates – Bolívar

Sr. VIVERLIS DE LA HOZ MERCADO
Alcalde Municipal de Arroyo Hondo – Bolívar

Sr. ADALBERTO MARIMON PEREZ
Alcalde Municipal de María Labaja – Bolívar

Emma Perez CH.
DIRECTOR UMATA - C. Bol.

Flor Mª Herrera Franco
Sec. de Gto Mariales

GOBERNACION DE BOLIVAR
SECRETARIA DEL INTERIOR

CONSEJO DE SEGURIDAD Y DE GOBIERNO
CARMEN DE BOLIVAR
Enero 22 de 2004

ASISTENCIA

Dr. AMAURY JULIO PREZ
Secretario de Planeación

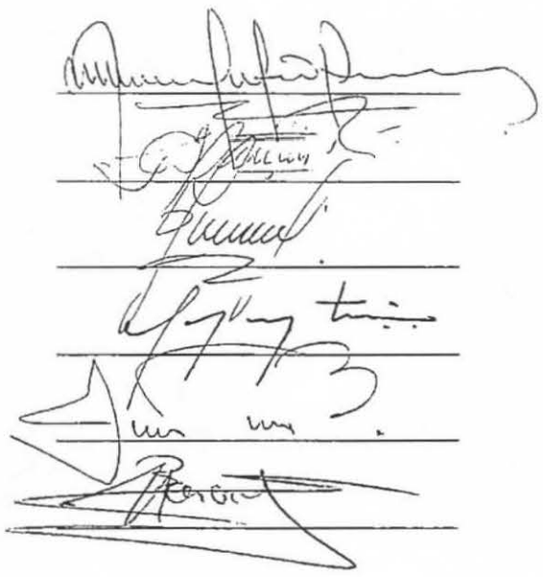
Dr. HORACIO CARCAMO ALVAREZ
Secretario de Educación

Dr. NICOLAS CHEDRAUI ALVARINO
Secretario de Salud

Dr. YUIRIS BAYTER GIL
Secretario de Infraestructura

Dr. PEDRO ALVAREZ BLANCO
Secretario de Agua Potable

Dr. RAMIRO PEREIRA BRIEVA
Secretario de Agricultura.



7445

GOBERNACION DE BOLIVAR
SECRETARIA DEL INTERIOR

CONSEJO DE SEGURIDAD Y DE GOBIERNO
CARMEN DE BOLIVAR
Enero 22 de 2004

ASISTENCIA

Monseñor
CARLOS JOSE RUISECO
Arzobispo de Cartagena

Dr. HECTOR TRUJILLO VELEZ
Director PNUD

Dr. SERGIO GAMARRA HERNANDEZ
Rector Universidad de Cartagena

Dr. JORGE CORTEZ P.
Director Comisión de Regalías

(Rosa Jimenez)

13C